

Contenido

PARTE EXPOSITIVA: 3

PRIMERO: Tribunal e intervinientes. 3

SEGUNDO: Acusación fiscal. 3

TERCERO: Alegatos de apertura. Acusación 1. 14

CUARTO: Alegatos de apertura. Acusación 2. 20

QUINTO: Alegatos de clausura. Acusación 1. 24

SEXTO: Alegatos de clausura. Acusación 2. 36

SÉPTIMO: Declaración del acusado. 57

OCTAVO: Convenciones Probatorias. 84

NOVENO: Prueba rendida respecto de la acusación 1. 85

DÉCIMO: Prueba rendida respecto de la acusación 2. 101

UNDÉCIMO: Prueba de la defensa. Acusación 1. 154

DUODÉCIMO: Prueba de la defensa. Acusación 2. 156

DÉCIMO TERCERO: Síntesis de las teorías del caso de cada interviniente. 162

El artículo 239 CP exige calidad de funcionario público. Inostroza no lo es, conforme al artículo 260 CP. La jurisprudencia reciente de la Corte Suprema (rol 59856-2022; 122925-2022) establece que no se puede comunicar la calidad de funcionario público al extraneus, salvo que se impute otra figura (como estafa), lo cual no ocurrió. Solicita absolución total, al no cumplirse: 169

El tipo penal subjetivo (dolo), 169

La ejecución fáctica (obras fueron realizadas en gran parte), 169

Ni el presupuesto jurídico (extraneus no punible bajo art. 239 CP). 169

EN LAS RÉPLICAS, se abordó la temática de recalificación jurídica a la que se llamó a debatir por parte del tribunal, en los siguientes términos: 169

DÉCIMO CUARTO: Valoración probatoria. 171

I. ARGUMENTOS RESPECTO DE LA ACUSACIÓN POR DELITOS TRIBUTARIOS. 174

DÉCIMO QUINTO: Tipo penal invocado análisis legal y doctrinal. 174

“Las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda o la omisión maliciosa en los libros de contabilidad de los asientos relativos a las mercaderías adquiridas, enajenadas o permutadas o a las demás operaciones gravadas, la adulteración de balances o inventarios o la presentación de éstos dolosamente falseados, el uso de boletas, notas de débito, notas de crédito o facturas ya utilizadas en operaciones anteriores, o el empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto, con multa del cien por ciento al trescientos por ciento del valor del tributo defraudado y con presidio menor en su grado máximo”. 174

DÉCIMO SEXTO: Análisis de la prueba de cargo. Testigos. 177

DÉCIMO SÉPTIMO: Análisis de la prueba de cargo. Prueba pericial. 181

DÉCIMO OCTAVO: Análisis de la prueba de cargo. Prueba Documental..... 182

DÉCIMO NOVENO: Análisis de la prueba de la defensa. 185

VIGÉSIMO: Hechos acreditados y calificación jurídica. 189

VIGÉSIMO PRIMERO: Configuración de la reiteración del delito. 193

VIGÉSIMO SEGUNDO: Rechazo de las demás alegaciones de la defensa. 194

II. ARGUMENTOS RESPECTO DE LA ACUSACIÓN POR FRAUDE AL FISCO. 196

VIGÉSIMO TERCERO: Tipo penal invocado análisis legal y doctrinal. 196

VIGÉSIMO CUARTO: Análisis de prueba testimonial. Funcionarios fiscalizadores..... 198

VIGÉSIMO QUINTO: Análisis de prueba testimonial. Funcionarios Policiales. 203

VIGÉSIMO SEXTO: Análisis de prueba testimonial. Otros testigos de contexto. 208

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Análisis individual de la prueba documental. 211

VIGÉSIMO OCTAVO: Conclusiones y análisis unificado de la prueba documental. 228

VIGÉSIMO NOVENO: Indicios de actuación conjunta entre el acusado con el funcionario público. 230

TRIGÉSIMO: Prueba de la defensa. Testimonial. 231

TRIGÉSIMO PRIMERO: Prueba de la defensa. Documental. 232

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Hechos acreditados y calificación jurídica. 236

TRIGÉSIMO TERCERO: Reiteración del delito en cuestión. 247

TRIGÉSIMO CUARTO: Rechazo de las demás alegaciones de la defensa. 248

III. ARGUMENTOS COMUNES A AMBAS ACUSACIONES..... 250

TRIGÉSIMO QUINTO: Circunstancias modificatorias de responsabilidad inherentes al delito. 250

TRIGÉSIMO SEXTO: Audiencia de determinación de penas. 250

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Resolución de las peticiones de las partes. 252

TRIGÉSIMO OCTAVO: Determinación de las penas en concreto. 257

TRIGÉSIMO NOVENO: Forma de cumplimiento de las penas a imponer..... 258

CUADRAGÉSIMO: Costas. 259

PARTE RESOLUTIVA: 260

C/ JORGE ANDRES INOSTROZA CERDA
DELITO TRIBUTARIO DEL INCISO SEGUNDO DEL NUMERAL
CUARTO DEL ARTÍCULO 97 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO
DEFRAUDACIÓN FISCAL DEL ARTÍCULO 470 N°8 DEL CÓDIGO
PENAL
R.U.C. 1910015291-9
R.I.T. 015-2024

Temuco, diecinueve de mayo de dos mil veinticuatro.

VISTOS, OIDO Y CONSIDERANDO:

PARTE EXPOSITIVA:

PRIMERO: Tribunal e intervinientes. Que, ante esta sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, constituido por don **Roberto Herrera Olivos**, quien presidió las audiencias, don **Leonel Torres Labbé**, como redactor y don **Wilfred Ziehlmann Zamorano**, como tercero integrante, todos titulares de este Tribunal, se llevó a efecto el juicio oral en causa **RIT N° 15-2024**, seguida en contra del acusado:

Jorge Andrés Inostroza Cerda, cédula de identidad N° **12.195.349-8**, nacido en Temuco, el día 4 de octubre de 1972, casado, laboratorista en obras viales, domiciliado en calle Toscana N° 2035, Temuco y como defensor el abogado **Sebastián Painemal Granzotto**.

Sostuvo la acusación el **Ministerio Público**, representado por el Fiscal Adjunto, don **Carlos Cornejo Martínez** con domicilio en calle Prat 080, Temuco.

Por el Servicio de Impuestos Internos, **Luis Moya González**.

Por el Consejo de Defensa del Estado, **Miguel Contreras Arellano**.

SEGUNDO: Acusación fiscal.

Que el Ministerio Público dedujo acusación en contra del acusado, según se lee en el auto de apertura del juicio oral, fundándola en los siguientes hechos:

A.- Acusación de causa RIT 2930-2019: (En que son acusadores la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos)

1.- La Fiscalía acusó por los siguientes hechos:

“En Temuco, durante los periodos tributarios mensuales de febrero, marzo, junio, y diciembre de 2015; marzo y octubre de 2016, el imputado JORGE ANDRÉS INOSTROZA CERDA representando legalmente a la Sociedad Constructora VIALMIX Limitada RUT 76.240.113-4, presentó formularios N° 29, sobre declaración mensual y pago simultáneo de impuestos, de la Sociedad Constructora VIALMIX limitada maliciosamente falsos, al no incluir el impuesto débito fiscal IVA de las ventas efectuadas en dichos periodos, y que



fueron registradas en los libros de venta, generando un perjuicio fiscal ascendiente a \$96.116.576.-

Específicamente, el querellado realizó ventas en los periodos indicados en el párrafo anterior, las que fueron registradas en el Libro de Compra y Venta de la Sociedad Constructora VIALMIX Limitada, por un monto total de \$184.837.138.- no obstante, en los formularios N° 29, sobre declaración mensual y pago simultaneo de impuestos, declaró \$88.720.562.-

De esta forma, **no declaró ni pagó el IVA Debito Fiscal correspondiente a dichas ventas, cuyo monto asciende a \$96.116.576.-**

Asimismo, durante 6 periodos comerciales mensuales correspondientes a junio, julio, agosto de 2015: enero, marzo y septiembre de 2016, el imputado JORGE ANDRÉS INOSTROZA CERDA declaró en los respectivos formularios N° 29, sobre declaración mensual y pago simultaneo de impuestos de la Sociedad Constructora VIALMIX Limitada, **créditos fiscales IVA superiores a los registrados en los Libros de Compra y Venta, aumentando de esta forma los Créditos Fiscales IVA que tenía derecho a hacer valer en relación a las cantidades que debía enterar en arcas fiscales, generando un perjuicio fiscal ascendiente a \$37.228.912.-**

A raíz de las maniobras dolosas ya descritas, el imputado JORGE ANDRÉS INOSTROZA CERDA, causó un perjuicio fiscal ascendiente a \$133.345.488.-, correspondiendo esto a **sub-declaración de débito fiscal a \$96.116.576.- y por sobre declaración de crédito fiscal a la suma de \$37.228.912”.**

CALIFICACIÓN JURÍDICA, PARTICIPACIÓN, CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS Y PENAS PEDIDAS POR LA FISCALÍA

Según la Fiscalía los hechos precedentemente descritos constituyen el delito previsto y sancionado en el artículo 97 N° 4, inciso I y II del Código Tributario, en grado de desarrollo consumado. El acusador reconoció en el acusado la circunstancia atenuante de responsabilidad penal establecida en el artículo 11 N° 6 del Código Penal, no perjudicándole agravante, atribuyéndole participación en calidad de autor, según lo establece el artículo 15 n° 1 del Código Penal.

El acusador fiscal pidió condenar al acusado la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias legales del artículo 28 del Código Penal; al pago de una multa del cien por ciento de lo defraudado equivalente a \$133.345.488 (Ciento treinta y tres millones trescientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos) y de las costas de la causa.

2.- El Servicio de Impuestos Internos (SII) dedujo acusación particular por los siguientes hechos:

“El Sr. Director del Servicio de Impuestos Internos, en uso de la atribución que le confiere el artículo 162 del Código Tributario, decidió la interposición de querrela criminal en contra del acusado antes individualizado. La recopilación



de antecedentes efectuada por esta repartición fiscal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 161 N°10 del Código Tributario, y la posterior investigación llevada a cabo por el Ministerio Público permitió determinar que el acusado JORGE ANDRÉS INOSTROZA CERDA, en Temuco, durante los periodos tributarios mensuales de febrero, marzo, junio, y diciembre de 2015; marzo y octubre de 2016, representando legalmente a la SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIALMIX LIMITADA RUT N° 76.240.113-4, presentó formularios N° 29, sobre declaración mensual y pago simultáneo de impuestos, de la SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIALMIX LIMITADA maliciosamente falsos, al no incluir el impuesto débito fiscal IVA de las ventas efectuadas en dichos periodos, y que fueron registradas en los libros de venta, generando un perjuicio fiscal ascendiente a \$96.116.576.

Específicamente, el acusado realizó ventas en los periodos indicados en el párrafo anterior, las que fueron registradas en el Libro de Compra y Venta de la SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIALMIX LIMITADA, por un monto total de \$184.837.138, no obstante, en los formularios N°29, sobre declaración mensual y pago simultaneo de impuestos, declaró \$88.720.562.

De esta forma, no declaró ni pagó el IVA Débito Fiscal correspondiente a dichas ventas, cuyo monto asciende a \$96.116.576, el que, actualizado a noviembre de 2018, asciende a la suma de \$105.091.785.

Asimismo, durante los periodos comerciales mensuales correspondientes a mayo, junio, julio, agosto de 2015; enero, marzo y septiembre de 2016, el imputado JORGE ANDRÉS INOSTROZA CERDA declaró en los respectivos Formularios N° 29, sobre declaración mensual y pago simultaneo de impuestos de la SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIALMIX LIMITADA, créditos fiscales IVA superiores a los registrados en los Libros de Compra y Venta ni tampoco sustentados en las facturas que acreditaran dichas operaciones, aumentando de esta forma los Créditos Fiscales IVA que tenía derecho a hacer valer en relación a las cantidades que debía enterar en arcas fiscales, generando un perjuicio fiscal ascendiente a \$37.104.093, el que actualizado a noviembre de 2018 asciende a \$40.414.711.

A raíz de las maniobras dolosas ya descritas, el imputado JORGE ANDRÉS INOSTROZA CERDA, causó un perjuicio fiscal ascendiente a \$145.506.496, correspondiendo esto a subdeclaración de débito fiscal a \$106.091.785, y por sobre declaración y aumento indebido de crédito fiscal a la suma de \$40.414.711, valores actualizados a junio de 2018.

En vista de los hechos descritos, el perjuicio fiscal producido por concepto de evasión al Impuesto al Valor Agregado asciende a la suma de \$145.506.496, actualizado al mes de noviembre de 2018, que se desglosa de la siguiente manera:

- a) Subdeclaración de Débito Fiscal: \$105.091.785.*
- b) Sobredeclaración de Crédito Fiscal: \$40.414.711”*



CALIFICACIÓN JURÍDICA, PARTICIPACIÓN, CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS Y PENAS PEDIDAS POR EL SII

Según el Servicio de Impuestos Internos los hechos descritos precedentemente, configuran los delitos tributarios previstos y sancionados por los incisos primero y segundo del artículo 97 N°4 del Código Tributario, en grado de desarrollo consumado y al acusado, le cabe participación en el delito mencionado que tiene el carácter de consumado, en calidad de autor, de conformidad a lo establecido en el artículo 15 N° 1 del Código Penal y 99 del Código Tributario.

El acusador particular SII reconoció en el acusado la circunstancia atenuante de responsabilidad criminal del artículo 11 N° 6 del Código Penal, esto es, su irreprochable conducta anterior.

Para la aplicación de la pena estimó procedente aplicar el artículo 112 del Código Tributario, que en su inciso primero establece que *“En los casos de reiteración de infracciones a las leyes tributarias sancionadas con pena corporal, se aplicara la pena correspondiente a las diversas infracciones, estimadas como un solo delito, aumentándola en uno, dos o tres grados”*. Invocó también el inciso tercero de dicha norma que prescribe que *“Sin perjuicio de lo dispuesto en el N° 10 del artículo 97 en los demás casos de infracciones a las leyes tributarias, sancionadas con pena corporal, se entenderá que existe reiteración cuando se incurra en cualquiera de ellas en más de un ejercicio comercial anual”*.

El querellante SII indicó que el acusado ha incurrido en las irregularidades descritas durante dos ejercicios comerciales anuales, correspondientes a los años 2015 y 2016. Por lo anterior pidió condenar al acusado JORGE ANDRÉS INOSTROZA CERDA, en su calidad de representante legal de la SOCIEDAD CONSTRUCTORA VIALMIX LIMITADA a la pena de seis años de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias legales y a una multa equivalente al doscientos por ciento del perjuicio fiscal producido ascendente a \$291.012.992, accesorias legales y al pago las costas de la causa.

B.- ACUSACIÓN DE CAUSA RIT 1951-2020 (En que son acusadores la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado)

1.- El Ministerio público presentó acusación por los siguientes hechos: **HECHO N° 1**

“La Dirección Regional de Vialidad IX Región, ubicada en Manuel Bulnes N° 897, ciudad de Temuco, mediante resolución exenta D.V. IX. R N° 2178 de fecha 15 de octubre de 2014, adjudicó el contrato SAFI 219.920 denominado PDI 13/2014 “CONSERVACIÓN CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS, COMUNA DE VILCÚN, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”, a la empresa SOCIEDAD DE CONSTRUCCION DE PROYECTOS, SERVICIOS E INGENIERIA CSP LIMITADA RUT 76.031.950-



3, representada legalmente por el imputado **JORGE ANDRÉS INOSTROZA CERDA**. Para ejecutar dichas obras, que, según las bases y especificaciones técnicas, tenía por objetivo intervenir 06 caminos de una longitud total de 10.4 kilómetros, favoreciendo a 3 comunidades indígenas de la comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. Las obras a realizar consistían básicamente en la ejecución de una carpeta granular de rodadura, la construcción de la plataforma, mejoramiento de la subrasante, formación y compactación de terraplenes, la limpieza y construcción de obras de arte transversales que se encontraran embancadas o deterioradas, la reconstrucción de fosos en tierra, la limpieza y el despeje de la faja. Todo ello por un monto inicial o presupuesto original de 218.488.712 pesos incluido IVA, con la modalidad de pago a serie de precios unitarios mensuales con sus respectivos reajustes; con un plazo de ejecución de 180 días, teniendo como fecha de inicio el 24 de octubre de 2014. Durante el desarrollo de la obra la Dirección Regional de Vialidad aprobó la modificación del contrato por resolución exenta N° 2516 de 28 de noviembre de 2015, que regulariza aumento de obras, disminuciones de obra obras extraordinarias y aumento de plazo, conviniéndose un aumento de obra a precio de contrato de 21.069.311 de pesos, un aumento de obra a precio convenido por 44.001.261 de pesos, disminución de obras por 23.476.174 de pesos, aumento de obras extraordinarias por 1.462.957 de pesos, resultando un aumento efectivo de 43.057.355 de pesos IVA incluido, quedando en definitiva como nuevo presupuesto general o monto final en la suma de 261.546.067 de pesos equivalente a 5.841 UTM (44.776 UTM a noviembre de 2015), además se aprobó una ampliación de plazo de 189 días de acuerdo al nuevo programa de trabajo teniendo un plazo total de 369 días.

Para la fiel y correcta ejecución de dicho contrato se designó mediante Resolución exenta N° 378, de fecha 27 de febrero de 2015, como inspector fiscal al imputado **JAIME SILVA POBLETE**, Ingeniero Civil; quien, en su calidad de funcionario público, debía velar en terreno por la cantidad y calidad de las obras ejecutadas en concordancia con las bases del contrato. Era el funcionario responsable de certificar el avance de los trabajos ejecutados y exigir los informes que garantizaran que se cumplían las especificaciones técnicas del proyecto, calidad de materiales y el cumplimiento de las leyes laborales y previsionales de los trabajadores contratados y subcontratados por la ejecutante, visando con su autorización estos pagos parciales con dinero público al contratista. Como contraparte, los adjudicatarios debían ejecutar las obras, acreditando la calidad de los caminos y puentes mediante la instalación de un laboratorio de autocontrol de faenas, que debía entregar al Inspector Fiscal informes quincenales sobre la calidad de los materiales utilizados, que, según las bases, eran condición necesaria para autorizar los estados de pago por los avances de los trabajos ejecutados.

Que el imputado JORGE ANDRÉS INOSTROZA CERDA, previamente concertado con el imputado JAIME SILVA POBLETE, acordaron que éste,



incumpliendo los deberes de probidad y profesionalismo propios del cargo de inspector fiscal que desempeñaba, consintiera para que cobraran al Fisco de Chile, visando estados de pago a pesar de que el avance físico de las obras fue menor a los trabajos contratados, generando pérdidas al erario público al autorizar el pago de obras no ejecutadas; en la forma que a continuación se detalla:

1. El Inspector Fiscal JAIME SILVA POBLETE, aprobó un avance financiero superior al efectivamente ejecutado, a la empresa constructora SOCIEDAD DE CONSTRUCCION DE PROYECTOS, SERVICIOS E INGENIERIA CSP LIMITADA, por un monto correspondiente a \$ 14.303.474, que obedece a las siguientes obras:

CAMINO N° 1

-Tubos corrugados polietileno alta densidad Drn 0,75 metros, por el monto de \$1.319.714 (camino N°1)

-Tubos corrugados polietileno alta densidad D=1,0 metros, por el monto de \$3.922.016 (camino N°1).

-Construcción de canales, fosos y contrafosos sin revestir, por el monto de \$1.363.440 (camino N°1)

CAMINO N° 3

-Tubos corrugados polietileno alta densidad D=0,6 metros, por el monto de \$1.270.612 (camino N°3)

-Tubos corrugados polietileno alta densidad Drn 0,75 metros, por el monto de \$839.818 (camino N°3),

CAMINO N° 4

-Delineadores verticales, por el monto de \$405.424

-Señales verticales laterales en caminos secundarios, por el monto de \$262.474

-Reconstrucción de fosos y contrafosos, por el monto de \$1.147.600

CAMINO N° 5

-Tubos corrugados polietileno alta densidad Drn 0,75 metros, por el monto de \$599.870 (camino N°5)

CAMINO N° 6

-Tubos corrugados polietileno alta densidad Drn 0,75 metros, por el monto de \$1.799.610 (camino N°6)

-Construcción de canales, fosos y contrafosos sin revestir, por el monto de \$143.520 (camino N°6).

Y, por último, en caminos no indicados, barreras metálicas doble onda, por el monto de \$1.229.376 (no indica camino).

2. El Inspector Fiscal JAIME SILVA POBLETE, permitió el incumplimiento por parte de la empresa constructora SOCIEDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS, SERVICIOS E INGENIERÍA CSP LIMITADA, de los espesores contratados en algunos de los tramos de los caminos N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6, transgresión que vulnera el ítem 5.205-1, formación y compactación de



terraplenes, que establecía los espesores mínimos de terraplenes para cada tramo de dichas vías. Asimismo, tampoco se dio cumplimiento a los espesores de la partida 5.303-1, carpeta granular de rodadura T Max 2, que estipulaba que todos los caminos que formaban parte del proyecto debían cumplir con una altura promedio de 0,20 m. en la carpeta granular en todos sus tramos.

De este modo, los desembolsos efectuados para la partida 5.205-1 de terraplenes, corresponde a \$ 69.449.795; y para la partida 5.303-1 carpeta y granular corresponde a \$ 82.907.052. Dichos montos fueron autorizados y visados por el imputado JAIME SILVA POBLETE, en los estados de pago N° 1, 2, 3 y 4; no ajustándose en consecuencia, a lo efectivamente ejecutado.

3. El Inspector Fiscal JAIME SILVA POBLETE, permitió la ausencia del laboratorista vial ciase 'C', desde el 22 de junio de 2015 hasta el término de las obras el 22 de octubre del mismo año, sin que cursara las multas por la falta del personal mínimo en el proyecto, incumplimiento que debió ser sancionado con una multa de 5 UTM por cada día, según disponen las bases administrativas del contrato, correspondiendo una sanción de 610 UTM equivalentes a 27.177.330 de pesos al valor de UTM a octubre de 2015 (44.553 UTM a octubre de 2015), por los 122 días de ausencia del profesional.

Desde el punto de vista financiero, el fraude al Fisco se establece, ya que la obra quedó finalizada y con término legal con fecha 22 de octubre de 2015 y aprobada mediante acta de recepción única y autoriza devolución de retenciones Resolución DVR Ex N° 978 de fecha 17 de mayo de 2016 y posteriormente ratificada mediante la liquidación del contrato y devolución de garantías Resolución DVR Ex N° 1149 de fecha 07 de junio de 2016 de la cual el imputado JAIME SILVA POBLETE formó parte de la comisión encargada de verificar el cumplimiento efectivo y total de las obras. De esa manera la empresa constructora SOCIEDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS, SERVICIOS E INGENIERÍA CSP LIMITADA representada por el imputado JORGE INOSTROZA CERDA, recibió por parte del Fisco de Chile, a través de la autorización visación del imputado JAIME SILVA POBLETE la suma de \$269.603.951 por el 100 por ciento de avance de obras, todo mediante los siguientes estados de pago:

1. Estado de pago N° 1 de fecha 10-02-2015, por un valor líquido de \$33.541.805, por un avance físico del 16,7 por ciento de la obra. El valor del estado de pago correspondía a \$37.191.621, a lo que se le descontó \$3.649.816 por el ítem de retenciones.

2. Estado de pago N° 2 de fecha 09-03-2015, por un valor líquido de \$120.923.259, por un avance físico del 74,29 por ciento de la obra. El valor del estado de pago correspondía a \$128.197.879, a lo que descontó \$7.274.620 por el ítem de retenciones.



3. Estado de pago N° 3 de fecha 01-04-2015, por un valor líquido de \$52.061.621, por un avance físico del 97,59 por ciento de la obra, sin aplicación de descuentos.

4. Estado de pago N° 4 de fecha 21-12-2015, por un valor líquido de \$49.999.963, por un avance físico del 100 por ciento de la obra. El valor del estado de pago correspondió a \$52.152.867, a lo que se descontó \$2.152.867 por el ítem de retenciones.

5. Estado de pago N° 5 (devolución de retenciones) de fecha 18-05-2016, por un valor líquido de \$13.077.303, por un avance físico del 100 por ciento de la obra, no se aplicaron descuentos.

En definitiva, el perjuicio fiscal por obras pagadas y no ejecutadas, no cobro de multas respectivas, asciende a la suma de \$193.837.651, equivalentes a 4.350,72 UTM al mes de Octubre de 2015.

HECHO N° 2

“La Dirección Regional de Vialidad IX Región, ubicada en Manuel Bulnes N° 897, Temuco, adjudicó mediante resolución exenta D.V. IX. R N° 2327 de fecha 29 de octubre de 2015, adjudicó el contrato SAFI 233.248 denominado PDI 3/2015 “CONSERVACIÓN CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS, COMUNA DE LONQUIMAY, PROVINCIA DE MALLECO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”, a la empresa SOCIEDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS, SERVICIOS E INGENIERÍA CSP LIMITADA RUT 76.031.950-3, representada legalmente por el imputado JORGE ANDRÉS INOSTROZA CERDA, por un monto de \$167.593.210, para ejecutar dichas obras, que según las bases y especificaciones técnicas, tenía por objetivo intervenir un total de 4 caminos de una longitud total de 12,2 kilómetros, favoreciendo a 2 comunidades indígenas de la comuna de Lonquimay, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía. Las obras a ejecutar, consistían básicamente en la ejecución de una carpeta granular de rodadura con material chancado, la confección de plataformas, conformación y compactación de terraplenes, además de la construcción de obra de arte nuevas y la reposición de algunas existentes en mal estado o de capacidad hidráulica insuficiente, utilizando mayoritariamente tubos de base plana, excavaciones en TCN, construcción de fosos en terreno de cualquier naturaleza y conformación de cunetas Todo ello por un monto inicial de 167.593.210 pesos incluido IVA, con un plazo de ejecución de 180 días, teniendo como fecha de inicio el 05 de noviembre de 2015. Durante el desarrollo de la obra la Dirección Regional de Vialidad aprobó la modificación del contrato por resolución DVR Exenta N° 1335 de fecha 30 de junio de 2016, que autoriza aumento de obras, obras extraordinarias y aumentos de plazos, conviniéndose un aumento de obra a precio de contrato de 3.593.476 de pesos; una disminución de obras por 26.510.740 de pesos; un aumento por obras extraordinarias por 44.047.322 de pesos, resultando un aumento efectivo de



obras por 25.144.768 de pesos IVA incluido, quedando en definitiva como nuevo presupuesto general o monto final en la suma de 192.737.978 de pesos equivalente a 4.181 UTM (46.091 noviembre 2016). Además, se aprobó una ampliación de plazo de 185 días de acuerdo con el nuevo programa de trabajo, teniendo un plazo total de 365 días.

Para la fiel y correcta ejecución de dicho contrato se designó mediante, Resol (Exenta) DV.IXR.N° 2707, de fecha 11 de diciembre de 2015, como inspector fiscal al imputado JAIME SILVA POBLETE, Ingeniero Civil; quien, en su calidad de funcionario público, debía velar en terreno por la cantidad y calidad de las obras ejecutadas en concordancia con las bases del contrato. Era el funcionario responsable de certificar el avance de los trabajos ejecutados y exigir los informes que garantizaran que se cumplieran las especificaciones técnicas del proyecto, calidad de materiales y el cumplimiento de las leyes laborales y previsionales de los trabajadores contratados y subcontratados por la ejecutante, visando con su autorización estos pagos parciales con dinero público al contratista. Como contraparte, los adjudicatarios debían ejecutar las obras, acreditando la calidad de los caminos y puentes mediante la instalación de un laboratorio de autocontrol de faenas, que debía entregar al Inspector Fiscal informes quincenales sobre la calidad de los materiales utilizados, que, según las bases, eran condición necesaria para autorizar los estados de pago por los avances de los trabajos ejecutados.

Que el imputado JORGE ANDRÉS INOSTROZA CERDA, previamente concertado con el imputado JAIME SILVA POBLETE, acordaron que éste, incumpliendo los deberes de probidad y profesionalismo propios del cargo de inspector fiscal que desempeñaba, consintiera para que cobraran al Fisco de Chile, visando estados de pago a pesar de que el avance físico de las obras fue menor a los trabajos contratados, generando pérdidas al erario público al autorizar el pago de obras no ejecutadas; en la forma que a continuación se detalla:

1. El Inspector Fiscal JAIME SILVA POBLETE, visó y autorizó en los correspondientes estados de pago, la partida 7.703.13c.1 alcantarillas de tubos de hormigón de base plana $D=0,8m$, por un monto de 13.167.000 de pesos ($4.389.000 E1 + 8.778.000 E2 = 13.167.000$); por la partida; 7.303.13c.2 alcantarillas tubos de hormigón de base plana $D=1,0m$, por un monto de 10.410.730 de pesos (E2) y por la partida 7.303.15a, correspondiente revestimiento mampostería de piedra por un monto de 2.933.010 de pesos ($E3 2.065.500 + E4 867.510 = 2.933.010$); las que fueron aprobadas y pagadas en un 100%, a pesar de no haber sido materializadas por la empresa contratista SOCIEDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS, SERVICIOS E INGENIERÍA CSP LIMITADA. Sobre lo expuesto, las partidas enunciadas formaron parte de las disminuciones de obras contempladas en la modificación de contrato N° 1, de 30 de junio de 2016, aprobada a través de la resolución N° 1.335, de 30 de junio de 2016, de la Dirección Regional de Vialidad de La



Araucanía, lo que denota la aprobación y pago por parte de la inspección fiscal de la ejecución de faenas que en definitiva no se ejecutaron.

2. El Laboratorio de Autocontrol de la obra entregó el certificado N° 2/2016 - anexo al informe quincenal N° 1, que registró resultados de la partida 7.302.5d, correspondiente a terraplenes, indicando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, tanto en humedad como en densidad, de los 36 puntos de control efectuados al camino N° 1 del proyecto, no obstante que dicha faena no fue ejecutada en conformidad a tales especificaciones. Así el Inspector Fiscal JAIME SILVA POBLETE, pagó a la empresa SOCIEDAD DE CONSTRUCCION DE PROYECTOS, SERVICIOS E INGENIERIA CSP LIMITADA, la suma de 14.829.127 de pesos (E2).

3. El Inspector Fiscal JAIME SILVA POBLETE, visó y autorizó en los correspondientes estados de pago, la partida 5.303.1 denominada confección, colocación y compactación de carpetas granulares de rodadura las que fueron aprobadas y pagadas a pesar de no haber sido materializadas por la empresa contratista SOCIEDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS, SERVICIOS E INGENIERÍA CSP LIMITADA, por un monto de 30.637.029 de pesos (E2 12.730.963 + E3 15.459.800 + E4 2.446.266)

4. El Inspector Fiscal JAIME SILVA POBLETE, visó y autorizó en los correspondientes estados de pago, la partida 5.613.1 denominada Construcción de fosos y contrafosos sin revestir, las que fueron aprobadas y pagadas a pesar de no haber sido materializadas por la empresa contratista SOCIEDAD DE CONSTRUCCION DE PROYECTOS, SERVICIOS E INGENIERIA CSP LIMITADA, por un monto de 1.781.800 de pesos (E3).

5. El Inspector Fiscal JAIME SILVA POBLETE, visó y autorizó en los correspondientes estados de pago, las partidas 7.311.1 Instalación de faenas y campamentos en obras de mantenimiento (E3 1.006.236 + E4 670.824); 7.311.2 Apertura, uso y abandono de botaderos en obras de mantenimiento (E4 1.030.593); 7.311.3 Apertura, explotación y abandono de empréstitos en obras de mantenimiento (E4 1.712.065); y 7.311.4 Plantas de producción de material en obras de mantenimiento (E4 1.566.853) Todas parte del ítem Elaboración y aplicación de plan de medidas ambientales de las especificaciones ambientales del contrato, las que fueron aprobadas y pagadas a pesar de no haber sido materializadas por la empresa contratista SOCIEDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS, SERVICIOS E INGENIERIA CSP LIMITADA, por un monto de 5.986.571 de pesos.

6. El Inspector Fiscal JAIME SILVA POBLETE, visó y autorizó en los correspondientes estados de pago, la partida 5.209.4 denominada Efectuar labores de enraizamiento de la plataforma del camino, las que fueron aprobadas y pagadas a pesar de no haber sido materializadas por la empresa contratista por un monto de 34.580 pesos.



El Inspector Fiscal JAIME SILVA POBLETE, visó y autorizó en los correspondientes estados de pago, la partida "Excavación corte en TCN" (5.201.3 del anexo complementario de las bases generales del contrato), obra no lo ejecutada y pagada en un 100% por un monto de 8.447.285 de pesos a pesar de no haber sido materializadas por la empresa contratista SOCIEDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS, SERVICIOS E INGENIERÍA CSP LIMITADA.

Desde el punto de vista financiero, según lo anteriormente expuesto, el fraude al Fisco se establece, toda vez que fue puesto en término administrativo y de forma anticipada de acuerdo con la resolución exenta N° 103, de 17 de enero de 2017, de la Dirección Regional de Vialidad, ya que la empresa interrumpió el curso de los trabajos sin causa justificada ni por fuerza mayor; y además procedió a paralizar de forma unilateral las obras que se encontraba ejecutando. Sin embargo, el imputado JAIME SILVA POBLETE consintiendo en que particulares defraudaran al Fisco, había autorizado el pago por avance de obras por la suma de \$167.593.210 a SOCIEDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS, SERVICIOS E INGENIERÍA CSP LIMITADA representada por el imputado JORGE INOSTROZA CERDA, conforme al siguiente desglose:

- 1. Estado de pago N° 1 de fecha 18-12-2015, por un valor líquido de \$15.821.042, por un avance físico del 10,39 por ciento de la obra. El valor del estado de pago correspondía a \$17.561.722, a lo que se le descontó \$1.740.680 por el ítem de retenciones.*

- 2. Estado de pago N° 2 de fecha 20-01-2016, por un valor líquido de \$96.779.385, por un avance físico del 71,55 por ciento de la obra. El valor del estado de pago correspondía a \$103.418.366, a lo que se le descontó \$6.638.981 por e] ítem de retenciones.*

- 3. Estado de pago N° 3 de fecha 03-02-2016, por un valor líquido de \$38.109.104, por un avance físico del 94,09 por ciento de la obra, no se aplicaron descuentos.*

- 4. Estado de pago N° 4 de fecha 15-04-2016, por un valor líquido de \$10.291.860, por un avance físico del 100 por ciento, no se aplicaron descuentos.*

Por ello se designó mediante Resolución Exenta DV.IXR N° 256 de fecha 13 de febrero de 2017 comisión de recepción única la que determinó mediante Resolución Exenta DV.IX-R N° 1882 de fecha que las obras pagadas y no ejecutadas corresponden a un monto total de \$95.056.078, IVA incluido, vulnerando el imputado JAIME SILVA POBLETE abiertamente lo establecido en el artículo 154 del Reglamento para contratos del Ministerio de Obras públicas que prescribe que en esta modalidad de contrato los estados de pago se formularán por las cantidades de obras efectivamente ejecutadas y a los precios del presupuesto convenido.



El perjuicio fiscal por obras pagadas y no ejecutadas, reajustadas, descontadas las retenciones, saldos y las boletas de garantía, asciende a la suma de \$51.930.718, equivalentes a 1123,33 UTM al mes de enero de 2017”.

CALIFICACIÓN JURÍDICA, PARTICIPACIÓN, CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS Y PENAS PEDIDAS:

Según la Fiscalía los hechos antes descritos, configuran el delito de fraude al Fisco en carácter de reiterado, previsto y sancionado en el artículo 239 en relación con el artículo 260, ambos del Código Penal, perpetrado por el acusado JORGE ANDRÉS INOSTROZA CERDA en calidad de autor, de conformidad a lo establecido en el artículo 15 N° 1 del Código Penal, y en grado de consumado. A quien según el acusador favorece la circunstancia atenuante de responsabilidad penal, descrita en el artículo 11 N° 6 del Código Penal, irreproachable conducta anterior, no concurriendo circunstancias agravantes a su respecto.

El Ministerio Público pidió condenar al acusado a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, multa del 50 por ciento del perjuicio causado y cinco años y un día de inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en sus grados medio, más la accesoria del artículo 30 del Código Penal y al pago de las costas de la causa.

2.- El Consejo de Defensa del Estado adhirió a la acusación fiscal.

TERCERO: Alegatos de apertura. Acusación 1.

Que, el **Ministerio Público**, señaló respecto de los **Delitos tributarios**: lo que se dirige como imputación respecto de don Jorge Inostroza dice relación con aquella comisión de ilícitos previstos en el artículo 97 N°4 del Código Tributario. Y acá el énfasis que se trata de aspectos que son eminentemente documentales. Estamos hablando que el delito se configura e incluso se consuma con la presentación de estas declaraciones maliciosas que se efectúan con dos finalidades, ambas que se pueden advertir concurren copulativamente en relación con estos hechos. Por una parte, declaraciones que están asociadas a generar una subdeclaración del débito fiscal, esto es, de aquellos montos que están asociados a montos vinculados con pago que se debe efectuar de impuestos, los cuales se rebajan con la finalidad de efectuar justamente un pago menor y la consiguiente afectación al erario fiscal. Por otro lado, también lo que se puede verificar es que hay declaraciones que están vinculadas con generar un aumento de crédito fiscal, esto es, con la posibilidad de tener montos de dinero en favor en relación con aquellos que se deben pagar al fisco. Esas son las circunstancias que a grandes rasgos están asociadas a la comisión de estos



delitos que como se ha indicado, están vinculadas con declaraciones de pago mensual de impuestos, al ser presente su señoría en este punto. Ahora bien, las circunstancias vinculadas con la participación y cuál es la participación del imputado. Como bien se indica en la acusación el imputado, señor Inostroza, es el representante legal de Vialmix, esta sociedad que declara maliciosamente este crédito fiscal aumentado y subdeclara el débito fiscal, pero, además, él es el administrador y es mandatario de la sociedad. Inclusive, para efectos de poder asentar la participación del imputado, existirá prueba testimonial que permitirá al tribunal tener una idea clara respecto de cuáles son las actividades concretas que efectúa el imputado con el servicio de impuestos internos. De forma tal que acá la imputación no se dirige únicamente por aspectos de mera formalidad, por el solo hecho de ser el representante legal de una entidad, sino más bien porque él también en el día a día, en la operatividad, mantiene justamente esta condición de ejercer justamente los roles que se indican representante legal, administrador, mandatario.

Ese es el contexto de este ilícito tributario que es el que se persigue respecto del imputado por estas dos variables, **tanto el aumento de crédito fiscal como la reducción o subdeclaración del débito fiscal.**

En base a estas consideraciones, estimamos que ya con el curso del desarrollo probatorio se logrará establecer justamente aquellas circunstancias que están asociadas con la comisión de los ilícitos y con la especial participación del imputado en ambos delitos que se dirigen a su contra.

Por el **Querellante, Servicio de Impuestos Internos**, Se tratará de acreditar tanto la comisión de dos delitos tributarios como la participación del acusado, don Jorge Andrés Inostroza Serra. Primeramente, para contextualizar estos delitos tributarios, hay una frase que siempre me ha hecho sentido, que dice que los impuestos son el precio que tenemos que pagar por vivir en una sociedad civilizada. Es de juez y jurisconsulto norteamericano que establece que es sumamente importante no solamente para financiar el gasto público del Estado, sino también para la legítima competencia que debe existir entre los agentes económicos. Dicho eso, aquí pretendemos acreditar la existencia de dos delitos. El previsto y sancionado en el artículo 97 cuatro inciso primero, que es la figura de **evasión genérica**, que sanciona al que maliciosamente presente declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto menor al que corresponda o derechamente a burlar el impuesto. El tipo penal es bastante amplio. Y la segunda consideración es que esto, al igual que el inciso segundo que vamos a ver de inmediato, son delitos de peligro o de mera actividad, es decir, no se requiere de un perjuicio fiscal efectivo. La otra figura, **agravada de evasión que sanciona en el caso de los contribuyentes del IVA**, como el caso que nos ocupa con la empresa constructora Vialmix Limitada, aumentó indebidamente los créditos fiscales que tenía que realizar en relación con los débitos que tenía que enterar en arca



fiscal. ¿En el primer caso, señorita, para ejemplificarlo, qué es lo que ocurrió en la figura del 97 cuatro inciso primero? ¿Qué es lo que ocurre? Para explicarlo con un ejemplo, el contribuyente, que es, como ya lo dijimos, contribuyente del impuesto al valor agregado que está establecido en la ley sobre ventas y servicios del decreto ley 825 del año 74, es un contribuyente que tiene que retener el IVA y enterarlo en arcas fiscales. ¿El mecanismo, el IVA, ¿qué es lo que graba? Graba el mayor valor que se incorpora a un bien en cada una de las etapas de su comercialización o bien en la prestación de servicios. ¿Entonces, qué es lo que hacen los contribuyentes del IVA? En este caso, Vialmix, que prestaba servicios para el Ministerio de Obras Públicas, él, digamos, le presta servicio, el Estado le paga y le paga el valor neto de la operación. ¿Y el IVA, qué es lo que pasó con la primera hipótesis? Es que el contribuyente subdeclara las ventas que efectuó al MOP, al Ministerio de Obras Públicas y en general subdeclará todas las ventas que realizó. ¿Entonces, cómo operó esto, señorita? Supongamos que, de acuerdo con su libro de compraventa, en este caso ya no estamos actualmente son registros electrónicos, en ese tiempo eran registros en papel y en este caso son hojas sueltas, digamos, el libro compraventa, que están timbrados o autorizados por el Servicio Impuestos Internos. Entonces, en este registro, o, mejor dicho, el antiguo libro de compraventa, se van registrando, es obligatorio, y se van registrando cronológicamente todas las ventas y compras que realiza contribuyente. Y en este caso, como lo va a refrendar tanto la testigo exfuncionaria del servicio impuesto interno como el Perito de LACRIM, lo que hizo la contribuyente VIALMIX limitada es que declaró menos IVA del que debía enterar en arcas fiscales. Supongamos que vendió o prestó servicios por 100, pero declaró 50, es decir, no declaró todo el IVA que tenía que enterar en arcas fiscales. ¿Y por qué? Porque aquí opera el mecanismo del crédito y débito fiscal y en este caso la contribuyente, como contribuyente del IVA, va compensando sus créditos y débitos.

Y aquí vamos a la segunda figura ilícita, señoritas, que tradicionalmente siempre uno escucha en la prensa o le ha tocado, el verbo rector es el aumento indebido de los créditos fiscales en relación con los débitos que debe enterar en actas fiscales. La particularidad de este caso es que aquí, señorita, no estamos en presencia de facturas falsas. Si uno lee la hipótesis del inciso segundo del artículo 97, número cuatro, en ninguna parte el legislador supone, digamos, para su materialización, que existan facturas falsas. En este caso ya no existen facturas falsas. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el contribuyente aumentó en el formulario 29, que al igual que en el caso anterior es el medio en que se comete este delito, y aumentó indebidamente el crédito fiscal que es superior al que se encuentra registrado en este libro de compras venta. ¿Entonces, qué es lo que pasa con eso? Al aumentar su crédito fiscal, disminuye su carga tributaria, porque en el fondo el débito que debe enterar en arca fiscal, que es un impuesto que se va devengando mensualmente, va a ser menor y por ende rebaja su carga tributaria. Entonces, ya hemos dicho, estamos frente a dos hipótesis distintas,



en que en la primera del 97 cuarto inciso primero, declara sus impuestos, es una presentación y acreditaremos que es una presentación de declaración en el formulario 29, que se denomina formulario de declaración e impuesto, que es obligatorio, subdeclara en la primera hipótesis el IVA, el débito fiscal que debe enterarse en las arcas fiscales. Y en la segunda hipótesis aumenta indebidamente el crédito fiscal, señorita, en este caso, el perjuicio fiscal se produjo efectivamente y, digamos, solamente pudiera considerarse un eventual pago posterior de impuestos como atenuante de responsabilidad criminal especial que está contemplada en el artículo 111 del código tributario. Pero el legislador en esa hipótesis de atenuante especial del Código Tributario, distinta a la reparación con celo del daño causado, exige que se paguen todos los impuestos sobre intereses y reajustes. Dicho eso, resulta bastante relevante. Y otra consideración frente a un eventual pago posterior del impuesto o rectificación. En el caso de las rectificaciones, cuando el contribuyente rectifica su impuesto, en el fondo es un **reconocimiento expreso**, digamos, en que va a modificar sus declaraciones y que en este caso en particular nosotros demostraremos que eran maliciosamente falsas, tanto la hipótesis del 97 cuatro inciso primero como la hipótesis del 97 cuatro inciso segundo. **En el caso del inciso primero, no supone la calidad de contribuyente.** Si uno lee el tipo penal, dice la presentación maliciosa de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas. En el caso de la figura del inciso segundo, estamos en presencia o supone el legislador la calidad de contribuyente. Y aquí el último elemento de alegato de apertura en el sentido de que la contribuyente es la sociedad constructora VIALMIX. En este caso, sí, dentro de todos los casos que me ha tocado participar en estos 28 años en que soy abogado del servicio Impuestos Internos, no me haya tocado el caso en que no existieran facturas falsas. Y, en segundo lugar, aquí lo acreditaremos con la prueba pericial y testimonial y documental, es que el contribuyente es el representante legal de la empresa. Ya veremos que el **artículo 99** establece que la responsabilidad por las personas jurídicas tratándose de sanciones corporales, corresponde a los gerentes, administradores o socios que hagan las veces de esto, pero con la prueba que introduciremos acreditaremos que detrás de estas maniobras estaba el acusado, don Jorge Andrés Inostroza Cerda; estamos ciertos que tanto el testimonio de la testigo de la fiscalizadora de servicio impuesto, en su momento, en su oportunidad, realizó la recopilación de antecedentes y que nos va a explicar cómo se materializó este delito, como la perito del Lacrim que corrobora lo establecido matemáticamente, porque aquí vamos a ver, lo va a presentar el Ministerio Público conjuntamente con el Servicio Impuestos Internos, los formularios 29 y el libro de compras, que como ya lo adelantaba, está en hojas de contabilidad sueltas y autorizadas por el servicio impuesto. Ahí nos van a explicar cómo se materializa este delito y también con la prueba también testimonial, acreditaremos, digamos que el que materializó estos delitos es el acusado aquí presente.



Por la defensa de Inostroza Cerda: Señaló el defensor que, como bien han dicho en este caso tanto la fiscalía como los querellantes y en particular haciendo también una aclaración, voy a partir hablando respecto de lo que es **el primer delito de la causa 2930 del 2019, que es en este caso en particular el delito de carácter tributario**. Efectivamente a su representado se le imputan en particular dos delitos del artículo 97, número cuatro, inciso primero e inciso segundo. Ahora, desde ya debo hacer mención que a nuestro juicio estos ilícitos, a diferencia de lo que indica el Servicio Impuesto interno, **no son delitos de mera actividad**. Estos son delitos que requieren de un resultado en particular, **un perjuicio fiscal**. De hecho, el mismo tipo penal establece dentro de las penas a imponer multas, multas que se deben calcular en base justamente a un perjuicio fiscal que efectivamente hubiese ocurrido como tal, el cual tiene que estar real y claramente determinado. Por lo cual, claramente, su señoría, a nuestro juicio no son delitos de mera actividad.

Ahora bien, respecto de ambos ilícitos, de ambos incisos primero y segundo, en ambos sí comparten un elemento que es el elemento subjetivo. En particular se habla de **malicia, dolo, en este caso dolo directo**, así lo indica, como lo dije, ambos incisos hablan de malicia. ¿Ahora bien, qué tipo de dolo en particular? Y en este caso en particular, estos ilícitos del Código Tributario requieren expresamente la intención de, en este caso, privar al fisco de lo que por ley les corresponde, es decir, de los impuestos. Eso es lo que se busca expresamente como elemento subjetivo. Esa es la malicia o el dolor, privar al fisco de lo que por ley le corresponde. Pero en este caso, su a diferencia también de lo que indica la fiscalía, no basta con comprobar simplemente omisiones que se le puedan imputar a su representado, como dijo la fiscalía, sólo se consumaría por la presentación documental. Eso no es efectivo. Aquí claramente se hace necesario poder acreditar efectivamente el actuar o el elemento subjetivo de su representado en partido. Y eso, claramente a nuestro juicio como defensa, partimos desde la base que ello no va a ser posible. ¿Por qué? Porque aquí se ha omitido una cuestión relevante, que son las **actuaciones posteriores de su representado al enterarse de esta situación** y de saber el problema que ocurría en este caso en particular con estas declaraciones de impuestos. ¿Por qué? Porque su representado de manera posterior, y así lo probaremos a través de la prueba que rendiremos estos días de juicio, **actuó de manera en este caso de buscar una clara solución. En este sentido realizó un convenio de pago millonario con tesorería**, porque también otra cosa que se omite es que estas diferencias en impuestos fueron obviamente a para tesorería que se encargó de su cobro y su representado de manera inmediata realiza un convenio de pago con esa institución, un convenio pago millonario de casi \$50 millones solamente en el pie y con cuotas de \$15 millones cada una de ellas y también el hecho de que tesorería embarga a su representado a partir justamente de los estados de pago pendiente en el MOP, cifras millonarias de más de \$100 millones



justamente para pagar estas diferencias que habían existido de impuesto, existiendo por ende entre lo que fue convenio de pago más los embargos que realizó Tesorería, prácticamente un pago íntegro de las diferencias que se dicen en este caso se habrían por parte de su representado. En ese sentido su entendemos que claramente las actuaciones posteriores de su representado dan cuenta de que él jamás tuvo como intención privarle al fisco de lo que por ley le corresponde, en este caso como lo dije, justamente es el elemento central, elemento subjetivo o un requerimiento del tipo penal, muy por el contrario, tuvo toda y claramente la intención de restaurar estos dineros al fisco justamente de la forma en que lo he mencionado anteriormente, con convenios de pago más los embargos que realiza en su momento tesorería General de la República. Y en ese sentido, tampoco será posible ni por parte del Ministerio Público ni por parte del querellante en particular Servicio Impuesto interno, dar cuenta de la certeza en particular del supuesto **perjuicio fiscal, una cifra exacta, porque claro, ellos lo determinan de diferentes formas tanto la Fiscalía como el Servicio Impuesto Interno, hemos dado cuenta de ello en la lectura de lo que fue las acusaciones, pero en ningún caso hacen mención a los pagos completos que existieron por parte de su representado de manera posterior**, de manera voluntaria a través de los convenios de pago y de manera forzosa a través de los embargos realizados en este caso por Tesorería General de la República y en este caso soñaría en caso de que se insista con existir un supuesto perjuicio fiscal, este debe ser efectivo y acreditarse de manera certera, lo cual como lo dije anteriormente no será posible.

Una segunda cuestión relevante su señoría, es justamente que dice relación con los tipos penales que se le imputa a su representado, en este caso como dije anteriormente son ambos incisos del artículo 97 número cuatro, inciso primero y segundo. En ese sentido su señoría y así también lo resuelto nuestra excelentísima Corte Suprema, entre estas dos situaciones existe un **concurso aparente de leyes penales**, lo cual tampoco se menciona de manera alguna, pero es relevante justamente para resolver esto. De hecho, nuestra Excelentísima Corte Suprema en distintos fallos ha señalado que cuando en particular el imputado ostenta la calidad de contribuyente, un contribuyente afecto al impuesto a las ventas y servicios, lo que resulta **aplicable jurídicamente es la situación descrita en el inciso segundo del artículo 97, número cuatro, en este caso para la infracción, y no aquella que se establece en el inciso primero**. Es decir, a través del principio de especialidad y non mis in ídem, establece claramente que el único ilícito que se le pudiese imputar a su representado sería que del inciso segundo, no del inciso primero, como lo dije anteriormente, porque existe un concurso aparente de leyes penales y en virtud del principio de especialidad de ser su representado contribuyente afecto en este caso al impuesto al valor de las ventas y servicios, lo que corresponde aplicar es el inciso segundo y no el inciso primero, cuestión también relevante que deberán tomar su señoría en consideración en ese sentido.



CUARTO: Alegatos de apertura. Acusación 2.

Que, el **Ministerio Público, Fraude al fisco**: En relación con el delito de fraude al fisco, una hipótesis, que está dada por lo que comúnmente ocurre en materia de licitaciones públicas y en particular con el Ministerio de Obras Públicas, y es una intervención delictiva múltiple que se desarrolla en base a la interacción entre al menos un funcionario público, en este caso don Jaime Silva Poblete, a esta altura incluso ya condenado por estos hechos, y el particular, el señor Jorge Inostroza, acusado de estos hechos. Acá lo que se quiere poner como énfasis por parte del Ministerio Público es más bien la circunstancia de tratarse de una unidad de acción. Entendemos que esa es justamente la hipótesis que nos permite hablar de comunicabilidad del hecho y por tanto de una imputación por un delito de fraude al fisco que no solamente empece al funcionario público, sino que también a el particular como extraños del delito. Y en este contexto la circunstancia que se da es justamente la interrelación o este concierto entre ambos para los efectos de poder propiciar estados de pago que permiten la transferencia de fondos públicos a la empresa, en este caso Sociedad de Construcción de Proyectos Servicios de Ingeniería CSP por obras, que en la práctica durante el curso de los años 2014 2015 en caminos rurales nunca se efectuaron. La participación del imputado, por tanto, está dada como extraños del delito y esto conectado con el hecho de tratarse también al igual que en el caso de VIALMIX, la empresa en la que se cometen los delitos tributarios, en este caso, por tratarse también de ser el representante legal. Así las cosas, es que también existirá un cúmulo de antecedentes de índole documental que permitirá dar cuenta respecto de todas aquellas condiciones que estaban vinculadas con estos contratos con la Dirección de Vialidad y en particular en relación con la inejecución de estas actividades, se presentará una serie también de elementos probatorios de índole fotográfico y también testifical. En base a estas consideraciones, es que, y con esto ya finalizo, hay algunos elementos que están de base y que permiten establecer que la conducta del imputado es una conducta que se puede justificar desde una globalidad delictiva, entendiendo que se trata de ilícitos tanto tributarios como de fraude al fisco que afectan directamente el erario público. Y también acá hay una modalidad comisiva que es coincidente y que es el uso de sociedades para los efectos de poder posibilitar o propiciar la comisión de los delitos. En el caso de los delitos tributarios, la empresa VIALMIX.

En el caso de los ilícitos de índole de fraude al fisco, la empresa CSP Limitada. Por el **Querellante, Consejo de Defensa del Estado**, Esta parte tiene interés en enfatizar es que si hay algo que pueda caracterizar este caso o que puede llamar la atención, es el transcurso del tiempo, la fecha de los hechos. Señalaba el poeta romano Ovidio que el tiempo es poderoso porque lo destruye todo. Pero a eso podríamos agregar, atendida a la observación de la naturaleza de las cosas,



que el tiempo destruye todo, pero no en un mismo momento y no todas las cosas al mismo tiempo. Y en el caso de los delitos como el que nos ocupa en esta audiencia, ello va a depender de la subsistencia de indicios probatorios y de la fuerza que cada uno de estos tenga para corroborarse uno respecto de los otros. Y eso es precisamente lo que para el fisco de Chile ha ocurrido con este caso. Estos indicios son los que al final de la audiencia van a permitir a establecer cada uno de los hechos señalados descritos en la acusación, que, como bien se señaló, la lectura del auto de apertura dice relación con la suscripción de dos contratos de conservación de camino, el contrato PDI 13 2014 y el número tres 2015. El modo del fraude es una situación que es bastante común, **que es la percepción de dineros fiscales para la ejecución de obra pública, no ejecutándose la obra pública en manera alguna, o bien llevándose ésta a cabo de manera imperfecta**, vale decir, no ajustándose en la ejecución a la forma señalada en las especificaciones técnicas o las bases de los respectivos contratos. Y aquí es muy importante lo que ha ocurrido con el coimputado en esta investigación, que era precisamente el coacusado **Jaime Silva Poblete**, funcionario público de la Dirección de Vialidad, porque es precisamente **esta convergencia de voluntades que fluye de los antecedentes de la investigación la que ha permitido en definitiva al coacusado Jorge Inostroza obtener estos fondos públicos sin realizar las obras a las cuales estaba obligado**. Una cosa que llama la atención, que probablemente pueda salir en alguna declaración o alguna idea alternativa, es que resulta imposible que como representante legal de la sociedad constructora Servicio de Ingeniería CSP Limitada, representada legalmente por el acusado aquí presente, haya ignorado dos hechos absolutamente relevantes. **Primero, que recibió efectivamente fondos públicos, los respectivos estados de pago para la ejecución de la conservación de estos dos caminos**. Y segundo, que haya ignorado que las obras en definitiva no se ejecutaron o se ejecutaron de manera imperfecta, unido esto al dolo común o a la convergencia de voluntades es que para el fisco de Chile resulta absolutamente indiscutible que, en la producción de este perjuicio al fisco, el señor Inostroza Cerda ha tenido participación en carácter de autor. Podrá haber algunas divergencias, pero eso creemos nosotros que es de orden de tipo jurídico. Si es posible o no acá castigar a tipo de fraude al fisco a un particular, tiene que ver, como vuestra señoría seguramente lo tiene mucho más claro que este interviniente. Va a depender un poco de la teoría que se siga, pero aquí es muy claro la situación de que la calidad de funcionario público del coacusado Jaime Silva Poblete, ya condenado, a un juicio oral por estos mismos hechos, si no hubiesen intervenido ambos, particularmente en el caso del señor Jaime Silva Poblete, su calidad de funcionario público, seguramente o habría dificultado mucho que el coacusado Jorge Inostroza Cerda hubiese obtenido, percibido estos recursos públicos.



Por eso es por lo que la imputación es precisamente a título de fraude al fisco respecto del particular. Pero como digo, podrá haber divergencias de tipo jurídico o que no el monto, por ejemplo, a discusión en cuanto al monto del perjuicio del valor de la UTM, que no es el que corresponde, en definitiva. Pero lo concreto, es que como la prueba disponible que ustedes van a tener ocasión de apreciar, es absolutamente irrefutable desde nuestra perspectiva, que el Modo del Fraude ha tenido lugar, que se ha percibido recursos públicos, que no se ejecutaron las obras o no se ejecutaron la forma en que se había pactado y que es de acuerdo con las reglas de la máxima de la experiencia, fundamentalmente, muy poco probable que el coacusado aquí presente haya ignorado esas circunstancias de percepción de recursos públicos e inejecución de esta misma obra pública. Solicitamos, en definitiva, que se condene al final de este juicio las penas señaladas en la respectiva acusación fiscal, de la cual el fisco de Chile es acusador adherente.

Por la defensa de Inostroza Cerda: _Ahora bien, **respecto de la segunda imputación** que se le realiza a su representado, denominada en este caso fraude al fisco, en la cual aparece como querellante, en este caso el Consejo de Defensa del Estado, efectivamente a su representado se le adjudicaron dos contratos, que se discuten aquí, porque en realidad tenía decenas de contratos con el Ministerio de Obras Públicas, pero en particular aquí se hace mención a uno en la comuna de Vilcún por conservación de caminos y acceso de comunidad, y otro en la comuna de Lonquimay por exactamente lo mismo, conservación de caminos de acceso a comunidades. Se menciona en ambos ilícitos que su representado habría actuado de manera concertada con otro coimputado, con don Jaime Silva Poblete, quien era inspector fiscal. **¿Y cuál era este concierto de voluntades? Supuestamente, de que supuestamente el señor Jaime Silva visaría estados de pago por avances de obra, a pesar de que estos avances no serían reales y eso provocaría obviamente pérdidas al erario nacional.** ¿Por qué? Porque se autorizaban estos pagos por obras no realizadas. Eso es a grandes rasgos la acusación, pero eso no es correcto. Respecto del primero de los contratos de la comuna de Vilcún, también aquí se ha hecho omisión a que dichas obras, dicho contrato fue fueron recepcionadas de manera definitiva y aprobadas, no por el señor Jaime Silva, por una comisión compuesta por distintos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, una comisión que aprobó el término de las obras las aprobó de manera satisfactoria. Inclusive, posterior a eso, meses después, es que incluso le liberan las boletas de garantía a su representado, producto que las obras fueron realizadas y fueron realizadas de manera correcta. Eso claramente aquí no se ha mencionado. Y tampoco se menciona que fue una comisión compuesta por distintos funcionarios del Ministerio de Obras Públicas que aprobaron la recepción de estas obras. Eso claramente da cuenta de que las obras sí se ejecutaron, de que sí se realizaron, se realizaron de manera correcta y por



eso es por lo que se aprueban y se liberan incluso las boletas de garantía respecto de su representado.

Respecto de los segundo contrato, el de la comuna de Lonquimay, su señoría, también probaremos en este caso que efectivamente las obras se realizaron. Aquí sí debo decir que no de manera completa, por eso es por lo que no existe una recepción de obra por parte de ningún tipo de comisión, a diferencia de la de Vilcún, ni tampoco se hicieron devolución de boletas de garantías ni nada de ello, pero sí los estados de pago que fueron visados y pagados a su representado por avances de obra, no por término, por avances de obra, si fueron realizados dichos avances. En ese sentido, si su representado no terminó esa obra, no es que la haya abandonado de manera unilateral de un día para otro, como se indica en la acusación fiscal. Muy por el contrario, si él dejó esas obras, fue por una cuestión específica, que fue que él desde mediados del año 2016 estaba esperando justamente una aprobación de una prórroga en el plazo de justamente la ejecución de estas obras. Y se hace mención en la acusación y dentro de la prueba que en este caso incluso va a rendir el Ministerio Público, de que habría existido dicha aprobación y prórroga en junio del 2016. Pero claro, la resolución es de esa fecha, pero en realidad su aprobación y su tramitación fue en diciembre del 2016, época en la cual su representado se hizo imposible aceptar esa prórroga porque ya venía fecha de plazo cumplido. Es decir, si lo hubiese aceptado, ya hubiese estado en ese momento la obra, en este caso, fuera de plazo y hubiese tenido que pagar una multa, en este caso de carácter millonaria, por lo cual no pudo aceptar dicha prórroga ya fuera de plazo, por lo cual es que no pudo continuar realizando los trabajos. Es decir, existió una situación en particular, no fue que él decidió de un momento a otro retirarse de ahí y no seguir trabajando. Y en particular, con lo que se le acusa respecto del avance de las obras, también se demostrará que éstas como tal existieron, existieron y por eso se visaron y se pagaron como tal lo que correspondía a esos avances. En ese sentido, entendemos que respecto de estos dos puntos en particular no será posible poder demostrar esta supuesta defraudación al fisco por parte del ministerio público, la querellante.

Pero aquí hay otra cuestión relevante, que también tiene que ver con una cuestión más bien de derecho, que ya fue tocado en el alegato de apertura, en este caso por el ministerio público y por el querellante que dice relación justamente con que el ilícito penal que se le imputa a su representado es aquel del artículo **239 del Código Penal**, ello en relación, y lo dice la misma acusación, con el artículo 260, artículo 260 que justamente nos entrega el concepto de funcionario público. ¿Y por qué esto es relevante? Porque su representado jamás fue, ni ha sido, ni es, ni será **funcionario público**, jamás ha tenido algún tipo de contratación que lo pueda designar como tal. Y en ese sentido, entendemos que claramente en virtud justamente de las últimas tendencias jurisprudenciales que ya son no un avance, sino que se han mantenido en el tiempo por parte de nuestros tribunales superiores de justicia,



entendemos que claramente aquí no existe la comunicabilidad necesaria en este caso para poder entender que se pueda sancionar a su representado por un delito, delito en este caso que es un delito especial impropio que requiere necesariamente el hecho o el hecho de que quien lo cometa como tal tenga las características de ser funcionario público. En este sentido, estamos hablando, como dije anteriormente, de un delito especial impropio, por lo cual en ese sentido aquí claramente la especialidad de ejercer un cargo o tener un cargo de funcionario público no es posible comunicársela a los demás partícipes, como sería el caso de su representado supuestamente partícipe a este ilícito, sin perjuicio de que nosotros indicamos que no existen los delitos como tal. Y en ese sentido, es que claramente no es posible imputarle a su representado este ilícito por lo anteriormente mencionado, su representado, don Jorge Inostroza es un extraneus en este ilícito en particular, claramente él no tiene la calidad de funcionario público, así como lo dije anteriormente, ya nuestra Corte Suprema en distintos fallos desde hace varios años ha establecido esta tendencia, decir de una comunicabilidad limitada y que en este caso en particular, en los delitos especiales impropios no es posible establecerla como tal. Por lo cual, es que claramente también existe este conflicto o problema por parte de lo que es la acusación del Ministerio Público y la adhesión por parte en este caso también del Consejo de Defensa del Estado, que no es posible soslayar y que es necesario que el tribunal desde ya, desde este alegato de apertura, conozca como tal. Por eso antecedentes, que, respecto de ambas acusaciones, tanto de lo que dice relación con la de servicio impuesto interno por los supuestos ilícitos del artículo 97 número cuatro, así como también por la supuesta defraudación al fisco, el artículo 239 del Código Procesal Penal, como defensa vamos a solicitar desde ya la absolución de su representado respecto de ambas acusaciones.

QUINTO: Alegatos de clausura. Acusación 1.

Que, el **Ministerio Público**, Concluida la producción de prueba rendida en este juicio oral, su señoría, estimamos que se ha logrado establecer en el estándar establecido en el Código Procesal Penal que en base justamente a la prueba rendida en juicio, prueba de cargo, se logra establecer la existencia tanto de los ilícitos como de la participación punible que le cabe al imputado señor Inostroza, respecto de ambos hechos, esto es, de los delitos tributarios que se dirigen en su contra y también respecto de los delitos de fraude al fisco. **Paso para efectos de orden a hacerme cargo primero de las circunstancias de índole tributaria de las infracciones al código tributario.** Hacer presente, señoría, que aquí la imputación se dirige respecto de **dos líneas**. La primera dice relación con **aumento de crédito fiscal**. En la práctica, la regulación corresponde al artículo 97, número cuatro, inciso segundo del código tributario, que indica que los contribuyentes afectos al impuesto a las ventas y servicios u otros impuestos sujetos a retención o recargo y la conducta es que realicen



maliciosamente cualquier maniobra tendiente a aumentar el verdadero monto de los créditos o imputaciones que tengan derecho a hacer valer. De aquí, fluyen una serie de circunstancias que son relevantes. La primera en relación con la conducta es el mero hecho de efectuar maliciosamente maniobras que efectúen o generen en el servicio impuesto interno la imposibilidad de determinar cuál es el verdadero monto de los impuestos. Y esto es lo que ocurrió en la especie con el caso del aumento de crédito fiscal IVA, que en la práctica opera, como sabemos, en cuanto a que cada contribuyente por las compras que efectúa en el mes calendario paga IVA y ese es un IVA que se reconoce por parte del servicio Impuesto interno como un crédito fiscal a su favor.

Por tanto, cuando termina el ejercicio mensual es que ese es un crédito fiscal que se debe declarar para los efectos de poder determinar cuál es el monto que realmente se debe pagar, producto de que se compensa con el débito fiscal. Entonces, lo que hace el imputado en este caso es que, en cuanto contribuyente, durante el curso de los meses de **mayo, junio, julio, agosto 2015, enero, marzo y septiembre de 2016, efectúa declaraciones en los formularios número 29 de Declaración y Pago del Impuesto IVA por montos de crédito fiscal que son superiores a los que realmente correspondía.** Como declara en su favor montos superiores, eso lo habilita, en la práctica, tener un pago menor al que realmente correspondía. Los montos, en algunos meses son particularmente relevantes. Por ejemplo, mayo 2015, más de \$12 millones. Julio 2015, \$7300000. Agosto 2015, \$5100000, marzo 2016 \$10598000. Aquí voy a resaltar estos montos que no se trata en nuestro concepto de una situación que pueda entenderse o interpretarse como un mero error o una negligencia. Estamos hablando que los montos son tan significativos que en el periodo lo que se logra determinar y así se estableció en base incluso a un peritaje contable, es una suma total de \$37.228.912. Acá viene el segundo énfasis, es que lo que establece el tipo penal es que la conducta se atribuye al contribuyente. ¿Y por qué? Porque es una circunstancia relevante que, en la práctica, producto de las actividades comerciales ordinarias, el contribuyente se asesora por profesionales o también por personal de apoyo que realiza o incide también en este tipo de declaraciones u operaciones de índole tributaria. La norma en cuestión establece justamente que es el contribuyente y por tanto es la primera persona obligada a efectuar o tiene el deber, un deber especial para los efectos de poder corroborar que se trata de una declaración que se ajusta a la realidad de los hechos. El tipo penal en cuestión es un tipo penal que no se trata de un tipo de dominio del hecho y por tanto sería erróneo interpretarlo desde el punto de vista de una conducta meramente natural, observarla de forma externa como la persona que en la realidad de los hechos despliega algún tipo de conducta para hacer la declaración. En este caso sabemos que quien materializó la declaración, según lo indicó en su propio relato, fue el contador. No obstante, este se trata **de un delito de infracción de un deber y es justamente este deber de veracidad que pesa sobre el contribuyente el que permite dirigir la**



responsabilidad en su contra. Inclusive su señoría, si es que no se comparte este parecer, igualmente hay otros elementos que igualmente darían cuenta de que la imputación se puede dirigir en contra del contribuyente, señor Inostroza. Así, por ejemplo, respecto de la documental número 56 que se rindió y que corresponde al oficio 254, se indica por parte del servicio de Impuestos Internos ha realizado todos los trámites y presentaciones ante este servicio su representante legal, esto cuando se le formula la consulta respecto de la empresa VIALMIX. Por tanto, esa es una primera cuestión que también se complementa con otras de índole legal, como por ejemplo el artículo 99 del Código Tributario que indica que respecto de las personas jurídicas son obligados los gerentes, administradores o quienes hagan las veces de éstos y los socios también están obligados a ese respecto. En este caso en particular, también en base a el cúmulo de antecedentes producidos, se logra establecer que el señor Inostroza, así por ejemplo se indica en el informe de recopilación de antecedentes, así también lo manifiesta la fiscalizadora del servicio impuestos internos, era ni más ni menos que el representante legal, el administrador y la persona que estaba mandatada ante el servicio impuestos internos para justamente realizar este tipo de actividades. Además, en la práctica, el hecho de que el contribuyente esté obligado es justamente la situación que también ocurre respecto del segundo tipo penal en cuestión, respecto de estos ilícitos de índole tributaria, y que es la imputación que se dirige y se asila en el artículo 97, número cuatro, inciso primero, esto es, la subdeclaración o la disminución en la declaración del débito fiscal. Y acá lo que se indica expresamente por el tipo penal es que se sanciona a quien efectúe declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda. También volviendo al caso de marras, ocurre que lo que pasó en la especie es que el imputado, por cada una de las ventas que realizó en el periodo respectivo de los ejercicios que están destacados en el auto de apertura, efectuó actividades que dan cuenta de operaciones comerciales por las que él, además de recibir un valor neto de compra, recibió IVA y ese IVA debía ser enterado a las arcas fiscales. Lo que ocurre es que lo que hace el imputado para esos efectos es que él declara menos ventas que las que realmente ocurrieron y, por tanto, él declara en la práctica menos IVA que el que realmente recibió también por esas ventas. Así las cosas, y también haciendo el mismo ejercicio que en el caso anterior, hay meses donde la situación es particularmente relevante y así también se destaca en el Informe Contable de la perito doña Carolina Díaz. Por ejemplo, para el mes de febrero 2015, la diferencia entre lo realmente vendido con lo declarado es de más de \$20.800.000. Para el caso de junio 2015, lo declarado versus lo efectivamente realizado es más de 28 millones; diciembre 2015 más de 18 millones; marzo 2016 más de \$19 millones. Lo que hace que, en la práctica, por este concepto, por esta dinámica delictiva, el contribuyente no haya enterado a las arcas fiscales más de \$96 millones. El mismo ejercicio. ¿Es razonable que esto se haya verificado producto de un error o de una negligencia? Y aquí



entendemos que la respuesta claramente es no. Producto de la reiteración, producto de los elevados montos y entendiendo justamente la dinámica comercial que se mantenía por parte del imputado, donde él incidía directamente en este tipo de operaciones.

En relación con la actividad del contador, que eventualmente también puede ser objeto de alegaciones o cuestionamiento por parte de la contraria, hacer presente, que hay una regulación también específica, en este caso el artículo **100 del Código Tributario**, que establece para el caso de un contador la responsabilidad que le cabe en el caso de incurrir en algún tipo de sanciones a este respecto y por tanto, la responsabilidad de uno es directamente, es más bien directa en base a esa fuente legal versus la que se regula respecto, como se ha dicho, del contribuyente y que es la que está establecida en el artículo **97, número cuatro**, y que se debe también conjugar con lo ya dicho respecto del artículo **99**, que **entiende para este caso que el contribuyente persona jurídica es aquel que está representado por el gerente**, administrador o quien haga las veces de esto. En ese sentido, es que entendiendo de esa forma los tipos penales en cuestión, creemos que desde el minuto en que se efectúan estas declaraciones maliciosamente falsas o cualquier tipo de maniobra como la que también efectuó el imputado para evitar que se calcule de manera el impuesto que se debía calcular de forma real, ya se configura el ilícito en cuestión. Si se examina el tipo penal, **no se exige ningún tipo de resultado que se verifique producto de esa conducta y por tanto estamos hablando en la especie de delito de mera actividad**. Siendo así, entendemos que el delito ya se encuentra consumado desde el momento en que se efectúa esta declaración de parte del contribuyente y las actividades posteriores que éste haya podido realizar son más bien actividades que dicen relación con la posibilidad, por ejemplo, de reparar con celo el mal causado o de generar algún tipo de atenuación o aminorante de su responsabilidad, pero en ningún caso de extinguir la responsabilidad penal que ya se encuentra incluso constatada.

En base a esas consideraciones, su señoría, estimamos que respecto de estos ilícitos es que se verifica la imputación en los términos que está establecido en el auto de apertura y, por tanto, insistimos en que se dicte un veredicto condenatorio respecto de este hecho con las sanciones que también se detallan pormenorizadamente en el acápite respectivo del auto de apertura.

Por el **Querellante, Servicio de Impuestos Internos**, Lo primero, lo dijimos en nuestro alegato de apertura, ambos delitos tributarios del 97 cuatro inciso primero y segundo. La figura del 97 cuatro inciso primero es la figura de evasión genérica y la del 97 cuatro es una figura agravada de evasión tributaria. En el primer caso, estamos frente a que se **ha acreditado la subdeclaración de débitos fiscales y que se encuadra en la hipótesis de artículo 97 cuatro inciso primero, que es la presentación de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a un menor tributo que deba**



enterarse en actas fiscales o también cabe la hipótesis de burlar el impuesto. Y también, dada la prueba pericial, testimonial y documental, se ha acreditado el segundo delito tributario, **que es el aumento en el caso de los contribuyentes del IVA. Recordemos que la empresa constructora VIALMIX Limitada es una empresa que está afectada al IVA.** De hecho, su mandante y destinatario de sus servicios, precisamente es el fisco de Chile. Y ahí quiero relevar que precisamente a quien defrauda la contribuyente VIALMIX limitada es el fisco de Chile, que a su vez le paga por las obras públicas que ejecuta. Entonces, tenemos un aumento indebido del crédito fiscal efectuada por esta contribuyente, que es contribuyente del IVA, y que se realiza en función a los débitos fiscales que tiene que enterar en arcas fiscales. Y esto porque el IVA graba el mayor valor que se incorpora a un bien en cada una de las etapas de comercialización y en este caso, en la prestación de servicio. Se encuentra acreditado el perjuicio fiscal producido por el accionar de la contribuyente Vialmix. Porque tanto la Fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos, lo cual es corroborado por el informe de recopilación de antecedentes b la fiscalizadora ya jubilada, doña María Esther Alvear, establece que se produjo con el accionar en ambas hipótesis, en ambas conductas, se produjo un perjuicio fiscal, lo cual es corroborado por doña Carolina Díaz. En la pericia, en la declaración de la perito, ella establece que existe una subdeclaración de débitos fiscales que produjo un perjuicio fiscal de \$96.116.576, que coincide exactamente con el perjuicio fiscal establecido en el informe de recopilación de antecedentes, como la declaración de la fiscalizadora, doña María Esther Alvear, coinciden en que el perjuicio fiscal por subdeclaraciones de débitos fiscales son 96.116.576. **Donde existe una pequeña diferencia, es en el aumento de créditos fiscales sin respaldo documentario, en que la perito establece que son 37.228.912 y el IRA y la fiscalizadora establecen que el aumento de créditos fiscales también son 37 millones, pero aquí son 104093, lo cual obedece a que en el período de marzo 2016, en razón de una nota de crédito, la perito de la CR, doña Carolina Díaz, digamos, coloca, computa ese débito fiscal en forma negativa, lo que no es efectuado por la fiscalizadora.**

Esa prevención en cuanto a esa pequeña discrepancia de poco más de \$100.000 en función del perjuicio fiscal. Dicho eso, en ambos casos estamos frente, en la redacción de los tipos penales, estamos frente a delitos de **peligro o de mera actividad**. De hecho, el único delito de resultado que está en el catálogo del artículo 97 del Código Tributario es el artículo 97 cuatro, inciso tercero, **que sanciona que asegurando una operación tributaria obtiene devoluciones indebidas de impuestos**. Pero en este caso, está acreditado el perjuicio fiscal. Y solamente a título ilustrativo, hay un reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco en el rol tributario y aduanero **6- 2023, de fecha 25 de marzo del año 2024**, número quinto, que lo referido registro electrónico. Ahora, en el caso que no ocupa, son registros en papel. Ahora del año 2017 18, son todos registros



electrónicos, los libros de compraventa, lo que permite una mejor fiscalización. Los registros electrónicos de compra del denunciado y las declaraciones mensuales, formulario 29 que han sido acompañados, acreditan además que en el presente caso concurrió el perjuicio fiscal, **por lo que aun cuando se estime que estamos frente a una infracción de peligro, igualmente se concretó el tipo penal en el sentido de que se llevaron a cabo maniobras maliciosas, teniendo aumentar el verdadero monto de los créditos o imputaciones que el contribuyente tenía derecho a hacer valer en relación con las cantidades que debía pagar.** Pero, si hubiera alguna discrepancia, como la enunció, digamos, la señaló nuestra contraria, la defensa, en relación a que no estamos frente a delito de peligro porque la multa se establece en función del perjuicio fiscal, lo cierto es que esto, digamos, no sería tal, porque precisamente el artículo 111 del Código Tributario, cuando regula dos atenuantes especiales que favorecen a los encausados por delitos tributarios, **que dice que en los procesos criminales generados por infracción a las normas tributarias, la circunstancia de que el hecho punible no haya acarreado perjuicio al interés fiscal se establece como circunstancia atenuante.** En este caso, está acreditado plenamente el perjuicio fiscal, reitero, tanto por la declaración de la testigo María Esther Alveal y su informe de recopilación de antecedentes, como por la declaración del Perito con bastante años de experiencia, doña Carolina Díaz. Dicho eso, señoría, nos vamos a centrar en la participación y el dolo del acusado. ¿Solamente a título ilustrativa, señoría, dónde define el legislador el concepto contribuyente? Fíjese que lo define en el **artículo ocho, número cinco del Código Tributario, que señala que son contribuyentes, o sea, se define como contribuyente a las personas naturales, jurídicas o los administradores y tenedores de bienes ajenos afectados por impuestos.** Por su parte, señoría, el **artículo 21 establece** en nuestro sistema tributario el sistema de la autodeclaración, es decir, es responsabilidad del contribuyente de declarar su impuesto. El artículo 21 del Código Tributario, y el Servicio de Impuesto Interno no puede prescindir de estas declaraciones, sino solamente cuando sean no fidedignas, es decir, no dignas de fe. Entonces, a raíz de eso, señoría, el Servicio Impuesto Interno realiza miles de auditorías a nivel país y me atrevería a decir cientos, digamos, en la Araucanía. Y lo cierto es que los contribuyentes que el Servicio Impuesto Interno se querella porque existen una serie de criterios de selectividad, pero lo cierto es que estamos frente a un delito tributario que fue objeto de querella por los montos involucrados. En cuanto a quién responde por las personas jurídicas, esto precisamente lo regula el legislador en el artículo 99 del Código Tributario, que señala que por las personas jurídicas responden, en su caso, o se aplicarán y tratando su persona jurídica, las sanciones corporales y los apremios, porque evidentemente no se puede aplicar una sanción corporal, salvo la disolución en ciertas circunstancias especiales. **Tratándose de persona jurídica, las sanciones corporales se aplicarán a los gerentes, administradores o a quienes hagan las veces de**



éstos y a los socios a quienes corresponda dicho cumplimiento. Si recordamos el testimonio del propio acusado, señor Moscoso, la empresa constructora Vialmix fue comprada, fue adquirida por el acusado porque él tenía problemas para figurar como propietario de otra empresa que presta servicio ante el MOP de otra empresa constructora y sólo podía figurar como mandatario. Él lo declara, lo refrenda al entrevistar a su hermano y cuñado, que son los socios, con una participación de un 75% y 25 % ellos son kinesiólogos. Pero lo cierto, que ellos lo refrendan tanto el propio acusado como el sub el subprefecto PDI de Investigaciones, señor Moscoso, en cuanto a que ellos no tienen conocimiento de participación en la Constitución, perdón, en la adquisición de la empresa constructora Vialmix. Él siempre se presentó al servicio de Impuestos Internos y refrenda también que él es administrador de la empresa, su propio contador, don Óscar Andrade, él dice, bueno, que él tenía el control de la empresa, la administración realizaba todas las operaciones. El acusado, él dice que solamente tiene el control y la administración financiera y que lo contable lo ve el contador. Pero lo cierto es, que, al ser, digamos, contra interrogado, perdón, al ser interrogado el contador, señor Oscar Andrade, él la verdad es que no recuerda nada, pero al final tiene una memoria selectiva porque, lo único que reconoce en relación con el aumento indebido del crédito fiscal, porque acá no hay factura falsa, que de hecho no es un elemento del tipo penal, si uno analiza la figura del 97 cuatro inciso segundo, no supone para su materialización el registro de declaración de factura falsa. Pero en este caso, cuando se le pregunta qué pasó, bueno, esos créditos fiscales tienen que estar respaldados por factura y él en el fondo construye las declaraciones en el formulario 29 a través de la información que le entregan. En relación, después de ser requerido varias veces por quien habla para que explique por qué se produce esta subdeclaración de débitos fiscales en relación con lo registrado en el libro de compraventa, él señala después de muchas preguntas que es una inconsistencia.

En relación con la subdeclaración de débitos fiscales, también dice desconocerlo, pero lo cierto es, que la única posibilidad de excluir su responsabilidad en este caso es alegar ignorancia y todos sabemos que nadie puede alegar ignorancia a la ley. Pero fíjese que el derecho tributario, porque todos concordamos que son materia a lo mejor técnica especializada, prevé esta misma situación y establece como atenuante e incluso como eximente de responsabilidad penal el artículo 110 del Código Tributario y establece que el contribuyente que por su escasa ilustración o de escasos recursos pecuniarios, en el fondo incurre en errores de derecho. Entonces, el legislador se coloca en esta hipótesis, pero lo cierto es que el acusado no podría alegar que está en estos dos pará infractor de escasos recursos pecuniarios o por su insuficiente ilustración. Estamos hablando de un empresario, un empresario que tiene dos empresas, que tiene varios años en el rubro, no una persona que es iletrada o de escasa educación. Él mismo ha señalado que es un laboratorista en obras viales.



Además, estamos viendo los ingresos que ha tenido, los ingresos que ha tenido durante todo este tiempo, los estados de pago, o sea, tiene ingresos importantes. Y reitero, la empresa siempre la manejó él.

¿Quién recibe el beneficio económico de la empresa? Es precisamente el dueño en los hechos, y él lo reconoce al inicio su declaración, señoría, en el audio, el acusado dice en realidad no tienen mayor participación, son kinesiólogos y yo manejé la empresa y utilicé a mi cuñada, perdón, a mi hermano, a mi hermana y mi cuñado en el fondo para figurar en ellos, pero en los hechos yo controlaba la empresa.

Pero lo cierto es que objetivamente el que se benefició de esta rebaja, de este ahorro tributario por no pagar los impuestos, porque lo grave, y por eso la penalidad del 97 cuatro inciso segundo es la única junto al inciso 97 cuatro inciso tercero, que tiene penalidad de crimen. Y aquí, es un Iva que él no le pertenece, porque le pertenece al fisco de Chile. Y curiosamente, y no lo voy a decir en términos coloquiales, él está defraudando al mismo fisco, señoría, que le paga por sus obras públicas.

Y última consideración, señoría, el artículo 162, inciso quinto se hace cargo del cobro civil, porque aquí la defensa en todo caso lo consideró muy correcto, señala que él tuvo la intención de pagar, celebró convenios de pago, pero aquí estamos frente, en el primer caso pagó dos cuotas y en el segundo paso, en el segundo caso, pagó sólo una cuota. Y aquí estamos frente a convenios de pago que no se refieren solo a los hechos en materia de acusación, sino también a otras deudas fiscales. Recordemos que la misma fiscalizadora y el mismo acusado decían que él tenía con esta suerte de mensualmente reunir los recursos, iba postergando el pago del IVA y tenía que concurrir al servicio para que le autorizaran folio de factura y así poder seguir operando. Hacemos la prevención que esta deuda que ha hecho mención la defensa de la compañera, estos convenios de pago, no se circunscribe exclusivamente a los hechos materia de acusación. Y solamente para efecto ilustrativo, señoría, debo decir que en un certificado que sacó esta semana de Tesorería General de la República, la deuda neta actual vía VIALMIX limitada son 34.800.917 y la deuda total con reajuste de intereses son \$1111131498. O sea, son actos posteriores lo que pudieran considerarse para efecto de la aplicación de la pena. Pero sí tener desde ya presente que el pago del impuesto, sin perjuicio que pudiera considerarse otra atenuante general del Código Penal como reparación con celo el mal causado, para efectos tributarios, el mismo 111 del Código Tributario establece que tiene que ser un pago total de los intereses, reajustes para que sea considerado como atenuante. El artículo 111 bis establece para efectos de la aplicación de la multa que el contribuyente haya pagado, preestablece ciertos parámetros.

Por la defensa de Inostroza Cerda:

Respecto al delito tributario, efectivamente, como también lo ha mencionado tanto la parte querellante como el Servicio Impuestos Internos, se le imputan



dos delitos a su representado. El primero del 97 número cuatro, inciso primero y 97 inciso número cuatro, inciso segundo. El primero dice relación con un periodo, que serían cuatro meses del año 2015, 2 meses del año 2016. El segundo delito, tres meses del año 2015, 3 meses del año 2017, 16. Nosotros también desde un comienzo indicamos que no compartimos dicha postura y de hecho establecimos que no es un delito de mera actividad. Y en ese caso, entendemos que se confunde tal vez lo que es la evasión fiscal con lo que es la defraudación fiscal. En este caso se está hablando de delitos de supuesta defraudación fiscal, de hecho, que ha acreditado eso con lo que es la acusación del Ministerio Público, donde habla de defraudación derechamente, y también por parte del servicio Impuestos Internos, quien también el día de hoy en su alegato de clausura habla de una defraudación al fisco de Chile. No son delitos de mera actividad, no por el hecho de presentar algún tipo de documento, como se ha hecho mención anteriormente, se configuraría per se el delito. Requiere otros elementos como tal. Y en ese sentido, su señoría, entendemos que el primero de ellos es, como lo dije anteriormente, acreditar una defraudación fiscal. ¿Qué es la defraudación fiscal? Puedo citar al profesor Maurice Lau en su tratado de política fiscal, que establece que la defraudación fiscal es el conjunto de maniobras que los contribuyentes adoptan para lograr una minoración de los impuestos que deben satisfacer, en este caso, al Estado o al fisco. En ese sentido, entendemos que en primer término no se logra acreditar respecto a estos delitos tributarios en particular, cuál sería el monto exacto de la defraudación fiscal a la que supuestamente habría provocado su representado, siendo a nuestro juicio, nuestro entender, un elemento efectivamente de este tipo penal o de estos tipos penales, como los queramos llamar, si los dividimos en uno u otro. En ese sentido, es necesario tener una certeza del monto en particular que habría provocado su representado como defraudación al fisco de Chile en este caso. Y en ese sentido, entendemos que esta certeza de poder determinar exactamente el monto no se logra por lo menos con la prueba rendida en ese sentido. ¿Por qué no se logra? Efectivamente, la funcionaria, ya obviamente retirada, jubilada del servicio que prestó declaración, así como la perito que también prestó declaración en estos autos, establecen unos montos, unos montos que sí tienen una pequeña diferencia entre lo que es la acusación de la fiscalía y el servicio puesto interno, pero que también el querellante especificó por qué se producía esa pequeñísima diferencia, claramente eso tampoco se condice con el resto de la prueba rendida. Por ejemplo, el testigo Rodrigo Moscoso habla de cerca de \$175 millones. De hecho, la misma perito, al momento de prestar declaración, habla de un perjuicio fiscal total de \$145 millones. Pero al momento de sumar los montos que dicen relación con lo que es la acusación, tanto del fisco como el Servicio Impuesto Interno, nos encontramos con montos menores. Y en ese sentido, su Señoría, estos montos que son cercanos a los 133 millones, haciendo las sumas correspondientes en su momento, no se condicen obviamente con lo expuesto por la perito, por la por



la exfuncionaria, si la queremos llamar así, el Servicio Impuestos Internos y también por los otros testigos que han declarado, por ejemplo, el señor Moscoso. Es decir, no tenemos certeza en particular respecto de cuál sería el monto en particular por el cual se habría defraudado el fisco de Chile.

En particular, los tipos penales hablan de malicia, entendido en este caso como sinónimo de dolo, de un dolo directo. En ese sentido, desde un comienzo también mencionamos que la malicia en este caso en particular, en estos delitos particulares, tienen una finalidad y que consiste derechamente en privar al fisco de determinadas cantidades o sumas de dinero. En ese sentido, claramente su representado con sus actuaciones propias, que han quedado también acreditado, ha demostrado que él jamás tuvo la intención de quitarle o defraudar al fisco en esas cantidades. Muy por el contrario, tuvo la intención de resarcir esta situación justamente a través de los que denominamos los convenios de pago y luego los demás pagos que también se ha acreditado que él realizó de manera millonaria al erario nacional. ¿Claramente presumirlo de esa manera atentaría en este caso con la forma en que efectivamente se debe determinar lo que es este elemento subjetivo y no existe elemento probatorio alguno que logre determinar la existencia de este supuesto dolo o malicia como lo establece el código tributario?

Por otro lado, el principio de especialidad respecto de los tipos penales por el cual su representado ha sido imputado. De hecho, el Servicio Impuesto Interno, al momento de hacer sus alegatos de clausura, indicó que la figura del inciso primero del número cuatro del artículo 97 sería una figura genérica, pero que la del inciso segundo sería una figura agravada, es decir, tiene obviamente más o sería una figura también como la hemos denominado nosotros de un comienzo, una figura más bien especial. En ese sentido, el pretender encuadrar las conductas de su representado en ambas figuras no es correcto. De hecho, la misma Corte Suprema en el fallo 28.754 del año 2014, pero con una sentencia de julio del 2015 justamente resuelve esta situación e indica que por principio especialidad y en particular también principio non bis in idem, claramente la figura del inciso segundo del número cuatro, el artículo 97, es una figura especial que abarca las hipótesis por las cuales justamente en este caso también se está acusando a su representado, más al ser este un contribuyente, con lo cual solo le sería aplicable la disposición del inciso segundo, lo dice de manera expresa la Corte Suprema y establece que en este caso estamos claramente en presencia de un concurso aparente de leyes penales, por lo cual no es posible la aplicación de los dos ilícitos por los cuales se pretende sancionar a su representado. Dijo 287-542-014 Corte Suprema, sentencia 8 de julio del 2015 en ese sentido, claramente entendemos que esta misma situación que ya ha sido resuelta con tribunales superiores de justicia, se da en este caso en particular, por lo cual también la acusación tanto del Ministerio Público como del Servicio Impuesto Interno, la parte querellante debe hacer, está errada en el sentido de pretender sancionar a su representado por dos ilícitos distintos, siendo que entre



ellos claramente existe esta subsidiariedad uno o de otro, en particular respecto de lo que es el principio especialidad de la figura especial del inciso segundo a la figura genérica del inciso primero.

De hecho, hay otro fallo también es el juzgado del crimen de Puente Alto, el 38729 del año 2010, que acoge también la misma postura.

Otro fallo de la Corte Suprema, el rol 4492 de 2009, una sentencia de diciembre del 2011, que sin perjuicio de que no acoge el recurso como tal porque se alegaba otra cuestión en particular, hace la prevención de que este es un error común y lo dice en su Considerando noveno, me permito leer, dice sin perjuicio lo resuelto, se aclara que a pesar de que el motivo 17 de la sentencia alzada se expresa que no se reunieron los elementos suficientes para configurar el tipo penal del inciso primero del artículo 97, número cuarto del Código Tributario, y luego en el considerando 18 se señala que perseguir la responsabilidad por los delitos sancionados, incisos primero y segundo de este precepto, basándose en los mismos hechos, constituiría una infracción al principio non bis inidem, lo cierto es que no correspondía absolver a los acusados por la infracción del inciso primero de esa norma, sino que calificar el delito como constitutivo, únicamente el delito sancionado 97, número cuatro inciso segundo del tantas veces citado código tributario y aplicar la condena sólo por aquel. Es decir, efectivamente es una situación recurrente que se ataque por ambos incisos, en particular por dos ilícitos distintos, siendo que solamente correspondería hacerlo por uno de ellos. Alegan reiteración en los delitos y en ese sentido se basan en una norma especial que tiene el artículo 112 del Código Tributario. Hablan de reiteración de delitos. ¿Qué es lo que dice esta norma? Del artículo 112, su Señoría, en particular artículo 112, donde determina esto, dice en los casos de reiteración de infracción a las leyes tributarias sancionadas con pena corporal, se aplicará la pena correspondiente a las diversas infracciones estimadas como un solo delito, aumentándola, en su caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 351 del Código Procesal Penal. Entonces, en virtud de esta norma, tanto el Ministerio Público como el Servicio Impuesto Interno dicen en este caso en particular, siendo que los ejercicios por los cuales se está objetando pertenecen al año 2015 y al año 2016, es decir, dos años distintos, existe reiteración en virtud del artículo 112 del Código Tributario. Y eso, es una forma errada de interpretación de la norma, por lo cual esta parte entiende que no hay reiteración. ¿En qué sentido? Y lo quiero expresar con un ejemplo sin perjuicio que también voy a citar jurisprudencia. En ese sentido, si entendiésemos que por el solo hecho de tener partidas o declaraciones objetadas en dos años distintos, estaríamos en presencia de reiteración, podríamos caer bajo el siguiente absurdo interpretación que es contrario a las normas, obviamente, del derecho penal. Si una persona se le objeta una declaración en diciembre del año, por ejemplo, 2023 y otra de enero del 2024, simplemente porque estas dos declaraciones estarían en años calendarios distintos, estaríamos en presencia de reiteración de delitos. En este caso puedo citar jurisprudencia, como dije anteriormente, en este sentido, por



ejemplo, el segundo Juzgado del Crimen de Puente Alto, en la causa rol 38729, dice esa forma de interpretación no es correcta. Lo que requiere la norma, en definitiva, es que estos, lo que dice expresamente el artículo 112, ejercicio comercial anual, cuando exige más de uno, sea más de uno completo. Y, por ejemplo, en este caso rechaza la reiteración. ¿En qué sentido? Dice tenemos objeciones de declaración de impuestos año 2001, 2002, dice hay parcialidades del año 2000, hay parcialidades del año 2000 y solamente tenemos un año completo que es el 2001. Y, por ende, al tener solamente un año completo de los 12 meses, pero solamente una parcialidad del 2000 y del 2002, no se da, no se cumple con lo que exige el artículo 112 del código tributario para entender que hay reiteración. Porque lo que exige el artículo 112 del código tributario es que haya dos años calendarios completos, es decir, dos años completos, no parcialidades de distintos años, para entender que existe reiteración.

Se debe entender por este periodo ejercicio comercial anual en base a la interpretación que nos da el artículo dos, número ocho de la Ley de Impuesto a la Renta, porque dicha normativa establece por año comercial el periodo de 12 meses que termina el 31 de diciembre o 30 de junio. Es decir, ya normativa también de carácter tributario, la Ley de Renta establece que se entiende por un año comercial es un periodo de 12 meses. Por ende, tener parcialidades en un año o parcialidades en el otro no se cumple con el requisito para entender que estemos en presencia de un delito de reiteración en particular, como se pretende realizar por parte del Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos.

Es decir, todo el resultado de esto se logra a través de todo lo que ha aportado o que aportó en su momento su representado al Servicio de Impuesto Interno, tanto en prueba documental como en firma de documento; todo aquí se ha logrado en base al aporte que ha realizado su representado, por lo cual, en el peor de los escenarios entendemos que se hace necesario también configurar a **lo menos una atenuante, que es aquella del 11 número nueve, es decir, cómo su representado efectivamente logra en este caso aportar toda esta información al Servicio Impuestos Internos y colaborar sustancialmente con el esclarecimiento de estos hechos**, que son obviamente de difícil esclarecimiento, justamente por el hecho de que son delitos de carácter tributario, técnicos, numéricos, etc.

Claramente se ha procurado con celo reparar este daño o impedir sus ulteriores o perniciosas consecuencias posteriores. En ese sentido, su señoría, entendemos que también se pudiese configurar **la atenuante del 11 número siete en dicho sentido, sin perjuicio que la del 11 número seis también ha sido reconocida de manera objetiva por lo cual también como defensa solicitamos desde ya también el reconocimiento de dichas otras dos atenuantes.**



SEXTO: Alegatos de clausura. Acusación 2.

Que, el **Ministerio Público**, Pasando al segundo delito, la imputación por fraude al fisco, señoría, es una situación que ya ha sido objeto de otro juicio el contexto o dinámica que se da al interior del Ministerio de Obras Públicas y en ese sentido hay que hacer presente que estamos en el marco de licitaciones públicas que se realizan a través de la plataforma respectiva y que posteriormente, luego de la serie de etapas reguladas específicamente en ese marco, es que se genera la adjudicación. En este caso, lo relevante dice relación especialmente con aquello que ocurre luego de esta adjudicación y donde nos encontramos con un contratista que en el caso en particular se trata de la empresa CSP Limitada, que se adjudica justamente dos contratos, uno en la comuna de **Vilcún el año 2014, a fines de ese año, y otro contrato, el contrato PDI tres 2015, para la comuna de Lonquimay en el año 2015**. En general, las circunstancias que dan cuenta respecto de la comisión de este ilícito las podemos abordar desde dos puntos de vista. **Primero**, un punto de vista que es más bien documental, para efecto de poder asentar aquellas circunstancias que dan cuenta de la contratación o suscripción de los contratos respectivos y aquellas fundamentalmente que están vinculadas con los estados de pago y con la emisión de facturas que respaldan justamente el pago efectivo que se realizó respecto de esas obras que están así declaradas. Por otro lado, ahora ya en la materialidad de los hechos, lo que se debe abordar es si efectivamente esas obras que fueron así pagadas son realmente obras que tienen su correlato en la realidad, que fueron realmente ejecutadas como se indica en los estados de pago, toda vez que el estado de pago no solamente es un documento formal, sino que también es un documento que adjunta o acompaña una serie de elementos para efectos de corroborar o comprobar la real ejecución de estos hechos o de estos contratos. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Cuando hacemos esta bajada al punto de indagar respecto de la real ejecución o no de los contratos, nos encontramos con un **informe de investigación especial de la Contraloría Regional 44 2017**. Ese informe fue debidamente relatado y también se hizo cargo su fiscalizador o la persona que lo confeccionó, el señor **Julio Soto Bruna**, y él es particularmente claro cuando detalla y se hace cargo respecto de los anexos y cuadros que están contenidos en ese informe. Así, él indica que existe un anexo dos para el caso de Vilcún, donde él advierte respecto de obras que no fueron ejecutadas conforme a lo comprometido, pero que lamentablemente no se puede establecer cuál es el real estado de ejecución, cuál es el nivel o el porcentaje real de ejecución, pero que ameritaron grandes desembolsos, sendos desembolsos por parte del estado y que tienen su correlato en estos estados de pago. Así, él indica que por formación y compactación de terraplenes se pagó más de \$32 millones, por formación y compactación de terraplenes por precio convenido más de \$36 millones y por carpeta granular \$82 millones. En el caso de Vilcún, también él se hace cargo de lo que se denominó un cuadro dos, un anexo, y donde él constata obras que una vez que inspecciona el terreno, él las verifica



como efectivamente no ejecutadas, donde hay plena certeza de que no se ejecutó. Y estas delineadores verticales, señales verticales, tubos corrugados de polietileno de 0,6 m, de 0,75 m y de 1 m, barreras metálicas, construcción de canales y reconstrucción de fosos. Y aquí lo relevante, porque se puede establecer por parte del fiscalizador un monto específico al cual asciende el perjuicio o la pérdida fiscal, son \$14.303.474. Por otro lado, acá la salvedad, en el caso de los tubos corrugados de polietileno, él indica y es muy preciso, grados de porcentaje, entonces tampoco es una operación que se haya realizado con algún sesgo o donde se haya intentado perjudicar incluso al contratista. Indica que, en el caso de los tubos corrugados, el de 0,6 m tuvo un nivel de avance de 71 %, 0,75 m un nivel de avance de 67 % y el de 1 m un nivel de avance de 35 %. **Finalmente, él se hace cargo de un cuadro tres asociado al contrato de Lonquimay, donde es categórico en relación con obras no ejecutadas que están asociadas a terraplenes, construcción de fosos y contra fosos y carpeta granular y el mismo ejercicio.** Acá él es preciso y claro en cuanto a la determinación de la pérdida que se generó para el fisco producto de esta situación y la fija en \$16.736.010. Hay que hacer presente que esta es una operación que se realiza y se practica dentro de un periodo de tiempo que es posterior a la ejecución de los contratos, pero entendemos no escapa de un rango temporal que haya impedido efectuar una constatación real de los estados de avance y, por tanto, la apreciación que mantiene el testigo, señor Julio Soto Bruna, es una apreciación que entendemos reviste credibilidad en cuanto a lo constatado.

Por otro lado, también esta es una situación que se analiza y revisa a partir de un sumario administrativo, cuyo Fiscal del Sumario también declara ante su Señoría, señor **Navarrete Añasco**, y él en base a estas mismas consideraciones e incluso habiendo ponderado las situaciones constatadas con los descargos que pudo formular debidamente el Inspector Fiscal, el señor Jaime Silva, igualmente él establece que todas y cada una de las observaciones que él constató, que básicamente son o se condicen con las mismas del **Informe 44-2017**, son o tienen su correlato en la realidad, que tampoco son desvirtuadas por el Inspector Fiscal y por tanto es que éste incluso dirige cargos en su contra por los cuales se propone la remoción o destitución. Y es que todavía existía algún tipo de duda respecto de la ejecución o no de las obras del estado de estas es que también se efectuaron despliegues policiales para efecto de verificar cuál era el real estado de esos caminos, tanto en las comunas de Vilcún como de Lonquimay.

Y así, **don Jorge Cofre Canío, el testigo funcionario de la PDI**, también se hace cargo de esta circunstancia, para lo cual, incluso para los efectos de mantener más rigor técnico en base a las apreciaciones, él es claro en dos aspectos. Él todo lo que yo vi se fijó fotográficamente y también en ese sentido se pudo mantener inmediación por parte del tribunal de su señoría. Y, por otro lado, él indica acá yo reconozco que mi expertiz no corresponde a la de alguna



materia que me permita tener apreciaciones de juicio de fondo respecto de la ejecución de las obras, pero sí mi apreciación respecto de obras en que cualquier persona, independientemente de no tener los conocimientos técnicos, igualmente pudiese haber corroborado lo mismo. Y así, por ejemplo, él da el caso de un puente o una obra de arte, si está o no está construida es una cuestión que era evidente y es lo que él constató no ocurrió en ningún caso en las obligaciones que se debían ejecutar en la comuna de Lonquimay, al menos. Y también él advierte una serie de irregularidades, más bien de falencias de ejecución en el caso de la comuna de VILCÚN. Así las cosas, su señoría, creemos que ya se puede asentar la existencia del delito. ¿En relación con qué? **Con que se efectuaron estado de pago por obras que realmente no se ejecutaron.** Y si esto todavía es una situación que genere duda, incluso escuchamos lamentablemente al inspector fiscal reconocer esa misma circunstancia. **Él dijo que se había autorizado pagos respecto de obras que no se habían ejecutado y que eso estaba dado más bien por la posibilidad de obtener bonos o algún tipo de retribución estatal asociada incluso con impacto a su remuneración.**

Ya para pasar directamente a la participación en este hecho, acá, al igual que en el caso de los delitos tributarios, hay un énfasis. Si uno analiza el reglamento de los contratos de obras públicas regulado en el **decreto con fuerza de ley 75 del año 2004**, puede advertir que esta regulación establece una serie de puntos que son relevantes para poder analizar el caso. Hace una regulación muy precisa respecto de las obligaciones del inspector fiscal, pero también establece como contraparte una serie de obligaciones que se sitúan en una persona clara y específica, el contratista. Y en este caso, si se revisa los contratos suscritos entre la empresa y el MOP, se advierte claramente que la empresa estaba representada en cuanto contratista por el imputado señor Jaime Inostroza. Entonces, ya desde ese punto de vista tenemos un primer elemento que permite dirigir la mirada en cuanto a la participación, en cuanto al imputado, no se hace de forma antojadiza respecto de cualquier persona de la empresa, sino que respecto de su representante legal. Pero esto igualmente requiere una bajada. Sabemos que, por ejemplo, hay en cada contrato una serie de personas de la empresa que tienen también obligaciones relevantes a este respecto. Por ejemplo, un residente de obras, un topógrafo, un laboratorista y otras personas que ejecutan actividades de orden o índole técnica. Pero acá, luego de oír la declaración del propio imputado, inclusive la declaración del testigo de descargo presentado por la defensa del señor Jaime Silva, lo que se advierte es que en la práctica del señor Jorge Inostroza era la persona que efectuó operaciones previas a la ejecución. Cuando se estaba recién elaborando la propuesta de la licitación, es él el que formula la oferta pública y por tanto tenía conocimiento y claridad respecto de cuáles eran todos estos elementos que se debían cumplir por parte de su empresa. Pero también ya una vez que es suscrito y ya en la etapa de ejecución de este convenio, es la persona que tiene incidencia en la materialidad de los



hechos. Así, por ejemplo, el inspector fiscal reconoce, indica que el señor Jorge Inostroza le mostró directamente los tubos que se iban a poner, pero que no se podía todavía instalar. Así también él indica que cada vez que se efectuaba la gestión respecto de los estados de pago, se reunían ambos para los efectos de hacer esta tramitación. Y en este punto quiero precisar la conducta. Cuando el señor **Jaime Silva indica que se reunían cada vez que se debía efectuar un estado de pago, estamos hablando que es el momento donde el señor Jorge Inostroza entregaba toda la documentación que para ese estado de pago acreditaba que efectivamente se había dado real cumplimiento a las obligaciones del periodo. Y es en base a esa situación que el señor Jaime Silva efectuaba el pago. Ya sabemos qué es lo que ocurrió, que en la práctica daba lo mismo el nivel de avance que existiera, igualmente ese estado pago se iba a autorizar.** Y esta era una situación que estaba en conocimiento de ambos. Hay una situación, de índole técnico y es la comunicabilidad. Estamos hablando de un delito de fraude al fisco, donde el señor Jorge Inostroza es un particular y el tipo penal regula la responsabilidad del funcionario público. Y en este punto es relevante la teoría de la unidad. En el título de imputación estamos hablando que como hay una interacción entre un intraneus del delito, el inspector fiscal y el extraneus, el particular contratista, se deben cumplir con una serie de parámetros para los efectos de poder imputar responsabilidad por un mismo título de imputación por un mismo delito, por el mismo fraude. Y esto sería que en el caso ambas personas mantienen una unidad de acción, hay un plan común y especialmente se establece como exigencia la necesidad de que el extraneus, el contratista, conociera la especial calidad del funcionario público intraneus. Todas entendemos requisitos que se condicen con los hechos que han sido debidamente probados en la especie. En base a esta circunstancia, creemos que es absolutamente posible e indispensable para los efectos de poder cubrir el real desvalor de la conducta que se efectuó tanto por el inspector fiscal como por el particular, el que la imputación que se dirigió y por tanto la sanción que se espera para el particular sea la misma que ya se aplicó al funcionario público. Esto es, el delito defrauda al fisco y no una hipótesis de delito común. En base a todas estas consideraciones, sucedería también respecto de este segundo ilícito, solicitamos se dicte veredicto condenatorio y se impongan las penas que están debidamente detalladas en el auto de apertura.

Por el **Querellante, Consejo de Defensa del Estado**, Al inicio de este juicio oral dijimos que el tiempo, como lo señalaba el poeta romano Ovidio, es poderoso porque todo lo destruye. Pero complementábamos diciendo que no todo lo destruye en un mismo momento, en una misma extensión, y que en este caso precisamente eso es lo que había ocurrido y que eran los indicios que iban a ser expuestos ante vuestra señoría los que iban corroborados uno con otro, a permitir establecer la comisión del hecho que se le atribuye al acusado y su



participación en los mismos. No todo desapareció por el solo transcurso del tiempo. Pero, además, señoría, ocurre que, junto con lo anterior, afloró durante este juicio oral de manera clara, prístina, ante vuestra señoría, la mejor explicación a la ocurrencia de estos hechos, a por qué ocurrieron estos hechos. Nos parece que es una explicación que es llamativamente breve, pero muy potente. Por una parte, don Jaime Silva tenía un interés en alcanzar un estímulo económico consistente en el pago de un sueldo mejorado como consecuencia del cumplimiento de una meta por la ejecución de la caja, de una caja especial destinada a la concreción de los proyectos de inversión, de una cartera de inversión. Por otro lado, el acusado aquí presente, el señor Hinostroza, debía ejecutar un contrato o dos contratos, en este caso Vilcún y Lonquimay, pero no tenía los recursos suficientes para aquello. ¿Y por qué digo esto? Porque en lugar de recurrir a los mecanismos establecidos de la ley en el reglamento de los contratos de obra pública, que da la posibilidad de solicitar un anticipo para poder iniciar la ejecución de las obras, aquí se recurrió al mecanismo del pago en verde.

Así se dijo por el propio testigo de la defensa y también lo señaló el fiscalizador o el funcionario encargado de llevar a cabo el sumario administrativo, don **Alejandro Navarrete Añasco**, pago en verde que en la jerga coloquial significa pagar por anticipado, algo que todavía no se ha hecho. ¿Pero qué pasaba? Pedir un anticipo, que es la forma regular normada, supone tener que garantizar ese anticipo. O sea, volvemos a lo mismo, no hay liquidez. Y aquí es donde comienza todo el problema o cúmulo de irregularidades que va a desembocar, en definitiva, en una ejecución imperfecta de todos contratos, tal como lo explicó de manera bastante detallada el representante del Ministerio Público. Mejor explicación la que acabo de señalar. Frente a esta explicación que nos señala la defensa, que el señor Inostroza, que tenía una vasta experiencia como contratista, ya él mismo lo señaló, 10 o 12 contratos con el Ministerio de Obras Públicas, de repente se ve enfrentado a una situación, por decirlo menos, laberíntica, en que todo parece confabularse en su contra para no ejecutar estos contratos. Las comunidades al parecer se rebelan, las comunidades indígenas beneficiarias se rebelan inesperadamente en contra de ejecución de estos contratos. No se le quiere modificar el contrato en la forma que él visualiza que debe hacerlo, porque él lo dice, que los contratos tienen que modificarse según su experiencia, él lo dice. El diseño del contrato de Vilcún estuvo mal diseñado, mal realizado. Sin embargo, durante el periodo de observaciones a la base del contrato no se dijo nada al respecto. Estos contratos tienen una característica bien particular, como se explicó aquí por el Seremi de Obras Públicas, **el señor Roa**, en su oportunidad también el jefe de caminos de la municipalidad de Vilcún, incluyen un proceso de participación ciudadana. Por lo tanto, al momento no solamente la ejecución, sino que en el diseño de la política pública. Y aquí ocurre que estos se formaron mesas, se escuchó la opinión de la gente de cómo debían ser los caminos. Por lo tanto, no es creíble esta idea alternativa



de que las comunidades en la práctica forzaron intempestivamente un cambio en la ejecución del contrato en la forma inicialmente contratada.

En segundo lugar, es relevante el mecanismo a través del cual se produce esta defraudación al fondo fiscal hito contratista. El ITO es la contraparte técnica del fisco, la ejecución de este tipo de contrato. Pero ambas partes deben cumplir obligaciones que funcionan como una suerte de espejo. Está claramente detallado esto en el reglamento de la ley de contratos de obras públicas. La obligación de tener un laboratorista, la obligación de remitir informes mensuales, semanales, nada de esto se cumplió y eso es precisamente lo que permitió al acusado percibir la totalidad de los fondos asignados a estos contratos en verde y con una ejecución en definitiva defectuosa de las obras que se le había encargado. El propio testigo de la defensa condenado señaló que fue un error haber consignado en el fondo falsedades en los anexos de los estados de pago en cuanto al cumplimiento de estas obligaciones de avance físico, de inspección de muestras, de extracción de muestras. Además, estos caminos tenían otra particularidad aparte de la participación ciudadana, que eran caminos no complejos y en los que había baja circulación vehicular. Esto tiene importancia porque dentro de la explicación o parte de la explicación de la defensa a lo que en definitiva ocurrió con la ejecución de las obras es que por el propio uso de estos caminos, la carpeta de rodado habría sufrido una disminución o una merma, lo que no se condice con esta característica o este rasgo que estoy señalando de poca circulación y que además también es descartada con los exámenes, las muestras tomadas tiempo después para corroborar en definitiva cuánto material granulado se había aplicado a la carpeta de rodado, si se habían elaborado los terraplenes, mandados de los contratos, etc.

Se tuvo ocasión de imponerse a través de fotografía, cómo es que en algunos caminos había aplicación de material y abruptamente éste retomaba su condición inicial de camino prácticamente de tierra. ¿Cómo cumplía su deber el coimputado condenado, el inspector técnico de obra? Al Ojo, se le consultó directamente si llevaba algún instrumento, una huincha decía, pero lo cierto es que en último término era su percepción visual la que él señaló haber aplicado para en definitiva llenar estos informes justificativos de los estados de pago, que en definitiva sabemos que no obedecían a la realidad, no se condecían con la realidad. Se le consultó también en el caso del camino de Vilcún, con la recepción, con la concurrencia de la comisión de recepción de las obras, de la recepción única, cuál había sido su rol. Dice que él fue como el dueño de casa, acompañó a los dos integrantes de esta comisión en la inspección de la totalidad de los caminos, pero tampoco se aplicó instrumental para corroborar que estas obras se hubiesen ejecutado de la forma señalada en ese contrato de Programa de Desarrollo Indígena. Por lo tanto, y aquí me quiero detener en otro aspecto de la teoría del caso de la defensa, en cuanto al camino de Vilcún, la Comisión Receptora Única de Obras en definitiva hizo fe de lo que le señaló el condenado



testigo presentado por la defensa, inspector técnico de obra Jaime Silva Poblete, que iba como asesor, que era también el autor de los estados de pago mal pagados, porque se pagaban en base a los anexos que él confeccionaba, en base información que él mismo reconoció que era un error, que no decía relación con la realidad. Esa es la razón por la cual la Comisión Receptora Única de Obra aprueba esta obra. Hizo fe de lo que señaló el señor Silva Poblete.

Se dijo acá que eran los papeles, los papeles, pero en definitiva esos son los papeles a los que el señor Silva Poblete contribuyó a generar con su falta, digamos, de cumplimiento de su deber funcionario.

Primero, que el señor Silva Inostroza recibió estos pagos. Eso está incluso reconocido por el propio acusado en su relación, nunca ha negado haber recibido estos pagos. **Segundo**, que estas obras o no se ejecutaron o se ejecutaron de manera imperfecta. También consideramos este hecho, este aserto, suficientemente establecido en base a la información proporcionada por el testigo **julio Soto Bruna, la funcionaria de la PDI, Cintia Vargas, el ya mencionado funcionario de Contraloría, Alejandro Navarrete Añasco**. Es aquí donde probablemente se pueda generar la mayor controversia, en definitiva, si estos contratos, estas obras se ejecutaron totalmente o no, y en el caso de no haber sido así, por qué. Y ahí me detengo también en otro aspecto de la Teoría del Caso de la Defensa. En el caso de Vilcún, dice se hizo todo. Prueba de ello es que la comisión nos recibió la obra, nos devolvieron las boletas bancarias de garantía. Yo dije que la comisión receptora recibió conforme **en base a la información que le proporcionó el señor Inostroza, perdón, Jaime Silva**, que es absolutamente irregular, al margen de lo dispuesto en el reglamento de los contratos de obra pública. Pero, además, señaló que lo único que había cambiado en relación con lo original del contrato era la construcción o proyección de un camino de alrededor de 2 km como un favor. Este camino, en definitiva, señores, no fue lo único imperfecto, como quedó demostrado en este juicio. Por lo demás, no quedó absolutamente claro, en definitiva, quién solicitó este camino adicional como un favor, si fue el Seremi de Obras Públicas, si fue el ITO. Tampoco quedó claro por qué no se incluyó dentro de la modificación de un contrato qué es lo que corresponde hacer. Más todavía, así como señaló el propio acusado, le costó \$18 millones. Señorita, la declaración del acusado está llena de inconsistencia. Por lo tanto, si bien es cierto es un medio de defensa, no un medio de prueba, es importante tenerlo en cuenta al momento de contrastarlo con el resto de los medios de prueba. En definitiva, no sabemos si él es laboratorista vial desde aquel tiempo en que coincidió con el inspector fiscal en la construcción de la ruta cinco, como el mismo inspector fiscal señaló, si lo Poblete o fue después de que perdió estas empresas como consecuencia de estos procesos penales en que tuvo que hacerse laboratorista vial para poder reordenar o reconstruir su vida, sus actividades. ¿No nos queda claro a quién le pidió hacer este camino, en definitiva, que hacer mis obras públicas o al inspector fiscal? No es una declaración consistente, pero



se explica precisamente por su calidad. Mala ejecución de las obras su señoría tuvo ocasión de ver fotografías en los que los pilares de un puente que se había construido estaban cubiertos con placas de madera, absolutamente distinto a las especificaciones técnicas. Se informó de la aplicación de un cable, cable y medio de acero, cuando las bases técnicas hablaban de a lo menos seis, ausencia de terraplenes. Eso también quedó palmario en la declaración de los testigos. La testigo representante de la comunidad en el caso de Vilcún señalaba que se había producido una demora en el inicio de las obras, lo que es coherente con esta idea de los pagos en verde no hay no hay recurso para iniciar la obra. Y además hacían referencia al poco tiempo que permanecían en las obras, dos semanas, hablaba una cantidad de tiempo, después ya no se escuchaba más la construcción faena. Entonces, señoría, todos estos indicios reúnen suficientemente características de gravedad, precisión y concordancia para poder afirmar que el señor Jaime Silva percibió la totalidad de los estados de pago generados en base a información falsa o incompleta proporcionada por el Inspector técnico de obra, beneficiándose ambos, uno con un mejoramiento de sus ingresos, en el caso del funcionario público, y el señor Inostroza con la posibilidad de ejecutar estas obras, lo que en definitiva no ocurrió en la forma que había sido contratada inicialmente. El tema estrictamente jurídico ya lo planteó el representante del Ministerio Público, es una cuestión de arduo debate en la jurisprudencia de la doctrina, incluso no queda claro si en definitiva el fraude al fisco es un delito propio, impropio. En el caso de Juan Pablo Mañalich, plantea la posibilidad de que sea un delito propio fundado en una infracción de deber. Por lo tanto, la posibilidad o imposibilidad de transferir o comunicar la calidad de funcionario público creemos que no está cerrada y que cumpliéndose las condiciones a las que ha hecho referencia el señor fiscal, es posible dar el mismo tratamiento al particular, al extraneus, máxime todavía si se considera esta convergencia clara de voluntades e de intereses. Se habla también por parte de la defensa en su teoría del caso, de que aquí no había un dolor. La verdad que esta convergencia de voluntades lo desmiente con claridad meridiana. Suerte que el castigo, la sanción a título de fraude al fisco, es una situación absolutamente posible desde nuestro punto de vista. Por estas consideraciones, señorías, solicitamos respetuosamente, en base a la prueba rendida, concluir que la presunción de inocencia ha sido vencida, que la valoración de la prueba, sin exceder los límites de la lógica de la experiencia y los conocimientos de la ciencia, que, al acusado, señor Hinostroza le ha cabido participación en calidad de autor en el delito de fraude al fisco, por lo que corresponde sea condenado éste a las penas solicitadas en nuestra acusación.

Por la defensa de Inostroza Cerda:

Pasando al delito de fraude al fisco, parten de una premisa que es que supuestamente su representado se habría concertado, ocupando esa palabra, con don Jaime Silva, para provocar en este caso un perjuicio de carácter fiscal, en



este caso el delito de fraude al fisco. Obviamente esa expresión que se habrían concertado está basada en el artículo octavo del Código Penal, donde habla justamente de situaciones de este tipo, situaciones de concierto en particular. A nuestro juicio no, no hay ningún antecedente que logre acreditar, aunque sea medianamente, la existencia de este supuesto concierto que hubiese existido entre ellos. No hay ningún antecedente, no hay prueba documental, prueba testimonial, absolutamente nada que logre acreditar un concierto.

Y en ese sentido, su señoría, este concierto como tal que se abriría en este caso, por el cual se acusa a su representado, no es una cuestión que se pueda simplemente intentar dilucidar o presumir, no, tiene que existir antecedentes claros para poder entender la existencia de este concierto previo con la finalidad clara de delinquir, en este caso particular de cometer un fraude al fisco.

En cuanto al primer contrato de Vilcún, se habla de una defraudación de un total de \$193837651 y que esto se habría provocado por los estados de pago que habrían sido aprobados y pagados a su representado. ¿Cómo se llega a esta suma, que es lo que se hace? En primer lugar, se dice que habría pagos por obras no ejecutadas por 14303478. Segundo ítem, multas no cursadas por 27177330. Y en tercer punto, se cuestiona la totalidad de lo pagado por temas de terraplenes y por carpetas de rodado. Es decir, sin perjuicio de que ha quedado claro, incluso ha sido mencionado por el testigo de cargo, en particular el funcionario de Contraloría, que no hay siquiera una determinación por nadie, porque no hay ningún antecedente técnico, científico, topográfico, como lo queramos determinar, que logre decir aquí se pagó tanto, pero en realidad se trabajó determinado porcentaje y la diferencia es tanto. No, aquí en la acusación se acusa por todo, por el total y por eso se llega a esta cifra de 193 millones. No hay nada en ese sentido, no hay nada que pueda establecer ese porcentaje en particular. De hecho, el mismo funcionario de contraloría dice que él habría ordenado o solicitado en su momento vialidad, la realización de un estudio en ese sentido, pero al parecer tampoco nunca se realizó porque no aparece en ninguna parte dicho resultado. De hecho, testigo en este caso que vive en el mismo lugar, por ejemplo, la señora Ellen Vallejo, dice que sí se instalaron. No cuestiona dicha situación en ningún caso el testigo por su caso, Alejandro Navarrete AÑasco, no tiene certeza de eso. Por su parte, el testigo de la PDI, en este caso el señor Cofré, dice que recorrió los caminos, que la gran mayoría de los tubos sí estaban instalados, mencionó un par que efectivamente no se habrían instalado, pero la gran mayoría sí. En ese sentido, señoría, tampoco hay certeza o claridad de si se instalaron o no se instalaron. Nosotros obviamente mantenemos la postura que sí. Y prueba clara y contundente de todo ello es que esta obra se recepcionó y se recepcionó por una comisión de expertos que nada dicen relación con su representado, que relación alguna tienen con él, que fueron al lugar de los hechos designados por las instituciones públicas y esos expertos determinaron que efectivamente las obras estaban realizadas, la recepcionaron



como tal, incluso la califican con una nota sobresaliente, un 6,75, que son las notas del uno al siete que pueden llevar este tipo de trabajos.

En Lonquimay, de hecho, el funcionario de Contraloría dice que él ni siquiera ordenó ningún tipo de estudio porque él vio, simplemente vio que no se habrían realizado los trabajos. Y el punto el siguiente, señoría. Aquí tenemos dos pruebas contundentes que demuestran que eso no es efectivo. Desde un comienzo nosotros dijimos que los tubos, las obras de arte, no habían sido instaladas. Pero eso se reconoció desde un comienzo. El tema de los caminos, el funcionario de contraloría dice aquí nada se hizo. Por ende, el 100 % de lo pagado no corresponde. Lo mismo se menciona en la acusación fiscal a la que adhirió la parte querellante. Pero el punto es cuando se realiza la liquidación de ese contrato, se envía una comisión que liquidó de manera anticipada el contrato. Y esa comisión, a través de la resolución exenta 1882, nos dice del primer estado de pago, en realidad había un 70 % y lo que cuestiona es que se pagó el 100. En el segundo estado de pago, dice, hay un 45,73 %. En el tercer estado de pago, un 35,69 % y en el cuarto estado de pago, un 0 % que correspondía a los tubos. Eso efectivamente así. Pero venir a decir, como lo dice el funcionario de contraloría, que nunca se realizó ningún tipo de trabajo en los caminos por lo que él vio, simplemente por su inspección visual, contraviene expresamente lo que fue la liquidación de ese contrato posterior. Cuando los expertos, en este caso vialidad, van allá y dicen Mira, del Estado pago un había un 70 %, del Estado pagando un 45,73 y del tercero un 35, 69. Pero decir que había un 0, %, como se pretende acusar a su representado y como lo dice el mismo testigo de contraloría, no es efectivo. Se contradice al mismo informe posterior de legalidad de liquidación de ese contrato. Es más, como defensa también acompañamos los estudios de ensayos también del laboratorio de vialidad que dan cuenta de claros avances en el cumplimiento de caminos y terraplenes, a lo menos en esas etapas. Y los caminos que ahí se detallan en esos estudios de ensayo. Por lo cual no es lógico y es contradictoria esta prueba más técnica que no se haya realizado absolutamente ningún tipo de trabajo.

No hay ningún antecedente técnico topográfico que acredite que no se cumplen con las especificaciones técnicas. Pudimos ver que las especificaciones técnicas de cada uno de los trabajos se miden en unidades de metros cúbicos, metros cuadrados, incluso pulgada, por ejemplo, el tema del puente.

De hecho, su señoría, el funcionario de la PDI, que no era una persona experta en el área, él mismo lo dijo, indica que al fiscal de esa época que lo acompañó, él mismo le dijo que era necesario realizar eso, pero no se hizo. Es decir, hasta el funcionario de la PDI se dio cuenta que era necesario porque él tampoco lo podía determinar. De hecho, pudimos ver que él solamente medía con una huincha 2 piedras que colocaba para sujetar la huincha y ese era su estudio que realizaba en el camino. Pero no hay ningún antecedente que logre acreditar efectivamente una defraudación fiscal como se acusa por no realización de los trabajos o en una forma desmejorada como se pretende establecer.



Porque también se le cuestiona el hecho de que no se hayan cursado multas, no solamente el hecho que no se hayan hecho trabajo, que obviamente eso era parte de lo que él realizaba, pero que no se hayan cursado multas es lógico que se le pretenda objetar el hecho de que no se hayan cursado multa porque o no se hicieron trabajo o están realizados de manera eficiente.

Él había comprado los tubos que establecían las bases primitivas del contrato, que eran estos tubos de hormigón, tubos de hormigón que posteriormente se le solicitó cambiar por las cuestiones climáticas propias tal vez de la zona, por todo, en este caso de PVC, ahora se dice, pero se pagaron el 100 % esas obras. También se especificó por parte también del testigo, en este caso de la defensa, que efectivamente eso fue así, no lo negamos, pero había un motivo para eso, se pagaron de manera adelantada porque los tubos de hormigón ya habían sido comprados y porque se estaba también, ah, porque los tubos de PVC también habían sido comprados y porque se estaba a la espera de esta resolución que autorizase justamente estos cambios, porque obviamente mientras no existiese la resolución no podían instalarse los otros tubos, porque era necesario tener certeza de eso, pero que se pagaron en su momento porque sabían que se iba a hacer, estaba todo perfecto y establecido para eso. ¿El punto es por qué no se hizo? Y ahí también lo acreditamos a través de la prueba que rendimos el día de hoy. Hay una resolución de junio del 2016. El problema, y también lo mencionó su representado desde un comienzo, es que esa resolución fue autorizada, aprobada en diciembre del 2016, seis meses después, y la misma resolución al momento de establecer plazos, indicaba que el plazo máximo para realizar estas obras extras o este aumento de obras, como lo queramos llamar, era hasta noviembre del 2016, es decir, cuando se dicta la resolución ya tenía un mes de que estaba vencida. Es decir, si su representado aceptó eso, ya como él mismo lo dijo, estaba aceptando de que no había cumplido a tiempo y que le iban a cobrar unas multas millonarias.

Cuando su representado cuando recibe esta resolución el 28 de diciembre del 2016, a final de año, justo antes de fiestas de final de año, él tenía un plazo de 30 días, porque lo establece de manera expresa el artículo 90 en relación al artículo 94 del decreto, en este caso 75 del Ministerio de Obras Viales, del Ministerio de Obras Públicas, que él tenía un plazo de 30 días para efectos de poder protocolizar ese contrato, esa nueva extensión de obras, este nuevo aumento de plazo y dentro de ese plazo, 30 días, protocolizarlo y obviamente aceptarlo como tal y poder trabajar y cumplir con esas obras. Durante ese período 30 días, lo que buscó su representado era obviamente que se modificaran las fechas para poder cumplir y poder instalar los tubos que estaban comprados, que estaban allá en el lugar, pero que todavía no estaban instalados. ¿Y qué pasó? Sin esperar siquiera ese plazo de 30 días que tenía su representado para protocolizar esto y para poder tomar la decisión si van a realizar la obra, se le liquida el contrato el 17 de enero del 2017, también es aprobada, fue acompañada incluso por el Ministerio Público. Es decir, sin haber siquiera



esperado los 30 días, a él se le liquida el contrato de manera anticipada y ahí ya se hace imposible que él pudiese cumplir con la instalación de los tubos, porque ya su contrato había sido liquidado, inclusive sin respetar los plazos de 30 días de protocolización que él tenía para aceptar o no este aumento de obra y puede realizarlas como tal, sin perjuicio de lo que ya hemos dicho, que venía con plazo vencido o plazo cumplido. Y justamente producto de esa liquidación es que luego vialidad va al lugar, porque liquidó el contrato, a poder establecer y analizar los avances. Ahora, y se percata de que esto tres primeros estados de pago si había avances, no como se pretende decir que nada se hizo. Había avances 70 %, 7075-4045 después un 36 % avances había, trabajos había. Por ende, no es posible es objeto supuestamente la inexistencia de cualquier tipo de trabajo en la comuna de Lonquimay, de hecho, el mismo funcionario de la PDI cuando va a Lonquimay realiza estas mediciones en el camino, porque existe el camino como tal, tal vez tenga deficiencia o no, no lo sabemos porque no hay prueba alguna en ese sentido, pero el camino estaba como tal y él logra realizar las mediciones de esto que él mismo dejó ahí escrito en la pizarra, de esto de estos coronamientos, me parece que ocupa la expresión, pero logra realizar mediciones porque el camino como tal existía y existían avances, él mismo dijo, habían algunos lugares, pequeños porcentajes donde no habían tal vez carpeta de rodadura, no había trabajo, pero eran porcentajes mínimos, pero los trabajos en sí estaban realizados.

Es decir, no se logra acreditar a nuestro juicio efectivamente los hechos de la acusación por los cuales ha sido acusado su representado y que efectivamente existe una defraudación fiscal, cuando ni siquiera hay certeza de montos, de porcentaje de trabajos, de calidad de trabajos, etc. No hay prueba alguna en ese sentido y entendemos que no se logra derribar la presunción de inocencia de su representado en virtud de lo que estipula justamente las normas de derecho penal.

El tema de la comunicabilidad. Ha quedado acreditado que su representado no fue, no es funcionario público en virtud del artículo 260 del Código Penal, no lo es el artículo 239 por el cual se ha imputado su representado. El tipo penal del artículo 239 parte de la premisa de ser necesaria dicha calidad, tener la calidad de funcionario público y aquí es donde se habla si es posible o no la comunicabilidad de dicha condición a un tercero, en este caso representado, que sabemos que no es funcionario público. Ahora, a nuestro juicio, claramente, y así lo ha establecido también nuestra jurisprudencia en los últimos tiempos, ya sin perjuicio que esto venía hace muchos años de nuestros tribunales superiores de justicia, que claramente estamos en presencia particular del artículo 239 de un delito especial impropio. ¿Qué quiere decir eso? Que sólo la puede cometer un sujeto calificado, que en este caso corresponde a un funcionario público, obviamente, condición que no cumple mi representante. Y en ese sentido, su Señoría, entendemos que la posibilidad de comunicación no se da. La única posibilidad que subsistiría, y lo dice la misma jurisprudencia que voy a citar,



sería castigar a este tercero por una figura genérica, por ejemplo, estafa o defraudación, pero en ningún caso por el delito especial impropio del artículo 239, que exige una calificación especial. Nuestra Excelentísima Corte Suprema. Puedo citar el rol 59856, 59856 del año 2022, con un fallo de mayo del 2023, así también un fallo también de mayo del 2023, el rol 122925 del 2022. 122925 del 2022, que establece en su Señoría la imposibilidad de, es decir, establece la incomunicabilidad en este tipo de delitos de fraude al fisco cuando son delitos de carácter impropio. Pero como el Ministerio Público en estos casos no acusó por una figura genérica, lo único que queda es la absolución y acoge los recursos, en este sentido, recursos de nulidad en los dos casos que ya le he citado anteriormente, dos casos de un sinfín de sentencias que hay ya en el último tiempo.

Solicita derechamente de este caso de fraude al fisco la absolución absoluta de su representado de los hechos por los cuales se le ha acusado, tanto hecho un como hecho dos, por lo ya mencionado anteriormente.

RÉPLICAS:

FISCAL: La primera consideración es tener en cuenta que las figuras que se imputan corresponden a aquellas de evasión tributaria del artículo 97, número cuatro del Código Tributario. Y en ese sentido, efectivamente, hay circunstancias que son de orden objetivo en el tipo penal. Y acá siguiendo, por ejemplo, la doctrina, en este caso el texto Derecho penal económico chileno, tomo tres, volumen un, Delitos tributarios, del autor Ignacio Ananías Zaror, quien indica que hay consenso en la doctrina que en relación con los elementos objetivos, para efectos de la concurrencia de los elementos típicos, se debe al menos verificar las circunstancias **la presentación de una declaración**, que la declaración segundo presentada sea incompleta o falsa y tercero, que la declaración presentada **pueda inducir a un funcionario del servicio impuesto interno a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda u ocasionar la autoliquidación de un impuesto inferior al que corresponda**. Eso desde el punto de vista de los elementos objetivos. Entendemos que esos son elementos que concurren en la especie. Ahora bien, respecto de la faz subjetiva del tipo penal, se indica también que la expresión maliciosa vendría a dar cuenta del dolo directo que debe verificarse en el autor. Y en ese sentido,, creemos que desde ese punto de vista también estas son circunstancias que se verifican, toda vez que hay una serie de elementos indiciarios que permiten concluir esas circunstancias, como por ejemplo, la forma en que se pudo advertir directamente por parte del tribunal en la declaración del testigo, el contador del imputado y en, por ejemplo, la especial circunstancia de los montos que fueron objeto de aumentos o subdeclaraciones de impuesto, los cuales dan cuenta de montos elevados y relevantes de dinero que obviamente pudieron ser advertidos por parte del representante del contribuyente, que por tratarse de una persona jurídica, por aplicación del artículo **99 del código tributario**, responde



justamente el **socio administrador o representante legal**, que incluso en el caso en cuestión, además se refuerza por el hecho de que el imputado correspondía al **mandatario ante el servicio de impuestos internos que registraba la sociedad Vialmix**. Para finalizar con este punto, hacer presente que hay una circunstancia que se debate también en la doctrina respecto de la forma en que se debe entender este tipo de delitos de evasión tributaria, si es que se requiere aplicar la figura más próxima en cuanto a delitos comunes y asociarlo más bien a una estructura de estafa, o si eventualmente estos serían delitos que por ser especiales, entonces se debe únicamente atender a la estructura típica que se establece en el propio artículo en cuestión. Así las cosas, creemos que debe ser o debe llevarse a cabo una interpretación que justamente cuenta de este segundo punto, esto es, que son delitos más bien que se verifican producto de la aportación de información o declaraciones falsas y por tanto no se requiere más elementos para efectos de poder verificar la comisión o no del delito. De ser así, entonces, si no se aplica una estructura similar al de estafa, entonces tampoco requeriríamos, por ejemplo, la verificación de un perjuicio y por tanto el delito no sería un delito de resultado, sino que sería un delito de mera actividad.

En relación con los delitos imputados por fraude al fisco, y aquí haciéndome cargo del especial llamamiento del tribunal para los efectos de hacernos cargo respecto de una eventual recalificación de los hechos a un delito de obtención fraudulenta de prestaciones fiscales del artículo 470, numeral octavo del Código Penal, hacer presente su Señoría, que claramente es una circunstancia más que plausible. Existe un amplio debate jurisprudencial y doctrinario respecto a este punto, y para ello también hay que asentarlo más bien en aspectos que son más bien de análisis de los tipos penales en cuestión. Lo primero es que la mayoría de la doctrina y jurisprudencia ha entendido que el delito de fraude al fisco corresponde a un delito especial, pero que es un delito especial impropio. Por tanto, es que se genera la posibilidad, por tanto, de indagar en el evento de que no se puede aplicar a un particular la figura calificada de aquellas figuras que están reguladas como delitos comunes en el ordenamiento jurídico penal, y por tanto ahí se abre la puerta para los efectos de poder dirigir la imputación del extraño en el delito por delitos como por ejemplo de estafa al fisco o justamente el del artículo 470, numeral octavo. ¿Cuál es la cuestión? Y ocurre justamente la hipótesis que compleja se da en aquellos casos donde la comisión del delito es mediante una intervención múltiple, donde concurre tanto un funcionario público, 1 particular, un intraneus, 1 extraneus. Y acá entonces lo que se debe corroborar es justamente el análisis más bien de participación y de intervención delictiva. Como sabemos, la intervención delictiva requiere al menos dos elementos la convergencia de voluntades y por otro lado lo accesorio. En cuanto a la convergencia, entendemos que con los elementos que se virtieron en el curso de este juicio, es posible afirmar de forma fehaciente que existía una convergencia de voluntades entre el inspector fiscal y el imputado. Por otro



lado, respecto de la accesoriedad, hay que tener presente que, en este punto, ya acotándolo a la fase de discusión, la accesoriedad también admite una serie de clasificaciones. Esta puede ser una accesoriedad extrema limitada o derechamente afirmar que no existe la posibilidad de accesoriedad. Nosotros creemos que al menos se da un supuesto de accesoriedad limitada, lo que implica que en el evento de que exista un delito como el de fraude al fisco, entonces el particular puede ser imputado y sancionado por el delito común que está asociado a la hipótesis calificada o la del delito especial. En otras palabras, si nos encontramos con un delito de fraude al fisco, obviamente en base a todo este análisis más bien dogmático, es que podemos seguir entonces la conclusión de que se puede imputar a su respecto por un delito común como el del artículo 470 número ocho. Y ahora, si hacemos la bajada ya a este tipo penal, el delito de obtención fraudulenta justamente supone elementos que también se pudieron verificar en la especie, y es que dada la acción del imputado, donde también interviene este funcionario público, el inspector fiscal, es que éste logra obtener estos estados de pago que se pueden asociar en la literalidad del tipo penal en la expresión imputaciones indebidas, y por tanto, desde ese punto de vista, ya desde los elementos del tipo penal del artículo 470 numeral octavo, es posible afirmar entonces que se da la hipótesis en cuestión. Y para finalizar, en relación ahora con los montos los cuales se podría asociar esta imputación indebida de fondos públicos, es que ya tenemos que hacer una bajada directamente a los elementos fácticos y cuáles son las pruebas que se lograron rendir en el juicio. Es innegable que existe una eventual duda o incerteza respecto de algunas de las obras por las especiales condiciones en las que éstas se prestaron o en las que consistían naturalmente, como por ejemplo las capas granulares, pero creemos que hay elementos que dan pie para los efectos de poder afirmar de manera inequívoca algunas que no se realizaron. Y creemos que la forma más objetiva de hacer este análisis dice relación con aquellas que se lograron establecer por parte de la contraloría regional. Para esos efectos de puso ante el tribunal de su señoría un testigo experto, quien además de manejar todo un estándar para los efectos de constatación de los hechos en base a los mecanismos que establece Contraloría regional y la Contraloría General de la República, también era experto en el área específica y que llega a la conclusión de que los montos por los cuales no se ejecutaron obras, pero que sí fueron pagadas, ascendía en el caso en cuestión a 14 y \$16 millones. En base a esos elementos sociales, creemos que ese ya es un punto por el cual se puede desprender claramente cuáles son en definitiva las imputaciones indebidas que obtuvo de forma fraudulenta en imputado. Respecto de las formas de haberlas obtenido, sabemos bien que éstas dicen relación con que se efectuaban respaldos con documentos que se entregaban al inspector fiscal. Esto eran documentos que fehacientemente no daban cuenta de la ejecución real de esas obras y a pesar de lo cual el Inspector Fiscal igualmente aprobaba esos estados de pago y eso permitía la emisión de facturas que también fueron incorporadas



en el curso de la audiencia de juicio y donde consta de manera también inequívoca los montos que efectivamente fueron pagados. En base a esas consideraciones, creemos que en el evento de que no se adopte la posición de entender que existe una comunicabilidad extrema y por tanto el título de imputación es defrauda al fisco, igualmente existen todos estos antecedentes doctrinarios jurisprudenciales para sancionar al imputado por el delito común.

SII: Muy esquemáticamente, la primera aseveración de la defensa es que estamos frente a un delito de fraude. Lo cierto es que ambos delitos son de evasión, es decir, sustraerse al pago de impuestos. Confunde la defensa del delito de fraude en nuestra normativa, que es el 97 cuatro, inciso tercero, que sanciona al que simulando operaciones tributarias obtuviera devoluciones de impuestos. En la evasión, el contribuyente se sustrae del pago de impuestos y en el fraude tributario, que de hecho el único delito del catálogo que es de resultado, se obtienen devoluciones de impuestos.

En segundo lugar, señala la defensa que no se determinó perjuicio fiscal. Lo cierto es que tanto la perito doña Carolina Díaz determina un perjuicio fiscal de 133345488. Por su parte, la ex fiscalizadora de servicio, doña María Esther Albal, determina un perjuicio de \$133220669, ambas con una diferencia \$100000 y que se explicó en su momento. De hecho, sus señorías le consultaron la diferencia era por una nota de crédito que fue en forma contabilizada de manera distinta. Entonces tenemos perjuicio fiscal que coinciden con una diferencia de \$100000 y es un monto cierto. El perjuicio fiscal histórico a noviembre de 2018 son 145.506.496.

En tercer lugar, señoría, y en este mismo punto señala la defensa que señala una cantidad distinta, el funcionario señor moscoso de la PDI, pero lo cierto es que su investigación se refirió exclusivamente a la entrevista tanto de la hermana como del cuñado del acusado. En relación con la participación, el perjuicio fiscal, como he señalado, se estableció y está indubitadamente establecido. Y termino en relación al dolo, señoría, existe mucha doctrina, pero lo cierto es que el dolo en materia tributaria, y así lo reconoce expresamente el profesor Alex van Wessel en su obra los delitos tributarios, profesor y autor nacional y bastante reconocido, señala que son delitos que solamente desde el punto de vista del dolo se pueden determinar en base a elementos indirectos, es decir, en base indicios, porque obviamente no podemos entrar en la psique del hecho, salvo evidentemente una confesión. Y en este caso no tenemos una confesión del contribuyente, pero sí tenemos varios elementos. Estamos frente a un empresario con experiencia, tiene varios años en el rubro, tiene dos empresas. Recordemos que aquí compró la empresa Vialmix Limitada y utilizó a su hermana y a su cuñado, digamos, para que figuraran como socio para explotarla. ¿Quién recibe el beneficio económico de este ahorro tributario? es el acusado, no hay duda de ello. Lo dice su propio contador, existe acá asesoría contable y tributaria. No obstante, la amnesia del señor contador Oscar Andrade, lo cierto



es que él tuvo asesoría tributaria, no podría alegar ignorancia a la ley y si existiera ignorancia, no caen los presupuestos del artículo 110, es decir, para eximirse o atenuar su responsabilidad penal por error de derecho en cuanto a ser de escasos recursos pecuniarios. Estamos hablando un empresario que tiene recursos y además insuficiente ilustración. Él es una persona educada, es un laboratorista en obras civiles, un especialista y por eso estimamos que se ha acreditado suficientemente el dolo. Y termino, señalando de que aquí los indicios y todas las alegaciones, porque me imagino que van a ser en relación con las modificatorias, en relación con lo pagado por el acusado, que es al fisco de Chile, en relación con dos convenios, son \$62.495.971 y eso, digamos, no dice relación con todo el perjuicio punitivo de estos delitos, porque además engloba también otros IVA que el contribuyente debía por otros conceptos.

CDE: Hace suyas todas las razones formuladas por el Ministerio público y voy a complementar con lo siguiente. Primero, respecto de la clausura del colega defensor, una alegación de carácter general es que no se acreditó el concierto porque no se produjo una prueba que generara certeza absoluta. Esta cuestión, señoría, creemos que debe ser desestimada por falta de justificación. De lo que se trata acá es del estándar para la acreditación de los hechos, para decir el umbral que vuestra señoría tiene que superar para dar por establecido los hechos del juicio. Y ocurre que ese, en el código procesal penal, es el de la duda razonable. Es que no está definido en nuestro texto legal, por lo tanto, hay que llenarlo de contenido. Y en la historia de la ley, que tampoco definió esta noción, se dejó constancia que estaba tomado del derecho anglosajón. Y ocurre que, según aparece en el documento el estándar de convicción de la duda razonable en el proceso penal chileno, en particular, la relevancia del voto disidente de los profesores Carnevali y Castillo está en la revista Uses Praxis, n. 17, n. Dos, 2011, página 77 118. Se señala que dentro de las instrucciones que se le debe dar al jurado, que la prueba, más allá de toda razonable, es aquella prueba que lo deja firmemente convencido de la culpabilidad del acusado. Hay pocas cosas en este mundo que nosotros conocemos con absoluta certeza. Y en los casos criminales la ley no requiere pruebas que superen toda posible duda. Por lo tanto, señoría, ese es el contenido que debe dársele al estándar de la duda razonable, que es absolutamente distinto al que pretende hacernos ver la defensa, que en este caso no concurre, que es el de certeza absoluta o matemática. Lo segundo señala que no existen elementos de corroboración. La corroboración es un procedimiento a través del cual se confirma o se apoya una declaración, un argumento o una opinión de manera de darle fuerza. Y eso, desde nuestro punto de vista, existe en este caso. No es que se haya hecho una imputación carente de absoluta evidencia. Se puede discutir en cuanto a su mérito o valor probatorio, pero elementos de corroboración la hay. Tanto es así, señoría, que la calidad de hito del coimputado ya condenado y de contratista es una relación esencial para determinar precisamente la corroboración, porque



ambos sujetos debían realizar acciones paralelas y la omisión dolosa de estas obligaciones paralelas en la ejecución de los respectivos contratos genera los indicios que, corroborados unos con otros, permiten establecer no solamente el hecho del concierto o el dolo, sino que también el perjuicio ocasionado al fisco de Chile a la ejecución de estos contratos. Esos dos puntos, en cuanto a lo general, respecto del contrato. Un particularmente se dijo por la defensa que hubo recepción de obras, pero lo cierto es que la recepción de obras no es una causal eximente de responsabilidad penal especial en esta clase de delito. No por el hecho de que se haya recibido la obra blanquea cualquier posible vicio. Las reglas de prescripción que aplican aquí son las generales en materia penal. Por lo demás, se dijo que esta recepción se generó a partir de la información que el propio hito condenado les proporcionó a los otros dos integrantes de la comisión receptora de estas obras. Por lo tanto, mal podría decirse que se recibieron de manera correcta o regular. Además, si se extraña la existencia de pruebas que demuestran certeza fehaciente, señoría, eso ocurrió precisamente porque los dos coimputados no hicieron lo que tenían que hacer, no realizaron los informes mensuales, quincenales, no cumplieron con las obligaciones de residentes, de laboratorista, todo lo cual permitía precisamente corroborar en terreno de manera técnica, que el aspecto técnico es el que echa de menos la defensa, el cumplimiento correcto del contrato, pero fue porque los propios computados no hicieron, no cumplieron con esa labor de carácter locales técnicos, pero lo que se alcanzó a rescatar constituyen indicios suficientes de corroboración de la tesis, de la teoría del caso de esta parte. En segundo lugar, y ya con esto finalizando, señoría, en cuanto a la recalificación, también hacemos lo señalado por el Ministerio Público y solamente agregar algunas cuestiones que nos parecen importantes respecto del tipo penal del artículo 470, número ocho del Código Penal. Y me quiero detener en un artículo de la profesora Laura Mayer Lux, del año 2009, se titula, Perdón, obtención fraudulenta de prestaciones estatales. Revista de Derecho Valparaíso, número 32, páginas 283 a 325. Ocurre, señoría, que el perjuicio es un elemento del tipo, pero no lo es el monto del perjuicio. El monto del perjuicio, según la estructura del tipo penal, es un elemento que sirve para graduar la pena. Por lo tanto, no puede decirse que haya absolucón, porque no se ha podido estimar fehaciente o técnicamente de manera con certeza absoluta, como pretende la defensa esta circunstancia. Lo segundo, señala esta profesora, que obtener con fraude una prestación estatal, estrictamente hablando, escapa de la voluntad del sujeto activo, escapa de la actividad del sujeto activo, carece de dominio en cuanto a la concesión de la prestación que corresponde a un acto administrativo cuyo reconocimiento y efectividad le son extraños al solicitante de esta. Por obtener debemos entender alcanzar, conseguir, lograr una cosa que se solicita o pretende. Por lo tanto, no puede ser una defensa aceptable el hecho de que se alegue que no se realizó una actividad que estuviera dentro de su dominio, sino que basta con que se acredite que haya obtenido estas prestaciones. Por estas



razones, señoría, abriendo a lo planteado por el Ministerio Público en subsidio, solicitamos que se acoja la recalificación o se admita esta recalificación en los términos que ha sido invitado por vuestra Señoría.

DEFENSA;

Primer caso, me voy a hacer cargo de lo que dice relación con los delitos tributarios. A ver, en ese sentido, su señoría, no voy a reiterar lo ya expuesto, simplemente mencionar lo que hablamos desde un comienzo, la inexistencia de la reiteración de delitos, que es la forma en que se acusó a Su representado, lo que ya mencionamos respecto al concurso aparente de leyes penales y la falta del elemento subjetivo, en particular del dolo directo, la malicia, Su representado. En ese sentido, también voy a reiterar lo ya mencionado respecto del reconocimiento de las **tres atenuantes 11 número seis, ya obviamente que no es discutida, 11 número siete, respecto de haber procurado con celo reparar el mal causado.** Entendemos que se acompañó prueba que da cuenta de dicha situación de manera efectiva y objetiva, sin perjuicio de que el día de hoy el Servicio Impuesto Interno, el Querellante al Servicio Impuesto Interno haya dicho que no son los montos totales. Sí, exactamente, pero sí, efectivamente existe una reparación, un intento de reparación con celo por parte de Su representado en base a sus posibilidades.

En ese sentido, entendemos que también concurre dicha atenuante y asimismo la del **11 número nueve**, que también la mencionamos en su momento, respecto de haber colaborado sustancialmente en esclarecimiento de estos hechos, lo cual se dio desde un comienzo cuando él aporta toda la información al servicio impuesto interno en particular. De hecho, los mismos testigos dieron cuenta de que todos los informes realizados se basaron justamente en los aportes de antecedentes que mi propio representado entregó en su oportunidad, estamos hablando hace ya casi una década atrás, sumado a las declaraciones que él mismo ha prestado en estrado y que han sido oídas por su señoría. Entendemos que esas tres atenuantes se dan.

Ahora bien, respecto de la recalificación. En ese sentido, señoría, nosotros como defensa desde un comienzo, desde nuestros alegatos de apertura, hablamos y mencionamos y pedíamos desde un comienzo la absolución de Su representado. Atendida a la imposibilidad de comunicar en este caso, en la forma que se ha pretendido respecto del delito de fraude al fisco, la calidad de funcionario público Su representado, que claramente no la tiene y por ende pedíamos su absolución. Es decir, no es una cuestión que nosotros como defensa ya hemos planteado al final de este proceso, muy por el contrario, desde un comienzo se planteó y ya también incluso lo habría planteado el Ministerio Público y también el querellante, en este caso Consejo de Defensa del Estado, porque también hablaron de eso en sus alegatos de apertura. **Es decir, ya era una cuestión sabida y conocida en ese sentido, su señoría, si bien el tribunal tiene efectivamente, en virtud del artículo 341, la facultad, en este caso de**



recalificar los hechos y llamar a las partes a debatir, en ese sentido, entendemos, que eso tiene un límite, que ese límite se da en que esta recalificación o este llamado no puede traducirse en una indefensión para la defensa. Efectivamente, el pretender recalificar el delito de fraude al fisco por un delito, en este caso el artículo 470, número ocho, entendemos que, y que obviamente no estaba contenido en la acusación principal u original por parte del Ministerio Público, entendemos que claramente vulnera el derecho, en este caso de la defensa a un debido proceso. Porque la prueba que se rendió en este juicio, claramente, su señoría, se ha rendido y obviamente se ha buscado la misma y se ha analizado la misma en base a un delito particular que era fraude al fisco. En ese sentido, su señoría, el delito de fraude al fisco y el delito, en este caso el artículo 470, número ocho, que es un delito de estafa, si lo podemos analizar de esa manera, tienen elementos completos y absolutamente distintos, partiendo desde el bien jurídico protegido ya distinto, tienen elementos típicos distintos. El fraude en este caso se centra en lo que es el engaño con una finalidad lucrativa, pero la estafa claramente se centra en una secuencia completa de otros elementos engaño, error, disposición, perjuicio, debiendo existir una relación causal entre todo eso. Y esa prueba o esa forma de análisis de prueba y de rendición de esta, no se realizó en su momento, en su oportunidad. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público insistió en este caso con el delito de fraude al fisco. En ese sentido, entendemos que un correcto ejercicio de defensa en cuanto a contradictorio en este caso, respecto en particular de la prueba, y vincularlo ahora a un nuevo delito no previsto claramente en la acusación principal, sin perjuicio que desde un comienzo lo hicimos ver nosotros, vulnera en este caso lo que es el derecho a defensa y a una defensa técnica respecto de Su representado, una vulneración a la garantía de la defensa material. Por lo cual, magistrado, desde ya está defensa se va a oponer a la recalificación en la forma subsidiaria como lo ha requerido en este caso tanto el Ministerio Público como el querellante.

En ese sentido, por los hechos anteriormente expuestos. Y en ese sentido, vamos a reiterar nuestra petición como defensa de absolución. No voy a reiterar lo ya dicho respecto a lo que fraude el fisco, ya lo hemos mencionado de manera lata en lo que fueron nuestros alegatos de apertura, pero sí, tomando en consideración el llamado que hizo este tribunal respecto a la recalificación y la latente posibilidad que eso ocurra, sin perjuicio de nuestra oposición, como ya hemos dicho, oposición que también tiene sustento jurisprudencial, su Señoría. En ese sentido, puedo citar dos fallos muy recientes de nuestra Excelentísima Corte Suprema, el rol **64501 del año 2023** y el rol **154667 del año 2020**, donde justamente también se llama una recalificación se realizó y la defensa, argumentando justamente lo que yo he expuesto el día de hoy, logró anular dichos fallos justamente por lo ya expuesto anteriormente.

Pero bueno, tomando en consideración esta posibilidad de recalificación a la cual nos ha llamado el tribunal, también me tengo que hacer cargo de ciertas



solicitudes. En primer término, también el reconocimiento de determinadas atenuantes en favor de Su representado. Obviamente la del 11 número seis no está en cuestión, no está en discusión, es una cuestión objetiva. Pero también, su señoría, entendemos que también se daría la 11 número nueve, es decir, haber colaborado sustancialmente en esclarecimiento de los hechos. Su representado efectivamente ha prestado declaración respecto de los dos hechos en particular, Vilcún y Lonquimay. Ha dado cuenta efectivamente de cómo se realizaron todas estas obras en particular, incluso desde un comienzo lo que dice relación con Lonquimay, reconociendo la no instalación de unos tubos en particular, pero dando cuenta o explicando la situación del por qué habría ocurrido. Es decir, él ha aclarado eficazmente y frente a este tribunal cómo se dieron estos hechos. Entonces, en ese sentido, entendemos que existe también una colaboración sustancial por parte de Su representado en ese sentido. Pero también tomando en consideración la posibilidad de recalificación a la cual nos ha llamado el tribunal, también tengo que hacer otra solicitud, el cual es el de media prescripción. ¿Por qué los hechos de la acusación? Me quiero centrar ahora en de fraude al fisco. Dice el primero, estados de pagos que se habrían pagado entre febrero, marzo, abril y diciembre del 2015 1/5 estado de pago con devolución de retenciones de mayo del 2016. Y luego, en el segundo hecho, que es el del Lonquimay, estados de pagos realizados en diciembre del 2015, enero, febrero y abril del 2016. El punto, es que en esta causa en particular y tomando en consideración que estaríamos en presencia de un de un simple delito en particular, Su representado fue formalizado el **6 de enero del año 2021** y eso consta en expediente, es decir, su formalización fue el 6 de enero del año 2021. En ese sentido, entendemos que efectivamente habiéndose realizado la formalización después de más de tres, incluso cuatro años, desde que supuestamente habrían ocurrido estos hechos por los cuales se acusa a su representado, que son al haber recibido los dineros por estos estados de pago, entendemos que claramente corresponde la aplicación de la medida de prescripción, porque efectivamente han pasado cerca de cuatro años desde que habrían ocurrido los hechos hasta que Su representado fue formalizado. Y en ese sentido, entendemos que la única forma de que se hubiese interrumpido la prescripción en ese intertanto era con la formalización. Así ya lo estableció también nuestra Excelentísima Corte Suprema hace muy poco tiempo, rol 7921 del año 2024 y también el año 2024, al acoger un recurso de amparo en el rol 56209 del año 2024, donde dice que ni la sola presentación, de formalización, ni una querella tiene la virtud de suspender el plazo de prescripción de la acción penal. El 56209 del 2024, un recurso de amparo donde se textual el fallo cita que ni la sola presentación de la petición de formalización ni la querella criminal tienen la virtud de suspender el plazo de prescripción de la acción penal, ello por no ser considerado por el legislador como un medio expreso para dichos fines y por cierto, una interpretación por analogía que homologue dichas



actuaciones al acto de formalización se encuentra vedado conforme lo dispone el inciso final del artículo quinto del Código Procesal Penal.

En ese sentido habiendo sido formalizado su representado recién en enero del año 2021, claramente también correspondería a la aplicación de la media prescripción. Y eso también respecto a los delitos tributarios, porque con la misma fecha, su Señoría, fue formalizado Su representado, 6 de enero del año 2021, siendo que los delitos en particular también de carácter tributario, en lo que dice relación con la acusación por parte del Servicio Impuesto Externo y del Fisco de Chile, dice que los periodos tributarios habrían sido febrero, marzo, junio, diciembre del 2015 y marzo y octubre del 2016, donde se habrían realizado estas declaraciones. Es decir, también ha transcurrido a lo menos más de cuatro años desde que hubiesen ocurrido los hechos hasta la formalización de Su representado, por lo cual también cabe aplicar la media prescripción en esos casos. En ese sentido, en definitiva, respecto al delito, del delito de carácter tributario, voy a reiterar a lo ya expuesto, reiterando sobre todo lo que dice relación con la falta de reiteración de delito, concurso aparente, la falta de dolo, pidiendo la absolución o en caso contrario que se reconozcan las tres atenuantes ya mencionadas y también la medida de prescripción también ya señalada. Y de lo que dice relación con el delito de fraude al Fisco. También, como lo dije anteriormente, me opondría a lo que es la recalificación por lo ya expuesto, pidiendo derechamente la absolución de Su representado y en caso contrario, Respecto el reconocimiento de las dos atenuantes ya mencionadas y también de la medida de prescripción alegada en este caso y por los hechos que ya he mencionado anteriormente.

SÉPTIMO: Declaración del acusado.

Que el acusado advertido de sus derechos y consecuencias de su decisión, en los términos del artículo 326 del Código Procesal Penal, decidió prestar declaración:

Bueno, tiene 52 años, la mitad de su vida he trabajado con Obras Viales. Es laboratorista desde el año 94 en Obras Viales. Me inicié como trabajador de empleado de empresa, logré más conocimiento y me adjudiqué unos contratos. Hice una empresa, primero que nada, una empresa limitada, CCP Ingeniería Limitada, prestando servicios alrededor del año 2002 más o menos, después de siete años de trabajo continuo. Y presté servicio y me adjudiqué unos contratos cuando recién salió mercado público, en ese tiempo se llamaba Chile Compra, con el ministerio para prestar servicio a distintas obras a disposición de inspectores fiscales, con la intención de revisar lo particular que yo manejaba con resoluciones y con todo el tipo. Al poco andar de ese momento fuimos creciendo económicamente y siempre mi intención fue tratar de entrar al Registro de Obras Públicas, pero ya como contratista, no como prestador de servicios, donde esto está regido por el decreto 75 MOP, donde hay que tener



un montón de requisitos muy especiales, muy específicos, que no solamente se basan con la experiencia con profesionales del área y también con la parte económica. Logramos justito llegar con la parte económica, presentamos nuestra documentación y al año 2011 aproximadamente, nos inscribimos en el registro de contratista. Digo, nos inscribimos mi sociedad en una sociedad limitada. Yo la creé con mi hermana, mi hermana es kinesióloga, pero cuando ya tomé y entré en obras viales, cambiamos de socio y fue mi señora, yo siempre como representante legal de esta empresa. Susana Jimena Inostroza Cerda y después su cónyuge Lorena Quezada Rodríguez. Siempre fue representante legal de la empresa y el que tenía el conocimiento, obviamente, porque la sociedad limitada exige un socio. Entonces por eso la tomé a ella, que era la persona más cercana, de confianza. Y por supuesto, siempre llevé yo la finanza y llevé todo lo que tiene que ver con el tema de los pagos y asociado a los pagos y las responsabilidades que eso significa, por la experiencia que yo tenía, más que nada en lo que es obras.

En ese momento eran hasta \$400 millones, y de ahí para allá no podíamos porque era empresas de obras mayores. Eso significaba otra capacidad económica, otra capacidad técnica. Y bueno, seguimos trabajando como siempre y adjudicando los proyectos donde nosotros hicimos aproximadamente 10,12 proyectos antes de estos dos por los que yo estoy querrellado. Hicimos proyectos en Freire, en Pitrufquén, en Purén, en Melipeuco, en Padres las Casas, en Quepe, relacionados con comunidades indígenas. Siempre relacionado con eso, porque dentro de las obras viales lo más económico son las ripiaduras. Las ripiaduras, la colocación de saneamiento, los pavimentos son muy caros, entonces no nos daba para esa capacidad, no es cierto.

Y tener hacer obras de pavimentación, a pesar de que experiencia técnica la podíamos tener, pero no la acreditábamos todavía. Y bueno, llegamos hasta el año 2014, cuando nos adjudicamos la obra de Vilcún. Para mí una obra más de todas las que estábamos. Aquí quiero hacer un paréntesis. Dentro de las exigencias que nos pide el MOP, es el decreto 75, también nos está dentro del expediente y nos pide también las bases de cada contrato donde indica el proyecto que tenemos que realizar y donde indica las responsabilidades que tenemos y las obligaciones que tenemos ahí. Una de esas obligaciones es arrendar una oficina en la comuna o cerca de nuestra obra, donde en esas dependencias se guardan los letreros provisorios, la maquinaria, donde tenemos administrativamente una persona que recopila la información de terreno y cualquier necesidad que tenga la comunidad con la que estamos trabajando también se atiende en la oficina y esos requerimientos se canalizan a la inspección fiscal para que se vaya modificando este proyecto o vayan atendiendo sus necesidades, porque en definitiva un plan de desarrollo indígena es para ellos, camino para ellos. Por lo tanto, dentro de esas exigencias también nos exigen un equipo técnico, que es un profesional, un residente de obras, un topógrafo, un ambientalista, un laboratorista 1, prevencionista riesgo, ese es el



staff que lo exige permanente. Dentro de las exigencias para poder postular un proyecto, es que la empresa no debe tener Dicom, no debe tener ninguna deuda laboral, por lo tanto, nos piden el certificado laboral y también nos piden el certificado de la tesorería, donde nosotros no podemos tener deuda y si la tenemos tiene que haber un convenio, si no, no podemos participar de obras y también se trancan de cierta manera en los estados de pago. El decreto está tan bien hecho para evitar un montón de situaciones complejas que no sé si en algún momento para atrás sabrán mi vida en ese particular. **En el contrato de Vilcún nosotros tuvimos algunos problemas con las comunidades y también con el proyecto.** Hay algunos proyectos que se hacen y se demoran hartos años hay algunos que las personas que estudian las obras no son tan acuciosas. ¿Por ejemplo, hay sectores donde nos piden una carpeta rodado, una ripiadura, no es cierto? Que debe tener 5 m de ancho, pero el camino tiene 4 m y tenemos cerco y tenemos cerco y nadie puede expropiar. Entonces esas obras, esa diferencia que hay que adecuarla a otras, **se cambian por otras cantidades de obras, se llama eso modificación de obras.** En este caso particular, de lo que yo recuerdo, en ese contrato se hizo un puente, se hicieron alcantarillas, se hicieron terraplenes, se colocaron letreros y hay algunos **lugares donde, como les decía, no cabía, en el espacio que había no cabía ni el foso ni la carpeta rodada, por lo tanto, se hicieron modificaciones, no las recuerdo muy bien,** pero yo sé que se hicieron porque el que está a cargo de la obra es el residente de obra, el que se entiende directamente con el inspector fiscal. Yo estoy atrás de ello y si tengo algún problema, generalmente un problema técnico grave que a mí me incurre en un gasto económico muy grande. Yo tengo que comunicarle al residente para que a través de él le comunique al inspector fiscal. Por lo tanto, esa obra tuvo unas modificaciones. Modificaciones más que nada cambios de lugares, alcantarillas que no se justificaban en un lado, porque son para evacuar las aguas, se justificaban en otros lados y en otros caminos. Y aquí es cuando tuvimos problemas principalmente con algunas comunidades. Una en particular, que es la comunidad de un camino cortito, que nosotros le hicimos un puente, que al final del camino tenía un aserradero. Incluso nosotros prolongamos más de 150 m del camino para que llegaran a esos cerraderos. Pero las comunidades no sé si tienen alguna fijación, porque cuando uno llega a una obra, uno de los requerimientos colocar un letrero grande de obra donde anuncia el monto de inversión y la obra. Y el tremendo letrero dice Ministerio de Obras Públicas, y abajo la esquinita ejecuta empresa constructora, tanto por el monto, tanto con fecha de término y todo el tema. Entonces a las comunidades les da la impresión mucho de que son obras directamente fiscales, que el MOPE el que está pagando. Y en ese tiempo, en 2014, ellos solicitaban muchas cosas, más allá de lo que nos pedían pavimentar el camino, nos pedían hacer obras que no estaban dentro del proyecto contratado para nosotros. Así que se le explicó para eso también hay una reunión de apertura con las comunidades, que se llama reunión de participación ciudadana. Se ejecutó esa reunión, pero por la



experiencia que sobre todo en los planes de desarrollo indígena, terminan mucho en conflicto entre ellos, más que con la empresa o con el Representante del Ministerio, que también están dentro de esas reuniones. En este caso hubo modificaciones de obra que están aprobadas por el Ministerio, y modificaciones que tienen relación con necesidades de los caminos. Como no se puede expropiar, hay que cambiar la alcantarilla de lugar, como no se puede colocar el foso porque no cabe, se cambia de lugar. En este caso se cambiaron de lugar muchas cosas. Y adicionalmente a eso, adicionalmente a eso, y aquí yo creo que se origina este problema, que yo tampoco tengo la certeza, pero yo creo que se origina el problema. Hay muchas comunidades, o una comunidad en particular que quedó fuera de este proyecto, que estaba participando este proyecto, y por encargo del Seremi en ese entonces, Emilio Roa nos solicitó a nosotros que ripiáramos los caminos de esa comunidad. No era mucho, 2 km, 2 km y medio. Y ese proyecto no estaba dentro del proyecto original. Es muy difícil incorporar caminos que no corresponden. Por lo tanto, prácticamente lo vieron como un favor a la empresa. En otras palabras, nosotros fuimos a ripear 2 km, porque el Seremi se lo pidió al inspector fiscal, el inspector fiscal se lo dijo al residente, yo dije ya bueno, entretener problemas con la seguir teniendo problemas con las comunidades, a lo que no, esto ocasionó más problemas, en definitiva, porque tenían rencilla interna. Y es eso que la persona que hace esta denuncia o la querella es la comunidad. Aquí no hay una queja de parte del ministerio ni nadie. La comunidad es la que origina esta primera querella en Vilcún. Por producto de que por qué ellos fueron beneficiados con un material que no era para ellos y que era para esta comunidad que sí había sido beneficiada. Entonces, dentro de esa comunidad había una persona que era topógrafo y él también. Pero las bases a todo esto están en Internet. En ese momento ya estaban las bases de Internet, así que cualquiera podía bajar las bases y ver el proyecto. Pero lo que nunca actualizan es la modificación de obra. Por lo tanto, ellos se quedaron con el proyecto original. Bueno, yo la verdad es que no le di mayor importancia, terminé lo que tenía que terminar, se hicieron las obras que se tienen que ejecutar y estas obras se ejecutaron dentro de los plazos debido y se terminaron. Yo mandé mi carta de término, se finiquitó a la gente, a los profesionales y me quedé a la espera de la comisión de recepción de obras. Por reglamento, toda obra que termina ya sea menor, mayor, se le designa una comisión. Y esta comisión no es el inspector fiscal, está designada por el Seremi, tengo entendido, representante de la Seremía, hay un representante de vialidad que no es el inspector y hay otro representante de otro departamento. La verdad es que yo desconozco. Esa recepción se hizo, se recepcionó y lo que dice el reglamento y lo que hace la recepción de obra es que se revisa cada uno de los elementos que se colocaron alcantarillas, letreros, defensa, carpetas de rodado, se revisan con las modificaciones y con todo lo que la carpeta, digamos que tiene la comisión completa. Esa recepción lleva una nota, una nota de un a siete para la empresa y lleva observaciones. Si ellos encuentran que me falta



alguna obra o que hay algo que no estaba conforme a las especificaciones técnicas o al reglamento, queda en acta y yo tengo un plazo de ejecución que no puede exceder el plazo total de obra. O sea, si yo termino la obra el día 14 y la obra terminaba el 30, me quedan 16 días para terminar esas observaciones. Entonces ese contrato en particular no tuvo observaciones de ningún tipo. La comisión, yo la verdad es que no me acuerdo ni quién está en la comisión, pero ellos deberían de responder antes de mí si es que hubiese algún problema en esa obra, porque ellos recibieron la obra. Y después de eso yo sigo siendo responsable por seis meses más desde el término de esa obra, de acuerdo con el reglamento, para que me devuelvan mis retenciones y mi boleta de garantía. Y todo eso sucedió con el contrato de Vilcun. Me devolvieron mi boleta de garantía y me devolvieron mis retenciones. Por lo tanto, para mí el tema de VILCÚN no es un problema. El problema posiblemente se generó mucho tiempo después. Desconozco quién revisó y cómo se revisaron las obras, pero eso es lo que puedo decir del contrato de VILCÚN. ¿Y el de Lonquimay? El de Lonquimay, bueno, aquí en este contrato en particular, un contrato cordillerano, difícil de hacer, muy bien adjudicado en la fecha, se adjudicó en diciembre del 2015. Por lo tanto, partimos trabajando con muy buen tiempo en el verano, trabajando los terraplenes, las carpetas de rodado, que son la mantención de los caminos. Pero tuvimos un problema muy particular. La comunidad no quiso que se instalaran tubos de hormigón de base plana, tubos que yo había comprado, que estaban en el pozo donde cercano a la obra. Y al instalar la primera alcantarilla, ellos pidieron que no, porque en la zona era donde estábamos trabajando y calma, Batea Mahuida, por decirlo de cierta manera, muy cordillera, no muy cercano a Argentina, una zona muy intensa, nevazón de ciclo hielo, deshielo. Por lo tanto, ellos tenían mala experiencia con los tubos de hormigón, se fracturaban y duraban una temporada. Por lo tanto, ellos solicitaron un cambio de especificación con los tubos. ¿Ellos quiénes se refieren? La comunidad. La comunidad, para entenderle bien, los tubos redondos con base plana. Y querían tubos de plástico. Son negros, unos negros de plástico como corrugado. Corrugado, correcto. Entonces yo me quedé primero que nada con los tubos comprados, los de hormigón, porque yo me enseñé al proyecto. Pero lamentablemente las comunidades tienen la fuerza para uno no dejarlo trabajar o no dejarlo entrar. Entonces uno siempre tiene que estar, digamos, muy llano a absorber sus necesidades. Pero las necesidades no parten de mi punto de vista, parten del punto de vista del fisco, porque esto todo tiene un costo y tiene un tiempo. ¿Por lo tanto, se solicitó al inspector, a través del residente de obra, hacer un cambio de especificación en relación con esto, producto que la comunidad lo solicitaba, se entendió y se programó y me dijeron calcule, calcule cuánto es la diferencia? Y se llevó y se entregó las modificaciones. Debería ser Vialidad el encargado de realizarla en su integridad. Pero aquí, lamentablemente, a todas las empresas y todavía es más rápido que la presentemos uno, porque tenemos la necesidad de seguir



trabajando y apurar. Entonces nosotros presentamos y ellos revisan. Entonces ellos revisaron, encontraron, ok, va su modificación. Nosotros terminamos los caminos, terminamos los terraplenes, terminamos las carpetas de rodado y ya se nos venía el invierno. ¿Perdón, para entenderle bien y evitar la pregunta aclaratoria, terminaron los caminos, los terraplenes con los nuevos tubos corrugados? No, no, no, lo que quedó pendiente fueron los tubos. Los tubos corrugados no se colocaron y ahora le explico por qué. Los tubos corrugados no sé y la comunidad empezó a colocarse nerviosa porque venía el invierno. Por lo tanto, me pide el jefe de contrato, ya no el inspector fiscal, me llama a mí de manera directa, Carlos Bahamonde en ese momento y me mira sabes que necesito que por favor le des indicio a la comunidad que vamos a hacer el cambio. Por lo tanto, compré los tubos a mi costo perdón, no le entendí bien la palabra que usó. Necesito que le des algo a la comunidad. Claro, que le des indicio porque la obra paró porque nosotros terminamos todo lo que era obra. Que le avisa a la comunidad. Claro. Entonces la comunidad necesitaba saber si íbamos a cambiar y ya mucho tiempo quedando eso pendiente. ¿Yo a la espera de la resolución del cambio, porque muchas veces pasa que le piden a la empresa mire, sabe qué? Haga este camino y agréguele terraplén. ¿Listo, perfecto, yo lo hago, le agrego el terraplén, quién me lo paga? No, viene la resolución. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Y nunca salió. Entonces uno tiene que tomar la precaución de esperar la resolución de modificación, que salga la resolución es materializada esa resolución uno la toma y la tiene que protocolizar ante notaría. Tiene que adjuntar una boleta de garantía por la diferencia de plata que hay, si es que positiva y si es que es negativa no es necesario. ¿Y actualizar también las nuevas fechas con el seguro, porque también nos piden un seguro contra terceros, no es cierto? Más la boleta de garantía. Eso está todo dentro del reglamento. Bueno, en este caso yo compré los tubos corrugados y los fuimos a dejar en la casa de la dirigente. ¿Hay fotos de eso dentro de los informes mensuales que tengo entendido? Están dentro del expediente donde están todos los tubos corrugados en la casa de la presidenta de la comunidad. ¿Sabe el nombre esa persona? No lo recuerdo. Una vez estuve con ella, estuvimos con el jefe de contrato, con don Carlos Bahamonde, en una reunión dentro de la casa de ella. Ahí nos invitó a comer unos piñones, a tomar mate y se le dijo que iba a llegar los tubos. Llegaron los tubos a esa obra y como le digo, están las fotos. Bueno, el problema es que se nos vino el invierno 1, invierno bastante crudo, y el camino no tenía saneamiento. Usted comprenderá que un invierno crudo en la cordillera es con nieve, es con metros de nieve en ese sector. Por lo tanto, Vialidad tiene maquinaria para despejar la nieve, la municipalidad tiene maquinaria para despejar la nieve, y nosotros también tendríamos la obligación de despejar la nieve, porque el contrato seguía vigente. Pero cuando hay una nevazón intensa, y nosotros en una paralización de obra, porque estábamos esperando solamente la resolución, obviamente la municipalidad ni nadie le pregunta y va a despejar nieve. Dentro de ese despeje



de nieve, salta el letrero, saltan estacas, se mueven, se tapan los fosos, porque estamos despejando la vida en un camino. Coordine. Entonces bueno, el tema es que salió la resolución. La resolución salió, como decía el abogado por acá, con fecha veintitantos de junio. Venía con esa fecha. Pero la resolución tiene que ser tramitada, y tiene que ser por fiscalía también. Fiscalía interna del ministerio tiene que tramitar esa la fecha de tramitación de esa modificación salió a fines del año 2016, en diciembre, con fecha 28 de diciembre del año 2016. Esa es la fecha con la que salió tramitada. Y venía con un aumento de obra y con un aumento de plazo. Pero lo más extraño, y aquí es donde yo creo que puedo ser el único tal vez, que le ha pasado esta situación, la resolución venía con un plazo vencido. Decía, qué sé yo, no lo recuerdo exactamente, pero está por ahí, 150 días de aumento. Y estábamos en el día 183 cuando salió la resolución. Yo ya tenía 30 días de multa, porque cuando yo no respeto la fecha de término del contrato, el reglamento está obligado a cobrarme una multa. Y la multa es el valor del contrato dividido en 365 por día. O sea, yo pagaba \$1 millón diarios. Por lo tanto, me fui a pedir que me cambiaran esa resolución. Un cambio. Y aquí es donde me encontré con una y yo trabajando a todo esto en Chiloé, porque el año y aquí voy a mencionar el tema de vial milésimo noveno, antes de volver un poquitito, en el año 2014 yo compré una empresa, habíamos ejecutado más de 1500 millones de obras, y compré una empresa que estaba en tercera categoría, que tenía una categoría superior a la que yo tenía. Y esa venía con dos obras adjudicadas. Y la persona que tenía la empresa no quería seguir, entonces me la vendió con maquinaria. Yo la compré, y la compré a nombre de mi hermana y mi cuñado, porque no puede haber dos empresas con el mismo dueño. Es parte del reglamento también, por lo tanto, pero yo sí puedo ser el representante legal de las dos empresas en ese momento yo compré Vial milésimo noveno con la plata que yo había. Su cuñado. Mi cuñado. ¿Nombre? Daniel Martínez Lema. Pero ellos, la verdad que los dos kinesiólogos siempre confiaron y vieron que yo era el que manejaba. Así que en realidad ni siquiera iban a la oficina. O sea, ellos eran papel nomás. Era por cumplir con un tema reglamento. Bueno, volviendo al tema, yo estaba en Chiloé cuando me llega la resolución, porque teníamos por vía al milésimo noveno unos contratos en Chiloé. Y me llega la resolución de lo que viajé a Temuco. Y le pedí al nuevo jefe de contrato, porque en ese periodo cambiaron el jefe de contrato se llamaba Burgo. El apellido no recuerdo, la verdad es que no lo recuerdo, pero podría buscar. Y él me dice que me vaya a ejecutar la obra, que termine la obra de Lonquimay. ¿Yo le digo que no, pues, sabes qué? Mira, lo que pasa es que tú sabes igual que yo, que, si yo voy a ejecutar la obra, cuando me la reciban, más en lo que me voy a demorar en ejecutarla, voy a tener 60 días de multa. Por lo tanto, voy a perder \$60 millones. La modificación tenía que ver con 14 millones. Y tenía que instalar los tubos y hacer los hormigones. ¿Entonces, yo cómo lo iba a gastar? Y para recuperar 14 iba a gastar 60. Entonces le Cámbiame la resolución. ¿Ustedes tienen esa capacidad de cambiar la resolución, de dar



aumento de plazo? Desconozco qué problema pasó en vialidad. Tengo una hipótesis, por supuesto, de lo que pasó, y nunca se me cambió la resolución. ¿Y el día 17? A ver, la resolución sale 28 de diciembre del 2016. Yo tengo 30 días para protocolizar. Si yo hubiese querido hacerla, o sea, terminaría el 28 o el 27 de enero. Me liquidaron el contrato el 17 de enero del 2017, saltándose todo el proceso. ¿17 de enero? 17 de enero. Ahí salió la comisión de liquidación del contrato. O sea, me entregan una resolución mala. Y aparte, esa resolución mala no se apega ni siquiera ellos al reglamento. Y salen a ver obras y a liquidarme un contrato donde después de un invierno bastante crudo, ellos encuentran solamente los tubos que no se hicieron, que no se colocaron, que sí estaban ahí, que desconozco dónde terminaron los tubos, porque yo después me dediqué a otras cosas nomás, porque la obra me la liquidaron. Liquidarme una obra significa que me sacan del registro de contratista. Liquidar una obra significa que yo tengo un castigo de cinco años para poder volver a inscribirme dentro del registro contratista. Entonces es muy grave que me liquide una obra. Liquidarme una obra significa que no me van a devolver las boletas de garantía, liquidarme una obra significa que no me van a devolver seguro, que las primas de los seguros me van a subir porque me los van a cobrar, y que las boletas de garantía que eran en efectivo en ese momento y que yo las solicitaba a través de crédito en los bancos, las iban a cobrar y yo iba a perder capacidad crediticia en los bancos. Entonces es una afectación muy grande. Antes de pasar al tema tributario de Vial Milésimo Noveno, quiero comentar, magistrado, el año 2015, dentro de la capacidad que teníamos nosotros, económica y de ejecución, nos adjudicamos una compañía de bomberos. ¿Cuál de las dos empresas? CSP. Todavía no pasó abiertamente con CSP. Nos adjudicamos una compañía de bomberos en Púa. Pailahueque, perdón, Pailahueque, donde un vuelco total. Y para mí era un orgullo hacer una edificación, porque siempre he hecho camino y contratamos residentes y gente capacitada para eso. Estaba muy entusiasmado con esa obra y avanzamos muy bien. Esta obra me la entregaron en octubre del 2016, perdón, del 2015, que fue muy cercana a la de hecho me la entregaron primero. Y esa obra se ejecutó súper bien, se ejecutó en los tiempos adecuados, con las condiciones adecuadas y la comunidad y todo el mundo estaba muy contento, cero problemas, no tuve multas, no tuve nada de problemas. ¿Pero aquí hay algo que yo, por mi expertiz, que no era mi expertiz en camino, no es cierto? Que yo no visualicé, pero sí me lo dijo el residente, me dijo oye, la obra termina en junio, tenemos que pintar de manera exterior, interior y tenemos que darle el acabado y tirar algunas pastas. La indicación de los certificados de calidad de las pinturas, que todo esto los inspectores piden los certificados de calidad, piden las guías de despacho de todas las obras tienen que estar en obra y algunas facturas también tienen que estar en obra, porque de esa manera eso aseguran que lo que yo compré no fue robado a ningún otro lado. Entonces ellos miran esos documentos. Entonces el tema técnico de las pinturas y la pasta y de algunas terminaciones, decía que no se podía tirar con humedad. La humedad



tenía que ser, no sé, técnicamente y no me acuerdo, pero ya pongámosle que no puede ser mayor a un 40 % y teníamos 80 % humedad porque era pleno invierno. Sí, yo creo que se va a juntar en algún momento. Mire, le explico lo yo solicité un aumento de obra, por eso el gobierno regional era el responsable de las platas y tenía también un inspector técnico. Ellos me aumentaron el plazo en dos meses. Técnicamente quedó documentado donde ellos me aumentan ese plazo. ¿Entonces yo voy con el inspector fiscal y le Mire, sabe que señor inspector? Me dieron aumento de plazo, así que hágale girar la cosa para que tengamos y terminemos su cuartel de bombero. Entonces me dice te tengo malas noticias. ¿Y por qué? La fiscalía no quiere darte el aumento plazo. ¿Pero por qué? Yo tengo todo mi argumento técnico. No, pues que no. Y parto a hablar con la fiscalía. Aquí es donde viene lo más complicado. Hago mi atención por la ley del lobby y me atienden enseguida. ¿Y me atiende un fiscal y me dice Mira, en definitiva, se acuerda el nombre de él? Sí, Cristian Ríos. ¿Y me dice Cristian Ríos, mira, sabes qué? Siempre vienen a quejarse por lo mismo, de aumentos de plazo, aumentos de esto, esto otro, las empresas hacen lo que quieren. Y me dio un tremendo sermón y me dijo no me de mi parte, no voy a obtener aumento plazo. Yo soy el que mando, yo soy el fiscal que otorga la y ahí quedé. ¿Yo dije pensaba en ese momento qué otro canal iba a ser, qué puerta iba a tocar? Y antes de pararme me a menos que me pagues \$15 millones. Si tú me pagas \$15 millones, yo te doy el aumento a plazo. La verdad lo miré, porque pensé que era una broma, lo miré y me dije nada, me paré y me fui nomás. Me sentí muy complicado en esa situación, muy, muy complicado. Me fui y yo con mis dos papeles técnicos que me daban en aumento de plazo, efectivamente me liquidaron el contrato porque no cumplí con el plazo, porque no alcancé a pintar el cuartel de bomberos, porque faltaron \$10 millones en pintura por cobrar. Me lo liquidaron al tiempo después. Yo no hice denuncia, nada en ese momento, pero la vine a hacer. Cuando saltó a la luz que el fiscal Cristian Ríos le pedía, no solamente a mí, sino a todos los contratistas, le pedía plata para dar aumentos de plazo. Estuve aquí en la fiscalía, por la fiscalía, declarando mi situación. Y era tan sólida que fue uno de los elementos con los que lo condenaron. Uno de los cuatro. Y yo fui el único que no pagué. Y tal vez fui el más perjudicado, porque eso fue en junio del 2016. Se refiere a la reunión con Ríos o agosto, por ahí en esta fecha. En el mismo periodo en que estaba tramitada mi modificación de Lonquimay y que necesariamente tenía que pasar por fiscalía. De hecho, la resolución que está en el expediente tiene el timbre de fiscalía y lo tiene con 22 de diciembre. ¿Qué es lo que hace la fiscalía? Es la que revisa el tema jurídico y la que revisa los plazos. Y si hay algo que está malo, está obligado a rechazarlo. Si esa es la fiscalía, para que ningún documento salga malo, por eso está el abogado ahí. Pero yo soy el único, tal vez en la historia que me sale una resolución con plazo vencido. Entonces, yo no tengo pruebas para decirlo, pero yo estoy seguro de que hay represalias por no haber pagado el tema, siendo que igual me quedé con la boca cerrada, siendo que yo no dije nada y me comí



nuevamente la liquidación del contrato de la compañía bombero. Y me comí, digamos, las multas, y me comí nuevamente la boleta garantía y el seguro. Entonces, el año 2016 por la compañía bombero y se murió mi empresa CSP Ingeniería. Ya eran dos liquidaciones de contrato. Ninguna de las dos fue por culpa mía. Yo no quise no terminar la obra. Aquí dice la fiscalía que yo abandoné las obras de manera no, no las abandoné. Siempre solicité que me cambiaran la resolución. Hasta el día de hoy no hay respuesta de esa resolución. Y hay una liquidación de contrato y es un documento que está pasado por la fiscalía. ¿Entonces me pregunta a mi magistrado qué fue? Yo creo que me perjudicaron de una manera horrible. Pero como yo soy un pescado chico dentro de puro pescado grande, donde yo no tengo ni abogado, porque mi empresa la forjé con mi esfuerzo, y aquí fue donde fue el pecado más grande. Yo tenía que haber tenido gente, un asesor financiero, un asesor judicial. Nunca lo tuve. Ni siquiera tuve un abogado, nunca. ¿Y ahí en qué es lo que siempre creí? En seguir trabajando y en seguir funcionando. Siempre, siempre dije para mí no es difícil el tema del trabajo, horas viales, se gana plata, se puede reinvertir, se le da trabajo a mucha gente, pero también hay dificultades que la aprendí por el camino de la peor manera. Ya entendimos el contexto general que, en su opinión, redundó en que CSP se liquidara. Ahí murió. Y eso es lo que puedo yo decir, magistrado, en relación con los dos contratos que se me acusa aquí. Uno que fue la comunidad la que me denunció, y la otra obviamente fue vialidad, porque yo no terminé el contrato. ¿Tenemos claro a propósito de los plazos, pero ahora qué pasa? Entiendo que, si termina CSP, usted se queda con la otra. Correcto. Afortunadamente había comprado la otra empresa con doble ejecución y tenía una categoría superior. Eso significaba mayor inversión, eso significaba mayor movimiento. Y tenía obras. La compré yo con una obra en Tirúa que se ejecutó y se terminó. Estaba a la mitad esa tenía una obra en San Ramón, aquí en Purén, que la terminamos un doble tratamiento, que es un camino ya consolidado que un camino de pavimento. Muy orgulloso de lo que hicimos. Tuvimos una obra en Valdivia, dos obras en Valdivia, una en Osorno, una en Chiloé. Disculpe que lo interrumpa. Lo que pasa es que a propósito de la imputación del servicio y también de la fiscalía, esto ya no tiene que ver con ejecución de obras. Yo entiendo que a lo mejor las facturas tienen que ver con las mismas, pero aquí lo que nos interesa como tribunal es conocer los procedimientos de declaración y pago del impuesto. Voy a eso magistrado. Yo lo sé. ¿Cuándo compré la empresa no tomé la precaución seguramente de ver muy bien, de estudiar su parte tributaria, no cierto? Y nunca para mí fue un problema. Las facturas en ese momento se timbraban, eran con timbre y todas las facturas que a uno le pasaban eran de papel, eran con triplicado, donde uno le entregaba su como dice la fiscalía, yo nunca falsifiqué una factura. No existe una factura falsificada, no existe ni siquiera una intención de dañar los dineros del IVA. Pero aquí sucede lo siguiente, como le decía al principio y estas obras más rigurosas, cada obra tiene una oficina. ¿Tenía oficina en Valdivia? Tenía



oficina por obra. O sea, si yo tengo dos obras, son dos oficinas las que debo tener. Donde ahí llega toda la gente, se toma el café, hace los informes y donde ahí se guarda documentación. ¿Qué documentación se guarda? Lo que se compra en obra, lo que no se compra. Hay algunas cosas que no se compran directamente en la oficina central, que era acá en Temuco, en calle Manuel Montt, se compraban muchas cosas, tubos, que se yo. Pero hay cosas, aceites para las máquinas, asfaltos que llegaban directamente obras. Y las bases de los contratos piden los certificados de calidad, la guía de despacho y muchas veces los inspectores nos pedían la factura. Entonces muchas de mis facturas estaban distribuidas en las 4 h que teníamos Valdivia, Osorno, Chiloé y Temuco. Con las de Temuco no había problema porque estaban en la oficina central y ahí se viajaba todos los días, pero no se podía hacer lo mismo con Valdivia y Osorno. Me llaman a una fiscalización de parte de Impuestos Internos. ¿Recuerda la fecha? ¿2016? No recuerdo muy bien la fecha, pero tiene que haber sido por ahí por mayo. Por mayo, más o menos por mayo. Y yo tomé todo, como yo llevaba la empresa y el contador tenía todo ordenado, yo tomé todos los archivadores que correspondían a los periodos que me hizo. Ah, porque momento que el servicio impuesto interno. Un día que voy a firmar, me dice usted tiene notificaciones, perdón, que voy a timbrar factura. No le timbramos factura. ¿Y por qué no? Porque no le timbramos, porque usted tiene una citación que no ha venido. Citación que a mí no me llegó. Y no nos llegó ni por correo, ni nos llegó al domicilio que teníamos. Por lo tanto, cuando me pillé con la sorpresa, tomé todos los archivadores correspondiente a los años que pedían y se los llevé a la fiscalizadora. Y ella hizo un inventario, tomó el acta y revisó, no nos revisó, sino lo recibió en esa oportunidad y me autorizó el timbraje factura, que para mí todo esto era normal. Era normal. Ya dije, una fiscalización, no hay problema. Y me acuerdo de que yo esa misma semana, o no sé si la próxima, porque pasaron unos días, me llaman para revisar la documentación. Y en esta documentación tenía dos carpetas la fiscalizadora. Una carpeta con las facturas que ella tenía y otra carpeta con facturas que, según ella, no correspondían al rubro nuestro y donde los montos eran bastante grandes. ¿Me dice por óigame, si usted se dedica al camino, me dice, pavimenta y todo, y por qué tiene madera? ¿Por qué tiene compra por 50 millones en madera? Entonces le Señora, no me acuerdo el nombre, nosotros dentro del camino hay puentes de madera, yo estoy en Chiloé, tráigame algo donde diga que son puentes de madera. Porque la factura indicaba en pulgada. Se lo llevé. Así que sacó de esta carpeta y colocó acá. Y hay algunas facturas que ella no me no me la incorporó. Por ejemplo, yo recuerdo, en realidad puede causar dudas, una aspiradora hipoalergénica que me costó como 300 lucas, por decir detalle. Y muchas otras cosas pequeñas. Me dijo no, estos señores, yo estoy trabajando allá en Chiloé, estoy trabajando en un sector donde no hay pensión, ni siquiera había retén de carabinero, tengo que arrendar una casa, darle comida a la gente, por lo tanto y hay algunas otras facturas que quedaron pendientes, que estaban en obras, que yo no las alcancé



a recuperar. Tenía que ir a obra, revisarla, haber dejado una fotocopia. No recuperé facturas. ¿Y me dice la señora yo le mire señora, sabe que hay facturas que faltan, pero están en obra? Y me no sé, yo tengo que entregar esto lo antes posible. Y ella no me indica que eso es un delito. Primero que nada, la fiscalización no me sabe que estamos en presencia de un delito. Siempre me habló de un problema, de una equivocación. Le dije yo no, yo le traigo la factura ya. ¿Pero me dijo Firmeme esto y me imprime ella en su impresora los formularios 29 y me dice usted representa legal? Sí, firmemela. Y me firmó. Yo no sé, no sé qué intención, no sé si habrá cumplimiento de metas de parte del servicio, desconozco. Pero yo firmé todos los formularios impresos por ella, con las facturas que ella revisó y con algunas que ella dejó pendiente, que yo no tenía idea lo que se me iba a provocar en ese momento, que por tener facturas pendientes iba a arrastrar un impuesto a la renta, porque ya estábamos en un año posterior al año que ya había revisado y que acarreaba multa. Eso no me lo dijo nadie. Me dijeron rectifique. Y, es más, me dice, si pilla algo, me dice tráigalo. Mientras tanto, yo tengo que seguir el ejercicio de timbrar mi factura. Pasó uno o dos meses, yo con esa sensación de que voy a traer mi factura y voy a ordenar este tema. Pero esto pasa, y por desconocimiento de impuesto interno, la tesorería. Y la tesorería me llama y me dice oiga, me dice, usted debe los montos que están indicados aquí. Esto es lo que usted debe. Expliqué oiga, le dije yo no, le dije yo trabajo, no, usted no. Si no hace convenio, no puede timbrar. Mi único proveedor de dinero, yo exclusividad con el Ministerio de Obras Públicas. Yo no trabajé para particulares ni para gallos de fondos. Solamente mis facturas, todas dicen Ministerio de Obras públicas. Si yo no tengo factura, si yo no tengo un convenio hecho, yo no puedo participar en obra, aparezco con una deuda. Por lo tanto, me vi obligado, antes de traer lo que faltaba, de firmar un convenio. ¿Se acuerda por qué monto era el convenio? Como 200 y tantos millones. Pero yo di un pie de 46 millones. Eso fue lo que me pidió la Tesorería. Este monto iba a quedar, no sé, cuotas de \$15 millones, pagable, manejable y recuperable hasta el momento, por lo que yo tenía en obra y por lo que yo podía hacer eso bien. Dije ya me equivoqué, tal vez la embarré. Nos va a servir para ordenarnos. Listo. Puedo pagarlo con la cantidad de obras que me quedan por hacer. Yo firmo un convenio un día martes. Firmo el convenio el martes con el tesorero, con los abogados de la Tesorería. Se firma el convenio. ¿Fecha, se acuerda, aproximada? Los primeros días de junio. Tiene que haber sido del 6 de junio, por ahí. Tiene que haber sido aproximadamente muy cercano. ¿De qué año? Del año 2017. Ya. O 16. A llegar donde no. Sí, que se acuerda nomás. Claro, pero me acuerdo del periodo. ¿Por qué? Porque yo firmo el convenio. Ya. Me dice estamos listos, estamos listos. Bueno, dentro de una de las amenazas que me hicieron, que, si yo no firmaba el convenio, me iban a embargar la factura. Embargar. Entonces yo firmé el convenio, dije voy a asumir la pérdida, veré cómo lo arreglo. Pensé en un abogado en ese momento. Y, es más, voy a Tesorería y les digo Oiga, tengo que facturar \$120 millones el viernes y el



último plazo para que cierre la caja de Valdivia. ¿Tengo algún problema de facturar? No, me dice, no se preocupe. Me dice, si usted firmó el convenio el día lunes o el martes, firmó el convenio y la resolución va a salir el lunes. Yo llevo la factura a Valdivia, me pagan y no me pagan la tesorería, me embargo los 120 y tantos millones de pesos. Habiendo firmado un convenio yo el día lunes o martes, me lo embarga al día seis. Y aquí yo me voy. Pero eso significa no pagar sueldo, significa no pagar proveedores, no pagar nada, porque no hay plata. Plata que se espera para pagar sueldos, pagar imposiciones, para seguir en el rubro. Y voy a hablar con el tesorero directo. ¿Por qué con el abogado? Voy a hablar con el tesorero, que creo que es concejal ahora, Vázquez, don no recuerdo el nombre, pero Vázquez, el apellido. Entonces voy y les pongo la situación. Y me dice no, pues, amigo, me dice, usted la embarró con tirar la factura. ¿Y por qué no? Porque si usted la hubiese tirado el día lunes la resolución. ¿Pero le cuándo vale? ¿Cuándo usted firma, le dije, o cuando sale la resolución? No, pues, cuando sale la resolución. ¿Pero por qué no me avisan? ¿Si yo vine a preguntar cómo pago? ¿Le dije, cómo le pago? ¿La gente, qué hago con la gente? Es un problema. ¿Entonces, dentro de la rabia que yo tenía, lo único que le dije sabe qué? Usted tiene una ventana aquí hacia afuera, hacia la calle. Le el martes o el miércoles los voy a traer todos los de Valdivia con letrado. Y ahí abrió los ojos, cuando yo de alguna manera lo iba a funar con la gente para que se devolvieran las platas y se y se restituyeran esas platas para poder no hubo ninguna posibilidad. Y yo tampoco traje a la gente. Si yo me dedico a trabajar, no me dedico a ese tema. Entonces yo perdí, no perdí, sino yo hice un convenio por \$46 millones y me embargan a la semana menos cuatro días, me embargan \$121 millones. Entonces seguí caminando, seguí trabajando, me endeudé con el banco, me endeudé de la manera personal, entregué todo lo que pude para sacar la obra adelante. Saqué la obra adelante. Ahora, lo más terrible de todo esto, que esos \$121 millones que yo pensé, dije pago la cuota, un la dos, la tres, la cuatro, la cinco, la seis, la siete, y ahí se acaba. Tengo siete meses de gracia para trabajar para mí. Y no fue así. Y me enteré de la peor manera. Después. ¿Qué es lo que hizo la tesorería? Lo tomó y lo puso al fondo ese monto. Entre paréntesis, en alguna parte del código civil, por acá el abogado decía que hay que cuidar los impuestos. Sí, yo estoy de acuerdo con él, pero también hay que cuidar la normativa. Y se dice que una obra, el código civil dice que una obra que es de uso público, una obra pública es inembargable. Mentira, porque yo lo viví. No sé qué requisito hay para que a uno le lleven la factura. Y le lleva la factura con el IVA, magistrado, si yo no perdí la factura. A mí no me devolvieron el IVA de esa factura. A mí me la arrastraron con IVA incluido. O sea, yo pasé un estado pago por \$120 millones y quedé debiendo 30 o 28 millones, no sé cuánto el IVA de esa factura, porque se fue la plata completa. Bueno, seguí trabajando, ya cojo manco con lo más precario que podía ser mi empresa. Ya los montos que involucran una empresa de obra mayor son mayores. El banco ya está por ahí nomás me estaba apoyando. ¿Y en abril



del año 2017, el convenio fue el 2016? En abril del 2017, en Puerto Montt, cuando voy a cobrar mi estado de pago, después de tomar la barcaza y llegar a buscar mi último o no uno de mis estados de pago, ¿me llama el tesorero del ministerio de la República y me sabe qué? Son las una, si usted hubiese llegado las 12, yo le paso el cheque, le dijo, y lo tenía en la mano. Y me estoy obligado, me dijo, a quedarme con este documento. ¿Por qué? Porque la tesorería pidió el embargo de este nuevo documento. ¿Quiero preguntarle ahora, situando, lo hemos escuchado con detención, hemos entendido también todo lo que usted nos ha señalado, pero en lo que se refiere al IVA, a la primera parte de la acusación, los periodos son súper puntuales mayo, junio, julio, agosto del 2015, enero, marzo y septiembre del 2016. ¿Se acuerda usted algo en específico respecto a esos meses y esas declaraciones? Sí, pues yo recuerdo que todas las facturas están, pero estaban en obra y yo no tuve el tiempo, no me dieron el tiempo porque ahí me decían si usted no firma, no timbra, no timbra factura. Entonces yo me fui obligado a timbrar sin poder después rectificar una vez que el proceso estaba completo, ni nadie se iba a echar para atrás, aunque aparecieran las facturas. Lo asumí como una pérdida, pagué mi convenio, me quitaron dos facturas y ahí quedé. Y ahí quedó mi obra, que es lo que hice, magistrado. En mis tarjetas particulares, le metí la mano al bolsillo con la de mi señora, logré pagar las obras que quedaban, o sea, a la gente que quedaba. Y ahí se acabó el contratista. Perdí mi casa. Perdí mis dos casas que tenía. La primera que saqué en Pedro Valdivia, y mi segunda casa, que la estaba pagando, me la liquidó el banco. Yo perdí todo. Yo no me quedé con nada. ¿Por qué? Y sumado a eso, después de un tiempo, me llega el 2019, cuando ya la tesorería no pudo encontrar nada con que pagarse. Y me dicen Son \$70 millones los que queda. ¿Cómo les pago si ustedes me cerraron el negocio? ¿Cómo les pago si yo dependía de mi empresa? ¿Cómo hago el monto? Ni siquiera puedo vender una casa si el banco ya me las había rematado. En el expediente también están mis temas civiles. Ahí está todo. Bien. Señor, hemos escuchado con detención lo que ha señalado.

AL FISCAL: ¿Los socios de esta empresa CSP Limitada, desde esa fecha hasta el curso del año 2015-2016 estaba constituida únicamente por usted y por su señora, no es cierto? Correcto. ¿En relación con la administración de esta empresa, la mantenía directamente usted, no es cierto? Sí, sólo yo mantenía la administración. ¿Y la administración involucraba aspectos de índole financiera, tributaria, contable? Más que nada financiera y técnica, porque en la parte tributable o contable no tengo experiencia. Entonces es en la parte técnica y financiera lleva las cuentas principalmente. ¿En relación con esta empresa, con CSP limitada, quién es el mandatario ante el Servicio Impuesto Interno? Directamente yo, si es que era algo más complejo, el contador que tenía en ese momento, don Cristian Andrade. A ver, las licitaciones públicas, atendiendo a



la sugerencia, perdón, lo que me dice el magistrado, las hacía yo. Y esto es porque en ese periodo ya las licitaciones se publicaban a través de mercado público, por lo tanto, todo el mundo tiene acceso al mercado público. Y 1 por la ubicación geográfica del contrato o por las características de exigencia con el ministerio, uno seleccionaba en qué horas podía participar y en cuáles no eran atractivas. En este caso, esa decisión solamente era mía.

¿Quién determinaba los montos por los cuales iba a hacer ofertas en las respectivas licitaciones? Esos montos los determinaba yo. Y generalmente los determinaba de la siguiente manera esto es como un estudio de mercado, porque todas las licitaciones que se generaban posterior, donde uno perdía o no participaba, uno puede todavía acceder a los precios de todas las empresas. Entonces uno va sacando de esa manera un costo de lo que uno tiene. Y en relación con cómo está el mercado, que muchas veces las licitaciones van por bajo el valor oficial y otras van por muy sobre el valor oficial. Entonces es una estrategia que hay que ver en qué época del año se licita. Entonces, en definitiva, todos esos factores influyen en el precio definitivo con el que uno postula. ¿Parte de esa estrategia implica también considerar los aumentos de obras? ¿No? Cuando uno se gana una licitación, generalmente lo que hace es revisar las bases administrativas. Lo más importante son los valores, el precio oficial, las exigencias que piden las bases. Pero básicamente yo diría que, hasta el día de hoy, la mayoría de los proyectos de vialidad, en este caso son muy antiguos en relación con la licitación. Uno hace un proyecto que lo realiza en el 2010 y lo vienen a licitar en 2021. Entonces hay muchas modificaciones, acceso de gente que parceló su campo, si tenían considerado un acceso, después hay tres, cuatro accesos, hay gente que va quitándole un poco de faja fiscal y va corriendo su cerco. Hay toda una dinámica media compleja. Entonces, cuando uno se encuentra con la entrega de terreno, generalmente hace observaciones, porque en el momento de adjudicación de una propuesta 1, se adjudica, le hacen entrega de terreno y ahí hace observaciones. Si son menores, no hay modificación, si son mayores, si hay modificación. ¿La experiencia se sigue acumulando todavía de forma ininterrumpida, no es cierto? Yo he ejercido como casi de forma interrumpida con el lapso, con el paréntesis, cuando estuve a cargo de mi empresa.

¿considerando que usted también conoce normativa, usted en relación con modificación de contratos, usted sabe que, así como se puede ampliar un contrato, también se puede reducir, no es cierto? Por esto sí.

¿En relación con el control de las obras, quién estaba a cargo del control de las obras que se estaban ejecutando en las diversas obras que usted licitó? ¿Pero control técnico o control financiero? Control en la ejecución. Un control de los avances de las obras. En el tema técnico, por base nos solicitan que cada obra debe tener un residente, un profesional con una cierta cantidad de años de experiencia, dependiendo del tipo de obra. Exigen que haya un topógrafo también con experiencia, un prevencionista de riesgo, un ambientalista, y ellos



son los que toman las decisiones técnicas. Pero, en definitiva, en esa estructura, la cúspide es el residente. El residente obra. Sí. Ese es el que se interrelaciona con el ministerio, con el inspector, con el ministerio, con el contratista y con la comunidad con la que está ejecutando. ¿Qué reportabilidad tenía el residente con usted? La normal, que podría decirse que cada vez que un residente casi funciona de manera autónoma, pero cuando hay algún problema, ellos lo comunican rápidamente, sobre todo si el problema

Partamos por la primera. Vilcún. ¿El residente con qué frecuencia le reportaba usted? Con la frecuencia que encontraba problemas, básicamente. Se reportan las dificultades en realidad, no los aciertos. Para entender bien el avance normal no genera noticias hasta que haya un problema. Correcto. O el estado de pago, que ahí se requiere la factura y se requiere el certificado de la Inspección del Trabajo y otros certificados más que piden. **Por tanto, existía al menos una reportabilidad por cada estado de pago. Por supuesto, sí.** Y, por tanto, en ese punto usted conocía los avances de las obras. **El avance financiero, más que nada, que es lo importante.** ¿Y después, respecto al seguimiento financiero, por cada estado de pago, usted efectuaba algún seguimiento de los montos que se le transferían por parte del Ministerio de Obras Públicas? Sí, pues, los montos eran en ese momento, ahora ya son todos, se transfieren. Había que retirarlos por ventanilla. El cheque se retiraba por ventanilla del segundo piso del Ministerio de Obras Públicas. Igual uno podía dejar un número de cuenta corriente y hay algunas obras que se depositaban de manera directa y otras que uno se cansaba en cheque. Estuvimos justo en ese periodo de transición cuando se cambió de papel a más automatizado, por decirlo así. Le voy a hacer algunas preguntas solamente para que usted me confirme entonces. Efectivamente. **Entonces la empresa CSP recepcionó el primer estado de pago por la obra de Vilcún de fecha 10 de febrero de 2015, por \$37191621.** Usted me dice el monto. Si está la factura tiene que haber sido, pero no la recuerdo en específico porque son tantas facturas y tantas obras que, pero si está, sí tiene que ser depositado.

¿Recuerda entonces usted algún inconveniente con pagos del MOP respecto de alguno de los estados de avance de esta obra de Vilcún? Ninguno.

En algunas oportunidades, no recuerdo si aquí, pero el ministerio algunas veces cursa la factura, pero no tiene dinero. No sé, algo pasa con la asignación de fondos, sobre todo en la fecha de diciembre. Diciembre, el último estado de pago que uno tiene para cobrar y después tiene que aguantarse prácticamente hasta marzo. Depende del año. Hay años que han sido muy que fueron muy rápidos y otros años que fueron muy lentos, que hasta abril llegaron las platas correspondientes a los dineros de enero. Entonces, dependiendo de la fecha, se recibieron todos, pero puede que haya alguno que se haya demorado un poco en cancelarse. Pero eso no quiere decir que el estado pago no esté cursado, porque el estado pago está cursado.



Lonquimay, usted indicó que todas estas obras se ejecutaron, salvo aquellas que estaban vinculadas con ductos. Hay Lonquimay, es un contrato que se hizo una modificación y que se llevó a término con su devolución de boletas de garantía y con su devolución de retenciones. Y recibió una comisión totalmente ajena a la inspección que tuvimos. ¿Y en el caso en el caso Lonquimay, lo que faltó por hacer fue la colocación de los tubos? ¿Cuántos tubos? Los tubos quedaron, la cantidad contratada quedó en el patio de la jardín, que tampoco está cerrado. Lo dejamos ahí. Donde está la dirigente de la comunidad, no recuerdo, pero mi calma sector batea Mahuida. Entonces, de lo único que yo sí estoy seguro de que no se instaló, pero se compraron, fueron los tubos.

Sí, pero el inspector fiscal es el que siempre tiene la llave para cancelar. Pero debe tener cierta documentación que acompañe su estado de pago. ¿En este caso no existía una empresa de asesoría en la inspección fiscal, no es cierto? No, por el monto de contrato no se estima de parte de Vialidad, por la experiencia que tengo, que se contraten asesorías de inspección. Cuando son contratos de sobre 1502, 1000 millones de obras, donde tiene ejecución y doble turno, donde los inspectores no son capaces de estar 100 % en obras, se contrata una asesoría externa que significa un costo adicional para el fisco, en este caso la administración y la revisión de manera directa por todos los Departamentos del Ministerio de Obras Públicas.

Pero nosotros teníamos otras inspecciones también de vialidad, que tiene que ver con topografía, que es un departamento independiente y él fiscaliza. Ese departamento fiscaliza directamente a nuestra topografía de autocontrol. Entonces es el que valida las cantidades de obra que se colocaron en obra. El laboratorio de obras viales certifica la calidad de los materiales y también existe un laboratorio regional que califica la veracidad de esa información que entrega el laboratorista de obra. Por lo tanto, si me pregunta si es la única persona que fiscaliza, no, son dos departamentos de manera independiente y de manera sorpresiva, no necesariamente con la venia del inspector para salir a hacer los controles.

¿Y en particular respecto a este inspector, era don Jaime Silva Poblete, no es cierto? Correcto. ¿Qué relación tenía usted con don Jaime de Silva? Ninguna. Era uno de los 10 u ocho inspectores que había en ese momento en distintas obras. ¿Y usted sabe que don Jaime Silva se encuentra actualmente condenado por esto? Sí, lo sé.

¿Otro punto, usted tiene familiares? Tenía familiares que a esa época estamos hablando rango 2014-2016 trabajaban en el MOP. Correcto. ¿Nos puede indicar quién es? ¿Claro, mi tía, que es hermana de mi madre, no es cierto? Y su marido, que es mi tío político. En este caso. ¿Cómo se llaman esas personas? Niselva Cerda y Carlos Bilke. Hablemos primero de doña NiSelva Cerda ¿Dígame en qué departamentos trabajaba ella? Ella trabajaba en la Dirección de Vialidad desde cuando yo era pequeño, iba a Puerto Montt. Trabajó en Vialidad toda la vida. En realidad, en el rango 2014-2016 Vialidad Temuco y específicamente



Vialidad. ¿Pero en qué departamento o en qué área? Conservación y contrato. La verdad es que se mueven ahí entre los dos. ¿Y en particular en Conservación ven justamente aspectos de caminos, no es cierto? Yo no sé, dependiendo. Vialidad toma inspectores de acuerdo con la necesidad de trabajo que haya. De repente hay inspectores que están en departamento de conservación y atienden contratos directos y al revés de contrato atienden contratos de conservación. Eso es un resorte de parte de ellos, de la dirección, de acuerdo con sus necesidades. ¿Y, en definitiva, en relación con doña Niselva Cerda Cantillano, ella intervino también en estos contratos, no es cierto? No, que yo sepa. No tuvo ninguna intervención de sus contratos hasta que jubiló. Ella jubiló en el servicio de impuestos de vialidad y yo me la traje a trabajar a mi empresa. ¿Por qué? Porque, como les decía, para inscribir una empresa uno necesita dos la capacidad económica y la capacidad técnica. Un funcionario de vialidad que ha trabajado toda la vida da una capacidad técnica muy alta. Siempre la expectativa fue crecer con CSP Ingeniería y llevarlo no a tercera categoría, sino a segunda categoría. Entonces ella jubiló y después de que jubiló me la traje a trabajar conmigo. ¿Doña Niselda, para evitar la aclaratoria, en qué época parece que jubiló? ¿El 2016? No lo recuerdo. La verdad es que no lo recuerdo muy bien. Pero en realidad no es trabajo físico. Es el compromiso de que me pase su documentación y que firme un documento legal donde diga que ella es empleada mía para efectos de inscribir y subir de categoría la misma empresa que ella llevaba tiempo trabajando. ¿Es una operación donde se aparenta que trabaja, cuando en realidad solamente facilita su documentación, no es cierto? Es que siempre es un consultor. Siempre. ¿El cargo que ella ostenta es de gerente técnico? Es el cargo de gerente técnico y por el artículo donde no tiene horario, ellos colocan como ellos son dueños de la experiencia y el decreto MOP lo fabricó gente que trabaja en vialidad. Que trabaja en vialidad de una manera de asegurar su pasar después de terminar sus años de servicio. La mayoría de los inspectores fiscales. Todos entregan su experiencia a empresas y trabajan con ellos, pero tienen un horario especial. Son básicamente consultores. ¿Doña Niselva Cerda incluso participó en reuniones con comunidades en relación con estas obras de Lonquimay particularmente, no es cierto? Desconozco, yo no sé. Ella no es la inspectora, así que no debería haber participado en obra. No sé, las desconozco si es que participó en reuniones y si fue por el contrato nuestro. Y respecto a don Carlos Birque Bustos, el esposo de mi tía nacional y selva, lo mismo. En el rango 2014-2016 él trabajaba en el ministerio, jubiló después. ¿Y en qué departamento, en qué área? Él trabajaba en contratos.

Respecto de VIALMIX, hubo conversaciones en el año 2013, pero creo que fue a principios del 2014 se realiza la compra de la empresa. ¿A esa época, esta empresa no mantenía ningún inconveniente de índole tributaria, no es cierto? Bueno, nosotros tratamos de revisar toda su documentación y por lo menos no encontramos nada. ¿Usted podía efectuar timbraje? La empresa estaba funcionando plenamente. Tenía un Dicom, tenía obras por adjudicar, una



ejecución. Pero la persona que estaba a cargo, que se había hecho cargo de la empresa, era un ingeniero comercial. En definitiva, era el dueño de facto Chile, que era un Factory que desconozco. Esa empresa venía de otra empresa que se llama Jorge Rafael Roja. Y algo pasó. Y se quedó con facto Chile. Se quedó con la empresa, pero esa persona no supo administrarla. Y como yo hacía cambio de documentación, de factura, lo que necesitaba, de repente en facto Chile, cuando el ministerio no tenía los dineros, conocí a don julio Albornoz y conversamos y me ofreció la compra de su empresa. Llegamos a un acuerdo y se vendió. Básicamente por la incapacidad de conocimiento de poder administrar esa empresa. Para entenderle, el ingeniero era Jorge Albornoz. Esa empresa era una empresa grande, se llamaba Jorge Rafael Rojas. Y esa empresa hizo negocios con facto Chile y con julio Albornoz. Y terminó siendo Julia Albornoz el representante legal y el dueño. O sea, ya venía de una compra anterior. Pero en lo concreto, usted se lo compró a don julio Albornoz. Él es un ingeniero comercial, no tiene nada que ver con el área vial. Y la verdad es que estuvo dos meses o tres meses con la empresa y no pudo ni pagar deudas ni ejecutar obras. Por lo tanto, necesitaba venderla. Y yo sabía ejecutarla. Tenía buenas máquinas, tenía mala gente, pero buenas máquinas. Por lo menos lo que alcanzamos a ver en ese momento, no había no tuvo ningún inconveniente inicial cuando se la adquirió. Tenía un montón de deudas.

Y, además, esa era una sociedad que estaba constituida por socios que eran familiares. No permitía dos empresas con el mismo tipo, pero sí el mismo representante legal. Por lo tanto, yo le dije a mi hermana que y, en consecuencia, era representante legal también. ¿Correcto? Sí, de las dos empresas. ¿Y quién recibía la utilidad de esa empresa, de VIALMIX limitada? Las cuentas de la empresa yo la recibía. ¿Pero a través de las cuentas de la empresa ya no la recibía su hermana? No. ¿Tampoco la recibía su cuñado? No. La utilidad de la empresa la recibía usted. Claro. De hecho, mi hermana está muy al margen. De hecho, no sabe qué es lo que hacíamos. Sabe que hacíamos caminos, pero con suerte habrá ido una vez a la oficina. ¿Dicho de otra forma, el primer interesado, el único interesado en que la empresa le fuera bien, era usted, correcto? Sí, sí. Materialmente, las gestiones tributarias Usted indicó que las efectuaba usted. ¿No es cierto? Sí. ¿Usted asistía personalmente al servicio Impuesto interno? Cuando eran cosas sencillas como timbrar, como algo que uno podía ir, un documento que podía pedir, pero las cosas complejas las veía directamente el contador. ¿Ya entendiendo su expertilla de antes del año 2000, usted al menos manejaba a esa altura, estamos hablando del año 2014-2015 cómo operaba el IVA, no es cierto? Sí, de hecho, tengo un convenio con CSP Ingeniería. Por no tener contador, nunca pagué un impuesto a la renta y terminé por, no sé, por en ese tiempo \$400000, pagando alrededor de 4 millones al cabo de multas, intereses, y logré pagarla para poder seguir funcionando. El mismo Rut, la misma empresa. Eso fue el año 2003, donde fue medio complicado cuando recién iniciamos. Y por tanto maneja conceptos como el crédito fiscal, débito



fiscal. No mucho, pero sí entiendo que entiendo básicamente a lo que se refiere los IVA y por qué uno tiene que guardar la factura, incluso la boleta que uno ocupa en el peaje, porque es parte del impuesto a la renta, donde uno suma y lo agrega en lo general. ¿Y sabe también, por tanto, las consecuencias si es que no se paga ese tipo de impuestos? Las consecuencias me acabo de enterar con la querella que tengo ahora de consecuencias y a lo largo del camino cuando me fiscalizaron en Impuestos Internos. ¿Y esas facturas dónde están? Bueno, muchas quedaron en obra. El problema es que después fue irreversible. En el momento de firmar el convenio yo quise presentar mis facturas, pero el convenio ya estaba firmado. Yo no tuve la posibilidad de volver a rectificar mi información con la documentación que había aparecido. ¿Por qué no llevó esas facturas a la fiscalizadora cuando ella se las requirió? Porque no las tenía a la mano y había que pedir las. Y la verdad es que primera vez que ya me fiscalizaban en mi vida. Y yo fui el que llevé los archivadores, yo llevé la información y fui súper honesto y abierto con la fiscalizadora. Le dije cómo funcionábamos y todo el tema. Ella fue muy amable, pero siempre como con la experiencia, ella como pensando que la están engañando en algo. Por eso tenía ella unas facturas que no me quería, que me las quería descontar, que estaban ahí. Por ejemplo, lo que decía yo, las maderas de puentes de Chiloé, ella no me las quiso, no me quería aceptarla hasta que tuve que traerle una resolución donde decía que nosotros teníamos unos puentes para ejecutarla. Y hay algunas facturas que quedaron pendientes, como le decía ayer, que no las ingresó nomás. Yo no sabía que esto me podía traer consecuencias. Ella nunca me dijo también que esto era que podía ser un delito. Siempre me firmeme esta documentación y haga un convenio y cualquier problema lo puede arreglar. Pero después de que firmé el convenio ya no se puede arreglar nada. ¿A usted, esta fiscalizadora, usted le llevó libro de ventas, no es cierto? Le llevé todo lo que ella me solicitó y que tenía a la mano, pero a modo ejemplar al menos. Libros de venta, declaraciones mensuales de pago de impuestos. Correcto. Libros de compra, me imagino. Yo no los conozco, pero llevé todo lo que encontré que me solicitaba.

AL QUERELLANTE CDE:

Actualmente soy laboratorista, todavía sigo de hecho, con la pérdida de mi trabajo esencial, yo tuve que buscar trabajo como empleado, y actualmente soy empleado como laboratorista en una asesoría a una conservación global aquí en Cautín, exclusivamente como jefe de laboratorio. ¿Don Jorge, usted habló de 10 o 12 contratos, ante estos dos en su empresa, tuvo problemas en la ejecución a esos días? 12 contratos. Siempre un contrato tiene dificultades de ese punto de vista administrativo, donde uno trata de imponer su punto sobre pero que lleguen a un término complicado. Sí, la compañía bombero, el contrato que anteriores, perdón, estoy preguntando por los 10 o 12 anteriores. No, todos los contratos fueron recibidos. ¿Y con recepción, devolución de boletas de garantía y retenciones no tuvo problema? No tuvo problema. ¿En relación con el tema proyecto Vilcún, usted registró la inquietud de la comunidad aledaña en su



oficina de la comuna? En la oficina no, en nuestra oficina no. De algún otro modo. Pero las primeras manifestaciones se hicieron en la reunión de apertura de participación ciudadana, donde la gente tenía problemas en el sentido de que exigían hay una confusión de parte de las comunidades que a muchas cosas le piden a la municipalidad y estas son obras del ministerio, entonces relacionan cosas que no me interesa. El registro, si quedó constancia, registro de esa Sí, hay un acta en esa reunión de apertura y después obviamente el registro es la modificación de obra, que es donde se materializan, digamos, sus necesidades. Y si usted va hasta el camino, el día de hoy el ancho no da para los fosos precisamente a ese punto quería llegar. Usted señaló ayer al tribunal que, en el proyecto, en el diseño del proyecto, habían sido poco acuciosos. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Ya, perfecto. ¿Cuándo presenta su postulación a la adjudicación de este proyecto, usted asume la obligación de leer las bases, correcto? Sí. Ya. Y por lo tanto usted las leyó. ¿Usted también leyó las especificaciones técnicas, cierto? ¿Usted observó que este proyecto estaba diseñado de manera poco acuciosa en ese momento? No, no le puedo decir por qué. Porque resulta que hay muchas cosas que son mediciones con topografía, que son mediciones que no son precisas al ojo. Hay de repente algunas alcantarillas que están cubiertas con la vegetación y viene, por ejemplo, una limpieza de foso y cuando uno saca la vegetación ni siquiera existe el foso. Entonces, en vez de limpieza sería una reconstrucción. Entonces hay cosas que no son apreciables. En la visita a terreno que uno hace no es obligación. En los contratos del Ministerio de Pública no es obligación la visita a terreno. En los contratos municipales sí es obligación. ¿Usted nunca fue al lugar donde se iban a ejecutar las obras antes de antes de comenzar la ejecución del contrato? Sí, pues, antes de con la contrato adjudicado, claro que uno va después de la adjudicación. Sí, pues, después de la adjudicación no va. Lo que recuerdo es que la dirigente un camino de los principales, donde se hizo un puente de madera y ellos tenían un aserradero. Al final nos pidieron amablemente eso lo dijo, que extendieran el camino, pero no sabía el nombre. Fueron como 2 km o si fue un precio de ministerio, yo creo que alrededor de unos cuatro días de trabajo, tres camiones. Yo creo que ese costo tiene que haber sido alrededor de unos \$18 millones. Petróleo, motoniveladoras, gente. Se incluyó en la modificación de no se incluyó. No, no lo incluyen dentro de la modificación por lo siguiente porque no es legal salirse del parámetro, o no sé si, pero así lo entiendo yo dentro del reglamento, que si a mí me dicen que un camino termina en el kilómetro 10. Yo llego ahí, aunque me lo pidan, el fisco no me lo va a pagar. Pero amablemente muchas veces pide la cooperación al contratista, dada la necesidad que hay, una posta que les quedó afuera, lo que sea. Entonces uno tiene que cooperar nomás. ¿Don Jorge, y en este mismo punto, favor, cómo se le transmitió, solicitó, de qué manera? A través del residente. Me dijeron, literalmente, yo no recibí una instrucción directa, me dijeron que don Emilio Roa, que era el Seremi de Obras Públicas en esa oportunidad, había solicitado que ripiáramos urgente tres caminos, uno



principal con dos ramales cortitos a una comunidad que estaba muy cercana a la comunidad. Muy cercana. Yo creo que tiene que estar uno 3 km y lo separan tal vez 500 m. Por la ruta.

Bueno, mi mandante es el Ministerio de Obras Públicas, yo tengo que tratar de estar bien con ellos. Si el Seremi para mí es una persona prácticamente intocable y no me va a atender también.

En Vilcún, ¿Esta obra, cierto que fue recepcionada por una comisión? Correcto. ¿Esta comisión fue a terreno? Sí, pues, fue a terreno. Las comisiones todas tienen que ir a terreno. ¿Usted fue a terreno también? No, en esa comisión no participa el contratista. Tenga. ¿Pero puede ir el residente? Tal vez si es que hay algunas observaciones, usted también puede ir. Puedo ir, pero no me invitaron. Ok.

Lonquimay, usted señaló ayer en su creación y ahora una consulta del fiscal que también hizo un comentario, de que estos tubos habían quedado en el antejardín de la casa de una dirigente. Correcto. No, siempre estuvieron ahí. Yo no sé al final qué pasó. Siempre yo esperé la modificación de obra. ¿Por qué? Porque eso me garantizaba a mí que no me iban a multar. Don Jorge, si lo dijo, me disculpa si el tribunal lo tiene claro, pero no recuerdo el valor de esos tubos que dejó. ¿Usted se acuerda cuánto era, Mauro? No lo recuerdo. El valor no lo recuerdo. Es que yo tengo el valor del tubo ahora en la cabeza. ¿Cuánto vale el metro lineal? Pero no recuerdo qué precio tendrán. En ese momento costaban 60 lucas el metro. No sé. Sí, por supuesto. Quedé esperando la modificación.

Vamos a la resolución del 28 de diciembre del 2016, cuando sale esta resolución, pero usted se entera que tiene que pagar ya unos días de multa. ¿Usted reclamó, protestó, hizo algo en relación con esto? Casi me amanecí en la oficina del Jefe de Contrato. ¿Aparte de ir a la oficina del Jefe de Contrato, hizo alguna presentación? Tengo entendido que el residente tiene que haberla hecho, pero yo hice mucha presión. ¿Usted habló con el residente preguntándole si había hecho un reclamo en relación con esta situación? No, ese tema no lo hablé porque lo abordé porque era delicado, lo abordé directamente. ¿Pero aparte de hablar, de ir y hablar, presentó un reclamo por escrito, alguna constancia? No, no. Lo único que ellos me combinaban era a ir a terminar el contrato y yo les decía que por favor me cambiaran la resolución, la fecha de la resolución, para poder ir a terminar el contrato. Bien. Don Jorge, respecto del señor Jaime Silva Poblete, usted ya señaló que lo ubicaba. ¿Cómo se comunicaba con él o no se comunicaba con él? ¿Perdón? ¿Se comunicaba o no se comunicaba con él? Generalmente la comunicación, hay comunicación cuando uno los pilla en obra, cuando uno están ellos en obra o va al ministerio a hacer un trámite, hay comunicación, pero es una comunicación muy tangencial. ¿Cuándo se comunicaba con él de esta manera tangencial, nunca quedó registro de esas comunicaciones con él? Es que el contratista o el representante de la empresa no deja registro, porque el libro de obra, que tengo entendido que tiene que haber libro de obra, no sé si está en el expediente, ahí



quedan los registros técnicos y todo lo que solicita el inspector fiscal en ese libro. Pero cuando uno va al ministerio, muchas veces va por otro trámite, se pilla en el pasillo con alguien, lo saluda, ese tipo de contactos. ¿Pero usted fue en algún momento a oficina de vialidad a conversar con el señor Silva? Sí, cuando la modificación de obra no salía, él me dijo esto no es mi resorte. Me dice yo no hago la resolución. La resolución, perdón, las resoluciones. ¿Con quién fue a conversar? Que me decía claro, don Jaime Silva, claro que la primera instancia que yo fui cuando me llega mi resolución fuera de plazo fue conversar con el inspector. Sí, sí, pero ahí fue donde le dice sabe que eso no es resorte mío, no es resorte mío, eso es un tema. No que yo recuerde. ¿Tenía su teléfono, por ejemplo? Sí, sí. De hecho, lo llamé de Chiloé cuando salió la modificación, porque estaba contento. ¿Antes de esa ocasión lo llamó o él le llamó? No recuerdo. Yo creo que no. ¿Su correo electrónico lo tenía? Sí, sí. ¿Se comunicó con él por correo electrónico o él se comunicó con usted en alguna ocasión? Sí, me mandaba copias de las modificaciones.

. ¿Usted recuerda haber reclamado por la omisión o por la demora de la recepción de algún pago parcial respecto de la ejecución de estas obras Vilcún Lonquimay? Sí, yo hice un reclamo que fue en la compra que yo hice de los tubos de hormigón de Lonquimay. Mi intención era instalar esos tubos. Esos, los que venían por contrato. Eso es, los que figuraban en la boleta de garantía. Esa era mi obra.

No lo recuerdo, pero yo creo que no.

¿Usted le dijo al fiscal, en relación con el cobro de esto, de estos pagos parciales, que algunos se cobraban con cheques, cierto? Sí. ¿Y por ventanilla, cierto? Del Ministerio de Obras Públicas, segundo piso. ¿Usted era quien los cobraba por ventanilla, cierto? Yo no los cobraba, yo los retiraba. Los retiraba y después los cobraba.

Yo lo traté de ver, yo siempre asumiendo que era un tema técnico, pero con el tema de las resoluciones ya me di cuenta de que era más allá de técnico. Había que hacer cartas de otro tipo, colocar artículos, no sé, código civil para presionar a la vialidad que me entregara. ¿Pero usted en cada una de estas dificultades, modificaciones, etc. Es que todo tiene un costo. Y las obras no lo hice. Todo tiene un costo y las obras son muy rápidas. Son muy rápidas, tienen una dinámica muy y los estados de pago son mensuales, entonces todos los días falta petróleo, todos los días hay gente que tiene un requerimiento, todos los días hay un permiso, 1 máquina que se echó a perder. Entonces uno no puede detenerse, por lo menos como yo estaba en distintas obras, a perder el tiempo cuando al final uno gana más construyendo y dejando una máquina que está parada, dejarla en funcionamiento.

AL SII, En su declaración usted dijo que las facturas, digamos, no fueron aportadas al servicio impuesto interno, ya que estaban en sus cuatro obras. No son cuatro, eran más de cuatro. Más de cuatro las obras que tenía, no todas, algunas estaban con nosotros y otras estaban en terreno. Correcto. Y esa factura



estamos claros que no las aportó al servicio Impuestos Internos. ¿Por qué no las aportó? ¿Este juicio estaba siendo asesorado por un abogado? Yo partí inicialmente con un abogado, don Guillermo Cáceres, y la verdad es que él siempre me conminó a llegar a un acuerdo con la fiscalía y hasta así iba a ser. Pero al inicio, y esto lo digo de manera bien personal, cuando uno le llega una notificación, la verdad es que no puede ni dormir, porque esto es algo muy nuevo para uno y después en el caso personal, una negación tal vez 1 entrega total a su abogado defensor. Pero después que pasa el tiempo y tanta preparación de juicio, uno empieza a estudiar, pues yo empecé a leer, empecé a ver directamente y yo consideré, estuve a punto de llegar a un acuerdo con la fiscalía, como estamos con don Jaime Silva, los dos en el mismo juicio y después de ver lo que le pasó a don Jaime Silva, sin poder decir nada, tuvo que aceptar su culpa. Yo cambié de abogado y la verdad es que mi primer abogado nunca me esto puede ser un elemento de prueba, porque siempre pensamos en llegar a un acuerdo y la verdad es que el que no hizo a última hora que tuvimos una instancia, no sé si usted recordará que incluso yo dije que sí. Después, medándolo de manera personal, no quise llegar a acuerdo porque yo dije tengo algo que decir y la verdad es que me la jugué por esto y estoy aquí. Entonces yo la verdad es que en ese momento perdí mucho tiempo. Si hubiese tomado otra decisión en lo personal, donde podría haber aportado más información. Don Jorge, pero igual tenía tiempo para aportar estas facturas, porque usted aportó convenios con tesorería, aportó, al menos ofreció. Perdón, perdón, perdón, perdón.

¿Y me podría explicar por qué declara mayor crédito, a ver si me entiende, por qué declara mayor crédito fiscal que el que consta en sus registros de compra? La chequera la tengo yo, yo compro neumáticos, yo compro aceite, yo compro asfalto, hicimos un contrato de asfalto ya con VIALMIX, son montos altos, pero los neumáticos, esas facturas llegan directo porque los compra uno y no tienen requerimiento de la inspección fiscal. Pero hay cosas de obra muy particulares que sí se necesita la factura por cosas que han pasado anteriormente, donde empresas se roban productos, se roban cosas, entonces piden certificado de calidad, guía, despacho y factura. Y hay cosas que también se compran en obra, entonces esas estaban en los archivadores en obra, junto con los contratos de trabajo un montón de otras cosas más que son requeridas siempre. Algunas cosas vuelven muy rápido a la oficina y otras cosas no volvían, siempre quedaban en la oficina. Y la verdad es que yo no estaba preocupado la parte contable de pedir eso, hasta que me pillé con la sorpresa nomás de la fiscalización. Si yo hubiese tenido todo centrado, una copia o una fotocopia, las facturas más encima eran de papel, no eran de facturas como son ahora, electrónicas que se mandan por computador. Entonces estaba esa transición, alguna era electrónica y la mayoría eran de papel, por lo tanto, no tuve el acceso. Y como dice usted, yo traté de llevarla después, pero el convenio estaba hecho,



así me lo dijeron, así me lo dijeron los abogados de tesorerías, entonces no pude presentar nada de lo que quedó.

Entonces si yo tengo que comprar, claro, si yo compro asfalto, yo hago el cheque de asfalto y el cheque queda ahí. Entonces se compraron tanta cantidad de asfalto y se compró, qué sé yo, 25 millones de asfalto y el cheque queda ahí. ¿Entonces, por lo tanto, el cheque queda anotado que hay una compra y hubo una compra, entonces por eso en el libro de compras aparecen todas las compras que uno va haciendo, no cierto? Y que van quedando. Entonces de repente, claro, aparecían más de las facturas que realmente estaban, pero también tiene una relación con la cartola que uno va comprando. ¿Otra pregunta, don Jorge, mire, cómo explica usted que usted declara menos IVA de las ventas que realizó? ¿En su libro de compraventa usted declara, para ejemplificarlo más simple, usted declara un IVA de débito fiscal de 50, pero sus ventas son 100? O sea que la factura que yo le hice al ministerio en vez de estar. No, no, estamos hablando de sus ventas. Sí, bueno, sí, la factura de sus ventas, de la que el ministerio me da a mí, usted declara en el fondo menos débitos de los ingresos que recibe. ¿En el formulario 29 usted declara 50 y en su libro de compras, compra y venta de venta, en este caso declara 100? Claro, a ver, la única explicación que a mí se me ocurre que ha pasado en diciembre, en el primer contrato que yo tuve, me hicieron cambiar la factura tres veces, porque primero tenía un avance de \$35 millones. ¿Y esto usted no lo conversó con usted tiene un contador, tiene un asesor, lo conversó con él? Sí, pues yo conversaba cosas con él, pero las cosas que él me pedía siempre eran los dineros para cancelar al servicio impuesto interno. Eso es lo que él me pedía. Me decía Jorge, aquí está el formulario 29, esto es lo que salió, esto es lo que hay que pagar. Listo. De hecho, yo le depositaba a él y él hacía el pago y después me mostraba el formulario cancelado. Don Jorge, como usted ha dicho, ha señalado, referido que usted se entrevistaba personalmente con la fiscalizadora, digamos que realizó la fiscalización, la auditoría. Ella le pidió que aportara su contabilidad completa, por ejemplo, libros, diarios, Libro mayor de inventario y balance de los años tributarios 2015-2016, no recuerdo técnicamente lo que me solicitó, pero me pidió todo lo que me pidió fue lo que yo le llevé. Y si faltó algo, me lo tendría que haber dicho y haber quedado por ahí anotado. Pero yo llevé todo lo que encontré y ella me fue pidiendo.

Esa es la última estimación. Y fue un valor cerrado, fue 70. Pero eso es el perjuicio fiscal que es histórico al momento de los hechos que se le están reprochando. Diría que es terrible, terrible.

¿Cuál era su relación con su contador? ¿Se refiere a Cristian Andrés? Sí. Bueno, yo diría que más que contador es como un amigo. Ahora no sé, él es contador de oficio. Lo conocí cuando recién formé CSP Ingeniería. Entonces yo toda mi confianza va con él, o iba con él. ¿Y nunca le representó esta situación? La verdad es que él es muy hermético, muy cerrado. Nunca me dijo, nunca me dijo. Me dijo cuando teníamos problemas, me decía Jorge, hay que pagar esto,



tenemos una multa en Inspección del Trabajo, hay que pagarlo. Tenemos una multa acá, hay que pagarlo. Y hasta ese punto. ¿Pero me dijo los problemas tributarios que estaban a propósito de las diferencias de Iva? Esa es la pregunta del detalle, su señoría. ¿No? ¿Y cuándo se entrevistó con la señora fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos, se acuerda cómo se llama? No lo recuerdo. ¿Pero ella le representó toda esta problemática que usted está enfrentando hoy día en relación con los impuestos? ¿Por qué tenía mayores créditos a los que estaban en el registro compra o por qué había subdeclarado débitos fiscales? Ella me habló claro, justamente eso, que yo en ese momento no entendía mucho, pero me solicitaba documentos. Yo le llevé todo lo que me solicitaba. Y lo particular es que yo no confié en ella. Tanto en ella que ella no dije la gracia, lo voy a repetir. Ella imprimió ella la información en su impresora y ni siquiera me la llevé para estudiarla o verla. Firmé nomás la firmé. O sea, usted efectuó una rectificación de su declaración. Correcto. Rectificación de la declaración. Y nunca me dijo que eso era un delito. Y, de hecho, me lo imprimió ella. Ella en su impresora. Yo no sé si eso estaba bien. Yo debí haberme llevado eso y haberlo visto y haberlo estudiado con calma. Nunca pensé que estaba en una situación tan complicada para terminar en esto. ¿En ese momento, su defensa actual no le sugirió que buscara esa factura? ¿La factura, digamos que respaldarían ese crédito fiscal? No.

A LA DEFENSA,

Principalmente el residente de obra, pero ya en las obras más grandes, yo recuerdo en Puerto Montt, o sea, una obra de Puerto Montt, teníamos una secretaria o secretario administrativo y ella es la encargada, pero principalmente esta persona la responden al inspector fiscal, a los requerimientos de la dirección de vialidad, por lo tanto, quedan todas las cosas ahí.

La verdad es que el procedimiento para hacerla llegar no era nosotros la íbamos a buscar cuando íbamos dejar repuestos algo, ahí podíamos pasar a retirar información que era fundamental para el movimiento nuestro. ¿Había algún funcionario de su empresa que se encargara específicamente de esa función? Específicamente eso no, teníamos administrativos que iban para allá a dejar repuestos y todo y ahí se volvían con información. ¿Las declaraciones de los formularios 29 que se presentan mes a mes en el Servicio de Impuestos, quién en definitiva los confeccionaba y los firmaba y los presentaba? El contador.

¿En cuanto a la persona que se encargaba del pago de los impuestos mes a mes, qué lo hacía el contador, lo hacía usted? Correcto, él hacía formulario 29, que es como bien complejo llenarlo y calcular su monto, y luego él me solicitaba a mí el documento para cancelar. En realidad, no documento su depósito, se depositaba su cuenta y él hacía los pagos y después me mostraba el formulario. ¿Con quién fue a la presentación de la documentación? **Fui solo.** Claro, ella, como dije anteriormente, me imprimió todos los formularios que ella estimaba rectificar. ¿Usted leyó esos documentos antes de firmarlos? La verdad es que



no. Los firmé nomás. ¿Por qué los firmó? Porque si no, no podía timbrar y ella pasaba su problema a Tesorería. Eso es lo que yo y ahí yo podía ir a pactar o a negociar en Tesorería. Usted señaló que, a pesar de este convenio con Tesorería, igualmente le fueron embargados dineros que le debía pagar el Ministerio de Obras Públicas.

La primera corresponde a una obra en Chiloé por 47 millones y algo, con IVA. Y la otra corresponde a una obra también de la 10.^a región en el periodo de mayo del 2017 por un monto de \$119 millones. ¿Qué efecto trajo para usted y para su empresa estos embargos

Devastadores. ¿Por qué son devastadores? Porque son imprevistos. Si yo tengo un gasto de esa índole y sé que viene esa fecha, uno puede hacer rápidamente una venta de una máquina, puede hacer un cambio, un canje, lo que sea. Pero cuando es imprevisto y usted tiene los sueldos de la gente, las imposiciones, el petróleo, la pensión y los requerimientos que piden, nosotros estamos afectos a muchos controles de multa. Si no cumplimos, nos multan. Entonces, la primera se puede aguantar, la segunda no se puede aguantar. Bien.

¿Desde cuándo usted conoce, conocía a don Jaime Silva? Depende de lo que uno diga. Desde que lo ubico, será desde el año 2012, cuando me inscribí en el registro. Y se pasea por el ministerio, entonces ubica gente, pero muchas veces no saben el nombre. ¿Pero lo saluda cordialmente o no cordialmente, pero lo saluda por no, pero en este caso la pregunta es cuándo usted ya sabía que esa persona que se llama usted lo ubicaba? Por la modificación de obra. ¿Y estos quedaron en la propiedad de la presidenta de la comunidad, cierto? Referente a los hechos puntuales de la acusación, se señala que no se realizaron en a lo menos seis caminos, obras de instalación de tubos corrugados de polietileno, construcción de canales, fosos, contra fosos e instalaciones de señales verticales laterales. ¿Qué pasó en específico con esta obra? Se realizaron. ¿Me está hablando de VILCÚN? Sí. Para mí la obra se terminó completa, por lo tanto, se realizaron. Él incluso respondió ayer y le contextualizo porque en el audio fue claro en decir que como le pagaron, le devolvieron la oferta de garantía. Todo eso era una señal inequívoca para él que todas las obras estaban finalizadas, aprobadas y, por ende, construidas y bien recibidas por el ministerio, la comisión, etc. Así que ese punto ya está claro. ¿Usted sabe cuándo fueron los peritos de la PDI a medir estos caminos de Vilcún? Desconozco. Qué ocurrió con su laboratorista vial clase C, ya que se le acusa de que durante cinco meses usted no tuvo laboratorio. Yo creo que habría que revisar las imposiciones y él estaba trabajando, pero en obra, cuando ya no hay requerimientos potenciales o regulares de una persona. Nosotros no lo tenemos en obra. Es un costo 1 gasto adicional. Entonces, lo más probable es que a esa altura la obra haya estado terminada. No me acuerdo cuándo fue la carta de término de esa obra, pero si no estuvo, no es que no haya estado. Yo creo que la obra no puede funcionar sin todo su personal requerido.



Sobre el contrato Lonquimay, lo último que supe es que yo acompañé el camión, el primer camión que fue a dejar los tubos y pasé a hablar con la dirigente de la comunidad y nos comimos unos piñones y tomamos mate y quedaron ahí y todo conforme en que saliendo la modificación se instalaban rápidamente. Posterior a eso o me podría decir si me dice fecha, fue antes del invierno, porque esa obra se adjudicó en diciembre. Nosotros ejecutamos todo lo que podíamos hasta marzo y quedamos ahí esperando

¿Don Jorge, quién firmó y autorizó la resolución de disminución de obra y prórroga de plazo de la obra de Lonquimay? El jefe de contrato. Él es el que bueno, el jefe de contrato pasa, toma razón de un montón de gente, incluso ahora se hace una mesa propositiva, desconozco si se hizo, pero como un trámite interno de vialidad lo desconozco en su detalle. ¿Pero el jefe de contrato? El jefe de contrato, el que se hizo parte también y fue a visitar en esa oportunidad y habló con la dirigente y ratificó que ese era el problema. En la acusación, don Jorge, se señala de que no se realizó la confección de carpetas granulares de rodaduras.

Por supuesto, todo el movimiento de tierra, movimiento de tierra se le llama a esto que no es tierra, pero son materiales, a los terraplenes, a las excavaciones. Todo eso se realizó. Lo único que quedó pendiente solamente fue la instalación de los tubos. Eso sí, yo reconozco que los tubos no se instalaron.

ACLARANDO AL TRIBUNAL, su asesor contable trabajó con él, cuando compraron VIALMIX el año 2014, antes tenía otra oficina. Hasta el 2017 cuando las empresas terminaron.

Residentes de obra, en VILCÚN y LONQUIMAY, no los recuerda. Cristian trabajó como asesor contable. No me interesa si antes estuvo haciendo otra. Básicamente, cuando compramos Vialmix, él se vino a trabajar a la oficina conmigo en 2014. El 2014. Y ahí tenía su oficina. Antes era un contador externo, tenía otra oficina en otra parte. ¿Y trabajó hasta cuándo con usted? Hasta que las empresas terminaron. ¿Hasta que terminamos, que fue el 2017?

Respecto a las obras de Lonquimay y de Vilcún, ¿quiénes eran los residentes de obra en uno y otro caso? ¿Si es que se acuerda el nombre? Hay un caballero, un viejito. Pero me puedo acordar el nombre. No, solo si se acuerdan. No lo recuerdo. Por último, respecto a esta extensión de camino que le pidieron, que no formaba parte de las obras originales, usted señaló que esta fue la frase que usó. Por eso quiero que me explique a qué se refiere y quién fue, porque dijo que a propósito de esta obra extraordinaria siempre le pedían la cooperación al contratista. Así lo dijo usted. Entendemos, para extender la obra, la ejecución.

A mí, el inspector fiscal y ratificado por el jefe de contrato. Ya. Y ese inspector fiscal era don Jaime Silva y el jefe de contrato era don Carlos Bahamonde.

OCTAVO: Convenciones Probatorias.



Que en la motivación cuarta del auto de apertura de juicio oral se dejó constancia por el Juez de Garantía que las partes los intervinientes NO arribaron a convenciones probatorias.

NOVENO: Prueba rendida respecto de la acusación 1.

Por el acusador Ministerio Público

Testigos.

1. OSCAR CRISTIAN ANDRADE CID, contador, domiciliado en calle Las Golondrinas N° 0379, Los Castaños, Labranza, Temuco.

¿Conoce al acusado este juicio? Sí. ¿Quién es? Don Jorge Inostroza. ¿Qué relación tiene usted con don Jorge Inostroza? Fue mi cliente hace un par de años atrás. Ya hace 10 años por lo menos. ¿En qué actividad? Primero como laboratorista con su empresa CSP. Luego me pidió apoyo cuando él compra VIALMIX. ¿Qué rol tenía don Jorge Inostroza? Representante legal, creo.

La contabilidad se llevaba primero ahí en la oficina de Vialmix cuando se compró. Había administrativos y gente ahí en esa oficina. Por eso después yo entré de apoyo a concluir cosas que ya estaban hechas. No puedo hablar de para atrás porque desconozco ese eso por lo que entiendo, se compró y yo no vi nada antes de eso. No vi nada, ni un libro, ni una cosa nada, don Jorge me avisó solamente que él había comprado esa empresa en particular. ¿Respecto de lo que usted sabe entonces, hacia adelante, qué actividades hacía usted para Vial Milésimo Noveno? Como le dije, tema administrativo y contable. ¿A nivel contable, qué actividades hacía usted? ¿La contabilidad mensual que se hace todos los meses, en qué consistía esas gestiones que hacía? En hacer sueldos, hacer liquidaciones, impuestos. ¿En relación con los impuestos, qué actividades hacía? Calcular, hacer el registro de compraventa. ¿De dónde obtenía la información para hacer esa actividad? La información que tenía a la mano en ese momento, documentos contables y tributarios, quién facilitaba esa información, estaban de todos lados esas cosas. Yo no recuerdo exactamente con exactitud todo lo que hacía hace 10 años atrás, no tengo memoria. Hacia atrás, como le dije, fue mi cliente ya hace muchos años atrás y yo después de eso he hecho muchas más cosas y he seguido mi camino profesional y no le puedo entrar a explicar cuáles fueron los sucesos y las cosas que ocurrieron en ese momento porque ya no lo tengo en mi mente. ¿Qué rol tenía don Jorge Inostroza en relación con el aspecto tributario de la empresa Vialmix? Desconozco, no sé si debe tener un aspecto tributario él. ¿En relación con también aspectos tributarios, recuerda inconveniente que se hayan generado con el Servicio de Impuestos Internos? Recuerdo que nos giraron impuestos, eso recuerdo. No giraron impuestos de deudas de impuestos que había en ese momento. Eso puede ser hacia atrás o hacia adelante, como le expliqué al principio, porque una empresa que se tomó con movimiento tributario, con



declaraciones de impuestos, con declaraciones de renta, cuando una empresa ya tiene movimiento tiene todas esas cosas. Yo soy contador no, no, si eso lo tenemos claro. Soy contador de varias empresas, no solamente don Jorge en ese momento tenía más clientes. En el 2016. Entonces era contador de varias empresas. Correcto.

Un respeto mutuo por los años que nos conocíamos. ¿Desde cuándo se conocían? Poco me acuerdo exactamente eso. Hace varios años atrás. Desde esa fecha para atrás, quizás 10 años para atrás. ¿En qué contexto se conocieron? De trabajo. ¿Usted conocía a la familia, señor Inostroza? ¿Usted conocía la casa, señor? Solo por fuera.

Citaron hace un par de años atrás, como cinco años yo creo. ¿Por qué guardó silencio? Porque me lo ofreció el funcionario. ¿Por qué se lo ofreció el funcionario? Habría sido responderle eso me lo podría ofrecer. ¿

Porque el funcionario de la PDI me lo explicó. ¿Y por qué razón fue? ¿Más allá de que le haya explicado, le explicó por qué eventualmente usted podía ejercer ese derecho a quedarse en silencio? No lo recuerdo. ¿No es lo que le acaba de mostrar el fiscal? Sí, pero eso no lo escribí yo, lo escribió él. ¿No, pero qué es lo que dice? Auto incriminarme. ¿Eso me está preguntando? Lo que dice ahí de auto incriminarme. Él me dijo que yo podía guardar silencio. No era no era necesario que yo declarara que podía guardar silencio. Eso fue lo que le dijo el funcionario. Pero yo no se lo dije de esa manera en el contexto de autoincriminarme, porque yo solamente me citaron para tomarme una declaración, nada más que eso.

AL QUERELLANTE, Por un tiempo. ¿Podría precisar cuánto tiempo fue contador de VIALMIX? Un par de meses tiene que haber sido. Acérquese al micrófono, por favor. Como le dije, partí de apoyo y después fueron meses, por lo que me recuerdo. No tengo la memoria exacta de cuánto tiempo fue. El control de la empresa la tenía el mismo que se la vendió don Jorge. Y yo se lo dije a don Jorge en su momento. Al principio era el dueño anterior. Y después que se lo dijo al señor Inostroza, me consultó de quién tomaba las decisiones. Yo le dije que el control lo tenía la misma persona que le vendió la empresa, don Jorge. Eso fue lo que le dije. Y eso fue por bastante meses después que don Jorge compró la empresa.

Desde que compra la empresa. Por eso le digo que había los primeros meses las decisiones las tomaba esta otra persona.

¿Quién efectuaba los cálculos de débito y de crédito fiscal en la empresa? Los cálculos lo hacían yo. ¿Quién construía el libro de compraventa que confeccionaba en la oficina de la empresa? ¿Pero quién? Todos los que trabajan ahí, los administrativos. ¿Cómo se construía? ¿Quién entregaba la información? Llegaba la factura a la oficina, supongo, y se ingresaban a un sistema. ¿Pero usted tenía alguna relación de confianza con el señor Inostroza? Era mi cliente. Yo presto servicio a varias empresas, estimado. Eso yo le explicó que no solamente prestaba servicio a ellos. Para entenderle bien, mi tiempo se dividía



acá. Escúchame, mi tiempo se tenía que repartir en varias empresas. ¿En su experiencia como contador, tiene que existir un correlato entre lo reflejado cronológicamente en el libro de compras y las declaraciones en los formularios 29? Por supuesto. ¿Y a qué podría obedecer que no existiera una correlación o no? ¿O los formularios 29 reflejaran un IVA mayor o menor al que se consigna en el registro compraventa? A mí me entregar la información, como le digo, que falte algún documento, falte alguna factura, que falte alguna nota de crédito, nota de débito.

De la oficina de don Jorge. ¿Quién más trabajaba en esa oficina? Varios administrativos. ¿Y quién supervisaba esos administrativos? Don Jorge, supongo. ¿Cuándo el crédito fiscal no tiene un correlato, es superior al declarado registrado en el libro de compra, qué pasa ahí? Origina una diferencia. ¿Ya, a favor de quién? A favor del fisco, del estado. O sea, una diferencia. ¿Qué ocurre con esta diferencia? ¿Nos podría explicar? ¿Y por qué se genera esta deuda? Porque hay un mal cálculo. ¿Ya, esto pudiera obedecer a qué razones? ¿Cuáles serían las razones para que pudiese haber un mal cálculo? Sí, y faltara alguna factura. Con la información que me entregaban. Eso fue lo que le dije. Por la información que le entregaban. Yo no trabajaba dentro de la empresa, para que lo tenga claro, yo soy contador externo. Correcto. Ya, de esas cosas no me acuerdo con exactitud, estimado. Como le dije, ocurrieron hace 10 años atrás. O sea, eso lo supe yo por él. Obviamente tuvimos que ir los dos al servicio. No me acuerdo, no me acuerdo de nada. No me acuerdo exactamente qué me dijo. No me acuerdo. ¿Tampoco se acuerda el problema? Me refiero a que la persona que nos atendió en su momento no fue la misma que nos terminó girando esos impuestos.

Tuvo que firmar don Jorge las rectificaciones. ¿Y por qué? Porque había inconsistencia en las declaraciones. ¿Y esta inconsistencia qué decían? Es que eso no lo recuerdo. ¿No recuerda qué decía la inconsistencia? No recuerdo esa parte. Podrían ser varios casos. Como le explicaba, faltaban documentos, faltaban facturas. La información a mí me la enviaban y en base a la información que me envían yo calculaba. ¿Y recuerda por qué cantidades son los giros o en qué periodo fueron esos giros? Dos preguntas. ¿En qué periodo y por qué cantidades? Los años 2014, 2015, por ahí. ¿Y las cantidades? No, las cantidades no las recuerdo. ¿Usted trabajaba gratis? No. Trabajaba con honorario. Ya, eso le estoy preguntando. Era un honorario mensual, como cualquier cliente que tengo. Trabajo administrativo, liquidaciones de sueldo, imposiciones y apoyo contable tributario. Como todo contador tengo que hacerlo. No sé, usted acaba de hablar de unas inconsistencias que eso es lo que no nos ha respondido. Pues eso fue lo que cuando nosotros llegamos al servicio ocurrieron esas cosas.

POR LA DEFENSA, Llenado material, llenado material. Ya llenado material del formulario 29. Llenado material del formulario. Yo. ¿Y quién pagaba el impuesto, don Jorge, directamente? Sí.



2. MARIA ESTER ALVEAL GUERRERO, contador auditor, fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos.

Soy contador auditor y trabajé por 33 años en el servicio de impuestos internos como fiscalizador tributario. Y durante ese tiempo yo confeccioné un informe en la cual revisé a la empresa constructora VIALMIX. En la revisión del informe se constataron dos aspectos. El primero fue una menor declaración de débitos fiscales. ¿Qué significa eso? Que se declararon menos ventas que las que estaban registradas en los registros contables, es decir, el libro de ventas. Y el segundo aspecto es un aumento en el crédito fiscal declarado, también comparándolo con el libro de registro de compras. Es decir, declaró menos ventas, aumentó sus créditos fiscales y eso dio como resultado un menor pago de impuestos. Bueno, la revisión parte con asignarme el caso, notifico a la empresa. Esta notificación fue hecha personalmente en las oficinas del Servicio de Impuestos Internos al mandatario o representante legal, don Jorge Inostroza Cerda. Esto ocurrió en diciembre del 2016. Y la documentación recién en marzo del 2017 fue entregada por el representante legal a mí, luego de una serie de notificaciones, solicitar prórroga, no dar cumplimiento. Y al final presenta parte de la documentación. En este caso presentó los archivos de las compras, presentó las declaraciones de impuestos, presentó el libro de compraventas. Estos libros son en hojas sueltas que son contabilidad computacional que tenía autorizada. Sí, los libros de compraventas son hojas sueltas, es decir, autorizadas, timbradas por el Servicio de Impuestos Internos. Lo que pasa que anteriormente los libros eran foliados, pero venían como libros con hojas correlativas, hecho como libro, como cuadernos. Y después se hacía el libro. Bueno, después ya se modificó y se autorizaba hojas sueltas que son computacionales, entonces las podían pasar por la impresora.

Sí, yo notifiqué personalmente a don Jorge Inostroza Cerda en las oficinas del Servicio de Impuestos Internos. Que debe presentar la documentación, facturas, libros de compraventas, contabilidad completa, la cual nunca recibí. Me refiero, contabilidad completa se refiere a los libros contables, diario, mayor, bajo, balance. En esa oportunidad solamente yo recibí la parte de IVA, que tiene que ver con facturas de venta, de compra y libros de compraventas. Ahora, normalmente la ley permite que se notifique al contribuyente personalmente en cualquier lugar, así lo dice el código tributario. En esa oportunidad yo cuando se me asigna el caso, yo lo voy a hacer al domicilio de la empresa, pero no tengo buena respuesta ese domicilio, no obtuve los antecedentes, por lo tanto, yo aproveché, se puede decir aprovechar, no sé, que el contribuyente estaba en las oficinas y se la notifica. Y eso ocurrió también. Después habló que se efectuaron una serie de sucesivas prórrogas hasta la entrega de la documentación. Sí, se notifica, después pide una prórroga, la cual también lo establece el código, que se le puede dar una prórroga de un mes, el cual se le dio. El mismo contribuyente, el señor Jorge Inostroza pidió la prórroga. No personalmente, sino se pide a través de ir a la oficina o solicitarlo así en forma escrita. Bueno,



primero cuando se la notificó para llevar la documentación se le entrega el documento en la cual él firma para que y se le da un plazo. Y después, como le dije, después de varios hechos, en marzo del 2017, él presenta los antecedentes y ahí tuvimos una conversación. La conversación de eso, bueno, primero que no estaban todos los antecedentes, perdón, no estaban todos los antecedentes y solamente estaban parcializados. En esa oportunidad me comenta de la empresa, me comenta que su actividad era laboratorista y que trabajaba en eso y que por eso había pensado en la empresa, en algo. No crear la empresa porque la empresa ya estaba como ellos compraron los derechos, después compraron la participación, porque primero compró su cuñado, el esposo de la hermana, el don Daniel Martínez, compró el 25 % y luego compró la hermana Susana Inostroza el 75, %, es decir, ahí es en el 100. %. Y ahí en esa oportunidad nombran a don Jorge Inostroza como representante legal de la empresa. Solamente eso, que él necesitaba esa empresa y que él no. ¿Entonces, eso es lo que podría agregar? No recuerdo más detalle, pero conversamos varias cosas. Se exhibe documental, el cuaderno de recopilación de antecedentes. Ahí vienen varias partidas.

Bueno, yo con lo que puedo decir, este es un libro de venta del de febrero de 2015. Primero hay que explicar que el folio significa que está timbrado el libro, que el servicio impuesto interno lo timbró y le dio una numeración correlativa. Es el folio del libro de recopilación de antecedentes que se folió, la documentación que se adjuntó. Y en este libro se ven dos facturas registradas, dos facturas de venta. Constructora Vialmix Limitada. Sí, pero sale don julio Albornoz Campos, aquí en este. ¿Y nos puede aclarar esta referencia, por qué sale ese libro? Se autorizó en el servicio cuando todavía la empresa no había pasado a manos de los nuevos socios. Quedaron hojas porque yo anteriormente dije que la empresa había sido en cierta manera comprada por dos nuevas personas, la señora Susana Inostroza y el señor Daniel Martínez. Febrero del año 2015. Y entonces, para claridad, a esa época, ¿quién era representante legal? A ver, el 27, yo acuerdo la fecha porque es mi cumpleaños. 27 de febrero del año 2015. Ahí ocurre los hechos de los cambios de los socios se fijan como lo que había mencionado anteriormente, el 27 de febrero de 2015. Entonces la documentación ya estaba timbrada, estaba autorizada anteriormente. En este libro aparecen las ventas realizadas por la constructora Vialmix que fueron dos, dos facturas, la factura 76 y la factura 77. Ya, la factura 76 en cuanto al IVA, ¿cuánto IVA mantenía? El IVA de la factura 76 es \$39.321.019 y la factura 77 dice \$4.693.956, da un total de \$44.000.055.

Pasamos al siguiente documento, Declaración mensual y pago de formularios de impuestos de IVA. ¿De qué empresa? Dice Constructora VIALMIX Limitada. Ya, en el folio 502 señala Crédito, facturas emitidas y estas son por \$23196038. Dice también si corres hacia la izquierda hay otro más a la izquierda, hay facturas, cantidad de facturas emitidas, dicen dos. Efectivamente son dos, pero no es el monto que vimos en el libro de ventas. En el libro de



ventas **44000956**, ahí pusieron **23196038**. Ya hay una diferencia de impuesto de IVA. Para hacerlo más gráfico todavía, qué es lo que pasa con este impuesto de IVA que no se declara, no entren arcas fiscales, se está subdeclarado el impuesto, está impidiendo al fisco de los ingresos correspondientes.

Pasamos a la siguiente foja, es también el libro de ventas de marzo 2015, ahí registra una factura. ¿Para qué empresa? Libro de ventas marzo 2015 de constructora Vialmix imitada.

¿Doña María Esther, entonces, yendo directamente al punto, se puede indicar cantidad de facturas y el IVA? Una factura por 10875679. Ese es el IVA. Es el IVA. Folio cuatro. Después en el folio cuatro se indica dos facturas. No, perdón, folio cuatro. Cuatro es el folio. Se indica. Puede La cantidad de facturas emitidas. Dice una, perdón, dice una. Y la cantidad del monto es de 4000870 es 4000875. 675. 679. 4000008. Seis. Consta el libro registra 10000875,679 y en el formulario 29 de IVA declaró 4876078. Entonces subdeclará el débito fiscal. ¿Qué significa subdeclara? Subdeclara significa pagar menos impuestos, colocar menos débito fiscal, menos ventas que las realmente realizadas.

Pasamos al siguiente julio, el **mes de junio 2015. Ahí emite una factura de venta por el monto de 32107421 de impuestos.** ¿Y la declaración de impuestos? Y las ventas, o sea, las compras suman un monto de 1000423, 655. Luego nos vamos al formulario 29 en el folio donde indica que emitió una factura más cerca, por favor. Ya, ahí sí emitió una factura de venta por el monto de 3000002, 10742. Y anteriormente yo había dicho que eran 32170421. Ahí subdeclará el débito fiscal y en el crédito fiscal dice crédito no más. Después dice cantidad de documentos recibidos del giro, es decir, las facturas de compra, y ahí dice cantidad 18. Sin embargo, el libro dice 10 facturas. Registra el libro y acá le pone 18 en la declaración de impuestos. Y el monto está en el código 520, es 2895442. Y yo había dicho que el libro dice 1493655. Por lo tanto, aumentó el crédito fiscal, lo cual indica con la subdeclaración de débito más el aumento de los créditos, estamos pagando menos impuestos.

Es que el crédito fiscal son las compras que tiene la empresa. Compras para realizar su operación, su trabajo. Y en este caso, al aumentar el crédito fiscal estamos diciendo que compramos más. Pero esas compras deben estar respaldadas con documentos, con facturas. La empresa debe respaldar su crédito fiscal con facturas. Y en este caso el libro debe consignar todas las facturas. Y esos antecedentes del libro son los que se vacían a la declaración de IVA. En este caso no ocurrió. Puedo agregar también que como tuve la documentación, en ningún momento encontré más documentos que no hubieran estado registrados en el libro y que hubiera no habían pasado por el libro y que sí, después los colocaron en la declaración de IVA, pero no estaban, no sobraban. No sobraron ninguna factura.

Y como no tenía los libros diario mayor, los balances, no se pudo llegar y al final no determiné el impacto en que tenía estas irregularidades en la declaración de renta, de impuesto a la renta en los periodos, en este caso debe haber sido



2017 2018, porque son comercial 2015-2016 2016-2017. Julio. Aquí hay una factura, una factura emitida por vía limitada, la factura 91 al MOP, dirección de vialidad. Eso es de Temuco. La fecha, perdón, número de factura. **La fecha es el 18 de diciembre del 2015 y el monto del IVA es 2000257. 114.** El número factura 91. Siguiendo foja nueve, factura número 92, emitida por conductora Vialmix con fecha 22 de diciembre del 2015 al mop dirección de vialidad de valdivia por un monto de IVA de 16000325. Y acá dice también el detalle, dice que es por un estado de pago obra conservación seguridad vial.

La siguiente foja, la 10, acá está el libro de ventas de constructora Vialmix de diciembre de 2015. Y aquí veo claramente el timbraje del libro se ve clarito. Y aquí registra las dos facturas 91 92 por los montos señalados de IVA 2000250 y 114 y 16000325, lo cual suman un total de \$18329439. La siguiente, la foja 11 siguiente es el formulario 29 de constructora Vialmix de diciembre de 2015. En esta se registran, dice que hay cantidad de facturas del giro. Aquí definitivamente no declaró nada. Ni parte ni nada. No puso débitos fiscales. Ustedes se fijan que solamente coloca compras, créditos fiscales remanente, pero no colocó el débito fiscal. ¿Y, por tanto, qué es lo que usted constató en este mes, en este ejercicio? Y se subdeclaró el débito fiscal del periodo diciembre 2015 por 18329439. Antes sí se podía porque se ingresaba la información. Ahora como es contabilidad computacional y además estamos toda la información que llega, como las facturas son manuales, esta y las otras son facturas electrónicas, entonces se construye el libro automáticamente. Continuamos.

La foja 12, factura 97, Constructora Vial milésimo noveno del 7 de marzo del 2016, por un IVA de 19840975. También dice estado de pago número tres post conservación vial. Esta fue emitida a Dirección de Vialidad de Temuco. La factura 98, Constructora Vialmix del 15 de marzo del 2016 al MOP Dirección de Vialidad de Valdivia, por un estado de pago número tres obra Conservación de seguridad vial, por un IVA de \$11000287. Luego, en el folio 14 tenemos libro de venta de la constructora Vialmix, donde se registran factura 97 98 antes indicada y por los montos también señalados que suman un total de 31121072. La corresponde al libro de compra de marzo 2016 de constructora Vialmix en la cual se registran las compras del periodo y de los meses anteriores porque también se pueden registrar del mes anterior. Y en ella suman un total de 2000952. 180. Luego pasamos al formulario de constructora Vialmix del formulario de declaración de impuesto de IVA de marzo 2016, en la cual señala 25 facturas de compras. 25 factura de compras. Y si yo sumo aquí nos va a sumar las 25. En el caso del IVA de IVA débito indica solamente una factura y el libro dice dos. Después vamos a los montos. En los códigos 502 del débito fiscal dice 11280097. Debería indicar 31121072. En las compras dijimos que puso 25 facturas y corresponden 20. Declara en el código 520 13425985 y debería ser 2000952. 180. Ahí hay un aumento indebido del crédito fiscal y no, perdón, 13000425. Entonces hay casi 11 millones de aumento de crédito fiscal



indebido que no está respaldado por ninguna factura. El libro no lo consigna y solamente se colocó eso en el formulario 29. Y la factura de venta también de esos 32 millones colocó 11 millones. 31121072. Coloco 11000287. La es el libro de ventas de constructora Vialmix. Libro de ventas de octubre 2016. Si usted se fija, la numeración de la factura ya volvemos a una numeración electrónica empezando con la contabilidad. Las facturas son electrónicas acá porque dice factura número siete ocho nueve 10. Pero por 40 millones suma el total del IVA 40388572.

Consigna cinco facturas y el libro dice seis facturas, cinco facturas de venta. Y el monto que declara en el código 502 donde dice débito facturas emitidas es de 46156006. Qué significa eso está correcto. Ah, perdón, no, me equivoqué, hay un error. Son 48 millones el libro 388572 y el formulario 29 dice 46158006. Ahí hay una subdeclaración de débito casi por 2 millones al libro Eventos puro 2016 19 Pasamos al 40. Al 40. El 40 tenemos el libro de compras de mayo 2015 de Constructora Vialmix que suma, son dos fojas, 40 y 41, que suma un total de 14000719 \$201 y en la declaración de IVA de la constructora son 45 documentos y que suman 26000913, 687, es que tan chiquitito. 7 millones entre 75429 y la cantidad de documentos solamente crédito fiscal. En este periodo de julio 2015 aumenta el crédito fiscal y de \$8093 a 7375429 y la cantidad de documentos también es distinto porque son dos documentos de facturas de compras recibidas y aquí coloca 29 en el formulario de IVA. En el crédito fiscal aumenta indebidamente el crédito fiscal declarado en el formulario 29 de julio de 2015. Antes que continúe, lo que pasa es que no, considerando la edad, la hora será. No es factible. Ya que pase el testigo que aún está esperando lo dispensamos para mañana. Continúa. ¿Entonces, recapitulando, para julio 2015, cuál es la inconsistencia que usted constató? Bueno, la figura que ocurre en julio de 2015 es que contribuyente declara más compras en el formulario 29 de IVA y que las registradas en su libro de compras en ese periodo, lo cual indica que está utilizando un crédito fiscal indebido. Compras de agosto 2015. Conductor Vialmix tiene registrada en su libro de compras \$31719 y la cantidad declarada en su formulario 29 es de 5155489. Si se fijan también la cantidad de factura, dice que son 30 facturas recibidas. Sin embargo, el libro no las consigna esas 30. Dice un, dos, tres, nueve facturas registradas en el libro. Aquí ocurre lo mismo en el mes anterior, que utiliza un crédito fiscal indebido. En el folio enero de 2016, Constructora Vialmix, también libro de compras consigna un total de 655469 IVA de IVA en dicho periodo. Y en el formulario 29 de enero de 2016 de Constructora Vialmix señala que tiene crédito fiscal por 1000157. 574. 574 524. Está en la declaración del folio 48.

Desde el mes de enero del 2016 señala que tiene ocho facturas y aquí el libro consigna seis, tres, seis. Por lo tanto, hay un mayor crédito fiscal utilizado indebidamente porque no está respaldado.

Siguiente. 40 y 9 de septiembre de 2016, constructora Vialmix, libro de compras, registra un total de 14 millones. En el formulario 29 de septiembre de



2016, constructora Vialmix consigna un monto de 14000119. Dice 26 facturas y aquí hay dos. 21. 21 factura. Siguiendo. La corresponde a una respuesta del director del MOP de la Araucanía que se le hizo para solicitar certificar las facturas de venta número 91 y 97 emitidas por constructora Vialmix al MOP de Temuco. Y ahí señala que están recepcionadas, se adjuntan los triplicados, control tributario e indica que ellos las tienen consignadas en sus registros contables. Por tanto, este documento queda a entender. ¿Qué le permite constatar usted? Queda firme que estos documentos efectivamente se emitieron al MOP, a vialidad de Temuco. ¿Ellos la recibieron, la consignaron en su por qué se hace la certificación de los documentos? La idea es ver que a veces nos dicen que se anularon y que se perdieron las copias. Entonces uno manda al que recibe el documento que certifique que ese documento efectivamente o esa operación se llevó a cabo. Y eso fue lo que ocurrió. Luego también pasó lo mismo con los folios 55. En los folios en adelante, qué es lo que hay en el 52 en adelante, 51, 52, 53 son juntos porque está respaldando una respuesta, es un ordinario del director de la región de la Araucanía del MOP, dando respuesta a lo solicitado respecto a dos facturas 91 y 97 de empresa Vialmix limitada. ¿Y lo que se ve después en los folios 52, 53, a qué corresponde entonces? Son dos facturas, el triplicado de las facturas emitidas por Vialmix que estaban en poder de Vialidad.

El folio 54 es un ordinario que da respuesta a una petición realizada por el Servicio Impuesto Interno, por el Director del Servicio Impuesto Interno a la Directora de Vialidad de los Ríos respecto a dos facturas emitidas por constructora Vialmix, está en el folio, y a dos facturas emitidas a Vialidad de Valdivia, donde dan respuesta señalando que esas facturas las tienen en su contabilidad y ahí ellos adjuntan una fotocopia legalizada del original cliente de la factura recibida.

Bueno, yo recibo los documentos del contribuyente notificado, se hace un informe al jefe y ellos determinan si ese caso va a seguir, se va jurídica para que haga la revisión y si están los hechos bien configurados, 1 vez de eso se mejora el libro, el informe de recopilación de antecedentes, el que actualmente ustedes tienen en su poder.

Las razones para menos impuestos, yo lo que podría decir de esta empresa es que tenía una deuda tan grande en la tesorería que en alguna oportunidad cuando se hizo la recopilación de antecedentes, se hizo el informe y se puso una causal de preventiva por el jefe de departamento para la idea era poder pagarse, se puede decir, de la tremenda deuda que tenía la empresa con el fisco y tesorería pudiera a través del informe que se le hace del jefe de departamento, pudiera pedir el embargo de las facturas, del monto de las facturas a pagar por constructora Vialmix. Se hizo, pero el señor representante de Vialmix, don Jorge Inostroza Cerda, convenció a mi jefe y le levantaron la causal y pudieron seguir nuevamente emitiendo factura. No hubo tal embargo.



Porque nosotros igual hacemos el informe, le aplicamos intereses y todo, históricos más o menos son como 100, entre 100, 110 millones.

Documento 2.

En la página 11 está mi firma y del documento, si nos puede indicar qué es lo que tiene el documento, qué es lo que resume ese documento. Este documento lo que hace es informar a mi jefatura todos los hechos contratados con la documentación, todas las irregularidades que al principio expuse que eran de dos tipos, una subdeclaración de débitos fiscales que están detallados por mes 1, aumento de crédito fiscal también en algunos periodos. Esas son las dos irregularidades contratadas.

Ah ya, si puede leer textualmente el perjuicio fiscal histórico con respecto a los débitos fiscales declarados menores a los registrados en el libro de venta son históricos \$96.116.576. ¿Y eso para qué periodos? **A los periodos de febrero, marzo, junio, diciembre 2015 y marzo y octubre 2016.** La página siguiente, la página 11. El perjuicio de impuestos provocado por el uso de **créditos fiscales mayores a los registrados en el libro de compra corresponde a 37140093. Mayo, junio, julio, agosto 2015, enero, marzo y septiembre 2016.** El del estado actual de cobro de los impuestos dice el representante solicitó rectificar sus declaraciones de impuesto. Significa eso que está reconociendo las irregularidades, reconociendo su responsabilidad, los hechos, situación que se encuentra cumplida mediante declaraciones rectificatorias. Y aquí pongo yo que registra en Tesorería una deuda de \$342.861.182. ¿Podría indicar en qué fecha fueron esas rectificaciones? De lo que aparece ahí mismo en el texto, cuando el contribuyente reconoce los errores, presenta un formulario rectificando, pero le pregunta al fiscal qué fechas son las que esté misma conclusión los periodos son de marzo, bueno, no, esto ocurrió en marzo 2017 y 28 de marzo 2017 y 29 de marzo de 2017.

AL SII, se puede concluir que está suficientemente acreditado por los medios de prueba aportados que el contribuyente aumentó indebidamente los créditos fiscales y subdeclaró los débitos fiscales en los periodos antes señalados, ocasionando un perjuicio al interés fiscal del impuesto al valor agregado ascendente a la suma de 145506496, indicando que esta suma es actualizada.

En algunas oportunidades vino un contador, don Óscar Andrade, para pedir timbraje. Generalmente era eso, porque yo antes le explicaba de que como tenía tanta deuda y tenía todo el tema de a veces no presenta los documentos completos, se le estaba dando timbraje medido, digamos, se le autorizaba timbraje en la medida que lo necesitaba, en pocas cantidades.

La empresa Vialmix era administrada por don Jorge Inostroza Cerdá, que es el representante legal de la empresa. Él llevó los documentos, él reconoció sus irregularidades y como le dije anteriormente, el contador aparecía de vez en cuando para solicitar timbraje.

DEFENSA.



¿Cuándo concurrió a dejar la documentación, don Jorge Inostroza firmó algún papel en su despacho? ¿Tuvo que firmar algún tipo de documentación? Y se hace un acta de recepción de documento, solamente eso. Y los documentos que quedaron, que todavía creo que están en poderes de servicio.

Es que difícil que me acuerde, hace como siete años, ocho años, no me voy a acordar. ¿Pero se acuerda o no? No me acuerdo, así como es como muy específico eso.

En esa oportunidad no era necesario que fueras por escrito en ese tiempo, ahora sí, todo por escrito, porque iban a hablar con el jefe y el jefe, como la ley establece, la prórroga, cierto- Entonces se le dio el mes de prórroga, como decía la ley, pero no era necesario que fuera por escrito. ¿De la documentación que presentó don Jorge, se le rechazó alguna? La documentación que se recibió fue toda la que llevó y faltó. No rechacé documentación.

ACLARANDO AL TRIBUNAL, Solamente una aclaración. ¿Usted hizo una fiscalización, la ha expuesto, pero cómo el servicio de impuestos internos llegó a realizar esta fiscalización? ¿Por qué se produjo esta fiscalización? ¿Lo supo usted? Sí, en informe está explicitado mal, no recuerdo. Lo que pasa es que los casos se asignan de acuerdo con programas de fiscalización. Y yo estaba en el grupo Mediana grande empresa, entonces me asignaron por un programa regional MG que se llama Mediana y grandes. ¿Pero qué antecedentes hubo previo a que se hiciera la fiscalización o fue algo absolutamente aleatorio? Aleatorio. Y de acuerdo con la carga de trabajo que tenga cada fiscalizador se va se va asignando las tareas. Yo no sé la jefatura. Perfecto. Yo no sé qué a usted la pregunta. Muchas gracias.

3. RODRIGO MOSCOSO POLGATIZ, funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile, domiciliado en Arturo Prat N° 19, Temuco; quien declarará sobre los hechos materia de la acusación, participación del acusado; en particular de las diligencias, análisis de documentación, declaraciones, antecedentes de la investigación, sus resultados, conclusiones policiales y sobre cualquier otro hecho relevante.

Mientras me desempeñaba la brigada investigadora de Delitos Económicos Temuco, en el año 2019, se me encomendó una orden de investigar emanada de la Fiscalía Local de Temuco, por delitos contemplados en el Código Tributario. Esta denuncia fue originada en una querrela realizada por el Servicio de Puestos Internos, Dirección Regional de Temuco, en contra de don Jorge Inostroza Cerda, representante legal de la sociedad o empresa constructora Vialmix Limitada, por delitos contemplados en el Código Tributario. Lo que culminó en una recopilación de antecedentes que generaron el informe B del 16 de noviembre del Año 2018, confeccionado por la Dirección Regional de Impuestos Internos y suscrito por la fiscalizadora doña María Esther Alveal Guerrero, la que, con los antecedentes tenidos a la vista, llámese factura de



proveedores, facturas de venta, libros de compra, libro de venta, etc. de la empresa VIALMIX Limitada y presentadas por el querellado constató en general infracciones al Código Tributario, particularmente los artículos 97, específicamente al 97, relacionados con la subdeclaración de Iva débito fiscal o con la declaración en exceso del Iva crédito fiscal presentada por el querellado Inostroza Cerda. Motivo por el cual se le solicitó a la señora fiscalizadora Alvear que se presentara en la brigada para que detallara con mayor especificidad los hallazgos a los que ella había arribado y que virtió en el informe b de fecha 16 de noviembre del 2018.

Se refirió en particular al análisis de los antecedentes contables de vía ilimitada. Se refirió al que constató respecto del exceso de declaración del IVA crédito fiscal. Constató al analizar los antecedentes que el exceso se produjo en los meses de septiembre a diciembre del año 2014, mayo agosto del año 2015, enero, marzo y septiembre del año 2016, constatando un exceso de crédito fiscal de \$63 millones aproximadamente para todos esos meses acumulado todos esos meses a la fecha de conclusión de su informe de noviembre de 2018. También se refirió a la subdeclaración de IVA débito fiscal que ella constató al tener a la vista los antecedentes documentales y el exceso de IVA débito fiscal. Señaló a la fiscalizadora que había sido constatado que se habían producido en febrero, marzo, junio y diciembre febrero, marzo, junio, diciembre del año 2015, ahora está hablando de la subdeclaración y en marzo y octubre del año 2016 con un monto aproximado de \$96 millones de subdeclaración subdeclarado. Señaló además la fiscalizadora, señora Alvear Guerrero, que en su informe ella había constatado que el perjuicio fiscal a esa fecha ascendía aproximadamente a \$175 millones. Continúo señalando la señora Alvear que el querellado y había presentado unas rectificaciones a su declaración y señaló la fiscalizadora que con esto había reconocido su participación en los hechos. Con esa acción había reconocido su participación en los hechos. Eso es lo que declaró la fiscalizadora con esa acción de presentar esta rectificación. Indicó finalmente que todos estos antecedentes estaban disponibles y que si querían ser analizados debían ser solicitados por el Ministerio Público.

En este contexto, se entrevistó posteriormente ese mismo día a la Hermana del Querellado, doña Susana Inostroza Cerda, la que manifestó que su hermano, el Querellado, le había solicitado formar parte de la empresa vía 1000 limitada como socia, por cuanto él no podía figurar en esa calidad en la empresa, ya que eso lo inhabilitaba ante el Ministerio de Obras Públicas para prestarle servicios, pero sí podía figurar como representante legal de Vía del Bien Limitado. Su hermana accedió a tal petición, accedió a ser socia de la empresa, pero además el querellado le pidió al cónyuge de la señora Susana también formar parte de la sociedad. Eso es lo que señala en su declaración la señora Susana. La señora Susana indicó que es de profesión kinesióloga, que no tenía conocimiento del rubro al que se dedicaba la constructora bio limitada y que ella formó parte de la sociedad, pero continuó siendo su vida profesional como kinesióloga. Indicó



que ella no había recibido ningún beneficio de la empresa y que tampoco había trabajado la empresa VIALMIX, solo accedió a esa petición para ayudar a su hermano. Ese mismo día se entrevistó al cónyuge de la señora Susana, don Daniel Martínez, que en general manifestó lo mismo que su hermana, que su cuñado, el querrellado de INOSTROZA cerda, le había solicitado formar parte de la sociedad de la empresa constructora Vialmix Limitada y también había accedido solamente para ayudarlo, que tampoco había participado, no había trabajado en la empresa y que él había continuado con su vida como docente en una casa de estudio en una universidad de acá de la región. Ese mismo día se presentó en la Brigada Investigadora de Delito Económico el contador de la empresa, don Óscar ANDRADE, quien indicó que no respondería ninguna pregunta que se le realizara, por cuanto él no quería auto incriminarse y que prestaría declaración directamente en la fiscalía local de Temuco, junto con su abogado contador.

Ese mismo día se intentó contactar al querrellado en su domicilio en Temuco, no lograron ser el objetivo. Se contactó con el padre, se conversó con el padre que indicó desconocer el destino de su hijo, solo que estaba en Concepción. Y a continuación otra de las actuaciones que me solicitó el Ministerio Público puede remitir al laboratorio de criminalística de Temuco, el cual no antecedentes de VIALMIX limitada, para que el laboratorio, la sección contable, también emitiera su apreciación respecto de los antecedentes contratados por la Fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos. Esas fueron mis actuaciones en relación con esta causa.

¿Una única consulta, en relación con lo manifestado por los testigos, doña Susana Inostroza y don Daniel Martínez, de lo que usted recuerda, cuándo se les habría solicitado ser parte de Vialmix? La señora Susana indicó que fue en el verano del 2015 que su hermano le solicitó formar parte de la sociedad y lo mismo dijo su cónyuge, don Daniel Martínez, aproximadamente misma fecha. Una segunda consulta y con esto ya termino. ¿Y en relación con don Óscar Andrade Cid, el contador, usted puede indicar cómo fue la dinámica de entrevista con usted? Bueno, fue muy breve, no quiso contestar ninguna pregunta, dijo que él podía auto incriminarse, se acogió al artículo 305 y no duró. Fue muy breve su contacto conmigo en la Brigada.

A LA DEFENSA, ¿Don Rodrigo, usted revisó documentos contables o solamente se entrevistó con las personas que mencionó? Solamente se entrevistó a las personas y la documentación relativa a la Empresa Vialmix Limitada se admitió el laboratorio criminalística. ¿Y del laboratorio criminalística recibió usted algún informe final con alguna conclusión? Hay un informe, pero yo desconozco el contenido. ¿No lo recibió? No, yo desconozco el contenido del informe.



Prueba documental y otros medios de prueba

1. Informe de recopilación de antecedentes N° 17 B, de fecha 16 de noviembre de 2018, emitido por la Fiscalizadora María Ester Alveal Guerrero, de la dirección Regional Temuco del Servicio de Impuestos Internos.
2. NUE 2169146, correspondiente al cuaderno de recopilación de antecedentes de la contribuyente Constructora Vialmix Limitada, incluyéndose Facturas de Ventas emitidas por la Constructora, folios correspondientes en hojas sueltas del Libro de Ventas, folios correspondientes en hojas sueltas del Libro de Compras, copias impresas de los formularios 29, ordinario N° 355 de fecha 29 de octubre de 2018 del Director del Ministerio de Obras Públicas región de la Araucanía y ordinario N° 2580 de fecha 01 de octubre de 2018 del Director del Ministerio de Obras Públicas región de Los Ríos.

Prueba pericial.

1.- CAROLINA DIAZ MEDINA, casada, contador auditor, profesional perito de la Sección de Contabilidad del LACRIM de la Araucanía, quien depondrá en relación con el informe pericial contable N° 18/2021 de fecha 01 de octubre de 2021.

Bueno, a través del oficio 283 de la fiscalía se solicitó práctica de peritaje contable. Los documentos recibidos fueron de la Bridec Temuco, la 9146 y de la Fiscalía de Temuco, la recopilación de antecedentes del servicio impuesto interno. **Esta recopilación de antecedentes indica irregularidades de la constructora VIALMIX, donde señala subdeclaraciones de IVA débito entre el periodo de febrero del 2015 y octubre del 2016.** Perdón, para dejarlo claro desde ya se está refiriendo a los antecedentes del servicio impuesto interno, no los remitidos por la nube. No, eso es. La recopilación de antecedentes b indica estas irregularidades. Entonces continúe por favor. Dijo subdeclaración. Subdeclaración es de IVA débito fiscal entre el periodo de febrero del 2015 y octubre del 2016. Y lo otro es un aumento de crédito fiscal entre el periodo mayo del 2015 y septiembre del 2016. Esto produjo un perjuicio de un monto de 145000015. \$506496. Voy a repetir por favor la suma \$145506496. Bueno, ahora vienen las operaciones practicadas, donde el primer punto me refería a los débitos fiscales cuestionados por el Servicio Impuesto Interno. Yo tuve a la vista los libros de compra, perdón, los libros de venta de Vial Milésimo noveno entre el periodo febrero del 2015 y octubre del 2016.

En ese periodo cuestionado se registraron 14 facturas de venta, 1 nota de débito. **Se cotejaron el total de los débitos declarados en el formulario 29 con el total de los débitos registrados en el libro de ventas de Vialmix.** Resultado de esto, el total de los débitos declarados en ese periodo fueron inferiores a los débitos registrados en el libro de ventas. **Por lo tanto, entre febrero del 2015 y octubre del 2016, la constructora Vialmix declaró débitos en el**



formulario 29 con un monto inferior a los débitos registrados en el libro de ventas por un total de 96.116.496.

En el punto número dos me refería a los créditos cuestionados por el servicio impuesto interno, donde yo tuve a la vista los libros de compras de la constructora VIALMIX **en el periodo de mayo del 2015 y septiembre del 2016. El periodo entre mayo del 2015 y septiembre del 2016**, bueno, en ese periodo cuestionado se registraron **111 facturas de compra, 1 nota de crédito. También hice lo mismo, cotejé los totales de créditos registrados en el libro de compras con el total de créditos declarados en el formulario 29 de la constructora Vialmix. Resultado de eso, en ese periodo Vialmix declaró los formularios 29 crédito fiscal superiores a los registrados en el libro de compra.** por un total de 37.228.000.

Las conclusiones, bueno, en el primer punto, entre mayo, lo mismo, entre mayo del 2015 y perdón, entre marzo del 2000, febrero del 2015 y octubre del 2016, VIALMIX declaró IVA débitos inferiores a los registrados en el libro de ventas por un total de 96.116.496.

Y en el segundo punto, lo mismo, los IVA, lo mismo que le acabo de decir. Y ese fue el informe, señor fiscal. ¿

A LA FISCALÍA, bueno, como lo dije anteriormente, por una subdeclaración se declararon IVA débitos fiscales inferiores a los registrados en el libro de ventas y por un aumento de créditos fiscales. ¿Qué quiere decir eso? Que la constructora declaró más créditos fiscales en el formulario 29 con respecto a los créditos que tenía registrado en el libro de compra. Entonces, pasando en base a esta referencia a las operaciones practicadas en relación con el débito fiscal, usted indica que en el período de interés se registraron 14 facturas, 1 nota de débito. ¿Cómo opera esta documentación en relación con la ponderación a la cuantificación del IVA? Bueno, los registros que están en el libro de venta, en el primer punto, la sumatoria de eso debiera ser lo que declara mensualmente en los formularios 29 el contribuyente mirando al tribunal o cómo es que se efectúan entonces estas operaciones para determinar el impuesto que tiene que pagar una persona, un contribuyente. Bueno, con la sumatoria de las facturas registradas y lo que tiene que declarar la sumatoria de los créditos registrados. Se le exhibe cuadro de la pericia.

Bueno, en febrero del 2015 se registró en el libro \$44.014.955 y en ese mismo periodo se declararon \$23.196-038, diferencia de 20.818.917.

En marzo se registraron débitos por \$10.875.679 y se declararon 4.875.679 con una diferencia de \$6 millones.

En junio del 2015 se registraron \$32.107.421 y se declararon \$32.107-421, diferencia de 28896679.

En diciembre del 2015 se registraron débitos por 18329439 y no se declararon débitos en el formulario 29 con una diferencia de 18329439. Marzo del 2016 se registraron \$31121072 y se declararon \$11280097,01, diferencia de \$19840975.



En octubre del 2016 se registraron \$48388572 y se declararon débitos por \$46158006,01, diferencia de 2230566, dando una diferencia total de \$96116576. ¿Entonces, este monto de \$96116576 a qué corresponde? A débitos que no fueron declarados de acuerdo con los registros en el libro de ventas de la constructora. ¿Y qué implica que no se haya declarado este débito fiscal? Bueno, que no se pagaron esos impuestos por esas ventas que realizó la constructora Vialmix.

Pasemos a la siguiente lámina. Bueno, aquí están los periodos donde la constructora registra IVA créditos en los libros de compra con los totales de créditos declarados en el formulario 29, donde en mayo del 2015 se registraron compras por \$14719201 y se declararon créditos por 26913687, dando una diferencia de 12194486.

En junio del 2015 se registraron compras por 1493655 y se declararon créditos por 2895442 con una diferencia de 1400787.

Julio del 2015 se registraron en el libro de compras IVA créditos por \$8893 y se declaró en el formulario 29 créditos por 7375429 con una diferencia de 7366536.

En agosto del 2015 se registraron compras por 31719 y se declararon créditos por 5155489 con una diferencia de \$5123770.

En enero del 2016 se registraron créditos por 655469 y se declararon 1157524 con una diferencia de \$502055.

En marzo del 2016 se registraron compras por 124819 y se declararon 10473805 con una diferencia de 10598624.

Y en septiembre del 2016 se registraron 14078134 y se declararon 14119788 con una diferencia de 41654. Eso da un total de 37228912. A propósito de la. Porque es evidente lo que estamos viendo todos aquí. A propósito de la columna IVA Crédito libro de compra para marzo del 2016, usted señaló una cantidad positiva y hay que ser una cantidad negativa. Sí, pero eso tiene que haber sido un registro del tipeo del computador. Pero es positiva, en definitiva.

¿A qué corresponde ese monto? A créditos declarados. Un aumento de créditos declarados de la Constructora VIALMIX, de acuerdo con los Iva créditos registrados en el libro de compra. ¿Y qué implica un aumento de créditos declarados? Que al aumentar los IVA créditos, rebaja el impuesto a pagar en ese periodo determinado.

Y hay una nota de crédito de 2952180, donde es mayor y por eso resulta ser negativa. ¿Es mayor a qué, perdón? Al total de los créditos.

A LA DEFENSA ver, cuando yo digo que tuve, cuando hablo de las 14 facturas, 1 nota de crédito, eso es lo que está registrado en el libro. Por eso que empiezo a hablar de los libros de ventas o libros de compra y eso es lo que está registrado. ¿Perfecto, pero las tuvo la vista esas 14 facturas o no? Porque el informe dice que sólo tuvo a la vista cuatro. Si, tuve a la vista cuatro. Y respecto del libro de compras, dice que hay un periodo cuestionado donde se registraron 111 facturas, 1 nota de crédito. Las tuvo a la vista o no las tuvo a la vista. Y qué es



lo que tuvo a la vista entonces, aparte el libro de compras, libro de ventas, formulario 29, solamente esos documentos. ¿Y esos documentos por quién le fueron entregados? Bridec Temuco y Fiscalía de Temuco. ¿Y usted sabe cómo llegaron a la Bridec? ¿Ya, Fiscalía Documento? No.

No, me aboqué a esos meses, que eso es lo que cuestiona impuesto interno. Solamente se abocó eso.

Y respecto de lo que es entonces, libro de compra, solamente se abocó a esos siete meses. ¿Y respecto de todo este periodo febrero 2015 octubre del 2016, en los formularios F solamente le entregaron, respecto del primer caso, esos seis formularios? No el resto de los meses.

Solamente le entregaron esos formularios F. Perfecto. Usted dice también en su informe, bueno, que tuvo a la vista los formularios y que estos no tenían fecha de presentación. ¿Nos puede explicar eso? Todos los formularios, abajo dice la fecha, porque presentan el contribuyente y su fecha. ¿Y el pago? Aquí no existe nada. ¿Es normal eso? Es que va a depender, porque de repente los contribuyentes sólo declaran y queda ahí el formulario hasta que no pague y ahí aparece su fecha. ¿Y estos se encontraban pagados o no? Es que, si no tiene, no me salía esa información, no lo puedo saber.

DÉCIMO: Prueba rendida respecto de la acusación 2.

PRUEBA TESTIMONIAL.

1.- ALEJANDRO NAVARRETE AÑASCO, Abogado, domiciliado en Manuel Bulnes Nro. 0215, Temuco.

DÍA 3.

Bueno, yo fui durante el año 2018 y aproximadamente finales del 2020, Fiscal instructor de sumario de la Contraloría Regional de La Araucanía. En esa función me tocó desempeñar, como decía, este cargo de fiscal instructor y tramité una cierta cantidad de sumarios en lo que nos convoca en particular, **el sumario que se derivó de las conclusiones del informe final número 44 del año 2017 de la Contraloría Regional de La Araucanía**. Y bueno, a mí me tocó sustanciar la tramitación de ese sumario administrativo, que es una acción derivada que se llama del informe antes individualizado. Se le designó como fiscal instructor, por tanto, mi función fue tramitar ese sumario administrativo que estaba en las conclusiones del informe antes señalado.

Claro, generalmente la Contraloría elabora lo que se llaman informes de investigación especial o informes de auditoría. Y en ese contexto, bueno, en este caso en particular, la Contraloría recibió denuncias y esas denuncias fueron las que dieron pie a la ejecución del informe. La Contraloría, entonces, una vez que decide seguir adelante con una investigación, ya sea por la vía de una auditoría o de una Investigación especial, dispone una cantidad de fiscalizadores,



supervisores, hay un jefe de la Unidad de Control Externo que es el que después aprueba estos informes y bueno, se hacen las indagaciones pertinentes a propósito de estas denuncias. Eso concluye, como les decía, en un preinforme. Ese preinforme se les comunica a las partes involucradas, en este caso fue a la Dirección de Calidad de la región de Araucanía, para que haga las alegaciones que correspondan a propósito de las observaciones que se hicieran en ese informe.

Esa respuesta es analizada luego por el equipo de la Contraloría Regional y la Contraloría Regional después emite un informe final. De ese informe final se pueden derivar observaciones que se subsanan u observaciones que se mantienen. Manteniendo esas observaciones, la Contraloría dispone lo que se llaman acciones derivadas. Y esas acciones derivadas pueden consistir en juicios de cuentas, es decir, porque hay responsabilidad civil al respecto, o también la tramitación de sumario administrativo para perseguir la eventual responsabilidad administrativa de algún funcionario o funcionario de los servicios que están siendo investigados, auditados, según corresponde. Bueno, yo a lo que arribé luego de la de la revisión del informe y de la indagatoria fue que yo estimé pertinente formular cargo a un funcionario en particular, a **Jaime Silva Poblete**. Y bueno, yo a este funcionario le formulé nueve cargos. Esos cargos, una vez que se formulan y se notifican, en este caso a la persona inculpada, se le da un plazo para que pueda presentar descargos. Los presentó dentro de plazo. Esos descargos fueron desechados completamente por quien habla, por el fiscal instructor, en este caso yo. Y luego de la tramitación de la revisión de esos descargos, bueno, se hace lo que se llama una vista fiscal. Esa vista fiscal analiza el informe que dio pie a este sumario, los cargos formulados, los descargos, y luego se hace un análisis y a propósito de toda esa revisión, el fiscal decide si es que los cargos se mantienen o se levantan. En este caso, como decía, yo formulé nueve cargos, los cuales se mantuvieron en su totalidad. Luego esa vista fiscal va a aprobación del jefe de la unidad jurídica de la Contraloría Regional, quien hace una aprobación, como digo, de esta vista fiscal. Y luego es el contador regional que teniendo a la vista lo concluido en la vista fiscal y la aprobación de esta vista fiscal por parte de la unidad jurídica se procede a dictar una resolución en que se propone al servicio en particular en este caso a la Dirección de Vialidad de la región de la Araucanía, la aplicación de una sanción que viene, como digo, propuesta por la Contraloría Regional, que en este caso fue la sanción de destitución.

Él era el inspector fiscal de los contratos que se investigaron.

AL CDE:

Efectivamente, en su descargo el inculcado para efectos del sumario señaló esto. En su descargo no recuerdo respecto de cuál cargo en particular, pero sí dijo que había **realizado pagos en verde**. Yo tuve acceso a la carpeta días antes para poder hacer recuerdo, porque este fue un sumario que tramité hace varios años atrás. Pero efectivamente en los descargos el señor Silva Poblete indicó lo



anterior. ¿Le dio alguna explicación en qué consistían estos pagos en verde o se entendió? No, la verdad es que la respuesta a los descargos fue bastante vaga, no hizo referencia a documentación técnica en general, solo en algunos cargos en particular aportó algún tipo de prueba más específico, pero en general la respuesta a los cargos formulados fue muy vaga. Por lo mismo, yo como fiscal instructor no pude hacer más que desestimar todos los descargos que hizo en su oportunidad.

¿Sí, también sus descargos indicaron que esos pagos en verde tenían que ver con el cumplimiento de metas institucionales y derivado de eso profundizó un poco más en qué consistirían estas metas institucionales? No. ¿Por qué? Porque en esa instancia de la tramitación del sumario, los descargos que se presentan en un documento escrito, entonces yo no tengo oportunidad para hacerle mayores consultas, sino que yo solamente en la etapa indagatoria le pude hacer consultas relacionadas con las observaciones del informe final número 44 del año 2017 de la Contraloría Regional de Araucanía, que se habían concluido como parte del sumario administrativo que me tocó indicar. Yo en esa oportunidad es cuando pude hacer consultas más en específico, pero respecto de lo que usted me consulta, yo no tengo la oportunidad para yo podría haber realizado alguna consulta en esa etapa, en la etapa acusatoria, pero no lo consideré pertinente, sino que lo que yo recuerdo ahora es que sí, efectivamente hizo mención aquello, pero yo no hice mayores consultas al respecto, en particular sobre la consecución de metas institucionales, que esa hubiese sido la causa para el pago de partidas que si bien o no estaban ejecutadas o estaban ejecutadas parcialmente.

A LA DEFENSA. Entre el año 2018, 2019 aproximadamente. Usted dijo que este sumario, una de las razones por las cuales inició fue producto de que recibieron denuncias. ¿Denuncias de quién? Eso no me queda claro en este momento no lo recuerdo, pero hay muchos casos en que la Contraloría recibe denuncias de particulares que solicitan reserva identidad. Entonces puede haber sido el caso de que ésta hayan sido denuncias de personas que solicitaron reserva de identidad, pero yo me acuerdo de que esto eran dos contratos de acceso a comunidades indígenas, así que me imagino que pueden haber sido también algunos de los comuneros de esas comunidades que necesitaban en el fondo la conservación de esos caminos.

En este momento no recuerdo, pero muy probable sea un Julio Soto. Bueno, él es funcionario actualmente de la Contraloría Regional y él estaba dentro de una subunidad que es la unidad de obras, en el fondo, que está dentro de la unidad de control externo de la Contraloría Regional. Perfecto. ¿Dígame, y en qué fecha habrá sido enviado esta persona? No tengo certeza, eso está en el informe. Debe haber documentación que acredita con actas la presencia de funcionarios de la Contraloría en sitios específicos para poder revisar la consecución correcta o no de las obras que estaban contratadas.



El punto es que en ningún caso las conclusiones son de un fiscalizador en particular. Las conclusiones son de la contraloría en general. El fiscalizador lo que hace es revisar los puntos que su supervisor y el jefe de la unidad de control externo le solicita que revise. Pero las conclusiones no son de una persona determinada, son las conclusiones que la contraloría arriba. Por tanto, las conclusiones no son de Julio Soto, son las conclusiones del Contralor Regional, que es el que aprueba el informe. Mire, no recuerdo en particular las conclusiones en específico, eso está todo en el informe que me imagino que debe ser parte de la carpeta investigativa. Pero si usted me pregunta las conclusiones a las que se arriban en ese informe es de que hubo un actuar por lo menos desprolijo del inspector fiscal. Por lo menos. Porque las conclusiones a las que se arribaron fueron que casos en que, por ejemplo, en uno de los contratos **ni siquiera había un libro de obras, hubo casos en que hubo partidas que se pagaron y derechamente no se ejecutaron. Hubo partidas que se ejecutaron, pero se ejecutaron parcialmente, no hubo control respecto del propio autocontrol de las obras, no hubo comunicación con la Dirección Regional**, con el control de la propia Dirección Regional. Entonces, en general lo que uno puede concluir de ese informe es que hubo un trabajo muy desprolijo del inspector fiscal a cargo de esas dos obras y que por conclusión de mi persona como fiscal, uno podría incluso hablar de una **negligencia supina de esta persona, porque si es que hay un inspector fiscal que está mandado por normativa y por bases a revisar y controlar la ejecución de esas obras, él lo que le correspondería hacer y lo que debería saber cómo hacer es, bueno, revisar cómo se debían hacer esa obra.** Y por eso hablo de negligencia supina, porque es algo que él como inspector fiscal debería saber cómo hacer. Perfecto. Usted mencionó que dentro de la sanción que propuso fue destitución. ¿Esa sanción se llevó a cabo o no? Mire, nosotros como contaduría tenemos una facultad que distinta a la de poder aplicar directamente las sanciones, sino que nosotros le tenemos que proponer al servicio que aplique una determinada sanción. En ese caso y en ese momento en particular, estaba vigente la resolución interna 510 de la Contraloría que señalaba que iban a toma de razón aquellas propuestas de sanciones que fueran distintas a las propuestas por las contralorías en general y por la Contraloría regional en particular. En este caso, nosotros propusimos la sanción de destitución y entendemos que sí se aplicó la sanción de destitución al señor Silva. ¿Y cuándo se habría aplicado esa comunicación? Yo no la tengo, pero está disponible en la hoja de vida del funcionario y si yo mal no recuerdo, yo evacué mi vista fiscal el 29 de marzo de 2019 por una cuestión plazos, porque las destituciones después se tramitan, entiendo. En el nivel central tiene que haber pasado yo creo que por lo menos seis meses desde que nosotros notificamos la resolución de la contraloría regional hasta que la dirección de vialidad abdicó esta sanción al señor Silva. La última pregunta, don Alejandro. Bueno, usted dice que se envió una persona a terreno, que habría sido usted fiscalizador, que tuvo que acción en el periodo



en que usted justamente llevó a cabo esta investigación. ¿Pero desde que se terminó el trabajo en terreno, las obras, hasta que fue el fiscalizador, usted sabe cuánto tiempo transcurrió, cuántos años pasaron? Yo creo que ahí usted cometió una imprecisión, porque el informe se emite en un momento y el sumario se hace en un momento posterior. Entonces, no es que el fiscalizador se haya enviado durante la tramitación del sumario administrativo, sino que el funcionario concurrió a terreno durante la elaboración del informe, que es un momento anterior a la tramitación del sumario administrativo. Así que el fiscalizador estuvo en terreno durante el periodo de elaboración del informe y no de la tramitación del sumario administrativo. Son momentos distintos. ¿Y esa fecha no la recuerda? Si el sumario si el informe es del año 2017, tiene que haber estado el año 2017 en el terreno. Esas fechas, de todas formas, constan en los documentos del informe final del que estamos.

2.- HELLEN PATRICIA VALLEJOS LOBOS, labores de casa, domiciliada en Comunidad José Manuel Millaleo, comuna de Vilcún.

Comunera.

Es por la empresa que se adjudicó un PDI el año 2014, donde estaba a cargo o el dueño de la empresa es don Jorge Inostroza. La comunidad. Yo soy vicepresidenta y tesorera de la **comunidad indígena José Manuel Millaleo** desde el año 2001, donde a través de los años hicimos uso de nuestro derecho, cierto, e hicimos la reivindicación de tierra y fuimos beneficiados el año 2010 con un predio en Vilcún, Codingüe, la comuna de Vilcún, de 200 hectáreas, donde ahí, cierto, se nos entrega un paño y tenemos que ver cómo nosotros empezamos a trabajar en ellos sin, cierto, tener un proyecto de casa, de camino, de luz, nada de aquello. Entonces, cuando nosotros fuimos beneficiados, por decirlo así, nos dirigimos directo al MOP por un tema de la conectividad camino, y en ese entonces estaba don Alfredo Vallejo, que era seremi del MOP cuando nosotros nos dirigimos, y él nos dijo que nosotros teníamos que postular mediante la municipalidad de Vilcún, que en ese tiempo estaba de alcalde don Patricio Villanueva, estamos hablando del año 2010. Teníamos que postular con ellos mediante la municipalidad porque el MOP le asignaba 10 km de camino, que era el PDI. Nosotros obviamente ya fuimos y después volvimos donde el alcalde, y entre el ir y venir nos topamos hasta el año 2014, a fines del año 2014, donde nos entrevistamos con don Walter Chiuri y él nos dijo que efectivamente nuestra comunidad estaba en los 10 caminos que se le había adjudicado a la comuna de Vilcún. También estaba la comunidad Juana Camil y la comunidad Epueque, y entre eso reuníamos los 10 km de camino allí. Eso fue a fines de octubre del 2014. Nosotros fuimos a la municipalidad donde don **Rodrigo Garrido** nos dijo que en efecto él nos corroboró solamente la información que habíamos obtenido en el MOP. **Ahí el 2 de febrero del 2015, finalmente se llevó a cabo una reunión entre las comunidades beneficiadas, Municipalidad, cierto, la empresa y el MOP. Sí, el 2 de febrero del 2015,**



porque el proyecto **fue el 2014**, a fines, como **en octubre del 2014**, nosotros nos enteramos del proyecto. ¿Dijo Comunidad de Municipalidad y la empresa a qué empresa se refiere? **CSP, que era don Jorge Hinostroza**. Ahí nosotros recién conocimos a don Jorge Hinostroza. Y el residente de obra era Sixto, no recuerdo su apellido. También estaba el hay un no recuerdo, pero era don Osvaldo Mora, era el encargado, no sé, pero era del MOP. Y ahí nosotros hicimos recién la conexión donde se le dijo al dueño de la empresa, don Jorge Inostroza, tenían que avisarnos cuando ingresaron a la comunidad, que tenían que contratar en lo posible gente de nuestra misma comunidad para que pudiera trabajar en limpieza, en faja, en hacer cerco, ¿lo que lleva el proyecto donde él se comprometió, cierto? A que sí lo haría. **Estamos hablando que ellos dijeron que el 15 de ese mismo mes iban a ingresar a la comunidad para empezar los trabajos en el camino, cosa que no fue**. Aparte de eso, ellos tenían plazos, yo lo que no recuerdo si eran 180 días o 210 días tenía para ejecutar el proyecto en sí. **Y resulta que el 15 de octubre se suponía que la empresa tenía que llegar a la comunidad. Nunca llegó**. El 15 de octubre, a dos semanas del término de su plazo que tenían que ejecutar el camino, estamos hablando a fines casi de abril, la empresa llegó donde nosotros. Entonces ahí ya llegaron con maquinaria, había un puente que construir, había que destruir, obviamente destruirlo primero y después volverlo a reconstruir. Entonces ahí ellos empezaron dos semanas, creo, o menos, a lo mejor estuvieron en la comunidad. **La cosa que el puente se hizo a la rápida, todo con la premura que había, y después la empresa desapareció**. Nosotros, obviamente, como comunidad veníamos al MOP, íbamos a la municipalidad para ver qué había pasado, porque no se había hecho nada de lo que solamente un puente. Porque anteriormente, cuando don Patricio se fue, cierto, el alcalde ingresó, la señora Susana Aguilera, y ella nos regaló material, cierto, para que las partes más críticas bueno, nosotros como comunidad, primero contratamos maquinaria, hicimos una faja, porque obviamente teníamos que empezar a trabajar. Después de eso, don Patricio nos regaló tres transversales, el exalcalde tres transversales. En las partes más críticas ya se colocaron esas tres transversas. Después de eso, la señora Susana que venía nos regaló material sobredimensionado, contaminado, y en las partes más críticas nos colocó algo más fino. Estamos hablando del primer camino, que no afuera. Y resulta que con eso nosotros nos íbamos batiendo para poder ingresar a nuestros hogares. ¿Y en qué época estamos hablando ya más o menos? Estamos hablando del 2015. No, perdón, eso fue el 2013. El 2013, que fue antes que la empresa fuera allá.

Y que en esa oportunidad usted conoció a don Jorge Inostroza. ¿Cuál fue la intervención de don Jorge Inostroza en esta reunión? Se presentó y lo que yo recuerdo como directiva, haberle hecho hincapié en que contratara gente y que nos avisaran que tuvieron una comunicación directa para que, o sea, nosotros siempre íbamos a estar ahí aguja en lo que fueron haciendo. Y no recuerdo más de la intervención de don Jorge. ¿Y él en qué calidad se



presentó? Como el dueño de la empresa. Por el representante. Es el dueño de la empresa. ¿Usted, bueno, nos fija este hito, cierto? Entonces, 2 de febrero 2015. Y después habló que la empresa tenía un plazo de ejecución que no recuerda si era de 180 o 210 días. ¿Desde qué mes se comenzaba a contar ese plazo? ¿Desde, si mal no recuerdo, desde octubre del 2014? ¿Antes de la reunión? Exactamente, porque nosotros éramos muy insistentes. Al final llevaron a cabo esa reunión porque suponía que estaba dentro de los pasos que tenían que seguir, que tenían que hacer una reunión con la municipalidad, con las comunidades. Pero fue continuo esas dos semanas tampoco, porque si mal no recuerdo, hubo lluvia entre esas dos semanitas que estuvieron ahí. Si, ellos lo que hicieron fue el puente en esas dos semanas que más adelante nosotros insistimos en que ese puente no cumplía con las bases. Y donde don Silva, me recuerdo del apellido del Silva, el nombre no me acuerdo. Jaime Silva. **Donde don Jaime Silva, que tomó el puesto de este caballero Mora, el que fiscalizaba, ese caballero dijo que cuando fuimos nosotros con él, de tanto fuimos con él, le dijimos que el puente estaba mal hecho.** Él dijo que sí, que efectivamente estaba mal hecho. Entonces porque le hicieron a la rápida, el moho empezó a aparecer a las dos semanas. Había malla en ese puente. Entonces recuerdo que fue eso lo más que estuvieron. Los pilares, que no se le colocó suficiente. Para hay unos fierros que tenían que colocar en la estructura y no se le colocó. Entonces nosotros, bueno, ahí entré sacando fotos y lo otro que tenían que las bazas también no eran de la dimensión de que tenían que colocar.

Se hizo ese puente. Ya desarmaron ese puente e hicieron esa puente. Las transversales y los accesos se hicieron. Alcantarillas donde se encauza el agua. Por ejemplo, en una de un lado a otro, para que pasen, no sé, de una parcela a otra y va en el camino. No sé si me explico bien. Bueno, son los accesos hacia las casas, donde en un principio los accesos iban todos con muro de boca. Muro de boca para que obviamente el agua no se llevara el material que se le colocaba encima. Donde más adelante nos enteramos también de que había habido una modificación cuando se pidió una ampliación de plazo para ejecutar cierto término del camino, se quitó ese beneficio.

Eso se le quitaron. Los muros de boca no se colocaron los muros de boca. El espesor del material que ellos tenían que colocar tampoco fue el que debía ser. **Nosotros en la comunidad hay una persona, Patricio Leiva, él conoce el tema porque trabaja. Tampoco se llevó topógrafo. Después, como una risión, cuando nosotros insistimos tanto en un topógrafo, pintaron, iban tipografiando y pintaron en pastos, le echaron un poquito de pintura así, en un pasto.** ¿O sea, nosotros cuál era nuestro rol? Fiscalizar. ¿Y lo que queríamos que los dineros que fueron asignados, cierto? Para hacer esos 10 km de camino, realmente quedaran ahí y no se fueron para otro lado. Y ahora, las obras que derechamente a usted le consta que no se hicieron. Como ya dije, **los muros de boca, las cunetas, en algunas exageraron, en otras no se hicieron, se taparon algunas existentes.** Repito, el material no era la cantidad que debía



haberse colocado. Y en la modificación que hicieron nos prometieron 150 m más de camino, que tampoco se llevó a cabo. Los cercos que destruyeron tampoco los repusieron.

Se fueron a quiebra. Fuimos informados que se fueron a quiebra. ¿Y cómo lo hicieron ustedes para poder tener ese camino habilitado? Es que ellos dejaron una base. La cantidad de material efectivamente no fue la que debían colocar, pero colocaron material.

Que dije Sixto, no recuerdo su apellido, pero él jamás visitó la obra. Después, acompañado de don Jorge Inostroza, llegó don Patricio, que creo que por lo que ahí conversaban, era yerno de don Jorge. Y nos topamos con muchos personajes, por ejemplo, este caballero Bahamonde, que fue el que fue a pedir firmas para que nosotros dijéramos que, para el término de la obra, que recibiéramos la obra, cosa que nosotros nunca firmamos porque no estábamos conformes. Después de eso, recuerdo que fuimos como comunidad, o sea como mesa, pedimos audiencia, que en ese tiempo estaba el señor Joanet de intendente, porque la verdad que pasó ese invierno y los hoyos empezaron a aparecer en el camino. Por eso le decía que efectivamente echaron material, pero el espesor que tenía que cumplir aquello, no, no fue de ahí. **También como mesa hicimos un informe a Contraloría, entregamos también en el momento cuando nosotros nos tomaron la declaración, nosotros entregamos todo eso cuando nos tomaron la carta, las actas. Usted también habló de don Rodrigo Garrido, de la municipalidad.** ¿Quién es don Rodrigo Garrido? Él en ese tiempo era encargado de camino en la municipalidad.

Yo lo que recuerdo que nosotros fuimos asignados por dineros que tenía directos vialidad, un proyecto. Finalmente, después de todo lo que hicimos, nos designaron recursos directos de vialidad para poder terminar o mejorar nuestros caminos. Ahí fue donde le colocaron más material, donde colocaron señales éticas. Pero fue una asignación directa desde vialidad, porque como la empresa y se suponía que era con unos dineros que le habían retenido la empresa, cosa que nunca fue así tampoco nunca se cursaron multa por el tema de los plazos que ellos tenían que cumplir. **Así que también lo dijimos en una reunión donde el señor Robles, don Silva, el caballero Silva no estaba cumpliendo con su trabajo porque nosotros le habíamos dado informe de que los plazos estaban cumplidos y que no se habían cursado multas y todo.** Nosotros siempre estuvimos ahí. Le voy a hacer algunas preguntas que son como sueltas, no tienen coherencia entre sí. ¿Don Jorge Inostroza, cuántas veces usted lo vio o participó en actividades en terreno, en reuniones respecto a estos temas? Mínimo unas cinco veces. **Cuando lo conocimos, la reunión de la municipalidad y la comunidad, la empresa y el MOP. Después cuando llegaron con la maquinaria en abril de 2015. Las que recuerdo así bien puntuales, fue también cuando vinimos acá al MOP y estaba él, estaba don Patricio, y fuimos en su vehículo, estoy hablando del vehículo de don Jorge y nos troza hasta la comunidad para ver lo que faltaba. Y ellos se comprometieron a hacerlo, cosa**



que nunca se hizo. Después, don Jorge me entregó la copia de la ampliación con modificación de plazos. Eso lo recuerdo bien, porque fue a mi casa y me entregó esa copia él. Igual fue extraño, porque debió haber sido, no sé, este Caballero Silva que hiciera esa entrega, o medio de la municipalidad.

¿Usted habló que esto eran unas mejoras en 10 km de camino y también nos habló de la comuna, pero en particular, qué sector o qué localidades conectaba esos caminos? **La comunidad de nosotros era un acceso nuevo, por decirlo así, que conectaba 14 familias.** Esa es la carretera que viene desde Codingüe hacia Vilcún. La comunidad Ancamil, ellos tienen de muchos años, pero es por donde pasa micro y conecta muchas familias.

QUERELLANTE CDE: La primera, solamente para aclarar el año. ¿Usted señaló que en el mes de abril recién se habría presentado a la empresa, a la comunidad, para hacer los trabajos, cierto? ¿Ya, pero qué año? 2015. Ya. ¿Después usted en su relato señaló que le habían pedido al señor Inostroza tener una comunicación directa con ustedes, cierto? Correcto. ¿Él se comunicó con usted de esta manera directa? Nos encontrábamos varias veces. A ver, de las veces porque iban interrumpidos a trabajar. Entonces, de repente ellos llegaban, llegaban, no nos avisaban. La comunicación no fue fluida. Entonces, igual debíamos tener un control sobre quién entraba y salía. Y no fue fluida la comunicación.

Bueno, nosotros obviamente teníamos toda la esperanza de quedar con un buen camino cuando ellos se presentaron y después tuvimos que gastar en tiempo, en dinero, dejar nuestra familia. Ustedes no dimensionan todo lo que tuvimos que nosotros andar. Imagínense reuniones, intendencia, venir acá a la contraloría, la municipalidad, el MOP, donde finalmente se cumplió, pero no por la empresa, sino fue por una asignación de recursos directos de vialidad. ¿Como no quedaron bien hechas las obras desde un principio, cierto? Hoy día las aguas cruzan, buscan su cauce, cruzan por donde ellas anteriormente cruzaban. Nosotros también en este momento a la municipalidad le tenemos pedido que vayan a colocar otras transversales que no estaban en el proyecto, pero si se hubiesen hecho bien las cunetas, si se hubiese llevado a lo mejor un topógrafo para ver por dónde se cansaba las aguas o como tenía que ser el proyecto, no estaríamos hoy día con la necesidad otra vez de pedir que nos asignen recursos para este camino.

La DEFENSA, Las comunidades eran José Manuel Millaleo, que es la nuestra, Juan Ancamil Epueque, es la otra comunidad, pero no recuerdo su no hay problema. ¿Respecto de su comunidad en particular, de estos 10 km, ¿cuál era la extensión que a ustedes les iba a beneficiar, que les correspondía a ustedes? Aproximadamente 2 km.



Si hicieron estos tubos son los que se conocen como tubos corrugados. Se instalaron. ¿Y en el resto de las obras, en los otros caminos? ¿Usted sabe qué ocurre en los otros caminos que no son de su comunidad? No sé.

Cuando hicimos el informe contraloría fue desde la mesa. Nosotros participamos en una mesa territorial, jefe, y en esa mesa estaba la comunidad Juana Camila, su presidenta, la señora Rosa Cayuqueo. Se hizo con mediante la mesa hicimos ese informe contra la orilla, nueve comunidades que éramos. Se realizaron los accesos. Correcto. Se realizaron entonces. Respecto a la conformación de plataformas, leyendo su declaración y a la carpeta granular de rodadura del camino también número cuatro, dice que también se realizó con un ancho aproximadamente de 3 m y que se puso material en toda su extensión. ¿Es efectivo? Sí.

¿Es efectivo que usted fue con ese experto en puente y él verificó que estaba todo correcto? **Lo que pasa es que anteriormente fuimos con don Jaime Silva y nosotros le dijimos lo que no se había puesto a don Jaime Silva y él dijo que efectivamente corroboraba que eso no estaba bien hecho.** Por eso se llevó el experto en puentes y según él, él dijo que estaba bien. Pero no se hizo ninguna intervención entre medio. En el puente se sacaron los tablones, por decirle así. Se sacaron los tablones y se volvieron a repintar. La empresa sacó los tablones y los volvió a repintar. Eso fue lo que se hizo. ¿Y ese experto que lo llevó? Don Jaime. Don Jaime. ¿Y recuerda cuando fuese experto en puentes que dijo que estaba todo bien? No lo recuerdo. ¿Pero quién pasó esa moto niveladora, esos rodillos, quién fue el encargado de hacer eso? Los trabajadores de la empresa.

Lo que pasa es que a la comunidad de nosotros fue este caballero Bahamondes, donde específicamente en la casa de mi hermana, y él quería que mi hermana firmara la recepción, donde mi hermana le dijo que ella no estaba autorizada para aquello porque no era directiva de la comunidad. No conforme con eso, el señor Bahamonde fue donde un socio de la comunidad, Héctor Quiroz Mora, donde obviamente le dice exactamente lo mismo porque él sabía que nosotros no le íbamos a firmar aquello. Desconozco si fue a otras comunidades a lo mismo.

Correcto, no lo sé. Perfecto. No lo recuerdo con exactitud.

ACLARANDO AL TRIBUNAL, ¿Qué es PDI? Es Proyecto de Desarrollo Indígena. Muchas gracias.

3.- LUIS EMILIO ROA ESPINOZA, Ingeniero Comercial, domiciliado en calle O'Higgins N° 453, comuna de Vilcún.

Seremi.

Bueno, con el antecedente que usted me da, claro, yo trabajé en Obras Públicas hace ya siete u ocho años y en el marco de ese trabajo que ejecuté en su momento, sí fui citado, no sé si una o dos veces por algún juego que se produjo durante ese tiempo. En general se me consultó por el proceso de licitación. El



proceso, cómo se nombraban los equipos técnicos y el rol que yo cumplía dentro de ese servicio en su minuto. Bueno, primero que nada, el proceso de licitación. Es de conocimiento público que un proyecto se licita a través de mercado público. Hay una comisión evaluadora de dichas licitaciones que se conforma por equipos técnicos. En nuestro caso, en el Ministerio de Obras Públicas y en particular los proyectos de la Dirección de Vialidad, los equipos revisores de la licitación eran equipos del área de la Dirección de Vialidad, los cuales eran nombrados por el director de vialidad de la época o en general siempre es nombrado por él. Posteriormente a esa licitación viene un proceso de adjudicación que también pasa por comisiones revisadoras, por equipos técnicos, revisora, por el equipo jurídico que existía en ese momento, hasta poder sancionar la licitación y adjudicarla al proponente que de acuerdo con las bases y a la evaluación del caso, haya sido el más conveniente para los intereses del fisco. Después a eso viene naturalmente la entrega de terreno de la obra hacia la empresa que se adjudicó el proyecto del caso. La dirección de Vialidad en general licitaba proyectos desde mantenciones muy básicas de caminos de ripio hasta infraestructura grande, como, por ejemplo, pero en particular los que usted relató en su declaración policial.

Ya, en ese caso, si mal no recuerdo, eran caminos que desarrollaban en comunidades indígenas fundamentalmente en ese tiempo conocido como **Programa de Desarrollo Indígena**. Esa era la nomenclatura que se le daba. ¿Tienen alguna particularidad este tipo de programas? La particularidad que tenía, a lo menos lo que a mí en ese minuto como funcionario, más bien como seremi de Obras Públicas se nos instruye, es que estos caminos debían en primera instancia tener participación ciudadana. ¿Por lo tanto, qué nos lleva a eso? Que teníamos que concurrir a la comunidad, tener un relato con ellos, una conversación con ellos, explicar de qué se trataba, el alcance de esto. Eso era fundamental. Y posteriormente a esas participaciones ciudadanas se desarrollaba la obra, la cual obviamente la fiscalizaba o hacía seguimiento de ella un profesional de la dirección de Vialidad. ¿En esta participación de la comunidad que usted narra, hay algún tipo de injerencia en la toma de decisiones de la comunidad? No, para nada. Lo que ocurre es que quien presenta en ese minuto el formato, el protocolo que existía, quien presentaba la necesidad era el municipio recogía los antecedentes de la comunidad, esos antecedentes se hacían llegar a la dirección de Vialidad y la dirección de Vialidad es, o era en ese minuto a lo menos, quien respecto de ese requerimiento hacía la evaluación técnica y formulaba un proyecto para la ejecución. Entonces, la participación, la incidencia de la comunidad es que plantea la necesidad de la existencia de un camino en un territorio de la comunidad. La participación. ¿Este estudio que usted indica como de planificación, quién lo hace? Dependiendo la envergadura de los proyectos, había dos fórmulas de hacerla. Uno, vía, por la vía directa que se llamaba, o sea, los propios equipos de la dirección de habilidad, que están conformados por ingenieros, geomensuras o



quien sea, podían perfectamente desarrollarlos. O en su defecto, si la cartera de proyecto era grande, o sea, involucraba muchas comunidades, muchos territorios, generalmente también existía la posibilidad de licitar carteras de proyecto para que consultoras la desarrollaran. Existían esas dos modalidades. ¿Usted sabe cuál fue la modalidad que aplicó a este caso? Eso no lo recuerdo. ¿Pasando a otro punto, don Luis, en relación con la ejecución o cumplimiento de estos contratos, tiene usted algún antecedente? El antecedente que tuve, y por lo cual entiendo que en ese minuto me fui a declarar a la PDI, era porque había algunos reclamos, algunas dificultades o no había conformidad de la comunidad respecto de la ejecución material de este proyecto. Entiendo que eso fue en ese término fui yo a declarar en ese momento a la PDI. ¿Esto, cuando se habla de proyecto, de qué proyecto en particular? Proyecto me refiero a proyecto de camino indígena en comunidades. ¿Camino? Un camino, en definitiva. Un camino que en general consistía en material granular, alcantarillas, cosas de ese tipo involucradas. No había en estos casos que desarrollar proyectos de pavimento, de asfalto. Las cuestiones genéricamente se hacían respecto a estos contratos, si es que se acuerda respecto a un contrato en particular. Sí, en particular. Recuerdo que esto por el que fui era un proyecto que se desarrolló en la **comuna de Lonquimay**, específicamente allá se desarrolló. ¿Y de algún dirigente o alguien de alguna comunidad que usted recuerde? Mire, bueno, tuvimos varios proyectos Lonquimay en la comunidad Bernardo Ñanco, en Pérez, sector de Icalma, Pehuenco, muchos sectores, en todos los lugares hacíamos hartos proyectos, pero en particular este entiendo que era la señora Felicita, algo así, Felicita, no sé por ahí el nombre, si mal no recuerdo, de esa dirigente del sector de Icalma. ¿Y esa dirigente, qué intervención tuvo ella? Cuando uno va, hago un poquito un retroceso, cuando uno va a la participación ciudadana, ella que representa a la comunidad, ella manifiesta el interés de la comunidad en desarrollar este proyecto en ese territorio. Y después, naturalmente que existe una relación de consultas, inquietudes que ella va manifestando, entre comillas, es como la vocera del territorio donde se desarrolla ese proyecto. ¿Y ya en la ejecución de este proyecto, qué injerencia tuvo doña, felicinda? La incidencia de todos los dirigentes, al menos el tiempo que yo estuve a cargo de esa Seremía, era más bien presentar las inquietudes, manifestar las dificultades que ellos observaban en el desarrollo del trabajo. Eso era lo que hacían fundamentalmente los dirigentes en esa época.

AL QUERELLANTE CDE:

El cargo lo desarrollé desde marzo del 2014 a marzo del 2018. Seremi de Obras Públicas. ¿En qué región? En la región de la Araucanía. ¿Don Luis, usted señaló que estos proyectos por los que usted declaró en la PDI tenían esta particularidad de la participación comunitaria, cierto? Así es. Yo he señalado que los proyectos se desarrollan con participación ciudadana. He dicho que hay un diseño, el cual recoge los aspectos técnicos. Aspectos técnicos que yo, en mi



calidad de seremi, no puedo calificar si eran los mejores, dado que la profesión o esa tarea no está radicada en el seremi, está erradicada estrictamente en la dirección de Vialidad.

En general los proyectos los manifiesta o la necesidad que manifiesta la comunidad de decir, por ejemplo, no, aquí hay una quebrada, aquí pasa un arroyo, aquí pasa esto. Sí, esos aspectos generalmente lo van señalando de tal manera que quien va desarrollando este diseño va recogiendo esos antecedentes y después los plasmará en el proyecto del caso.

Yo le puedo señalar que, a lo menos en ese periodo en que a mí me correspondió dirigir el ministerio acá en esta región, desarrollamos proyectos en todas las comunas. Me refiero concretamente a aquellos proyectos a los que se refiere su declaración policial. Ah, sí, sí, fue Lonquimay. Y puede haber otra comuna, pero me acuerdo precisamente de ese caso. Claro, porque fui a la participación ciudadana, fuimos a la entrega de terreno para que iniciaran el proyecto. Por eso lo recuerdo más patentemente. O sea, el hecho de que yo declaré en la PDI en su momento era precisamente porque hubo reclamo respecto de ese proyecto. El reclamo, así a grandes rasgos, si mal no recuerdo, era que la comunidad manifestaba que los anchos no eran los suficientes, no eran los que han sido establecidos en su minuto. Que ellos observaban o veían que la cantidad de material no era suficiente. Esos eran los planteamientos, las observaciones que la comunidad hacía respecto a la ejecución de ese proyecto. ¿Para el diseño de ese proyecto de Lonquimay también hubo participación ciudadana? Sí, era parte de la estructura de un proyecto. Tenía que siempre haber participación ciudadana. A ver, cuando uno a nosotros nos plantea los dirigentes que hay dificultad en el desarrollo de cualquiera obra, en este caso de los caminos, naturalmente que uno manifiesta eso, en primer lugar, a su jefe directo, que era el director de vialidad. Por lo tanto, si yo recibía un reclamo, haya sido escrito, verbal, el primero que sabía de esto era el director de vialidad, porque ese era el conducto regular que teníamos.

No, no, residente yo no tengo ninguna relación. No había relación con los residentes. Sí, con inspector de obras, a través del director de vialidad, porque él era su jefe directo.

LA DEFENSA, No recuerdo, no lo recuerdo. El período de tiempo super específico. No recuerdo que un proyecto podría durar desde la ejecución de tres meses, seis meses, invierno, verano. No lo recuerdo. ¿Dígame, para poder culminar, terminar una obra, recepcionarla como tal, cuál es el procedimiento? Un procedimiento súper técnico que lo fiscaliza y lo sanciona es el director de Vialidad. Por lo tanto, yo no podría referirme en específico a ello porque es una tarea que está radicada en la dirección de Vialidad, no en el cargo que yo ocupé en ese minuto.

No recuerdo la fecha, pero podría no sé si a inicio de otoño. No tengo una fecha así específica porque hace ya ocho años. Inicios de otoño. ¿De qué año? No recuerdo bien. Perfecto. ¿Aparte de haber ido al inicio de la obra, en otra



oportunidad concurríó? No recuerdo haber concurrido en otra oportunidad. Perfecto. Ok. ¿Usted dijo que de una señora dijo feliz o felicidad? No recuerdo exactamente. ¿Dijo que había recibido algún tipo de inquietud, reclamo, cierto? Por parte de ella. ¿Recuerda la fecha en que le haya hecho llegar estas inquietudes o reclamos específicamente de fecha? No. En mi caso, recuerdo que ella me llamó a mi teléfono. Ahí me hizo llegar su reclamo por teléfono. ACLARANDO AL TRIBUNAL ¿Dentro de ese periodo (SEREMIA) ocurrieron estas reuniones? ¿Usted fuera a ver la obra? Así es. Solamente eso. Bien, señor Ro, muchas gracias por haber concurrido.

4.- JULIO CÉSAR SOTO BRUNA, Constructor Civil, funcionario público, domiciliado en calle Manuel Bulnes N° 0215, comuna de Temuco.

Supervisor Contraloría.

Así es, el informe 44 del 2017. Justamente en relación con ese mismo punto, si nos puede indicar cuáles son las operaciones que se practicaron en el contexto de ese informe y el resultado ese informe. Y **este informe, esta investigación especial nace de dos denuncias que se recibieron por parte de comunidades indígenas que están citadas en el informe.** En vista de eso se determinó la realización de una investigación especial y comunidades, perdón, están indicadas al inicio del informe, son comunidades de Vilcún y Lonquimay que eran beneficiarias de este proyecto de caminos indígenas. Este informe inició la ejecución a finales del 2016, debe ser del mismo año. Las denuncias que ingresaron habitualmente se atienden durante el mismo año.

Es que se solicitan los antecedentes técnicos de este contrato, el desarrollo de este contrato a la Dirección de Vialidad y nosotros mediante nuestras potestades solicitamos más antecedentes que necesitamos y también luego vamos a terreno y contrastamos la ejecución de estos contratos respecto de lo que verificamos en terreno. Este tipo de contrato en términos técnicos es simple porque considera la ejecución de pocas partidas, uno puede decir como una base de un camino, una base superficial y otro tipo de obras complementarias, como pueden ser alcantarillas señaléticas o muros de contención para las tuberías que atraviesan los caminos. Me refiero en términos simples de verificar, comparando respecto a otros contratos que son mucho más complejos, como lo podría ser un hospital. Entonces, este contrato considera una serie de trabajos, de partidas que están especificadas por cada camino que está incluido dentro del contrato, de acuerdo con la licitación, a las bases técnicas y a los documentos técnicos complementarios que regulan este contrato. Entonces, se solicitaron los estados de pago, que los estados de pago establecen el avance de estas partidas mensualmente, habituales. Mensualmente.

Esto quiere decir que, si se contrataron 10000 m cúbicos de la carpeta granular, que es la carpeta superior del camino, puede ser que la empresa constructora haya avanzado en un mes 1000 m cúbicos y se le va pagando, se entiende, hasta una espera al final del contrato que esté el 100 % ejecutado.

Entonces, nosotros nos constituimos en terrenos y fuimos verificando la realización de estas obras de acuerdo con lo contratado. No recuerdo en este momento cuántos caminos eran, pero este tipo de contrato de conservación de caminos indígenas considera entre cinco o 10 caminos, no recuerdo la cantidad obra. ¿Y se especifican obras para cada camino, cierto? Aquí quiere decir esto, un camino podría tener tuberías de alcantarillado, que son las que atraviesan en forma perpendicular el camino, que permite el cruce del agua de un lado a otro, contra fosos, que son las zanjías, se podría decir, que van por un costado del camino, que permiten el saneamiento de las aguas para evitar que se rompa el camino. Una base inferior



que se denomina terraplén, que le da como el sustento y la nivelación al camino, para luego recibir una carpeta granular, que es la carpeta de arriba que uno habitualmente ve en caminos rurales, que es como el ripio, se podría decir, como el material granular que está a la vista. **Entonces, cuando visitamos en terreno, se constataron una serie de situaciones que están expuestas en el informe.**

Yo soy constructor civil, estudié en la Universidad Católica en Santiago. Estudié seis años esa carrera. Entonces, este inicio, cuando llegué a la Contraloría el año 2016, se me asignó la ejecución de esta fiscalización. Tengo que decir que esta **fiscalización, estos informes que hace Contraloría se asigna un fiscalizador, un supervisor y luego ese informe visado por estas dos partes también es visado por un jefe de la unidad de control externo y luego por el contralor regional.** Entonces hay cuatro visaciones y con un apoyo de un abogado. Esa es mi expertiz, soy constructor civil.

Estos contratos habitualmente se denominan PDI, programa de Desarrollo Indígena, creo que indica, tienen un número 1 año, correspondían al contrato de VILCÚN y LONQUIMAY; Y la empresa constructora que lo ejecutaba era **CSP Limitada**. La época de ejecución de los contratos, el del Vilcún creo que iniciaba el año 2015. Y el del Lonquimay iniciaba el año 2016. Habitualmente estos contratos duran seis meses, 180 días, pero estos dos contratos tuvieron aumentos de plazo que le aumentaron el doble del plazo que de acuerdo con mi criterio técnico **es bastante plazo duplicar el otorgado inicialmente.**

¿Y el motivo de esta ampliación de plazo, usted la sabe? No, no la recuerdo, no fue parte del informe el cuestionamiento de esas situaciones.

Entonces en un criterio del contralor regional, del jefe de fiscalización, se determina el inicio de esta investigación especial. Para iniciar esto nosotros solicitamos habitualmente, y así fue, los antecedentes a la dirección regional de vialidad, esto quiere decir como la carpeta de antecedentes de este contrato. Esto incluye los estados de pago, como lo expliqué anteriormente, las garantías del contrato, el libro de obra de cada uno de estos contratos que son donde el inspector fiscal va relatando los hechos más relevantes, informes mensuales que se encuentran obligadas a la empresa a entregar y todo otro expediente que pueda ser relevante. Pero para los avances uno principalmente se apoya en los estados de pago. ¿Y usted efectivamente tuvo a disposición toda esa documentación? Los estados de pago si los pudimos obtener y que fundamentaban los cuestionamientos, las observaciones que se plantean más adelante. Pero también el informe plantea que hay muchos antecedentes que no fueron proporcionados por el inspector fiscal, como puede ser el libro de obra, cierto, que cuenta la historia, los hechos más relevantes no fueron proporcionados, había muy pocas anotaciones, los informes mensuales que debería entregar la empresa constructora respecto del seguimiento y el avance de cada uno de estos que no fueron proporcionados y por eso se establece también un cobro de multas.

En el informe hay un antecedente muy relevante que no fue proporcionado, que era el **levantamiento topográfico de los caminos**, que le permite finalmente determinar cuál era la línea base en la que se encontraban los caminos y luego cómo se fueron agregando estas carpetas granulares sobre el camino y eso no fue proporcionado.

Bien, esta visita se realiza junto mi supervisor Waldo Marchant. Entonces nosotros vamos recorriendo cada uno de estos caminos y vamos haciendo levantamiento fotográfico y contrastando lo que indican las bases del contrato con lo que uno va comparando en terreno. Esto quiere decir que si estoy revisando un camino y el camino plantea que debe haber una carpeta granular, uno a simple vista podría observar que el camino no es, se podría decir como natural, en el sentido como que no es la misma superficie del resto que colinda. También obras de arte, que son estas alcantarillas, están especificadas la ubicación del camino donde debería estar. Si estas obras de arte en su límite a cada costado contienen un muro de contención que evita el desmoronamiento de estos caminos, delineadores verticales



que quieren decir la señalización, a veces incluyen puentes, esas obras de estructura. Entonces nosotros fuimos camino por camino de estos contratos constatando lo que veíamos en terreno respecto de lo que indicaban las bases administrativas y obviamente comparando con lo que ya se había pagado, no podría cuestionar algo que no se pagó.

Son obras de saneamiento que su finalidad son las tuberías que atraviesan de lado a lado por bajo el camino, que permiten que la acumulación de agua en un sector del camino pueda trasladarse al otro lado y continuar la pendiente. Lo que busca evitar esta obra de arte, estas tuberías o alcantarillas, es que el agua se acumule en un lado y empieza a atravesar por la parte superior hacia el otro lado, lo que genera un pequeño canal, rotura finalmente del camino.

En términos generales no fueron proporcionados estos informes que ellos le mencionaban que eran como fundamentales. El libro de obra no tenía muchas anotaciones, los informes mensuales no estaban, el levantamiento topográfico no fue proporcionado y por eso el informe establece también en su tercera capítulo, denominado examen de cuentas, una serie de multas que no fueron aplicadas al contratista por la no entrega de esos documentos. Esto siempre fue corroborado con las consultas formales al inspector fiscal. Cuando nosotros le pedimos los antecedentes, estos no fueron proporcionados.

Y también es muy importante mencionar que el proceso de estos informes considera una emisión de preinforme con carácter confidencial, que se le da la oportunidad al servicio auditado y a los funcionarios involucrados de emitir sus descargos.

Entonces se emite un **preinforme de observaciones**, se reciben los descargos y luego se emite el informe final. Por eso el informe final considera como los descargos que podría haber hecho el funcionario público o el servicio respecto a las situaciones que se le imputaban en el preinforme. Y luego ya entramos con quizás los aspectos más relevantes de este informe, que se constataron obras pagadas pero que no estaban ejecutadas en terreno. Estos informes tienen una estructura tipo para todos los informes, investigaciones, auditorías, en donde en un inicio se establece el fundamento de este informe y ahí se establece que nace a raíz de la denuncia de estos particulares.

Luego se establece el marco normativo que regula estos contratos, que son las bases administrativas, el reglamento de contratos que tiene el Ministerio de Obras Públicas también.

Luego se indican datos específicos de este contrato, esto quiere decir el monto, la duración, el contratista.

Y luego tiene un primer acápite que se denomina control interno, que nosotros denominamos situaciones de riesgo que promovieron la ocurrencia de las otras observaciones. ¿Qué quiere decir esto? Como falta de supervisión, muy pocas anotaciones en los libros de obra, situaciones que, si bien no incumplen algo directamente, sí promueven la ocurrencia de otras observaciones.

Luego tiene un acápite que se llama examen de la materia investigada, ahí ya se plantean observaciones que derechamente incumplen las bases o la normativa aplicable, como podríamos encontrar la falta de recepción del levantamiento topográfico, cierto, había una modificación del inspector fiscal, recuerdo también que nosotros se cuestionó por la falta de fundamentos de la modificación, porque en un principio habían sido asignados otros inspectores fiscales, pero luego en estos dos contratos se designó al inspector fiscal Jaime Silva.

Y el tercer acápite se denomina examen de cuentas, donde finalmente la contraloría establece un cuestionamiento y realiza un reparo de montos que vienen de un cálculo de las observaciones, esto quiere decir que se pagaron obras que no fueron ejecutadas y contraloría



establece un monto y se inicia un procedimiento de reintegro de esto, de estos montos. También por multas que no fueron cobradas.

Todo esto en el sentido de que contraloría entiende como un detrimento al patrimonio público cuando se pagan obras que no son ejecutadas o no se aplican multas que debieron haber sido cobradas. Esa es la estructura del informe.

Y finalmente están los anexos que acompañan fotografías de lo que se viene indicando. Tablas explicativas de las cantidades y montos que se vienen observando en el examen, principalmente el examen de cuentas.

La primera observación del examen de cuentas hace referencia a partidas pagadas y no ejecutadas. En el caso del camino del proyecto de VILCÚN, como era un proyecto que, a la fecha de nuestra visita, **a finales del 2016, ya estaba terminado**, se objetaron una serie de estructuras que uno podría decir **tangibles, o sea que deberían estar ahí**. A qué me refiero, Alcantarillas, Delineadores verticales. A diferencia de lo que uno podría decir como la carpeta granular. Porque uno de los argumentos que planteaba el inspector fiscal decía, pero ha pasado mucho tiempo, menos de un año, y no se encontraban los espesores que se habían contratado. **Por eso el primer acápite de Vilcun establecía la ausencia de una serie de elementos que habían sido contratados pero que no fueron encontrados cuando se realizó la visita por parte de contraloría.**

En ese mismo contrato también se cuestiona los espesores que fueron encontrados en Vilcún. ¿Qué quiere decir esto? Que, si en un sector habían contratado 40 cm de terraplén y luego 20 cm de carpeta granular, nosotros le pedimos al laboratorio de vialidad que fuera terreno, efectuara una fiscalización y determinar el espesor de estos. Entonces ahí ellos informaron el **espesor promedio de este camino eran 20 cm. Respecto de un camino que debería tener 60 cm.** Habitualmente está indicado el promedio encontrado **era cerca de la mitad de lo que había contratado.**

Entonces, hago la salvedad porque después voy a ir a lo del Lonquimay. Respecto del espesor de las carpetas granulares, en vista de que no había un levantamiento topográfico, Contraloría indicó por estas carpetas granulares, **en estos caminos se pagaron 90 millones aproximadamente. Pero como no había levantamiento topográfico y había transcurrido algunos meses, correspondía a la Dirección de Vialidad determinar las cantidades efectivamente pagadas.** Eso era de Vilcun, por una parte. Claro, pero como no estaba el levantamiento topográfico y había transcurrido un tiempo, se determinó el informe que le correspondía a la Dirección de Vialidad. Determinar la efectiva colocación, cuánto se colocó y cómo se controló. **Entonces esa fue una acción que se llaman acciones derivadas, que nosotros le damos esas instrucciones porque al final del informe se establece una serie de instrucciones a la Dirección de Vialidad** que luego se efectúa un informe de seguimiento. Eso sobre Vilcun.

En Lonquimay también quizá era el caso más importante, donde derechamente se pagaban carpetas granulares, terraplén o carpeta granular. Pero nosotros fuimos a visitar los caminos y no estaba ejecutado. Por eso era hacia el alcance con Vilcun, cierto que había carpetas muy inferiores y vialidad determinada. En este caso no estaban instalados. **Y cuando nosotros establecemos los montos, el informe indica en tal camino se habían contratado 2000 m cúbicos.** Y en la foto número tanto de ese informe se muestra que el camino **está a la huella, pero el camino es del mismo material de lo que acompaña de todo ese sector, que habitualmente en Lonquimay, esto en sector Icalma es como un polvo muy fino, había solamente una huella donde deberían estar terraplenes, no estaban.** Entonces se establecen una serie de caminos y partidas de estas carpetas granulares que nosotros contactamos en terrenos que no estaba, y ahí se calculan los montos y se determina lo que ahí se inicia un proceso de reparo donde la dirección de habilidad debería haber reintegrado o perseguido la devolución de esos montos mal pagados.



Claro, cuando hago el objeto me refiero, uno podría pensarlo como una torta, cuando se va construyendo un camino, porque tiene el nivel del suelo natural, luego vienen bases o subbases, se denominan en caminos más complejos, que podrían ser caminos asfaltados, y luego una superficie de rodadura en el nivel superior. Estos caminos, habitualmente por un levantamiento previo que se hace con justificación técnica, se determina y se contrata que en algunos sectores sobre el terreno natural debería haber un terraplén. ¿Qué quiere decir un terraplén? Que es un material que no es de la calidad de una carpeta de rodadura que va en la parte superior, pero que permite nivelar el camino. Cuando a veces hay sectores muy empinados o pasa agua y hay que bajar mucho, nivela el camino para luego recibir la carpeta granular en la parte superior. Había sectores que como el camino ya era plano, podían recibir directamente la carpeta granular. Que se va armando por caminos, por capas se va armando el camino. Y ahora, entonces, respecto del camino, para ir precisando, camino de Vilcún, camino de Lonquimay, en ambos casos se requería terraplén. Son varios caminos. Cada contrato contempla varios caminos en esos sectores. Y en las bases técnicas que se licitan y se contratan y se reciben ofertas por estas partidas, se establecen cantidades, partidas y ubicaciones para cada uno de los caminos. ¿Qué quiere decir esto? Que, mediante un levantamiento previo, que generalmente son consultorías, se determina que en cierto camino se requiere una alcantarilla, luego es un terraplén y luego la carpeta granular. Y eso queda establecido en las bases Técnicas del contrato. Y eso es lo que licita y lo que oferta finalmente la empresa y se le contrata para eso. **Pero en Lonquimay, cuando nosotros fuimos, esas obras no estaban. Y el detalle se encuentra en el informe, que principalmente en Lonquimay** eran carpetas granulares y terraplenes que habían sido contratados en tal ubicación de tal camino. Y nosotros nos constituimos y no estaban. Sin embargo, estaban pagadas.

Sí, la finalidad de los anexos es respaldar lo que se viene afirmando en la estructura del informe, la estructura previa. Entonces, el anexo número uno de ese informe contiene las fotos que fundamentan principalmente la ausencia de materiales ejecutadas en el terreno. ¿Luego vienen unos cuadros que para cada uno de los contratos indican en el camino número, por ejemplo, en el camino número uno se había contratado la partida de carpeta granular, no fue cuánto se pagó? El 100. %. ¿Y cuánto se encontró en terreno? Cero, porque no había carpeta granular en ese camino. Y esto se acredita mediante la foto número uno del anexo número uno. Entonces se van conectando, se van conectando el informe con los anexos. Y luego también incluye el certificado de los espesores detectados por el laboratorio regional. **Respecto al contrato de Vilcún, si recuerdan, yo les comenté que se solicitó al Laboratorio de Vialidad que fueran a constituir también se acompaña el certificado oficial del Laboratorio de Viabilidad.**

SE INCORPORAN ANEXOS DEL INFORME 44:

Imágenes 1,23 se refieren al contrato en la comuna de Lonquimay, a los caminos que ahí se indican y a la ubicación del camino. significa kilómetro, que quiere decir como 200, la imagen número un km quiere decir en el kilómetro a 200 m desde inicio del camino. Esas ubicaciones están balizadas, eso quiere decir que están georreferenciadas. Entonces, en terreno siempre se encuentra un letrero que dice inicio camino número uno, inicio camino número dos, del tipo que se advierte en la imagen número tres.

Entonces ahí uno va viendo eso en camino y sabe muy bien la ubicación y desde dónde inicia ese camino. La imagen un número dos material granular al costado del camino, que presuntamente uno podría entender que correspondía al material que iba a ser instalado en los caminos que estaban ahí, pero eso no es parte del informe, sino nosotros solamente cuestionamos que había material abandonado.



Camino número tres. ¿De qué comuna? Comuna de Lonquimay. ¿Esto asociado a qué contrato? Al contrato que hacía referencia a la comuna de Lonquimay. No recuerdo el número PDI de ese contrato.

la siguiente fotografía número dos, comuna de Lonquimay, al contrato Programa de Desarrollo Indígena PDI. Camino número uno de la comuna de Lonquimay, en el kilómetro una 7 que se indica ahí. Fotografía número tres, misma situación, material granular abandonado al costado del camino número dos de la comuna Lonquimay, kilómetro tres.

La fotografía número cuatro, si la puede describir primero y luego dónde está ubicado. ¿Esos tubos que se muestran ahí son los tubo HDPI, que significa Polietileno de alta densidad, que son las tuberías que se atraviesan, que se colocan bajo los caminos y permite el cruce del agua de un costado a otro, lo que anteriormente hablábamos de obras de arte, cierto? Y este está también en la comuna de Lonquimay, en el camino número dos. Está ubicado en el kilómetro número uno de ese camino y como lo mencionaba anteriormente, estaba abandonado al costado del camino y no estaba instalado.

La fotografía número cinco y número seis la quiero complementar. Ahí se refiere a una observación que indicaba el incumplimiento de especificaciones técnicas de ese puente que se muestra ahí, que nosotros en el camino de Vilcun, aquí estamos hablando del camino de Vilcún, un camino que no se indica ahí, se podría quizás consultar en el cuerpo del informe se especificaba esa estructura de madera para las alas del puente, que quiere decir como cuando uno ingresa al puente hay unas cepas como lo que contiene el acceso al puente para que no se desmorone. El segundo texto dice cables de acero dm 12 mm y cuando fuimos a terreno estaba instalado solamente un par de acero. **Eso incumple las especificaciones técnicas porque fue lo que se contrató.** Podría presumir que otras empresas que postulaban a la licitación presupuestaron los tres cables de acero y así con muchas otras situaciones. ¿Y en la práctica qué implicaba incumplir esta norma técnica? Incumplir la norma técnica, estas especificaciones técnicas son parte del contrato. Entonces, finalmente por lo que está pagando la Dirección de Vialidad.

¿Ahora, qué incumple esto? ¿Cada operación tiene su finalidad y para eso se contrata una obra de arte, una tubería permite que no se rompa el camino esto permite la contención del muro y podría implicar podría implicar quizás una menor durabilidad de esta estructura, de esta ala del puente, cierto? Un eventual desmoronamiento. Así se fue, se proyectó y así se contrató. Y en este caso constatamos que no fue ejecutado de acuerdo con las especificaciones. Página siguiente. Fotografía número siete.

Número siete, comuna de Vilcún. También muestra la ausencia de los delineadores verticales, que son estructuras metálicas que van a los ingresos del puente, que permiten una orientación para los usuarios. ¿Habitualmente son más o menos de la altura de 1 m, 1 m y medio, cierto? Que uno las vea al ingreso del puente, que son reflectantes. Habitualmente se ven así. Fotografía número ocho.

La fotografía número ocho, camino número tres de la comuna de Vilcún, en el kilómetro que se indica. Y estaba contratado, especificado y se pagó la instalación de los tubos de polietileno alta densidad que mostrábamos anteriormente. Y ahí se muestra que no fueron instalados, pero sí fueron pagados en los estados de pago. Misma situación, ausencia de tubos corrugados que en las bases técnicas estaban especificados para que se instalaran en ese sector y no fueron instalados. Vilcún, camino número tres, kilómetro cero 3. La d que dice ahí se refiere al diámetro de la tubería. Como puede verse, en la número ocho se especificaba un diámetro de 60 cm, cierto En el caso de la fotografía número nueve, es un diámetro de 75 cm. ¿Y estas tuberías de qué tipo de material son? Polietileno de alta densidad. Si uno lo ve en persona, es un plástico negro muy resistente. Por eso se instalan bajo este tipo de caminos.

Fotografía número 10. Camino de Vilcún número uno. Misma situaciones. ¿En este caso se había especificado el tubo corrugado, que quiere decir que tiene que relieve, cierto? De



polietileno alta densidad. ¿Pero en este caso el diámetro es mayor de 1 m. ¿Y qué es lo que se constató? Que no estaba instalado.

Fotografía número 11. El contrato correspondiente a la comuna de Vilcún, camino número uno. La ausencia del tubo que fue con que fue contratado y pagado, no fue instalado. En este caso de diámetro de 75 cm.

Fotografía número 12 corresponde al camino número cinco, también del contrato de Vilcún. Y muestra la ausencia también de la tubería que había sido pagada para instalarse en ese sector.

Fotografía 19. Ausencia de terraplenes en el camino número dos, kilómetro tres 2, en la comuna de Lonquimay. A eso lo que yo me refería anteriormente, que uno puede observar ahí, que está instalado solamente la carpeta granular en ese camino. Se ve cierto que ahí se instaló material granular, pero no están los terraplenes que deberían ir bajo el camino y debería haberse así, no tan pronunciada, quizá esa es la parte más baja donde está la sombra.

Fotografía 20. Se refiere a la ausencia de canales, fosos y contra fosos sin revestir en el camino número dos de la comuna de Lonquimay, en el kilómetro una 4. Esto como debía verse, deberían verse unas zanjás en los costados que permitan la circulación del agua, presuntamente, aquí lo entiendo por el lado izquierdo de la imagen, para que el agua pueda bajar por la ladera y correr por el costado por los fosos que deberían haberse ejecutado y presuntamente cruzar hacia el otro lado mediante una tubería, una obra de arte en otro sector.

Fotografía 21. La falta de la carpeta granular de rodadura en el camino número dos de la comuna de Lonquimay. Como se advierte ahí, terreno natural y no está la carpeta granular instalada, como podría mostrarse en la fotografía número 19.

Fotografía número 22. Camino número tres de la comuna Lonquimay. La ausencia de terraplenes, como se advierte ahí, es terreno natural, no está instalado por lo que se pagó.

Fotografía número 23. Contrato de la comuna Lonquimay, camino número cuatro, kilómetro un 78. Ausencia de terraplenes y los fosos que habían sido contratados para ese sector en ese contrato.

Fotografía número 24. Y sin existencia de sangrías en obras transversales. Aquí seguramente está relacionado con una observación, se disminuyeron partidas, esto quiere decir que hubo una modificación de contrato, que se disminuyeron partidas que contemplaban que al término o inicio de esta obra de arte, como se puede advertir ahí, se iban a construir unos muros de mampostería, que esto quiere decir como de hormigón con piedras que permitan como el confinamiento de la carpeta granular del camino para que éste no se desmorone, o existencia de sangrías que permitan como estructuras metálicas que permitan la bajada del agua y no terminen rompiendo el camino, porque esto con el futuro el agua va a bajar por ahí y va a terminar cortando el camino, como se puede apreciar ahí en ambos costados.

ANEXO N° 2.

Este anexo número dos se refiere al camino de la comuna de Vilcún, del PDI número 13 del 2014 y está relacionada con la observación del incumplimiento de espesores de la capita del examen de cuentas. Aquí, como le comentaba anteriormente, el contrato ya había sido terminado el 2015, nosotros nos constituimos el 2016 y constatamos en terreno una importante diferencia respecto de lo contratado. Quizá uno podría si se contrató un espesor de un terraplén de 40 cm y después una carpeta de 20 cm, uno podría entender quizás que el espesor no sean los mismos 60 cm, porque había pasado algunos meses, pero en algunos sectores habían 10 cm. Entonces le solicitamos la Dirección de Vialidad, al Laboratorio Regional de VIALIDAD que se constituyera en terreno e hiciera una toma de muestra de los espesores para esos tramos. Y los contratamos con los tramos que habían sido contratados.

Entonces se constataron una serie de diferencias, como digo, en el sector habían contratado 60 cm, pero habían 20, 30, y en la dificultad de constatar cuáles eran las



cantidades, los espesores efectivamente instalados, se optó en Contraloría por establecer y mostrar aquí cuánto fue lo pagado para ese tipo de partidas en esos caminos.

Y por eso nosotros le dijimos vialidad, esto que deben hacer ustedes deben acreditar cuánto fue efectivamente lo instalado, porque como no había controles topográficos, nosotros no los podíamos determinar, a diferencia de Lonquimay, que nosotros sí podíamos ver que la carpeta no estaba. El camino no estaba instalado.

En este caso sí estaba, pero la diferencia de los espesores no se condecía con lo que había sido contratado y por eso se optó como usted. En total pagaron 80, 90 millones, no recuerdo muy bien el monto que se estableció. Entonces si nos puede ir indicando por cada partida cuánto fue lo contratado, lo que sea indicar en cada uno de los cuadros.

En la primera columna se especifica la partida que establece primero la conformación de los terraplenes, luego la segunda línea también habla de los terraplenes y la tercera línea de la carpeta granular, porque hay una diferencia entre terraplenes de la primera línea y la segunda línea, porque lo inicialmente contratado en terraplenes, como se muestra ahí, son 2923 m cúbicos. Y luego en la tercera columna se indica que hubo un aumento de obra, es decir, aumentaron los terraplenes contratados por más de 800 m cúbicos. Pero también estos aumentos aceptan un límite al precio que fue ofertado por la empresa. ¿Si la empresa ofertó por decir, no sé si está el precio, bueno, un precio por el metro cúbico de terraplén vialidad puede aumentar, si no me equivoco, hasta un 30 % a ese precio, cierto? Entonces, si quiere aumentar por sobre ese porcentaje, el precio tiene que ser convenido entre ambas partes. Y por eso aparece la segunda línea que dice Formación y compactación de terraplenes a precio convenido. Como se muestra ahí en precio unitario, el precio convenido muchas veces es similar al precio ofertado inicialmente. El precio ofertado por la empresa eran 8546 por cada metro cúbico. Y luego el precio convenido para aumentarlos fue de 8500. Esa es la única diferencia del precio unitario de esas partidas. Y abajo está la carpeta granular, que el precio es casi \$10000. Entonces, para resumir un poco este cuadro, el total de cantidad contratada, estamos en la en la sexta columna.

¿Cuánto es el total contratado, considerando obras contratadas más la primera modificación de contrato? Bueno, ahí el total contratado, uno podría sacar un cálculo de terraplenes, son aproximadamente 8350 m cúbicos de terraplén. Y eso y luego la carpeta granular muy próxima a eso, que son 8548 m cúbicos de cada una de esas partidas. Perdón, solo para entender la primera cifra que usted dijo, los primeros 8000 es la suma de las dos primeras partidas, que está de arriba hacia abajo. Sí, 8000 son 8000, así es. Entonces, pero para que queden registrados, si puede hacer el desglose así tal como están las columnas. Entonces, formación y compactación de terraplenes, el total contratado, considerando el aumento de obra respectivo, son 3799,9 m cúbicos. ¿Y cuánto era en monto de dinero eso? Por esa cantidad y considerando el precio unitario, son \$32473945. ¿Y respecto del aumento de obra a precio convenido? A precio convenido, esos 4350 m cúbicos importan \$36975085. ¿Y ahora, respecto de la carpeta granular? La carpeta granular, considerando las obras contratadas inicialmente más el aumento de obras respectivo, totalizaba 8548 m cúbicos, que, si se considera su precio unitario, alcanza los 82000907. \$52. ¿Y ahora si nos puede ir detallando en relación con los estados de pago? El mismo ejercicio. Cada una de esas columnas de estado de pago indica las cantidades que se fueron pagando a medida que avanzaban las fechas del contrato. Por eso en la columna que dice obras pagadas, el estado pago número uno, aparecen porque no se pagaron esas partidas. Y luego va un aumento progresivo, como se puede ver en las horas pagadas. En el estado pago número dos se pagaron los terraplenes y también una cantidad de carpeta granular. ¿En el estado pago número tres se paga solamente esos 764 m cúbicos de la carpeta granular y el estado pago número cuatro contempla una cantidad para cada uno de los ítems y esos cuatro estados de pago se suman y dando que la totalidad pagada, el total de la cantidad pagada corresponde en la primera línea,



cierto, a 3799,9 m cúbicos que corresponden a la cantidad contratada, cierto? También para los terraplenes a precio convenido se completan los 4350,1 m cúbicos que era la cantidad contratada y para la carpeta granular los 8548 m cúbicos que es la cantidad contratada. Esto quiere decir que todas las partidas contratadas fueron totalmente pagadas en este contrato.

incorporar un cuadro, el cuadro número tres que se encuentra en la página 17 del informe número 44 2017 de Contraloría, igual es de la documental número uno, pero ya no anexo, sino que es el informe propiamente tal. Volvemos al informe, a la página específicamente la número 17. Bueno, este cuadro está relacionado con el que estábamos comentando anteriormente y este se realiza en base al certificado 318 emitido por el Laboratorio Regional de Vialidad, que también está en los anexos y ahí indican para cada uno de los caminos el resultado informado por el certificado de la Dirección de Vialidad. ¿Cómo se lee esto? En la primera línea, para el camino número uno, en el kilómetro 3,5, se había especificado, se había proyectado y contratado una carpeta granular de 20 cm, luego terraplén en ese caso no consideraba y el espesor que se pudo certificar por la Dirección de Vialidad eran de 9 cm. Entonces la última columna establece la diferencia respecto de lo contratado y lo constatado en terreno, que son la mitad, **quiere decir faltan 10 cm**. El camino número dos, misma situación, se contrataron 20 cm de carpeta granular, el espesor promedio fueron 12 cm, constatándose una diferencia de 8 cm. El camino número tres en ese caso consideraba, claro, consideraba una carpeta granular de 20 cm, 1 terraplén de 30 cm, el espesor certificado ahí fue de 10 cm, 10,6 y hay una diferencia de 9 cm por la nota que se hace ahí, que indica que de acuerdo con el certificado existe un material bajo la carpeta granular tipo terraplén, que no se logra determinar si es existente o fue colocado en el presente contrato, por lo que a ese material no le fue determinado su espesor.

Entonces, la diferencia solamente se hace respecto a la carpeta granular. En el camino número cuatro se había contratado 20 cm de carpeta más 30 cm de terraplén, y fueron encontrados solamente 26 cm, constatándose una diferencia de 23 cm. En el camino número cinco habían sido contratados 20 cm, fueron constatados 13,6 cm, constatándose una diferencia de 6 cm. Y en el camino número seis, 20 cm de carpeta granular, 40 cm de terraplén, constatándose un espesor promedio de 29,6 cm, lo que da una diferencia de 30 cm respecto de lo contratado. Solicito, magistrado, se tenga por incorporar ese segmento específico.

ANEXO 4:

Lo estoy viendo ya. Por favor, si nos puede indicar qué es lo que representa este cuadro y las conclusiones que se pueden obtener del MIR. Este cuadro también se refiere al camino de Vilcun, el PDI número 13 del 2014, y aquí están indicadas todas las partidas que fueron contratadas, pagadas y no ejecutadas. Y ahí se puede ir desglosando como los delineadores que comentábamos anteriormente y su respectivo respaldo fotográfico. En la fotografía que ahí se indica, como se puede ver aquí, no está considerado los terraplenes y carpeta granular, porque eso lo vimos en la observación anterior, y ahí tengo que ser muy claro que en la anterior no se estaba cuestionando la ausencia total de esas partidas que no fueron ejecutadas, sino que la diferencia era importante respecto de lo que había sido contratado. Entonces correspondía a la Dirección de Vialidad acreditar las cantidades efectivamente instaladas, a diferencia de las partidas que se están mostrando acá, que no fueron encontradas en terreno por contraloría, como pueden ser los delineadores, los tubos de polietileno que se indican ahí para cada uno de los caminos, y se va respaldando con la respectiva fotografía.

Bien, para el camino número cuatro, que está respaldado con la fotografía número siete, que ya se vio la partida de delineadores verticales al ingreso del puente habían sido contratados cuatro unidades al precio de 101000, por un total de 405000, y no fue ejecutado ninguna de



esas. En el mismo camino número cuatro, la misma fotografía mostraba señales verticales laterales. En los caminos secundarios habían sido contratados dos unidades por \$131000 cada uno, lo que da un total de 264, donde no se ejecutó ninguna de estas. ¿En el camino número tres, que está respaldado por la fotografía número ocho, los tubos corrugados de polietileno, en este caso de 60 cm de diámetro, fueron contratados y pagados 49 m. 49 m y cuánto fue constatado en terreno? Una tubería, en ese caso de 35 m. Existe una diferencia respecto de los metros, que es la unidad mediante la cual se miden estas tuberías, los metros instalados, el valor en ese caso eran de 90000 y por los 49 m lineales son \$1270000. Luego en el camino número tres, respaldado la fotografía número nueve, los mismos tubos de polietileno de 75 cm de diámetro habían sido pagados y contratado 21 m a cada uno a 119971 por un total de \$839000 y fueron encontrados en terreno solamente 14 m lineales. Enseguida el camino número uno, respaldado en la fotografía número 10, los mismos tubos, en este caso de 1 m de diámetro, habían sido contratados 28 m lineales, en este caso valen \$140000 cada metro, de eso queda un total de \$3922000 y en terreno no fue encontrado ninguna tubería, por eso se indica cero. En el camino número uno. Enseguida constatamos la fotografía número 11, tubos de polietileno de 75 cm de diámetro contratados y pagados 17 m, \$119000 es su precio unitario, dando un total de 1000319 y fueron encontrados solamente 6 m lineales de esa tubería.

En el camino número cinco, respaldado la fotografía número 12, el tubo de polietileno de 75 cm de diámetro también fue contratados 5 m, 119000 es su precio unitario por un total de casi \$600000 y no fue encontrado ningún metro, ninguna tubería en ese camino seguía. El camino número seis, fotografía número 13, tuvo polietileno 75 cm, fueron contratados y pagados 15 m, 119000 es su precio unitario, dando casi 1000800, no fueron encontrados en terreno, su 0 % se indica luego se corresponden las barreras metálicas doble onda de contención, que no se indica la ubicación específica del camino, estas son las barreras metálicas que están por los costados. Los caminos en sectores de curva o peligrosos fueron contratados 32 m a un precio unitario de cada metro lineal de \$38000, lo que da un total de \$1229000 y en ese contrato no se encontraron estas ondas metálicas en ninguno de los caminos, por eso se indica ahí se y finalmente en el camino número uno, respaldado la fotografía número 10, la construcción de canales, foso y contra foso sin revestir, fueron contratados 380 m lineales a un precio unitario de \$3588 por un total de 1000363, y ahí se indica el 0 % avance de esa partida. Continuamos con la página dos del mismo cuadro. Para el camino número seis, fotografía número 14, misma partida, la construcción de canales, foso y contra foso sin revestir, fueron contratados 40 m lineales al mismo precio, 3588, por un total de \$143000, 520 y 0 % de avance, porque no fueron encontrados en terreno. Luego, finalmente, el camino número cuatro, con la fotografía número 15, una reconstrucción de foso y contra foso, 600 m fueron los contratados a un precio unitario de \$3020, lo que da un total de 1000147. Y fueron verificados solamente una cantidad de 220 m lineales, lo que representa un 37 % de lo contratado y pagado. ¿Y entonces, en relación con el total de lo no ejecutado, según la misma gráfica, cuál es el total? El total de lo no ejecutado, sin incluir el IVA, se determinó que eran \$14303474, sin incluir el IVA. ¿Y ese monto no ejecutado, en relación con lo que usted pudo corroborar, fue o no pagado? ¿Efectivamente, este es el contrato de Vilcun, cierto? Bueno, todas las partidas contratadas, ejecutadas, fueron pagadas en su 100 % mediante los estados de pago.

En relación con el contrato Lonquimay. El contrato este, el cuadro que muestra las partidas pagadas y no ejecutadas en el contrato de Lonquimay correspondiente al PDI, al programa de desarrollo indígena número tres del 2015, en primera línea se refiere al camino número uno, según fue se ejemplifica en la fotografía número 16, los terraplenes. ¿La cantidad contratada para esa partida fue 1315?



En este contrato se indican para los cuatro caminos que se indican ahí y las fotografías respectivas para cada uno, que se habla de ausencias de terraplenes, fosos, carpetas granulares, esas son las partidas como se mostró en las imágenes anteriores. Las cantidades contratadas. Las cantidades contratadas son las que se muestran ahí. ¿El precio unitario que se indica, eso da un total no ejecutado, cierto? Que totaliza, como se indica, 0 % cada uno, queda un total de \$16736000 sin IVA. Lo que fueron efectivamente pagados por la Dirección de Vialidad fueron pagados mediante sus cuatro estados de pago, pero no fueron ejecutados para resumen. ¿Entonces, de todas las partidas no se ejecutó nada, no es cierto? De las partidas que se indican aquí, para los caminos que se indican ahí. Entonces se puede indicar solamente cada una de las partidas y el monto total, total final para cada una de las partidas. Indicar solamente las partidas, el nombre de cada partida. ¿Las partidas que no se ejecutaron para los caminos que se indican en este cuadro son terraplenes, cierto? Construcción de fosos y contra fosos sin revestir, carpeta granular de rodadura, terraplenes, construcción de fosos, carpeta granular, terraplenes, construcción de fosos, carpeta terraplenes y construcción de fosos. Y el total, el total de estas partidas pagadas y no ejecutada en el contrato Lonquimay corresponde a \$16736010. Don julio. Para finalizar, magistrado, voy a exhibir únicamente para efectos de reconocimiento, lo voy a incorporar yo después en la parte pertinente, el informe número 44 de Contraloría

. Sí, el informe que se exhibe es el número 44 del 2017, y es sobre el que estábamos conversando. Y las tablas que se expusieron son parte de este informe final de investigación especial. Y aquí únicamente una precisión, y con eso concluye, magistrado, mi interrogatorio. Si puede indicar cuáles son los caminos o los contratos del informe. Los contratos que fueron incluidos en esta auditoría corresponden al programa de desarrollo indígena para las comunas de Lonquimay y Vilcun, que eran los PDI número están indicados. Voy a otra página, magistrado, que es la que lo detalla ahora sí, el cuadro un y cuadro dos. El contrato sobre el que estamos analizando los cuadros corresponde al contrato Conservación de camino indígena de acceso a comunidades indígenas para la comuna de Vilcún de la provincia Cautín, en la región de la Araucanía, correspondiente al PDI número 13 del 2014. Ok. ¿Y el otro contrato? El segundo contrato corresponde al contrato denominado Conservación de caminos de acceso a comunidades indígenas, comunas de Lonquimay, de la región de Araucanía, ¿denominado PDI número tres del 2015? Y en ambos casos, ¿cuál era el contratista para ambos contratos? El contratista que se adjudicó y ejecutó el contrato corresponde a la empresa Sociedad de Construcción, Proyectos, Servicios de Ingeniería, CSP Limitada.

AL QUERELLANTE CDE: ¿Una sola consulta y solo si lo recuerda a propósito de la modificación de los contratos, de los que usted pudo estudiar, revisar, informar la modificación del hito, los originales por los del señor Silva, usted sabía o sabe qué área específica de vialidad tenía atribuciones para realizar esa modificación? **Una de las observaciones planteaba la falta de fundamentos para modificar el contrato, modificar el inspector fiscal del contrato y la resolución era parte de los expedientes, pero no recuerdo.** Podría creer que el departamento de contratos como que todo se origina ahí, pero finalmente esto está firmado por muchas otras autoridades. Es una resolución oficial, pero no recuerdo en este caso desde dónde se origina. ¿Por último, don julio, usted recuerda aproximadamente la fecha en que fue a terreno a constatar lo que nos explicó en su? Finales del 2016. Finales del 2016. Muchas gracias. ¿Para ambas obras? Ambas obras, sí.

A LA DEFENSA, ¿Colgándome justamente la última pregunta que le respondió al colega, dijo que lo realizó a finales del 2016 y usted ingresó a contraloría en 2016? ¿Es así? Así es. Habíamos realizado otra denuncia que también está relacionada con Camino Indígena. No recuerdo cuál es en este momento, pero este fue la primera investigación especial y esto



derivó después en una gran auditoría que revisó todo el programa de camino indígena porque se habían detectado muchas deficiencias en ese contrato. Había una investigación previa, pero no recuerdo en este momento. Esta sería su segunda investigación.

¿De qué material se puede componer un terraplén? Ahí se bueno, existe el manual de carreteras. El manual de carreteras contiene el detalle de cada una de estas partidas, estos números raros que se veían ahí. El manual de carretera especifica el tamiz, quiere decir como el tamaño de las partículas que conforman este tipo de material. Por eso, para una carpeta granular se especifican ciertos tamaños máximos, si no me equivoco son como 20 cm. ¿Y el terraplén es un material que no recuerdo las especificaciones, pero no tan bueno para ser como una carpeta granular, cierto? En el sentido que puede ser, está en las especificaciones técnicas, prefiero remitirme solamente a eso. ¿esos contratos, los terraplenes, de qué material estaban establecidos? ¿De qué material podían ser? ¿Los terraplenes, las especificaciones técnicas están incluidas en el contrato? Como me consultaba el abogado de arena, no pueden ser, porque la finalidad de este material, que yo sí puedo advertir, si hay un material sobre el terreno granular, pueden ser como material de relleno o de tierra que permita la conformación de la plataforma para recibir la carpeta superior. El cumplimiento de las especificaciones técnicas, como el tamiz o resistencia o CDR, cosas más técnicas, se realiza mediante ensayos técnicos.

Estos caminos se consideran como una solución inicial para estos caminos, para las vías que se están controlando. Yo no podría esperar que después de un año esto se mantenga intacto con los mismos espesores que fueron ejecutados. **Eso no puedo esperar. ¿Cierto? Son caminos granulares, o sea de material de tierra y ripio, que con el paso del tiempo sí pueden ir disminuyendo sus espesores, pero esa disminución no implica que esto pueda desaparecer y no encontrarse en los caminos.**

En el informe se indica la fecha de término de ese contrato, que era el año 2015. Ahí tendríamos que consultar el informe, para ser preciso. **Y nosotros recibimos la denuncia durante el 2016 y nos constituimos un terreno finalmente a finales del 2016.**

No nos recuerdo la extensión de cada uno de estos caminos. Son muchos caminos. Luego haciendo auditoría, uno se encuentra a veces que cada uno estos contratos contienen 20 caminos. Algunos bien cortos de 200 m, otro de 5 km, 2 km en promedio. Yo podría decir, con mi experiencia, ya tengo mucha experiencia, estos caminos pueden ser 2 km, 1 km cada uno de los caminos en promedio, siendo muy disímil cada uno de los caminos. Perfecto. ¿Respecto al camino del Lonquimay, donde usted mencionó, respecto de las partidas en particular que estableció que había un 0 % de ejecución, qué tipo de medición ocupo para eso? Caminamos todos los caminos de Lonquimay ¿Fue solo medición visual? Sí, caminamos todos los caminos, constatamos la ausencia de carpeta granular y terraplén. Perfecto. ¿Y normalmente qué tipo de instrumentos ocupa para medir terraplenes o la existencia de carpetas y terraplenes? **Apreciación visual. Puedo advertir cuando no se ejecuta una carpeta granular sobre un camino y la superficie de la vía es la misma que está en todos esos cerros en el sector de ICalma.**

Cierto, pero habitualmente los espesores de estos caminos se realizan mediante control topográfico, que se llama una línea base, que es un reconocimiento inicial del perfil del camino para después contrastarlo con otra medición topográfica y poder ir determinando las diferencias. Y como se plantea en el informe, eso no fue entregado. No se ejecutó un levantamiento topográfico previo y posterior de los caminos. Para entenderle bien y para que nos quede a todos claro desde ya, antes de empezar las obras se hace una nivelación del terreno, me refiero medición en cuanto a alturas, con un punto de referencia, y al final se hace lo mismo, pero sobre la carpeta.

El manual de carretera para esas partidas determina que se medirá de esa forma. Usted dijo claro, se miden a través de un control topográfico, pero el instrumento en particular para ese



control topográfico lo sabe cuál es una estación total que permite ir conectando los puntos de cada red. Entonces uno se podría imaginar cada uno de los puntos se refiere, o sea, en el inicio del camino tengo la cota cero. Son lo que hacen los topógrafos que andan nivelando, andan con una vara que le establece la diferencia. Entonces uno crea como una red en 10 m más el nivel y se va comparando eso. Y eso no se hizo. ¿Y usted tampoco lo hicieron? **No, no hicimos levantamiento topográfico de estos caminos. Solamente la inspección de vialidad ejecutó una revisión de los espesores.** ¿Y vialidad? Porque usted dijo que lo había realizado en Vilcún. Que si vialidad lo había realizado en el camino Vilcún. Vialidad si realizó la inspección en los caminos de Vilcún. **¿Y en Lonquimay? ¿Vialidad? No solicitamos inspección en los caminos del Lonquimay porque no había camino que constatar.**

Está el certificado en los anexos, 28 de diciembre del 2016. Perfecto. ¿Respecto a estas obras Vilcun y Lonquimay, usted sabe si alguna de estas fue recepcionada? El contrato de VILCÚN si cuenta con recepción. Eso quiere decir que declaran los funcionarios debilidad que se constituyeron en terreno y que verificaron la correcta ejecución de todas las obras de acuerdo con lo pagado.

Si, la tuve. ¿Y quién compone esa acta? ¿Quiénes las personas que realizan esa investigación y han visto? Bueno, esta acta habitualmente siempre está conformada por el inspector fiscal que acompaña a la comisión a constituirse en terreno y la acompañan distintos funcionarios del departamento de contratos. Van variando otros inspectores fiscales y son los que están citados en el acta de recepción. Esto es una declaración que estos funcionarios declaran que visitaron todos los caminos y recorrieron cada una de las obras. Es una declaración que ellos hacen. ¿También dentro de su relato, volviendo tal vez un poquito más atrás, ustedes indican que como contraloría debiesen iniciar un proceso de reintegro, cierto? De montos de dinero. ¿Se inició ese proceso o no? Al final del informe, para cada una de las observaciones más importantes, se establece un anexo de observaciones, que quiere decir cuál es la instrucción a la dirección de Vialidad respecto de esas observaciones. **Para las partidas pagadas y no ejecutadas se estableció que se debería aplicar las multas y proceder con el reintegro.** Ese informe luego pasa a una etapa de seguimiento donde otro equipo de Contraloría efectúa el seguimiento de estas observaciones respecto de los antecedentes que proporciona Vialidad, que un informe público también se puede encontrar la página Contraloría, y en ese informe los antecedentes que proporciona Vialidad no permiten levantar o subsanar la observación, es decir, se mantiene.

¿Qué quiere decir eso? Que no se efectuaron los reintegros en el informe de seguimiento. Luego de eso, desconozco cómo habrá terminado eso. Las unidades son independientes en Contraloría y trabajan como el correspondiente sumario que se hizo. Yo no sé cómo terminó ese sumario y no sé cómo terminó el reintegro finalmente que se ordenó.

DEFENSA exhibe cuadro dos y el cuadro tres también es parte de la prueba. Sí, de Vilcún. ¿Y este cuadro número dos, al final de él, indica un total, un total respecto de un monto que usted también señaló, 14 millones infracción, cierto? Así es. ¿Ese total hace referencia a lo que habría sido no ejecutado y pagado? Sí, corresponde a eso. ¿Y esa determinación total de ese monto, ¿quién lo realizó? ¿Ustedes o vialidad? Este cuadro, como dice ahí, la fuente de elaboración propia, en base a los antecedentes del contrato, eso lo realizó Contraloría. Ustedes lo determinan. Y lo mismo en el cuadro número tres que dice, en este caso particular es el camino conservación de la comuna de Lonquimay, que usted lo mencionó, también establece un monto total

Como ese monto en este cuadro número tres, en vista de la ausencia de los trabajos que se indican ahí, en los caminos que se indican, lo realizó Contraloría, como dice, elaboración propia, y corresponde a la suma de todas esas partidas que fueron contratadas y no ejecutadas.



¿Don julio, respecto de la comuna de Lonquimay, de ese contrato en particular, usted sabía que había en trámite una resolución de modificación del contrato? Se contempló una modificación del contrato en la comuna de Lonquimay. Sí, sí, tuvimos la vista esa resolución de modificación de contrato. Implicaba la modificación de ciertas partidas en cuanto a sus cantidades. Las partidas pueden haber sido terraplenes, tuberías. Consideraba disminuciones de obras también en algunos caminos. O sea que se iban a reducir en ciertos caminos, no se iban a ejecutar ciertas partidas. Siempre se consideran las modificaciones de obra, como puede ejemplificarse en el contrato de Vilecún, cuando hacemos referencia a los terraplenes contratados y otros terraplenes a precio convenido.

No, la comitiva siempre nos lleva a un conductor. Y en ese recorrido de todos los caminos estuvo Waldo Marchant, que era mi supervisor actual jefe en contraloría, y fui yo, pero no nos entrevistamos con los particulares. No recuerdo los días específicos, pero dos, tres días, de ese orden más o menos.

ACLARANDO AL TRIBUNAL, ¿Qué función cumple el supervisor respecto de su labor en el terreno? Ok, ahí, si me permite, le cuento un poco la estructura de cada uno de estos trabajos. Está conformado por un fiscalizador, es como la primera línea, recopila antecedentes y cada uno de estos antecedentes que recauda el fiscalizador está conversado y coordinado con el supervisor, que actualmente es en mi cargo.

Soy supervisor y tengo un equipo de fiscalizadores a cargo. Luego nosotros desarrollamos el informe. Esto implica hacer un análisis técnico, jurídico y administrativo de cada uno de estos antecedentes y elaboramos un informe que luego pasa a la revisión del jefe de fiscalización y luego pasa a la revisión y firma del contralor regional y siempre apoyado por un abogado. ¿Entonces, cuál es la función del supervisor? Es gestionar los equipos, velar por el cumplimiento de los plazos y calidad técnica y legalidad finalmente, de las situaciones que se vienen observando. Podemos decir o entender que es como una especie de fiscalizador con más experiencia que ayuda a los fiscalizadores con menos experiencia que emita un informe más adecuado. Así es. Técnicamente me refiero, para tener el cargo de supervisor se requiere más experiencia.

¿La pregunta mía es estos informes mensuales y los levantamientos topográficos, a quién de la cadena de diversas personas involucradas le correspondía hacerlo? Informes mensuales y levantamientos topográficos. El decreto 75 del 2004, que es el reglamento de contrato de obras públicas, establece en su artículo 110 que se designará a un funcionario competente, denominado **inspector fiscal, que velará por el correcto cumplimiento del contrato**. En ese sentido, el funcionario responsable de que se entreguen estos informes mensuales que van comentando el avance, la ejecución, ensayos, es el inspector fiscal. ¿Y quién debe velar también por el cumplimiento de las especificaciones técnicas, como lo es el levantamiento topográfico de las partidas de terraplén y carpeta granular, cierto? También es el inspector fiscal.

Primero, los informes mensuales son informes que entrega el contratista. ¿Los informes mensuales los entrega el contratista y esos no estaban? No estaban y el inspector fiscal debía exigirlos. Y por eso es por lo que había multas no aplicadas, porque no se entregaron. Entonces el inspector fiscal debía exigirlo y si no lo recibió, debió aplicar multas al contratista y esas no fueron aplicadas. Lo mismo con los estudios topográficos. Así es. El inspector fiscal debería exigirlo a la empresa.

No siempre ocurre, pero sí, no es raro que se modifique. O sea, ocurre habitualmente la modificación del inspector fiscal por muchas razones. Pero siempre con fundamento. Entiendo. Porque entiendo que el reparo suyo era que no había habido fundamento para el cambio. Claro, sí. La resolución la dirección de Vialidad está autorizada para modificar los inspectores fiscales y establecer por los fundamentos que ellos estimen conveniente modificarlo. En eso no incumplen nada, en modificar el inspector fiscal. Pero nosotros



indagando como tal, cuando hice el informe, cuál era el criterio para modificar. No había fundamento. Que muchas veces hay licencias por término operativo, le dejan quizás los contratos en una zona a un inspector, pero se cambió nomás. Y la resolución indicaba solamente se cambia el inspector fiscal.

Seguramente esto fue al inicio del contrato donde se modificó y se citan las resoluciones también que estaban ahí.

Por cierto, como se habían hecho fiscalizaciones anteriores y después esta investigación especial, Contraloría se percató del alto riesgo y las irregularidades que estaban ocurriendo en estos tipos de contrato y se realizó una auditoría que contempló la revisión preliminar de, estoy hablando de 30 contratos y se recorrieron todos. Luego eso se seleccionaron creo que 12, 15 contratos para hacer la auditoría específica de ese contrato, donde se constataron muchas situaciones de camino no ejecutados, puentes que no estaban construidos, modificaciones de plazo sin sustento. Ese informe es bien relevante para nosotros, porque yo creo que para vialidad fue, marcó un antes y después de cómo se gestionaban estos tipos de contratos. Esa auditoría que fue originada en parte por esta investigación especial.

POR 329, Topográfico. También está la posibilidad de que el inspector fiscal pueda solicitarlo al laboratorio de la Dirección de Vialidad, y como se plantea en una observación, se solicitaron y no se obtuvo respuesta. Pero también tengo que hacer el alcance que las especificaciones técnicas de esos contratos y de esos caminos, terraplenes y carpeta granular, indica que su forma de medición es mediante estudio topográfico. ¿Hay una consulta, usted dice se solicitaron y no se tuvo respuesta, pero qué, lo solicitó el inspector o ustedes? ¿No, no, el inspector fiscal al inspector lo solicitó y no tuvo respuesta? No tuvo respuesta y no se realizaron.

5.- CINTHIA VARGAS VIDAL, Funcionaria de la Policía de Investigaciones de Chile, domiciliada en Williams Rebolledo 1799, 2° piso, Ñuñoa.

Policía PDI.

Bueno, desempeñándome también en la misma brigada que ya indiqué, correspondiente a la brigada anticorrupción, en el año 2019 recibimos una investigación por parte de la Fiscalía de Alta Complejidad de Temuco, que revestía la investigación de una serie de contratos relacionados a caminos de la zona de la región de la Araucanía. Estos estaban especialmente relacionados a comunidades indígenas de la zona, específicamente de las localidades de Lonquimay y Vilcun, al menos de las que yo pude tener conocimiento, en donde se realizaron una serie de diligencias, ya sea toma de declaraciones, indagación de antecedentes, ya sea por parte de la Dirección de Vialidad de que es la que estaba a cargo de los contratos, y así también como documentación que se solicitó en su oportunidad a la Contraloría General de la República, especialmente a la que se está ubicando en la localidad de la Araucanía. Ya, primero tenemos que entender que las indagaciones se realizaron en relación con licitaciones, licitaciones que se enmarcan en la Reglamentación del Mop, que es el Ministerio de Obras Públicas, en donde regulan los procesos licitatorios, de adjudicación y los procesos de ejecución de los contratos. Dentro de estos se encontraron ubicados o se indagaron dos contratos en específico. Tenemos primero el 219920 que correspondía a trabajos en caminos de



localidades indígenas de la comuna de Vilcún. Ese es el código safi que el que denomina los caminos y es código safi dos uno nueve dos cero. Y luego tenemos otro contrato que dice relación a otro código safi que así se le denomina en la dirección de vialidad que es el 233248, que éste tiene relación también a localidades indígenas, pero del sector de Lonquimay. En cuanto a estos contratos, las diligencias que efectuamos comunidad y me tocó realizar como oficial investigadora, tiene relación en la indagación y análisis detallado de los antecedentes que se lograron obtener.

Primero tenemos el contrato 219920 que ya mencioné que está relacionado a Vilcun, en donde en el informe de contraloría en especial que es el número 44 del año 2017, en donde actuó como contraparte de la contraloría un funcionario de apellido Añasco, él logró evidenciar de forma documental y técnica, existiendo los antecedentes de que **al menos en el contrato 219920 existían diferentes tipos de inconsistencias en el contrato**. ¿Cuáles eran estas? Primero teníamos obras que habían sido pagadas y no ejecutadas, luego en un punto teníamos diferencias técnicas a la hora de evaluar los caminos y en un tercer punto teníamos multas que no fueron aplicadas a la empresa. Ahora, estos ambos contratos fueron adjudicados a una misma empresa que era CSP Limitada, las cuales, al ser consultadas las fuentes de información de nosotros, especialmente Equifax y conservadores de bienes de comercio, ésta se encontraba como socio y representante legal Jorge Andrés Cerde Inostroza, quien también era partícipe de otras adjudicaciones de la zona a través de la empresa vía el milésimo noveno, tenía relacionadas esas dos empresas. Ahora, volviendo al tema de las irregularidades, en esto primero teníamos obras ejecutadas no pagadas, luego como ya mencioné teníamos también el tema de especificaciones técnicas. De que al tomar declaraciones a testigos en la investigación y como también el análisis ya sea normativo y de los antecedentes documentales se señalaban que los caminos habían sido construidos con un menor espesor, lo cual obviamente tenía un menor costo al que se había ofrecido por parte de la empresa oferente CSP. Después tenemos obras de que no fueron ejecutadas y pagadas y finalmente multas de que no fueron cobradas por el inspector fiscal, que en el caso de este contrato en una primera instancia fue óscar Mora Arriagada, quien era funcionario inspector fiscal de la Dirección de Vialidad.

Al 219920 entonces el de la comuna de Vilcun. ¿Ya, entonces inicialmente quién fue el inspector fiscal de este contrato? **Oscar Mora Arriagada, quien sólo alcanzó a cursar un estado de pago que fue el primero**, pero por temas administrativos fue reemplazado, dado de que tras unas indagaciones se descubrió que había tenido un trato con Jorge Andrés Inostroza Cerda, en cuanto que a través de su cuñado se le habría vendido un camión. ¿Cuñado de quién? ¿Cuñado de quién? Del inspector cuñado de Jorge Andrés Inostroza Cerda, se le vendió un camión a él. Entonces, tras esta situación el primer inspector fiscal



a Óscar Mora, por lo que tras esta situación se designó un nuevo inspector fiscal correspondiente a **Jaime Silva Pobrete, quien estuvo el resto del contrato.**

Ahora, respecto al otro contrato que se indagó que era el 233248, también en este existieron el tema de que las obras fueron pagadas y no ejecutadas, y en este contrato quien era Inspector Fiscal también era Jaime Silva Poblete, que fue quien asumió también la inspección fiscal por parte de la Dirección de Vialidad en el contrato anterior, el 219920, **o sea coincide el mismo Inspector Fiscal.**

El 233248 este fue la entrega de obra, recuerdo el 27 de febrero del 2015 y recuerdo que el 219920 fue en el año 2014, pero no recuerdo la fecha exacta, solo que fue el segundo semestre.

Ok, ahora en cuanto al contrato que estaba comentando que era el 233248, este en indagaciones que constan en carpeta investigativa y que había realizado la Brigada de Delitos Económicos de Temuco, una persona de nombre Felicinda Nancura de que pertenecía a la comunidad indígena de Lonquimay, señaló de que la **tía de Jorge Andrés Inostroza Cerda, quien era Niselva Cerda Cantillana, también trabajadora de la Dirección de Vialidad de la Araucanía,** había ido a presentar el contrato como por parte de la dirección de Vialidad, presentando la empresa se CSP que pertenecía a su sobrino Jorge Andrés Inostroza Cerda, pero en esa oportunidad él ella presentó al cuñado de Jorge Andrés Inostroza Cerra como representante legal, siendo que era su sobrino y eso declaró la testigo.

Quién era quien residía en la zona ahora, luego obviamente por resolución de la dirección de Vialidad, quien estaba nombrado como inspector fiscal no era Niselva Cerda Cantillana, sino que era Jaime Silva Poblete, por lo que éste fue quien prestó o fue la contraparte de la empresa y quien era funcionario público de la dirección de habilidad y quien firmó todos los estados de pago de esta obra, la cual también según antecedentes documentales que se pudieron verificar, existieron obras que fueron pagadas y no ejecutadas.

En el Caso del Contrato de número 219920 ascendió la suma aproximada de 191 millones que se pagaron y en el caso del contrato de Lonquimay que es el 233248, la suma aproximada pagada fue de 161 millones.

Ya, para poder corroborar eso, primero se tuvieron a la vista unos certificados de laboratorista vial, que es quienes toman muestra los caminos en donde al menos donde hubo incongruencias en el espesor de los caminos, que los caminos van por capa, según las declaraciones que nos prestaron y lo que pudimos constatar documentalmente, estos fueron de un menor espesor. Luego tenemos las obras no ejecutadas y pagadas que fueron constatadas igual por visitas realizadas por funcionarios de la Briedec Temuco y además por la Contraloría General de la República, pero radicada en la Araucanía, o sea la contraloría regional de allá donde participó el funcionario de apellido Añasco, que no recuerdo su nombre en este momento. ¿Cómo se pudo constatar de cuáles fueron las partidas pagadas y no ejecutadas o con diferencias técnicas?



Fue porque en los contratos de obras se trabajan por partidas, entonces cuando uno emite un estado de pago tenemos dos lo que nos va a informar la empresa y lo que firma el inspector fiscal. Los inspectores fiscales emiten unos informes de pago, estados de pago, en donde primero ellos indican el monto que se le va a pagar por el estado de pago que corresponde en el momento y luego a eso se le añaden anexos. En el anexo número un siempre corresponde al ítem partidas y en el ítem partidas un ejemplo puede existió la carpeta granular de menor espesor y se puede identificar cuánto fue el monto que se pagó por es.

Incorporar prueba documental. Responde a estados de pago en general los ofrecimientos son los estados de pago de los numerales documentales prueba número 15/ 2025-3037.

El primero entonces era 15, estado de pago número uno de **10 de febrero de 2015.** el valor, esto lo quiero resaltar, \$37191621 corresponde al PDI contrato número 13 2014, contrato código SAFI 219920. Ya, ejemplo, en el caso de este contrato del 219920, como señalé, había tres tipos de irregularidades, en donde aquí ejemplo se puede identificar de que fue señalado de que estaban con irregularidades las partidas, la 5619 a, b y d, que corresponde a los **tubos corrugados de polietileno de alta densidad, los cuales indicaron que estos fueron pagados, pero no se encontraban. También tenemos en cuanto a los a los caminos, la regularidad señalaba de que estos fueron de menor espesor, pero se pagaron completamente, que corresponden a la carpeta granular y en este no, en este no hay terraplenes.** Lo que llamaba la atención al momento de analizar esto era que las partidas obviamente fueron pagadas y no estaban, o en el caso de los ítems que correspondan, los caminos eran los de mayor cuantía dentro de los estados de pago. Sin embargo, este estado de pago corresponde, no recuerdo bien el porcentaje de avance de la hora, pero era bastante abismal. Ejemplo de lo que pagó en este estado de pago Óscar Mora ¿A lo que sigue, en el estado de pago siguiente, que es el que está asociado a Jaime Silva Poblete, entonces, en particular respecto de este anexo número uno, ¿cuáles son las obras que usted identifica como pagadas, pero no ejecutadas o ejecutadas de forma deficiente? Tubos corrugados. Sí. Ya, y puede indicar los montos. En el caso de los tubos corrugados, tenemos diferentes tipos de letras que iban individualizados las partidas. En el caso de la letra a fue el pago por \$2178192. En el caso relacionado a la letra el ítem b fue por \$4798960 y en el caso de la letra d, que también corresponde a tubos, fue por 2801440. También aquí dentro de la carpeta investigativa constan fotografías dentro de los cuales se puede evidenciar que los tubos no fueron como instalado en los caminos, que inclusive algunos fueron los materiales abandonados, no finalizando las obras. Pasamos al 20, contrato safi 219 92 cero, estado de pago número dos, valor del estado de pago \$128197879, indica avance financiero 74,29, %, avance físico 74,29 % y la fecha del estado de pago 9 de marzo de 2015. Por la fecha y por la rúbrica que se puede visualizar, este estado de pago fue firmado por Jaime Silva



Poblete, inspector fiscal de la Dirección de Vialidad de la Araucanía. Aquí primero, como obras ejecutadas y no pagadas, tenemos el mismo ítem del estado de pago anterior correspondiente a uno, que son el 5619, un a, b y b, que corresponden a los tubos corrugados de polietileno de alta densidad, que están asociados a los montos respectivos de \$4447142,09, \$837868,06, \$163168 y luego tenemos los ítems con dificultades técnicas en cuanto de que la densidad y el grosor del camino fue menor al estipulado en el contrato que corresponde a la carpeta granular de que es lo que tiene una mayor cuantía dentro de este segundo estado de pago, que fue el pago realizado por \$65953200. Esa firma es de Jaime Silva Poblete, de que quien a esa fecha ya estaba como inspector fiscal de la obra. Inclusive en los documentos, yo creo en otros estados de pago que me acuerdo de que se incluyeron en los informes policiales, él posteriormente también firma con su nombre, coloca su rúbrica y luego abajo la firma, pero esa firma es de él, el anterior dijo que era de una persona mora, no es cierto, el primer estado de pago de ese contrato fue de óscar Mora Inspector fiscal. **El documento 25, contrato 219920**, estado de pago número tres, valor del estado de pago \$52061621, la fecha del estado de pago el 1 de abril de 2015, avance financiero 97,59 %, avance físico de obras 97,59 %. Y derechamente al anexo número uno, doña Cintia, el mismo ejercicio, si nos puede indicar en relación con los aspectos ya resaltados, tenemos las mismas partidas de que se pudieron constatar a través de los documentos que pudimos tener a la vista nosotros, ya sea técnicos y documentales, en donde tenemos, como ya señalé en el tema de los caminos con un menor espesor, la carpeta granular, que es una capa de ellos, en donde en este estado de pago correspondiente al tercero del mes de abril del 2015, se le pagó a la empresa CSP Limitada una cuantía de \$73663236 y luego tenemos las otras partidas señaladas como obras pagadas no ejecutadas. ¿Qué quieren decir? De que los tubos no fueron puestos, en este caso los tubos corrugados, que son las partidas 5619 un en sus letras a, b y d, las cuales respectivamente están asociados a los montos de 94447142, luego la letra b por 9837868 y la letra d que es por 6163168, que al igual que el estado de pago anterior, si bien el número dos se notó más la diferencia en cuanto al estado de avances y pago, aquí también predomina de que las partidas de que presentaron estas irregularidades son las de mayor cuantía, especialmente en el tema de los espesores de los caminos que corresponden a las carpetas granulares. Acá aparece una firma y la referencia de inspector fiscal. ¿A quién correspondería esta firma? Esta firma corresponde a Jaime Silva Poblete, que es la misma que pudimos visualizar.

QUERELLANTE CDE: Se nos instruyó la toma de declaraciones a testigos que estuvieran radicados en la zona. ¿Bien, señora Cintia, usted recuerda en qué año o años debían ejecutarse estos dos contratos? Recuerdo que el 219920 partió alrededor del 2000 de octubre y noviembre del 2014 y debían ejecutarse alrededor de 180 días de los días, esto si no estoy muy segura, pero el otro igual, el 233248 fue en 2015, 2016.



Sí, nosotros ya estábamos, la investigación llegó a nuestra brigada. Posteriormente, alrededor del año 2019 fueron emitidos los primeros informes policiales.

Lo que pasa que dentro del informe de contraloría estaban estos certificados mencionados ahí estaban adjuntos, porque nosotros sí pudimos revisar esos archivos que no fueron facilitados y entregados para la investigación penal por parte de esta entidad, dado de que con la Dirección de Vialidad existieron muchos inconvenientes con la entrega de información, dado que Alicia del Río, quien era en ese momento directora Jurídica, nos señaló de que no estaba todo porque documentos habían sido extraviados, inclusive en el contrato 233248 nunca se encontró la boleta de Incumplimiento del Contrato y también los libros de horas que se supone de que estos quedaban por declaración de los funcionarios de Vialidad a cargo del Inspector Fiscal, que en este caso era Jaime Silva Poblete, esto no aparecieron, aparecieron, doña Cintia? Sí. A propósito de estos certificados.

No, la fecha no la recuerdo, pero sí recuerdo que los ingenieros civiles nos explicaron de que lo que consistía este este certificado es que van por diferentes tramos en el camino y con un cilindro toman la muestra, entonces esto les permitía evidenciar cuánto era el espesor de cada capa del camino y así se pudo determinar de que el camino se había construido con menor material, con menor grosor, porque esto es lo que hacen los laboratoristas viales, van con su maquinaria y realizan las pruebas y que también lo tiene que realizar el inspector fiscal, porque finalmente él era el funcionario de que estaba a cargo por la contraparte del organismo público de verificar que la empresa haya ejecutado las obras. ¿Por último, señorita Cintia, usted le señaló al tribunal que los tubos de alta densidad que se habían adquirido para la ejecución de uno de estos dos contratos, no recuerdo bien a cuál hizo referencia usted, estaban ahí todavía en el lugar? No, lo que pasa que esta investigación la tenía la brigada de delitos Económicos de Temuco en el año 2017, ¿por lo que nosotros revisamos todos los antecedentes de la carpeta investigativa y qué figuraba ahí? Primero, en esa misma fecha tenemos el informe de contraloría, que es el 44 2017, donde se observan imágenes y también los funcionarios de investigaciones que fueron en aquella época entrevistaron a los vecinos de la comunidad, entre ellas a esta vecina que era de nombre Felicinda, quien también indicó que además de estos hechos, donde había una tía del representante legal de la empresa a presentar a la empresa en sí, también pudieron visualizar de que posteriormente dejaron la obra votada. O sea, los tubos estaban en el camino y nunca fueron instalados, para lo cual constan las fotografías en la carpeta investigativa, porque yo nunca fui, dado que tomé la investigación posteriormente, ya en el año 2017. En cambio, los colegas de Bridet Temuco y Contraloría, ellos tuvieron un primer acercamiento, lo que igual da una mayor certeza de que las pruebas, los certificados y todo eso se tomaron más próximos a cuando ya se había terminado y entregado el camino al modo.

Defensor. Exhibe el último estado de pago, el de fecha 15 de abril del 2016. Ahí está la fecha arriba para que lo pueda corroborar. Esto es de Lonquimay, es el último que se acompaña, el número 129. Por eso voy de atrás hacia adelante. En este estado de pago, usted nos mencionó en el anexo un, por ejemplo, ahí lo destaqué, que de la carpeta granular se habían pagado en este estado pago 77 millones. ¿Es efectivo eso? O sea, lo que pasa de que primero debemos tener a la vista el estado de pago y entender que tenemos de que a esa fecha se llevaba pagado eso, porque si usted puede visualizar, dice montos, obras a la fecha. Perfecto. Hasta la fecha se lleva pagado eso, entonces.

¿cómo usted determina exactamente cuánto es lo que se está pagando en este estado de pago por ese ítem? Lo que pasa de que se va multiplicando lo de los precios unitarios y las obras ejecutadas, porque ejemplo, hay que ir haciendo las diferencias, porque tenemos la cantidad de las obras, que es lo total, luego se va haciendo el tema de las obras ejecutadas hasta el momento que determina el porcentaje de avance, y luego eso se multiplica la diferencia por los precios unitarios.



¿Entonces, cuando usted en su declaración mencionó, por ejemplo, de este ítem carpeta granular, se pagaron 77 millones, no estaba mencionando que en ese estado se pagó ese ítem? Eso es lo que quiero clarificar. O sea, de que hasta esa fecha se llevaba. Hasta esa fecha.

¿Entonces todos los ítems que usted nos iba mencionando eran hasta esa fecha lo que iba pagado? Claro, sí. Porque claro, primero debíamos tener en consideración el valor del estado de pago y de qué ejemplo, el contrato este es el de Lonquimay.

Sí, sí, el de Lonquimay se pagó 161 millones en total.

Primero, debo de esclarecer de que lo que les señalé, ya ir a terreno en el año 2019, era ya más extemporáneo. Entonces se priorizaron otros recursos investigativos y fueron las declaraciones. Recuerdo que las investigaciones relacionadas a los SAFI, porque estos no eran los únicos dos contratos investigados, eran muchísimos más, pero se entrevistaron principalmente a personas que trabajaban en la dirección de vialidad. ¿Para qué? Para conocer cómo funcionaba el procedimiento de obras públicas en caminos rurales y poder tomar estos elementos para ir comprendiendo el proceso. Porque claro, yo soy administradora pública, entonces, qué me permitió esto. No solamente sentarme, sino entender igual cómo funcionaba esto y poder comprender los estados de pago. Perfecto. Y aparte, yo no recuerdo muy bien, porque igual ya fue el 2019 y no recuerdo los nombres específicos, pero sí, en estas investigaciones relacionadas a los SAFI, entrevistamos principalmente a los inspectores fiscales, que eran gente de planta que ya llevaba muchos años en la en la dirección. ¿Ahora, respecto del contrato 219920, que es el de Vilcún, para individualizarlo de esa manera, usted sabe si se recepcionaron esas obras por parte de Vialidad o el Ministerio de Obras Públicas? No recuerdo con exactitud si existió la recepción de obras, porque la recepción de obras se realiza con posterioridad, alrededor de dos años después se hace la recepción final. Sin embargo, este contrato, según los estados de pago y resoluciones, se habría finalizado de que no fue así y fue terminado anticipado.

¿Y usted que se entrevistó con Gente Vialidad, que les explicó el procedimiento de todos estos contratos, sabe cuál es el procedimiento que se realiza para recepcionar estas obras? Sí, el procedimiento que se realiza para la recepción de obra es que se forme una comisión por funcionarios de la Dirección de Vialidad, en donde cumplido el tiempo de esta garantía, se constituye esta comisión en terreno y deben firmar un acta. Perfecto. ¿En particular de este contrato, usted no sabe quién compuso la comisión o sí sabe? No lo recuerdo.

¿Conclusiones que usted nos ha expuesto el día de hoy, dijo que se basan netamente en el informe de contraloría y en qué otro documento? Ya, esto como dije, en el informe y los anexos del informe de contraloría, que es el 44-2017, y además de los antecedentes entregados por la dirección de Vialidad de la Araucanía, dado que ellos igual nos entregaron especialmente para establecer los montos pagados, porque ellos no hicieron la entrega de todo lo contable.

Respecto del contrato 233248 de Lonquimay, usted mencionó que lo único que se cuestionaba eran los terraplenes, carpetas y fosos. ¿Es eso efectivo? Sí, los únicos ítems que fueron cuestionados y de que afectaban al tema directamente del camino y que se podía corroborar, eran esos tres ítems. Perfecto. Lo que yo recuerdo de la investigación. No hay problema. ¿Dígame, y de esos ítems que se cuestionaban respecto del pago de estos, usted calculó cuánto era el pago total de sus ítems? El pago total, lo que pasa de que se fue haciendo la comparación de esto, pero también hay que tener en consideración de que esta hora fue terminada anticipadamente.

El motivo no lo recuerdo con exactitud, pero cuando se termina un contrato esto se realiza por resolución suscrita por el jefe de servicio, que en este caso sería el director de Vialidad de la época.

No, tampoco recuerdo, porque lo que pasa que en el contrato 233248 también existieron modificaciones al contrato en cuanto que existía un adendo de aumento, disminución de obra



y aumento de plazo. ¿Y cuáles eran los aumentos, disminuciones de obra? ¿Recuerda cuáles eran en particular los ítems? Los ítems no en exactitud, porque claro, los estados de pago eran muy pocos en general en estos caminos, en cuanto a los estados de avance. Y además después pasó lo que le señalé respecto a la continuidad de las obras de este contrato, de que fueron terminados.

Todo lo que era documentación administrativa, contable y financiera fue aportada por esta entidad, por la directora jurídica de la época, Alicia del Río.

Incluso son mencionadas en el informe, recuerdo y estoy casi segura de que es el 142 de la brigada del año 2019, se mencionan todos los antecedentes de la licitación y también los documentos que se suscribieron durante la ejecución del contrato.

¿Cuáles eran en particular esas obras pagadas y no ejecutadas en Vilcun? Esto corresponde a la colocación e instalación de los tubos corrugados, que existían tres tipos de tubos corrugados con diferentes medidas y estos no fueron, este fue el ítem de que estos tubos no fueron instalados en los caminos. Y ahí voy justamente a mi pregunta. Usted concluye que no se instaló ningún tubo. Esto primero es en base a lo que nos señala los antecedentes documentales, en donde nos señalan de que los tubos o las partidas relacionadas a eso no fueron colocados. Ahora, el detalle exacto, yo no recuerdo los montos, están en los informes. ¿No? Pero le preguntaron otra cosa, si es en base a esos antecedentes que usted concluye que esas obras no se ejecutaron. sí, eso es correcto. ¿Y siguiendo en ese contrato de Vilcún, que usted lo analizó, lo revisó, estas obras, ¿cuántos caminos se componían? Estas obras eran distintos, porque en el del dos 19920, ese era seis caminos. Seis caminos, perfecto. Hay caminos por 12,2 km, me acuerdo, aproximadamente 10, 12 km. Pero eran seis caminos de que se tenían que realizar las obras. Porque en el otro eran cuatro. En el otro eran cuatro.

Lo que recuerdo cuando se realizaron las indagaciones en el caso de Vilcún, eran las observaciones fueron realizadas por caminos. En cambio, en el de Lonquimay era distinto, porque ahí se cuestionaban los cuatro caminos.

Entonces quedémonos en el de Vilcún. ¿Lo que usted nos ha dicho, el tema de los tubos que no se instalaron, que usted no dice que no se instalaron los trabajos con especificaciones técnicas no cumplidas, es en los seis Caminos de Vilcún o en algunos de ellos? No recuerdo con exactitud lo técnico. Recuerdo que se realizaron los cálculos, eso sí, porque se realizó un análisis de los estados de pago y también de las obras pagadas no ejecutadas.

Usted mencionó mucho la señora Felicinda. ¿Usted en algún momento se entrevistó con ella? No, porque las veces que fuimos a la zona, ella era de Lonquimay. En Lonquimay, una zona de difícil acceso, por lo que la persona no pudo asistir a declarar, siendo que se le habían sido facilitados los medios por parte del Ministerio Público. Perfecto. Ese fue el motivo por el cual no se volvió a entrevistar y sólo consta en carpeta investigativa declaración ante la Brigada de Delitos Económicos de Temuco.

ACLARANDO AL TRIBUNAL, Quiero contextualizar esto. A propósito, el estado de pago número uno, el del 10 de febrero de 2015, ya nos aclaró que en ese caso estaba el señor Mora como inspector fiscal. Sí, por la rúbrica y por la resolución. ¿Conforme a su labor investigativa, de qué manera relaciona al señor Silva Poblete con este estado de pago número uno? No, no, yo mencioné que él está solamente desde el estado de pago número dos hasta el último, que fue desde que asumió la función como inspector fiscal de la obra. El estado de pago número uno del 219920 correspondió a Oscar Mora, porque inclusive la firma es distinta y por resolución corresponde a esa persona. ¿Y a propósito del señor Mora y esta venta, entre comillas, triangulada que se hace de este camión, no se sigue una línea investigativa respecto de él? Sí, sí, se estaba siguiendo, pero claro, esos antecedentes quedaron en el Ministerio Público.

¿Respecto al mismo punto, bueno, estos antecedentes, obviamente ustedes como brigada investigadora lo tienen después a propósito de la recopilación de antecedentes, pero usted



sabe cómo la dirección de vialidad se enteró que Mora se había hecho de este camión y por eso cambió al inspector? ¿Durante la ejecución del contrato? No recuerdo la documentación exacta o ese hecho en particular, pero solo recuerdo lo sucedido.

El cambio de mora a Silva Poblete se produce primero que la asignación de Silva Poblete en el contrato de Lonquimay. ¿Me explico? Sí, esto fue anterior. ¿Porque el contrato 219920 qué fue anterior? ¿Qué es lo que fue anterior que usted dijo? Sí, esto fue anterior. ¿Qué es lo que fue anterior? Lo que fue anterior fue el cambio de inspector fiscal, designación de Jaime Silva Poblete, porque el otro contrato en 233248, la designación fue posterior. Entonces, para que se entienda, tenemos el contrato 219920, esto a principios del año 2015, se realiza el cambio de Inspector Fiscal y la firma por parte de Jaime Silva Poblete del segundo estado de pago de ese contrato. Y luego la adjudicación y designación de Inspector Fiscal del Contrato 233248 es posterior. ¿Se acuerda cuánto? Posterior, porque este se ejecuta entre el año 2015, 2016, pero el mes no me recuerdo con exactitud. Pero fue posterior la designación para el Inspector Fiscal. Para otro camino, pero con la misma empresa. ¿Yo también, solo para que me aclare, porque en definitiva este estado número uno está en la acusación, ahí usted también encontró que había irregularidades en ese estado de pago número uno? Sí, todo parte desde el un hasta el último estado de pago.

6.- RODRIGO ENRIQUE GARRIDO CÁCERES, Constructor Civil, con domicilio en Km.02, tramo Vilcún San Patricio, comuna de Vilcún.

Sí, es un desarrollo de un proyecto de mejoramiento de caminos rurales enfrentados por una empresa cuyo mandante era el Ministerio de Obras Públicas. De la municipalidad de Vilcún. En ese entonces yo estaba como haciéndole traspaso a otro colega. Yo estuve, digamos, **hasta mayo del 2015 a cargo del año 2015**, encargado de camino hasta esa fecha. Claro. En junio ya partí con otro cargo de inspecciones de obras y proyecto, digamos, dentro de la dirección de obra. Bueno, yo respondiendo a la pregunta, yo en realidad, como les decía, respondía mayormente a lo que me pedía la administración, que era en ese sentido, era poder ser un puente técnico entre el municipio y los beneficiarios, que eran las comunidades que estaban en ese entonces. Me pedían que obviamente hiciera contacto con el señor inspector fiscal de ese entonces que estaba a cargo de este proyecto, para poder saber cuáles eran los avances más que todo.

Y poder darle una respuesta a los beneficiarios que eran las comunidades en este caso. ¿Eso quién era? El inspector fiscal, don Osvaldo Mora. Ok. Y en relación con las gestiones que usted hizo, indicó que también había hecho gestiones respecto de la comunidad. Yo salí en una oportunidad con un dirigente de la comunidad de sector de Vega Redonda. ¿Cuál sector? Vega Redonda, que era uno de los sectores que estaba licenciado, que era la comunidad Ángel Epueque. Con él, el señor Yazar Nahuel, si no me equivoco, salimos a revisar el estado en que estaba el avance, porque él estaba bastante preocupado por la situación de los caminos que estaban en su comunidad y que él veía que no había un avance.

Entonces, por lo mismo fue que desde la administración igual bajó una instrucción de que pudiera dársele el apoyo correspondiente en cuanto a lo



técnico. Desde lo técnico, bueno, usted habló de la ejecución de un contrato. El nombre en realidad no me recuerdo muy bien, pero era nombre bien largo. En realidad, era CPA. Lo que me acuerdo, Marcelo, tiene que ver, no recuerdo bien el nombre. Yo más que todo, mi dirección siempre era hacerle las consultas al inspector, entendido que él era el ente técnico que pudiera darle una respuesta en el sentido de cuál era el avance y con eso darle la respuesta a los vecinos que los consultaban a nosotros.

Porque yo me enteré de que era efectivamente el encargado de dar la inspección de la obra en sí, del contrato. Y claro, me dirigí a él, pero en ningún momento me enteré o supe que había otro inspector a cargo. Siempre estuve, como digo, los correos fueron enviados a él, a don Osvaldo.

Yo respondo desde lo técnico. Yo lo que presencié en terreno, efectivamente habían de acuerdo con lo que había que realizar, que nos manifestaban los vecinos, era que no se veía avance. Entonces, fue tanto eso que la insistencia en que se fue a terreno a revisar la su opinión desde lo técnico que efectivamente había que tener un avance x, el cual no se veía reflejado. Y por lo mismo era que se pedía explicación, en este caso el inspector fiscal, para ver cuál era la situación actual, si en realidad la empresa iba a poder dar cumplimiento, porque esa era la principal aprensión de los vecinos, de que ellos sabían, los vecinos sabían que había un plazo y que no se estaba cumpliendo. Entonces había preocupación por ello. **Entonces, efectivamente, los vecinos ya se habían dado cuenta de que efectivamente había un atraso y eso es lo que nos preocupaba a ellos, porque había un avance proyectado para ello y que no se veía en terreno ejecutado eso.**

AL QUERELLANTE: La comunicación se daba a través de la administración. Conversaba con los dirigentes y desde la administración bajaba la solicitud. A mí me decían si podía acompañar al dirigente X, por así decirlo, para que pudieran ir a ver el estado de los caminos o pudieran en cierta manera buscar información respecto del avance del proyecto, porque eso era lo principal que a ellos les aqueja, el avance.

Normalmente sí, yo no me recuerdo que haya conversado directamente con las personas que estaban en las comunidades beneficiadas de ese entonces, pero por lo general se levanta la demanda con los vecinos, se analizan los lugares que ellos quieren que se les mejoren los caminos, pero este proyecto por lo general igual tiene una demora, son de un año para otro o de pronto demoran más de un año.

Entonces, si me pregunta respecto del contacto que tuve con las personas que en ese entonces eran beneficiarias, la verdad las cosas no, yo no tuve contacto anterior a hasta el momento de que se estaba ejecutando el contrato y me pidieron desde la administración que pudiera ayudar.

No, siempre era lo que tenía que ver con lo que ellos veían en terreno el día a día, porque ellos, sin ir más lejos, ellos ya vivían en las comunidades, ellos todos los días salían por su camino, que es la fuente de salida hacia los



caminos principales, entonces ellos veían que no se avanzaba. Entonces esa era la principal preocupación por parte de ellos, nos hacían saber a nosotros para que nosotros pudiéramos ayudarles en ese sentido, para buscar la forma de que efectivamente se agilizaran los trabajos y pudieran tener una respuesta a lo que en este caso buscaban, que era mejorar sus caminos de acceso.

Sí, sí, eso es lo que uno, claro, siempre debe tener en consideración en el momento de atender las mejoras de los caminos. Claro.

¿En su experiencia, digamos, y desde el punto de vista de su cargo que tenía en la sección de camino, cuando un camino se considera de alto o intenso tráfico vehicular? Bueno, en realidad nosotros abocado lo que es los caminos vecinales propiamente tal, bueno, como municipio, nosotros no tenemos la capacidad de poder hacer un censo, que debería ser lo ideal de los caminos, pero sí mayormente se priorizan por un tema ya sea de tránsito, de locomoción colectiva que pudiera darse a través de subsidios de transporte de lo que es, digamos, buses, tránsito de vehículos escolares, y todo ese flujo igual es, digamos, proporcionado en gran manera por los mismos vecinos. Los vecinos igual le ayudan bastante en eso, porque como le digo, nosotros no tenemos la capacidad de estar en terreno con una persona haciendo un análisis, más en este caso un censo. Pero como le digo, se respalda mucho en lo que digan los vecinos.

A LA DEFENSA, usted dice que conversó con el inspector fiscal Osvaldo Mora. ¿Cuándo habrá tenido esta conversación con él o las conversaciones que tuvo? No, yo en todo momento hice consulta a través de correo electrónico. ¿Y estos correos aproximadamente, estas conversaciones a través de correo, ¿cuándo se hubiesen llevado? ¿En qué fecha aproximadamente? Si no mal recuerdo, octubre del 2014 en adelante. ¿Y hasta cuándo aproximadamente? Enero del 2015, más o menos. Pero insisto, yo en todo momento a don Osvaldo se le pedía que pudiera él darle respuesta respecto del estado de avance del proyecto en sí, para nosotros poder con eso entregarles la respuesta a los vecinos. Claro, desde lo técnico ocupando sus palabras.

Solamente a través de la inspección visual y a la vez basado en lo que indican las especificaciones técnicas del contrato. ¿Y qué indicaba las especificaciones técnicas? Por el camino. Entonces, que usted dice que no se cumplieron desde lo visual. Lo que dice en relación con las especificaciones técnicas, bueno, es que había una característica de un material, por ejemplo, de base chancada que había que colocar en un camino y se colocó material rodado. ¿Y esa base chancada dónde debería haber ido? ¿Arriba del camino, debajo del camino, sobre la plataforma de terminación? Sobre la plataforma, sobre la determinación, digamos, la carpeta de rodado. ¿Y eso es lo que usted logró visualizar, entonces? Claro, visualizamos eso. ¿Usted sabe si estas obras se recibieron? No, desconozco que no soy nosotros, como le digo, actuamos como en este caso, ente local, como municipio, le prestamos la asesoría técnica



a los vecinos de manera de poder buscar una respuesta para ellos. Pero en sí yo entiendo que eso es competencia del inspector fiscal a cargo del contrato.

Mire, después de eso, bueno, en realidad, por lo que me recuerdo, no tengo certeza de que efectivamente hubo una intervención por parte de vialidad o no, porque en su momento se hizo una compra de material y después esa compra de material se iba a distribuir en distintos caminos de carácter vecinal por parte de vialidad para poder mejorar. Pero ahí después no sabría dar una respuesta porque ahí asumió mi colega, don Claudio Gutiérrez, él estuvo ahí y ahí no sabría decirle si efectivamente yo ya subí mis otras tareas, me asumí como inspector de proyecto, digamos, en ejecución, vale decir, de obras ya de edificación. Entonces me cambiaron de rubro y ahí lo asumió don Claudio.

No sabría darle una respuesta concreta al respecto. Como le digo, yo comencé a hacer mis labores de forma distinta a las que venía haciendo respecto de camino. ¿Dígame quién es don Nelson Medina Torres? Don Nelson Medina, él trabajaba en el área de camino de 201.º. ¿Qué es 201.º? Camino de comunidad indígena. ¿Y esa unidad, no sé cómo llamarla, a quién pertenece, qué institución? Realidad provincial. ¿Y esa persona, Nelson Medina Torres, que trabaja en el 201.º que usted mencionó, tuvo algún tipo de participación en estos caminos? ¿Me refiero, algún tipo de trabajo que hubiese realizado en estos caminos? Como le digo, no me recuerdo si efectivamente, pero yo lo que le puedo decir es que efectivamente él se iba a hacer una compra para mejorar caminos en el sector.

Me enteré de que la Dirección Provincial de Vialidad, a través de su programa 201.º, el cual opera con fondo directo de vialidad y con sus maquinarias, intervendrían los caminos de la comunidad de Millaleo y Ancamil, agregando que la persona a cargo de esta faena es don Nelson Medina Torres, con oficina en calle Arturo Prat, al lado de Banco de Chile. Incluso el material para dicha faena está acumulado en un terreno municipal ubicado en el sector la Gallareta. Deben ser unos 2500 m cúbicos aproximadamente. Don Rodrigo, entonces, en base a esa refresque de memoria respecto a lo que fue su declaración, mi pregunta es usted mencionó en su declaración que efectivamente su colega Claudio Gutiérrez le habría informado que la Dirección Provincial de Vialidad, a lo menos durante ese año, entiendo que es el año que usted prestó su declaración, intervendrían los caminos de las comunidades Millaleo y Ancamil, y que de hecho tenían material acumulado en un terreno municipal y que lo iba a hacer don Nelson Medina Torre.

¿Mi pregunta es, se llevó a cabo esa intervención, si es que usted lo sabe? Ahí lo desconozco, como le digo, no sé si en realidad se habrá llegado. Lo que sí le vuelvo a reiterar que efectivamente, y como lo dice la declaración, a través de don Claudio, mi colega fue el que me comunicó eso. ¿Don Claudio, qué cargo tenía? Él está tomando lo que había dejado yo de camino. ¿Y cuando usted dice aquí se iban a realizar en las comunidades Millaleo, Yancamil, esas comunidades decían relación con los trabajos que se habían realizado por parte



de la empresa que usted está declarando el día de hoy o la empresa respecto de la cual usted declaró el día de hoy? No sabría decirle. ¿En qué comunidades fue a visualizar estos caminos? ¿A terreno? Ángel Epueque. Ángel Epueque. ¿Solo a esa comunidad fue a visualizar? Camino Ángel Epueque y Ancamil. ¿Y qué extensión de terreno usted visualizó? Extensión de caminos Ángeles, pues fueron alrededor de 1300 m, más 1000, como 2300 m. Dos caminos en Ángela Pueque, perdón, en Ancamil eran aproximadamente 3 km y fracción. ¿3 km? 3,6 si no me equivoco. 3,6, perfecto. ¿Y otro tramo de 700 m. ¿Ese otro tramo pertenecía a alguna comunidad o no? No. Y bueno, también concurría ver un Millaleo en ese entonces logramos ver el avance de un puente que había, que se está haciendo un puente.

Exhibición de fotografías N°2 set 477.

7.- JORGE COFRÉ CANIO, Funcionario Policía de Investigaciones, domiciliado en Calle Prat N° 19, Temuco.

Como le indiqué, soy funcionario de la brigada económico. A comienzos del año 2017 se recepcionó una orden de investigar de la fiscalía local Temuco a cargo del fiscal Roberto Garrido Bedwell, la cual tenía por propósito verificar el cumplimiento de dos contratos del Ministerio de Obras Públicas. Específicamente un PDI número tres, año 2015, el PDI número 13, año 2014.

Ambos guardan relación con mejoramiento y construcción de caminos de acceso a comunidades indígenas. El primero, el PDI número tres 2000, guarda relación con la ejecución de caminos en la comuna de Lonquimay. Específicamente son 12,2 km divididos en cuatro caminos que beneficiaban a dos comunidades indígenas. Y el PDI número 13 2014 correspondía a seis caminos, cobró un total de 10,4 km que beneficiaban a tres comunidades indígenas de la comuna de Vilcún. En este sentido, lo primero que se hizo fue a través de la página de Mercado Público, descargar las bases administrativas y las bases técnicas. Tuvo una reunión con el fiscal y se tomó la determinación de poder visitar estos caminos para ver en terreno cuál era el estado de estas obras. Entendamos que el primer camino, si los podemos ir por proyecto, el primer proyecto, el primer Pi, el 13 2015 fue aprobado el método de Lonquimay. ¿Ese es el primero? Ese es el primero. ¿Digamos, el PDI número tres 2015, cierto? Beneficiaba a dos comunidades de la comuna Lonquimay. Esto fue aprobado una resolución el mes de octubre del año 2015. Y nosotros hicimos esta visita inspectiva el mes de **enero del año 2017**. Es más, en esa oportunidad yo le propuse al fiscal Roberto Garrido que nos acompañara a ver en terreno cuál era el estado de estas obras. Lo mismo hicimos con él con el PD número 13 de 2014, que está aprobado por una resolución también del mes de octubre del año 2014. El mes de abril del año 2017 también le propuse al fiscal que fuéramos a hacer una supervisión en terreno respecto al estado de estas obras. Y eso fue lo que se hizo, en definitiva. ¿Perdón, para claridad, entonces, las visitas a terreno, en el caso de Lonquimay, en qué fecha se practican? Enero 2017, un poco más de un año de haber finalizado los trabajos por contrato en el caso de Lonquimay. ¿Y en el caso de Vilcún? Eso fue abril 2017. Las visitas en terreno. ¿Y ahora, en qué consistió esta visita a terreno? Bueno, mi profesión de base, ingeniero comercial, **yo no soy constructor, por lo tanto, yo le propuse al fiscal que pudiéramos ir a inspeccionar todas las faenas que no tuvieran o que no fuera necesario contar con el apoyo de algún profesional experto**. ¿Por ejemplo, los trabajos consistían sobre los caminos, cierto? Hacer una plataforma, hacer una carpeta granular de rodadura, además construir algunas obras de arte. Entiéndase por obras de arte, básicamente, de manera



coloquial, es hacer una alcantarilla que atravesase el camino de lado a lado para poder direccionar las aguas.

Las especificaciones técnicas son bien claras, viene todo detallado en una tabla. Por ejemplo, dice camino número uno, Lonquimay tiene una extensión de 3 km. A los 100 m debe haber una obra de arte. Esa obra de arte debe estar construida en un tubo de tal materialidad, ese tubo debe tener ciertas especificaciones. Además, esta obra de arte en cada uno de sus costados debe tener una mampostería de piedra y además debe haber un foso. Y eso fue lo que hicimos en terreno. Tomamos como base las especificaciones técnicas, nos posicionamos al comienzo de cada uno de los caminos que conforme a las bases técnicas están georreferenciado a través de coordenadas GPS. Y además existe una fotografía de cómo se inicia el camino. Y desde ahí empezamos a medir. ¿A los 100 m debería era una obra de arte, está o no está? Si no estaba, fuimos con apoyo de peritos, sacábamos una fotografía y de ahí seguíamos una por una.

Hay caminos que tienen una obra de arte, pero hay caminos en Lonquimay que tienen hasta 14 obras de arte. Fuimos verificando y tomando nota de cada una de las cosas que estaban construidas conforme a las especificaciones técnicas. Pero insisto, solamente trabajos que, a través de la observación, uno de manera muy sencilla podía verificar si estaban hechos. Y otra cosa que hicimos fue medir, como le dije, el camino tiene una carpeta de ciertas dimensiones y además tiene una carpeta de rodadura. En la especificación dice que ese camino debe tener un ancho de coronación de 3,5 m, de 4 m. Y lo que hicimos fue lo mismo. Desde el .1 cada 50 m, cada 100 m, cada 500 m, dependiendo del largo del camino, fuimos haciendo mediciones de ese ancho de coronación. ¿Puede indicar al tiro qué es lo que es el ancho de coronación? El ancho de coronación, lo que pasa es que esto viene en las especificaciones técnicas, viene un bosquejo, viene un dibujo. Voy a tratar de expresarlo. Como le digo, yo soy comercial, no soy constructor, pero el camino tiene una carpe, una plataforma, que es como la base del camino. Y luego de esa plataforma viene una estructura que es como piramidal. Y esa es la carpeta de rodadura. Y esa forma tiene esta forma sube, después tiene un pequeño declive, llega al centro, baja. Es como el ancho es como explicarlo es como en un camino es por donde pasan los vehículos, como la parte más alta. Es que podría dibujarlo y expresarlo. No sé cómo picar. Por ejemplo, tiene que medir 4,5 m. Y de ahí viene esta estructura que vendría siendo el camino, que sería aquí. Aquí está la cuneta. Y luego tiene esta forma pum. ¿Cierto? Y aquí esto siesta mide 4,5 regularmente. La carpeta media 3,5. Y aquí tiene una angulación que se llama zona de bombeo, que es para que el agua caiga. Entonces, este es el ancho completo del camino. Y nosotros medimos esto de punta a cabo.

O sea, por ejemplo, en el camino de LONQUIMAY, el camino número uno tenía una extensión de 3 km. El camino número dos de cinco 6. El camino número tres de 0,3.

Bueno, es que tendríamos que hacer una división, más o menos camino por camino. Ordenémonos en el PDI tres 2015, que es de Lonquimay. Como le dije, el camino número uno tenía una extensión de 3 km. Ese camino contemplaba la fabricación de 12 obras de arte. De esas 12 obras de arte, ninguna fue construida. Además, tenía una obra número 13, que era en definitiva a una obra de arte que ya estaba en el lugar, debían hacer un trabajo de mampostería, que en definitiva es donde sale el tubo. Hacer un trabajo mampostería de piedra para evitar que el ripio se desprenda del camino y tape, en definitiva. Y eso tampoco estaba en el camino. ¿Y respecto a medir el ancho de coronación? Este camino tenía un **ancho de coronación conforme a las bases de 3,5 m. Y en toda su extensión. No logramos medir un ancho de coronación similar. Era más cercano a los 3 m.** No se ajustaba, no daba el ancho. ¿Cómo se graficó o fijó eso? A través de, como le digo, solicitamos el apoyo de un perito fotográfico. Él hacía la medición, medíamos el ancho de coronación. Él tomaba una



fotografía general del punto exacto donde hace la medición y luego una fotografía específica respecto a la medida. Y todos esos puntos están en el informe policial.

Solicito autorización para efectos de exhibir acápite otros medios de prueba, el numeral dos desde 477 imágenes.

Fotografía 86, cofre. Ese es el acceso al kilómetro número uno del PDI número tres. Que ese kilómetro tiene ese camino tiene una extensión de 3 km de largo. ¿De qué contrato? Del tres 2015. PDI tres 2015, comuna de Lonquimay, sector Icalma.

Fotografía 90. Se puede apreciar un cauce de agua que atraviesa el camino de lado a lado. Y ahí, en ese punto exacto, debería haberse construido de una obra de arte transversal, como le dije, una cañería. Específicamente para este contrato se especificaba un tubo Th BP, que es un tubo de hormigón de base plana y se puede constatar que no está el tubo, obviamente tampoco está la mampostería que lo recubre, tampoco está el foso, tampoco está el terraplén. No, no hay nada construido.

Fotografía 99, la misma figura. La misma figura. En esta fijación existen seis fotografías. Las primeras seis fotografías corresponden a puntos que nosotros fijamos fotográficamente de un total de 12. **Pero son los puntos donde era más evidente que era necesario la construcción de la alcantarilla porque en muchos de ellos aún se observaba el flujo de agua o incluso algunos puentes que están ya a punto de caerse.**

Fotografía 101, Es el kilómetro. Ahí también debía haberse construido una obra de arte y no está.

Fotografía 114. Ese es el kilómetro una 5 del contrato número uno. Ahí obviamente se aprecia, como le digo, esto fue en verano, esto fue en enero, enero 2017. Se ve el cauce de agua y ahí no hay ninguna construcción.

Fotografía 128, ¿Hay un puente, cierto? Ahí también se ve el cauce de agua. Ahí también debería haberse construido una obra de arte transversal. No está. ¿En qué punto del camino? ¿En qué punto o en qué extensión? Uno, 7 km.

Fotografía 130, mismo kilómetro, uno, 2 también existe. Ahí se nota que hay un cauce, un flujo de agua. También debió construirse una obra de arte y no está.

Fotografía 107. Bueno, como le dije, este camino número uno contemplaba la construcción de 12 obras de arte. En la fotografía se exhibieron sólo seis, por la extensión, por el número de fotografías que sacamos. Y esto corresponde a una obra de arte que estaba construida y conforme a las bases lo que debían hacer era construir la mampostería para evitar obviamente que el ripio caiga y no se aprecia. Eso es el kilómetro una 2 de este contrato del camino número uno.

Fotografía 87. Bueno, como lo expliqué, nosotros la medición que se hace, se hace conforme al ancho de coronación. Lo que hicimos fue ir midiendo este camino. ¿Este camino tenía un ancho de coronación especificado conforme a las bases de tres 5 m.

En la fotografía siguiente, fotografía 88, se aprecia la medición, ¿cierto? Y es de 3 m con 17 cm, inferior a los 3,5 que especifica la base técnica.

Fotografía 92. También se hace la medición.

Fotografía 93 y 94, la medición anterior, dos, nueve de los 3,5.

Fotografía 96, la misma medición del ancho de coronación.

Fotografía 97 y 98, la medición es 2 m con 65 cm.

Fotografía 110, la misma medición de ancho coronación.

Fotografía 111 y 112, la medición es dos y 34 cm.

Fotografía 116, la misma medición de ancho coronación. **117, 118**, la medición es de dos y 26 cm. **Fotografía 125** con esta fotografía lo que quisimos expresar es que, en definitiva, a lo largo del camino, este camino yo lo recorrí caminando en toda su extensión y hay muchas partes del camino donde **se aprecia la ausencia parcial o total de material**. Y esta fotografía específicamente es del kilómetro una 7, y ahí obviamente se aprecia que tiene muy poco



material. **Ahora, calcular de manera específica cuánto material está como conforme al trabajo que nosotros hicimos era imposible, pero sí sirve para poder observar la cantidad de material que tenía el camino al momento que nosotros hicimos esa visita.** Como ya lo indiqué, es aproximadamente un año después de haberse finalizado la obra. Camino número dos fotografía dos, el mismo ejercicio. Este es el inicio del camino número dos, el cual tiene una extensión de cinco 6 km.

Fotografía 11 se hizo el mismo ejercicio, se recorrió en toda su obtención el camino. Este camino contemplaba la construcción de 14 obras transversales. En la proyección se incluyeron siete fotografías. Esta corresponde al kilómetro una 8, donde también se aprecia obviamente un curso de agua donde debía haberse construido una obra transversal y no está.

Fotografía 12. ¿Ahí si bien no se aprecia un cauce, es el kilómetro una y 25, también está conforme a las bases especificada la construcción de una obra de arte, lo más probable que sea para poder dirigir la agua que se ve a la izquierda, se ve, cierto? Está marcado donde baja agua de hielo y tampoco está construido la obra arte.

Fotografía 21 kilómetro dos y 25. Conforme a las bases, ahí debía haber existido, haberse construido una obra de arte y no está.

Fotografía 28, kilómetro dos 68. Ahí se aprecia un riachuelo que pasa en la parte baja. También había una obra de arte transversal especificada en las bases y no está. Fotografía 38. También se aprecia un cauce de agua. Kilómetro tres y 28. También está especificada en las bases de la construcción de una obra de arte y no está.

Fotografía 49, kilómetro cuatro y 35. Conforme a las bases también debería haberse construido una obra de arte y no está.

Fotografía de 59. Lo mismo. Kilómetro cinco 2, también correspondía a la construcción de una obra de arte y no está. ¿Fotografía cuatro Bueno, ahí se hace la misma figura que en el camino anterior, cierto? Se mide el ancho de coronación. Ese camino por bases tenía un ancho de coronación de 4 m. Si pasamos la fotografía siguiente, por favor, la medición es de tres 6 3 m 60 cm.

Fotografía 15. La misma figura. Se mide el ancho de coronación, el cual tiene como resultado.

Fotografía 16 17 3 m 68 cm. Fotografía 46. También una medición del ancho coronación Fotografía 47 48 el cual tiene una medición de 3 m, debiendo medir a lo menos 4 m conforme a la base técnica. 31 también es una medición del ancho coronación. Topografía 32, una medición de 2 m 90 cm.

Fotografía 25 otra medición del ancho de coronación.

Fotografía 26 27 con una medición de 3 m con 10 cm.

Fotografía 35 también una medición del ancho coronación.

Fotografía 36 35 una medición de 3 m con 47 cm. **Fotografía 64,** como lo indiqué, este camino número dos debía medir cinco 6 km y esa línea roja marca el kilómetro cinco 3. Desde ahí en adelante no se aprecia ningún tipo de aplicación de material. O sea, existen 300 m de material de camino que no se le aplicó ningún tipo de material Chancado.

Fotografía 65 es la imagen, el tramo que especifique yo, que son un tramo desde los cinco 3 km en adelante. Camino número tres

Fotografía 82. Ahí a los 200 m correspondía la construcción de una obra de arte. Obviamente se ve un flujo de agua. No está. La siguiente, por favor.

Fotografía 84 lo mismo a los 280 m. En ese flujo de agua también correspondía a la construcción de una obra de arte y tampoco está.

Fotografía 79 también se hace el ejercicio de mire el ancho de coronación.

Fotografía 80 - 81 con un ancho de 2 m 70 y cuál era el ancho acá 3 m.

Fotografía 75 ese también se mide el ancho de coronación y ahí mide 3 m 20. Pero hay que aclarar que de este camino de 300 m sólo se detectó la presencia de material hasta los 180 m.



De los 180 m adelante, donde está la primera obra de arte, en adelante no hay nada, no hay ningún trabajo. Camino número cuatro Este es el camino cuatro y último de este proyecto de calma.

Fotografía 139 Este es el acceso a este camino número cuatro, el cual tenía una extensión de tres 3 km.

Fotografía 143 este camino tenía contemplada la construcción de seis obras de arte transversal. En esta oportunidad se incluyen la ubicación de las 6 h transversales conforme a la medición que hicimos y no hay ninguna. Ahí está el kilómetro una 1, no hay. Kilómetro una 4, no hay nada. Kilómetro una 5.

Fotografía 148. Fotografía 149 Sí. Kilómetro una 7, no hay ninguna obra de arte.

Fotografía 154. Kilómetro dos 8, tampoco. No hay ninguna obra de arte. **Fotografía 155.** Kilómetro 3100, tampoco. No hay ninguna obra de arte construida. **Fotografía 156** y ese es el final del camino número cuatro. Y ahí también estaba contemplada la construcción de la nueva de arte y tampoco está. Y se puede apreciar en la fotografía anterior, si pudiera ver retroceder, por favor, una ahí se puede apreciar claramente el estado del camino y la cantidad de material que tiene aplicado.

Fotografía 155. Bueno, me refiero a que el camino está evidentemente roto, hay una gran cantidad de barro y se aprecia que hay muy poco material aplicado. Por cuanto, como le digo, yo insisto, yo no soy ingeniero constructor, pero me parece extraño que a un año de haberse construido el camino se encuentre en estas condiciones.

Fotografía 140. Se hace la misma medición del ancho de coronación. Este camino tenía, conforme a las bases técnicas, un ancho de coronación de tres 5 m. Y las mediciones son de **fotografía 141 142**, tres 4 m. **Fotografía 145** también se mide el mismo ejercicio, se mide el ancho de coronación. **146, 147.** Dos 4 m tenía dos y 47 m tiene de ancho. El mismo ejercicio, una medición de ancho de coronación. **151 y 152.** Dos 5 m fue la medida que hicimos. ¿Y cuál era la que debía ser? Este era me parece mucho que era tres 5, el ancho de coronación de eso. **Fotografía 157.** El ancho de coronación. Ciertamente. Es una medición de ancho de coronación con resultado de dos y 48 de los 3,5 que indicaba la norma. **Fotografía para constancia 158 y 159.** Eso es todo. En definitiva, ahí lo que está plasmado es toda la revisión que hicimos, toda la visita que se hizo al contrato número tres 2015. Y ahora continuamos con una segunda presentación de Vilcun. Este contrato de Vilcun incluye seis caminos con una extensión total de 10, 4 km. El ejercicio que se hizo fue el mismo, pero esto fue el mes de abril del año 2017. Y este contrato fue firmado este el 13 PDI 13, año 2014. La resolución es de octubre del año 2014. Nosotros lo visitamos en abril del año 2017, también en compañía del fiscal Roberto Garrido. Este es el camino número uno, tiene una extensión de 4,5 km. Y el ejercicio que se hizo fue el mismo.

Fotografía número uno. Este es el denominado camino número uno de Vilcun. PDI 13 2014.

Fotografía, número 19. Bueno, este camino es diferente a los otros. Aquí efectivamente los trabajos este camino incluía la construcción de 6 h transversales en tubos de poliuretano de alta densidad. Se aprecia en la fotografía que sí está instalado el tubo, pero está cubierto con vegetación. Este es el kilómetro cero 7. Si Esto también es otra transversal, también está instalada, pero al igual que en la fotografía anterior, este tubo está cubierto por vegetación y por ripio. Este el kilómetro tres 2, Que esté cubierto por vegetación en ripio, que no, como le digo, sino un profesional experto, yo entiendo que no cumple su función de poder de alguna manera dirigir el agua, porque más del 50 % está cubierto por fotografía 58. Lo mismo, lo mismo. ¿Esa es una obra transversal que está ubicada en el kilómetro cuatro 6, cierto? Efectivamente, el trabajo se aprecia que se hizo. O sea que en este caso la obra transversal se instaló, pero al igual que las otras fotografías, en su mayoría están cubiertas por vegetación.



Fotografía 41, este como dije, este camino número uno incluía la construcción de seis obras transversales, pero una de esas incluía la reposición de un tubo. Y ese tubo se puede apreciar que es un tubo metálico. Es un tubo metálico que corresponde a una instalación anterior. Eso quiere decir que, en ese punto, que es el kilómetro dos 85, se debía retirar ese tubo e instalar un tubo plástico corrugado. Y ese trabajo específicamente no se hizo. En la base de licitación decía claramente que en el kilómetro 2580 se debía retirar el tubo antiguo e instalar un tubo nuevo.

Y ahí se puede apreciar evidentemente un tubo metálico que no corresponde a las especificaciones indicadas en las bases. Se hizo el mismo ejercicio que los otros caminos. Se mide el ancho de coronación. El ancho de coronación determinado para este camino conforma las bases era de 3 m. La medición de la primera medición es de tres 3 m. 16. El mismo ejercicio, se mide el ancho de coronación.

Fotografía 17. El resultado también es tres 3 y debía ser tres.

Fotografía 21. También una medición de ancho de coronación.

Fotografía 22. El resultado igual es tres 3.

Fotografía 43. El mismo ejercicio de medición de ancho coronación. La medición es tres 4.

Fotografía 45. El mismo ejercicio, medición de ancho coronación

46. La medición es dos 8.

Fotografía 29, eso ahí se aprecia el kilómetro una 3 del camino y obviamente se observa que hay una ausencia parcial de material. Esa es la condición que tenía el camino cuando nosotros nos visitamos. Ese tramo específico tenía muy poco material, siendo este contrato el número uno de Vilcún, donde más se acerca la medición de ancho de coronamiento a la especificación técnica de las bases que era de 3 m. Camino número dos.

Fotografía número 73. Es lo mismo, este también un camino. Este el camino número dos tiene una extensión de 0,7 km. Se hace el mismo ejercicio. Este contrato solamente tenía considerado la instalación de 1 h de arte transversal

Fotografía 78, que es esa que está a los 260 m de extensión del camino. Está obviamente instalada, pero pasa lo mismo, la vegetación está cubierta por vegetación y también por un poco de ripio.

Fotografía 73. Claro, ahí se hace el mismo ejercicio. También se mide desde el inicio el ancho de coronamiento del del camino. Conforme a las bases debía medir 4 m y la medición es de 3 m.

Fotografía 76 mismo ejercicio, medición de ancho de coronamiento. ¿Cuánto debía medir? Cuatro.

Fotografía 77. Dos 9 la medición.

Fotografía 81 medición también de ancho coronamiento. Resultado dos 8, debiendo ser cuatro.

Fotografía 83 medición de ancho coronamiento. La medición es de tres 2 y debía ser cuatro. Camino número tres. Esto es lo mismo. Este el contrato número tres es el inicio de este camino número tres, el cual tiene una extensión de una 2 km. Se hace el mismo ejercicio, se recorre desde su inicio, midiendo, observando la instalación de las horas transversales.

Fotografía 92, ahí está la primera obra transversal. Aquí como le digo está instalada. También está cubierta por vegetación, pero sí se instaló. Corresponde a las especificaciones técnicas, por lo menos en tipo de tubería y diámetro de la tubería y largo de la tubería.

Fotografía 96, ahí también se aprecia otra obra de transversal. También está instalada. También está acorde a las especificaciones del tipo de tubería, diámetro, pero se puede apreciar obviamente que está cubierta con vegetación.

Fotografía a 106, ahí está la otra obra transversal, también está instalada. Misma figura.

Fotografía 112, ahí está la cuarta obra transversal, también está instalada. En definitiva, en



este camino las obras transversales que estaban especificadas conforme al contrato se instalaron. Y el segundo ejercicio fue medir el ancho de coronación. Este camino debía tener un ancho coronación de 4,5 m. La primera medición es de tres 3 m. Lo mismo medición de ancho coronamiento 98, mide tres 2 m.

Fotografía 111 medición de ancho coronamiento. **Fotografía de 113** es de dos 9. **Fotografía 114**, ahí está también una medición del ancho coronamiento. **Fotografía 115**, el resultado es tres y 10 cm de los 4,5 que debía medir. Mismo ejercicio, ancho coronamiento. Camino número cuatro. **Fotografía 117** este también corresponde al camino número cuatro de este contrato. Tiene una extensión de 1000 m. Este el inicio del camino número cuatro. Ahí está la primera obra de arte transversal. Como pueden ver, corresponde a la instalación de un tubo corrugado, pero ahí se pueden ver las condiciones en la cual se encuentra. Está cubierto también por vegetación. Eso está a los 50 m de inicio del camino. **Fotografía 131**, la misma figura. También se aprecia la instalación del tubo corrugado. La obra transversal se encuentra instalada, pero está en las condiciones que se aprecia. Está cubierta por vegetación y tierra.

Fotografía 158 ahí también está, se aprecia a la derecha, se ve el inicio del tubo de PVC. Está instalado, corresponde al tipo de tubo que requería la expedición técnica, pero también se encuentra cubierto por vegetación y tierra. Este camino, además de la construcción de las obras transversales, requería la remoción de un puente antiguo y la construcción de uno nuevo. Conforme a la observación y a la entrevista y empadronamiento testigos, ellos indican que el trabajo se hizo. Ese puente fue construido por la constructora, pero no me puedo pronunciar respecto a las especificaciones técnicas del puente, por eso se fijó el largo también se fijó. En la fotografía siguiente se puede ver fotografía 148, ahí está el puente. **Está fotografía 120**. Se hace la misma medición también del ancho de coronamiento. Este camino debía tener un ancho de coronamiento de 4 m. **Fotografía 121** la primera medición es de dos 9 124. También se mide el ancho coronamiento. Resultado dos 7 m. **Fotografía 128**, medición de ancho coronamiento, resultado dos 7. **Fotografía 138**, el mismo ejercicio, se mide el ancho coronamiento. Ahí se puede apreciar el puente, esto antes de acceder al puente. El resultado es tres 3 m. El mismo ejercicio y el resultado es tres 1 m. Perdón. Es el inicio del camino número uno. El camino número cinco. **Fotografía 172** ahí, esa es la ubicación de la primera obra transversal que conforme a las bases técnicas debía estar instalada. Obviamente esa obra transversal no se hizo. **Fotografía 166**, ahí también correspondía a la construcción de una segunda transversal. Tampoco está. Ese camino solamente tenía contemplada la construcción de 1 h transversal, que es la imagen que se pasó anteriormente. ¿Cuál de las dos? Esa, la imagen 172. Corresponde a la única obra transversal que tenía incluido conforme a las bases técnicas, ese camino número cinco. La fotografía que viene es ya la medición del ancho de coronamiento que conforman las bases era de 3 m y la medición que se hizo fue de dos 8. **Fotografía para contarse magistrado 167**. **Fotografía 168**, también mismo ejercicio, medición de ancho coronamiento. **Fotografía 169**, medición fue dos 7 m, debiendo ser tres. **Fotografía 174**, el mismo ejercicio, medición de ancho coronamiento fue dos 3 m. **Fotografía 177**, mismo ejercicio, ancho coronamiento, medición. **Fotografía 178**, dos 2 m de los tres que indicaba la base técnica. Camino seis. **Fotografía 180**. Ya, este es el último camino de este contrato, Vilcún, el cual tiene una extensión de 1150 km. Y el ejercicio que se hace el mismo. **Fotografía 187** Sí, ese corresponde al kilómetro a los 780 m del camino. Ahí correspondía la instalación de una obra de arte transversal, que no está. **Fotografía 189**, ahí estaba contemplada la construcción de la segunda obra transversal. Tampoco está. **Fotografía 191**. Y ahí estaba contemplada la instalación de la tercera obra transversal a los 1000 m del camino y tampoco está instalada. **Fotografía 180**, mismo ejercicio, se mide el ancho de coronación. Conforme a las bases técnicas, ese camino tenía un ancho de coronación de 3 m. **Fotografía 181**, la primera medición es de 2 m y medio. **Fotografía 183**, mismo ejercicio, medición de ancho coronamiento de 3 m y la medición fue **Fotografía 184** de dos



1 m. Fotografía 196, el mismo ejercicio, se mide el ancho de coronamiento. Fotografía 197 y el resultado es de 2 m 60. Fotografía 198 ahí está, es el fin del camino número seis. Se incluye solamente para observar el estado del camino. Al momento de hacer la observación, obviamente se ve que hay un poco de material aplicado, pero ya existe pasto, material vegetal al centro del camino.

Sí, lo que pasa es que nosotros en las bases técnicas aparecían en las bases técnicas asociadas a cada camino aparecía un número de un nombre, un teléfono de contacto. En el camino de Lonquimay aparecía el contacto de doña Felicinda Nahuelcura. Nosotros la ubicamos primero para que nos ayudara a poder ubicar. Si bien nosotros ya teníamos los caminos georreferenciados, tomamos contacto. Hay que entender que estas son comunidades pehuenches, específicamente allá en la zona de Lonquimay, están muy bien organizados. Para ellos era muy importante que estos caminos pudieran estar en buenas condiciones porque una de sus principales fuentes de ingresos es el turismo. Nosotros nos entrevistamos con ella al empadronar, incluso ella prestó declaración ante nosotros. Principalmente nos presentó su malestar respecto al estado en que se encuentran los caminos. Ella también de alguna manera participó activamente desde la gestión de este camino hasta la ejecución. Ella incluso me dice que participó en las faenas de trabajo. ¿Ella puede precisar de alguna manera hasta cuántos días trabajó la empresa? Ella habla de un trabajo inicial de dos días el mes de noviembre y de ahí de cuatro semanas de 20 días más. ¿El mes de febrero de qué año? Del año 2016, noviembre del 2016, febrero del 2017. El contrato es este, es el PDI número tres. La resolución es de octubre del 2015. Ella refiere primeros trabajos fines del año 2015 y verano 2016. Y ella cuantifica los trabajos en no más de 22 días, entendiéndose que el contrato tenía un plazo de 180 días corridos. ¿También ella es capaz de cuantificar el volumen de material? Ella habla de que el material aplicado no es más de 20 camiones. Lo que puedo referir específicamente a lo que me correspondió a mí, que tiene que ver con poder cuantificar los trabajos que se hicieron. Ese fue el único empadronamiento en el otro camino, en el otro PDI, que el 13 de 2014 me entrevisté con doña Helen Vallejo y el relato que ella hace es muy parecido. Ella también es una persona muy activa en la comunidad, también participó en la gestión de la construcción de estos caminos a través del municipio, a través del ministerio. Y ella también presentó su malestar respecto al estado actual de los caminos. Y ella de alguna manera igual pudo precisar, si bien técnicamente puedo precisar la fecha en que se ejecutó la obra, y ella habla si este trabajo, este contrato, esta resolución es de octubre del 2014, ella me indica que los trabajos comenzaron en abril del 2015 y finalizaron como en julio del año 2016. Pero el relato de ella es el mismo. O sea, en general guarda relación principalmente con el malestar del estado en que se encuentran los trabajos actualmente, o sea, los caminos actualmente. Y es evidente, o sea, si uno puede ver la fotografía, ve que las obras de arte obviamente están cubiertas por tierra, están cubiertas por pastores. Entonces, en definitiva, ellos en invierno sus caminos se le inundan y no los pueden usar.

No, lo que sucede es que nosotros con esta inspección ocular que hicimos al trabajo, y como yo lo indiqué, se hizo en compañía del fiscal, lo que hicimos nosotros fue hacer un informe preliminar dando cuenta de todas estas observaciones y de estas fijaciones fotográficas que hicieron en compañía de personal del laboratorio criminalística. Yo, dentro de las apreciaciones, solicito al fiscal poder gestionar la incautación de todos los antecedentes documentales que den cuenta del pago, efectivamente, de solicitar copia del libro de obra, todo lo documental, en resumen. Y el fiscal lo que hace finalmente es enviar una orden investigar a la brigada anticorrupción. Entonces, mi participación en esta investigación fue solamente en la etapa preliminar. Nosotros lo único que hicimos fue hacer una inspección ocular a los trabajos, eso representarlo en un informe policial y el fiscal Roberto Garrido



finalmente decide tomar toda esta investigación y derivarla a Santiago. Información referente a pagos no fueron analizados por la brigada. Por mí específicamente, no los tuve a la vista.

AL QUERELLANTE, FOTO 148, Como le dije, nosotros, insisto, yo no soy un profesional del área de la construcción, nosotros lo único que hicimos fue observar y fijar fotográficamente todas las estructuras o trabajos que no requieran la ayuda de un profesional experto. Entonces, yo lo que veo ahí la construcción de un puente. Sí, eso lo dijo con esas palabras. Eso es. Constatamos que el puente está y está en la ubicación en la cual la base técnica indicaba que debía estar. Y, además, conforme al empadronamiento de testigos, también nos relataron que ahí había un puente en mal estado que fue demolido y se construyó un puente nuevo. Fui yo, 1 colega de nombre Mario Carrasco, que también es funcionario del agregadito económico, pero ahora está agregado al abrigado la o de activo. Y también concurren dos peritos del laboratorio criminalística. Uno, obviamente concurre en Lonquimay, la otra concurre a Vilcún. ¿Recuerda usted si tenían alguna especialidad profesional? ¿Mario? Ingeniero comercial, igual que yo. No tenemos especialidad. Esa es su especialidad. Ambos eran funcionales de la brigada delito económico. ¿Y los demás funcionarios? El otro perito era un perito fotográfico.

Lo que pasa es que esas bases son construidas esas bases son redactadas por otra empresa. Hay otra empresa que las construye.

Entiendo yo que el ancho del camino va a depender conforme a las características del terreno, porque, además, si usted puede apreciar que hay cercos que lo limitan, entiendo yo que se hace conforme a una inspección ocular del terreno. Y si usted se fija también, los caminos en su mayoría tienen 3,5 m de ancho, que es lo que se requiere para que puedan pasar dos vehículos. Una apreciación que hago yo.

En Lonquimay la circulación es muy baja. Yo recuerdo que mientras hicimos la inspección ocular en Lonquimay, no pasó ningún vehículo, excepto el que andábamos, el de nosotros y el de la fiscalía. enero 2017. ¿Y en Vilcún? Abril 2017. Un tránsito un poquito mayor, pero también muy bajo, entendiendo que son comunidades indígenas. Y de ese escaso movimiento vehicular. Livianos.

A LA DEFENSA, ¿Usted dijo qué extensión de en total? 10 4. 10 4 kg. Perfecto. ¿Había carpeta de ripio en el camino? ¿Sobre el camino, antes de la construcción, cuando usted fue? Cuando usted fue, sí. ¿Su totalidad o faltaba en alguna parte? Había tramos donde había parcial. Y en otras partes definitivamente no había. Y esas fotografías incluyeron incluso nosotros las dejamos al final de cada presentación para poder tener una observación. Perfecto. ¿Y ese porcentaje que no había, o había parcialmente en extensión, cuánto será? Difícil de cuantificar. ¿Difícil? Difícil de cuantificar. Incluso fue una de las cosas que yo le solicité al fiscal en su momento, era poder hacer un trabajo más específico. También se evaluó esa posibilidad de hacer una calicata para poder medir ese nivel. Pero estaba el problema de que le solicitábamos ese trabajo por cuanto la investigación era estaba involucrado el MOP. Tratamos de hacer algunos acercamientos con algunas universidades, pero el valor era demasiado alto.

De Lonquimay. 12. 2. ¿Recuerdan que extensión en porcentajes no había material o faltaba material? También es difícil de cuantificar. Pero sí puedo hacer la declaración de doña Felicinda. Ella habla de un cumplimiento no mayor al 5. %. Ahora, obviamente, en base a la observación que hace ella, no es un trabajo más técnico. Justamente también, ya que tocó el tema de la señora felicinda en Lonquimay, ella, por lo que usted dijo, que la empresa solamente trabajó fines 2015, que ya le había dicho, y verano 2016, y que ella habría visto que fueron unos 20 camiones, pero eso ella lo vio en su camino, que le correspondía, o la extensión de los 12 2. Ella supervisó todos los trabajos de la obra. Una persona bastante particular. Ella, por llamarle una persona demasiado intensa, siempre estuvo encima, llamaba



a mí me llamó muchas veces para saber qué pasaba. Y ella, su esposo, acompañaron las faenas durante todo este tiempo. Perfecto.

Don Jorge, respecto a las fotografías que se mostraron en particular en el camino de Vilcún, de las obras de arte realizadas, usted dijo que tenían bastante vegetación, otro tipo de cosas. ¿A quién le corresponde la mantención de esas obras de arte? Lo desconoce. No tuve la vista ningún documento, excepto los que están en la plataforma de mercado público, que son las bases administrativas y bases técnicas.

Prueba documental:

1.- Informe investigación especial N° 44/2017, de fecha 05 de junio de 2017, de la Contraloría Regional de la Araucanía y anexos.

4.- Copia autorizada de escritura pública de modificación de Sociedad de Construcción, Proyectos, Servicios e Ingeniería CSP Limitada y sus modificaciones, de fecha 24 de mayo de 2012; fojas 951v, N° 763, año 2012

7.- Copia autorizada de escritura pública de constitución de Sociedad de Construcción, Proyectos, Servicios e Ingeniería CSP Limitada, de fecha 10 de octubre de 2003.

8.- Copia autorizada de extracto de constitución de Sociedad de Construcción, Proyectos, Servicios e Ingeniería CSP Limitada y sus modificaciones, de fecha 02 de diciembre de 2003; fojas 978v, N° 827, año 2003.

13.- Oficio N°29 de fecha 11 de septiembre de 2014, Informe de Evaluación Económica del contrato del ANT. Y Proposición de adjudicación. PDI 13/2014 "Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía" SAFI 219.920, de la Dirección de Vialidad.

14.- Oficio N° 49 de fecha 25 de agosto de 2014, informe de evaluación técnica, Dirección de Vialidad. PDI 13/2014 "Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía" SAFI 219.920, de la Dirección de Vialidad.

15.- Estado de pago N°1 de fecha 10 de febrero de 2015, por un valor líquido de \$33.541.805, por un avance físico del 16,7 por ciento de la obra. PDI 13/2014 "Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía" SAFI 219.920, de la Dirección de Vialidad y sus anexos.

16.- Declaración Inspector Fiscal, Estado de pago N° 1, de fecha 09 de febrero de 2015. SAFI 219.920, PDI 13/2014 "Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía".

17.- Copia factura N° 00150, de fecha 09 de febrero de 2015, de Sociedad de Construcción, Proyectos e ingeniería CSP Limitada, correspondiente a Estado de Pago N° 1. PDI 13/2014 "Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía".



- 20.- Estado de pago N°2 de fecha 09 de marzo de 2015, por un valor líquido de \$120.923.259, por un avance físico del 74,29 por ciento de la obra. PDI 13/2014 "Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía" SAFI 219.920, de la Dirección de Vialidad y sus anexos.
- 21.- Declaración Inspector Fiscal, Estado de pago N° 2, de fecha 05 de marzo de 2015. SAFI 219.920, PDI 13/2014 "Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía".
- 22.- Copia factura N° 00155, de fecha 05 de marzo de 2015, de Sociedad de Construcción, Proyectos e ingeniería CSP Limitada, correspondiente a Estado de Pago N° 2. PDI 13/2014 "Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía".
- 25.- Estado de pago N°3 de fecha 01 de abril de 2015, por un valor líquido de \$52.061.621, por un avance físico del 97,59 por ciento de la obra. PDI 13/2014 "Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía" SAFI 219.920, de la Dirección de Vialidad y sus anexos.
- 26.- Declaración Inspector Fiscal, Estado de pago N° 3, de fecha 01 de abril de 2015. SAFI 219.920, PDI 13/2014 "Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía".
- 27.- Copia factura N° 00157, de fecha 01 de abril de 2015, de Sociedad de Construcción, Proyectos e ingeniería CSP Limitada, correspondiente a Estado de Pago N° 3. PDI 13/2014 "Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía".
- 30.- Estado de pago N°4 de fecha 21 de diciembre de 2015, por un valor líquido de \$49.999.963, por un avance físico del 100 por ciento de la obra. PDI 13/2014 "Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía" SAFI 219.920, de la Dirección de Vialidad y sus anexos.
- 31.- Declaración Inspector Fiscal, Estado de pago N° 4, de fecha 01 de diciembre de 2015. SAFI 219.920, PDI 13/2014 "Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía".
- 33.- Copia factura N° 00182, de fecha 01 de diciembre de 2015, de Sociedad de Construcción, Proyectos e ingeniería CSP Limitada, correspondiente a Estado de Pago N° 4. PDI 13/2014 "Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía".
- 37.- Estado de pago N°5 (devolución de retenciones) de fecha 18 de mayo de 2016, por un valor líquido de \$13.077.303, por un avance físico del 100 por ciento de la obra. PDI 13/2014 "Conservación caminos de acceso a



Comunidades Indígenas, comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía" SAFI 219.920, de la Dirección de Vialidad y sus anexos.

38.- Copia factura N° 00212, de fecha 18 de mayo de 2016, de Sociedad de Construcción, Proyectos e ingeniería CSP Limitada, correspondiente a Estado de Pago N° 5. PDI 13/2014 "Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía".

44.- Especificaciones técnicas especiales PDI N° 13/2014 "Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía".

46.- Cuadros de cantidades de obras PDI N° 13/2014 "Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía".

47.- Resolución (Exenta) D.V. IX. R N° 2178, de fecha 15 de octubre de 2014, que acepta oferta de Empresa Sociedad de Construcción, Proyectos, Servicio e Ingeniería CSP Limitada. PDI N° 13/2014 "Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía".

52.- Carta enviada por la Directiva del Lof Mapu Llefedco a la Contraloría General de República de fecha 07 de septiembre de 2016. PDI N° 13/2014 "Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía".

53.- Carta enviada por la Directiva de la Comunidad José Manuel Millaleo, al Seremi de Obras Públicas Sr. Emilio Roa, de fecha 11 de agosto de 2015, recepcionada en la oficina de partes de la Seremi de Obras Públicas IX Región, el 11 de agosto de 2015, con copia al Director Regional de Vialidad IX Región, Jefe de Contratos IX Región e Inspector Fiscal Jaime Silva. PDI N° 13/2014 "Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía".

54.- Minuta de reunión de fecha 17 de mayo de 2016, entre el asesor de la intendencia Sr. Rodrigo Villalobos y los dirigentes de la Mesa Territorial Llefedco de la comuna de Vilcún. PDI N° 13/2014 "Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía".

56.- Oficio N° 254 de fecha 05 de febrero de 2020 de la Subdirección Jurídica, Departamento de Defensa Judicial Penal, del Servicio de Impuestos Internos.

COMÚN A AMBOS HECHO.

61.- Resolución (Exenta) D.V. Región de La Araucanía N° 2516, Regulariza aumento de obras, disminuciones de obra y aumento de plazo del contrato, de fecha 18 de noviembre de 2015, PDI N° 13/2014 "Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía".



- 62.- Resolución (Exenta) D.V. Región de La Araucanía N° 978, Aprueba acta recepción única y autoriza devolución de retenciones, con timbre de 17 de mayo de 2016, PDI N° 13/2014 “Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía”.
- 69.- Resolución (Exenta) DV. Araucanía 1149, de fecha 07 de junio de 2016, aprueba liquidación del contrato, reajustes y devolución de garantías. PDI N° 13/2014, “Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía”. SAFI 219.920.
- 73.- Resolución (Exenta) DV.IXR.N° 829 de fecha 22 de abril de 2016, designa comisión de recepción única, PDI N° 13/2014, “Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía”.
- 81.- Especificaciones técnicas y especiales proyecto PDI N° 3/2015 “Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, comuna de Lonquimay, provincia de Malleco, Región de la Araucanía”.
- 83.- Cuadro resumen obras por camino proyecto PDI N° 3/2015 “Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, comuna de Lonquimay, provincia de Malleco, Región de la Araucanía”.
- 84.- Cuadro cantidad de obras proyecto PDI N° 3/2015 “Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, comuna de Lonquimay, provincia de Malleco, Región de la Araucanía”.
- 93.- Copia de carta enviada por Felicinda Nahuelcura Caniumir, en calidad de Fiscalizadora de la Comunidad Nahuelcura Caniumir a Manuel Robles de la Dirección de Vialidad, de fecha 17 de junio de 2016.
- 94.- Copia de carta enviada por Felicinda Nahuelcura Caniumir, a Manuel Robles de la Dirección de Vialidad, de fecha 21 de octubre de 2016.
- 101.- Resolución (Exenta) D.V. Región de la Araucanía N°1335 de fecha 30 de junio de 2016, Autoriza aumento y disminución de obras, obras extraordinarias y aumento de plazo del contrato. PDI N° 3/2015 “Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, comuna de Lonquimay, provincia de Malleco, Región de la Araucanía”
”
- 103.- Resolución Exenta N° 2707 de fecha 11 de diciembre de 2015, que designa como Inspector Fiscal a Jaime Silva Poblete. PDI N° 3/2015 “Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, comuna de Lonquimay, provincia de Malleco, Región de la Araucanía”
- 104.- Resolución N°1882 de fecha 14 de septiembre de 2017, aprueba la liquidación final anticipada con cargo, PDI N° 3/2015 “Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, comuna de Lonquimay, provincia de Malleco, Región de la Araucanía”
- 105.- Resolución D.V.R.A.IX R N° 103 de fecha 17 de enero de 2017, por término administrativo y de forma anticipada de contrato con cargo. PDI N°



3/2015 “Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, comuna de Lonquimay, provincia de Malleco, Región de la Araucanía”

113.- Resolución (Exenta) DV.IXR.N° 2327, de fecha 29 de octubre de 2015. SAFI 233.248. PDI N° 3/2015 “Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, comuna de Lonquimay, provincia de Malleco, Región de la Araucanía”.

114.- Declaración Inspector Fiscal, Estado de pago N° 1, de fecha 18 de diciembre de 2015. SAFI 233.248. PDI N° 3/2015 “Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, comuna de Lonquimay, provincia de Malleco, Región de la Araucanía”.

115.- Estado de pago N°1 de fecha 18 de diciembre de 2015, por un valor líquido de \$15.821.042, por un avance físico del 10,39 por ciento de la obra. PDI N° 3/2015 “Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, comuna de Lonquimay, provincia de Malleco, Región de la Araucanía”, SAFI N° 233.248, de la Dirección de Vialidad, y sus anexos.

116.- Copia factura N° 00184, de fecha 18 de diciembre de 2015, de Sociedad de Construcción, Proyectos e ingeniería CSP Limitada, correspondiente a Estado de Pago N° 1. PDI N° 3/2015 “Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, comuna de Lonquimay, provincia de Malleco, Región de la Araucanía”.

119.- Estado de pago N°2 de fecha 20 de enero de 2016, por un valor líquido de \$96.779.385, por un avance físico del 71,55 por ciento de la obra. PDI N° 3/2015 “Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, comuna de Lonquimay, provincia de Malleco, Región de la Araucanía”, SAFI N° 233.248, de la Dirección de Vialidad, y sus anexos.

120.- Declaración Inspector Fiscal, Estado de pago N° 2, de fecha 29 de diciembre de 2015. SAFI 233.248. PDI N° 3/2015 “Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, comuna de Lonquimay, provincia de Malleco, Región de la Araucanía”.

122.- Copia factura N° 00186, de fecha 29 de diciembre de 2015, de Sociedad de Construcción, Proyectos e ingeniería CSP Limitada, correspondiente a Estado de Pago N° 2. PDI N° 3/2015 “Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, comuna de Lonquimay, provincia de Malleco, Región de la Araucanía”.

125.- Estado de pago N°3 de fecha 03 de febrero de 2016, por un valor líquido de \$38.109.104, por un avance físico del 94,09 por ciento de la obra. PDI N° 3/2015 “Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, comuna de Lonquimay, provincia de Malleco, Región de la Araucanía”, SAFI N° 233.248, de la Dirección de Vialidad, y sus anexos.

126.- Declaración Inspector Fiscal, Estado de pago N° 3, de fecha 03 de febrero de 2016. SAFI 233.248. PDI N° 3/2015 “Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, comuna de Lonquimay, provincia de Malleco, Región de la Araucanía”.



128.- Copia factura N° 00192, de fecha 03 de febrero de 2016, de Sociedad de Construcción, Proyectos e ingeniería CSP Limitada, correspondiente a Estado de Pago N° 3. PDI N° 3/2015 “Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, comuna de Lonquimay, provincia de Malleco, Región de la Araucanía”.

129.- Estado de pago N°4 de fecha 15 de abril de 2016, por un valor líquido de \$10.291.860, por un avance físico del 100 por ciento. PDI N° 3/2015 “Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, comuna de Lonquimay, provincia de Malleco, Región de la Araucanía”, SAFI N° 233.248, de la Dirección de Vialidad y sus anexos.

130.- Declaración Inspector Fiscal, Estado de pago N° 4, de fecha 12 de abril de 2016. SAFI 233.248. PDI N° 3/2015 “Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, comuna de Lonquimay, provincia de Malleco, Región de la Araucanía”.

144.- Minuta de modificación de obras N° 1. PDI N° 3/2015 “Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, comuna de Lonquimay, provincia de Malleco, Región de la Araucanía”.

145.- Presupuesto propuesta y anexos. PDI N° 3/2015 “Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, comuna de Lonquimay, provincia de Malleco, Región de la Araucanía”.

151.- Resolución (Exenta) DV.IXR.N°256, de fecha 13 de febrero de 2017, designa comisión de recepción única, PDI N° 3/2015 “Conservación caminos de acceso a Comunidades Indígenas, comuna de Lonquimay, provincia de Malleco, Región de la Araucanía”. SAFI 233.248

163.- Vista fiscal en sumario administrativo instruido en la Dirección Regional de Vialidad de La Araucanía de Informe de investigación especial N° 44/2017 de la Contraloría Regional de La Araucanía.

164.- Resolución exenta N° N° PD00506, de 31 de mayo de 2019, de la Contraloría Regional de La Araucanía, aprueba sumario administrativo y propone medida disciplinaria a funcionario que indica, por Informe de investigación especial N° 44/2017.

UNDÉCIMO: Prueba de la defensa. Acusación 1.

Prueba del acusado Jorge Andrés Inostroza Cerda:

1.- Adhiere a toda la prueba testimonial del Ministerio Público y querellante SII.

2.- Adhiere a la prueba documental del Ministerio Público y querellante SII.

Además, ofrece:

Prueba documental



1.- Consulta de movimientos y pagos de deudas fiscales de la sociedad CONSTRUCTORA VIALMIX LIMITADA desde la página de Tesorería General de La República, que van desde el 14 de abril de 2014 a 12 de octubre de 2017.

2.- Certificados de movimiento y pago de deudas fiscales de la sociedad CONSTRUCTORA VIALMIX LIMITADA desde la página de Tesorería General de La República, que van desde el 14 de abril de 2014 a 12 de octubre de 2017.

Documentos N° 1 y 2: Tablas de consulta de movimientos y certificados de pago emitidos por Tesorería, que acreditan pagos efectuados por la empresa Vial 1000 Ltda. entre los años 2014 y 2017. Se acompañaron 22 movimientos correlacionados con sus respectivos comprobantes, incluyendo uno en el que —según expuso la defensa— se realizó un pago mayor y posterior devolución, lo que se señaló como muestra de transparencia contable y disposición a cumplir.

3.- Detalle de convenio de Pago, historia de convenio de pago y detalle de cuotas de convenio de pago, suscrito por VIALMIX LIMITADA con Tesorería General de La Republica con fecha 19.08.2016.

4.- Detalle de convenio de Pago, historia de convenio de pago y detalle de cuotas de convenio de pago, suscrito por VIALMIX LIMITADA con Tesorería General de La Republica con fecha 01.06.2017.

Documentos N° 3 y 4: Detalles de **convenios de pago suscritos con la Tesorería General de la República** por parte de la empresa Constructora Vial 1000 Ltda., con fechas 19 de agosto de 2016 y 1 de junio de 2017. Se señala que ambos convenios fueron activados, pero posteriormente caducados por incumplimiento de cuotas. La defensa subrayó que estos convenios dan cuenta de **intentos reales de regularización fiscal**, que deben ser considerados para efectos de analizar la intencionalidad del

5.- E-book completo e íntegro del expediente de Recurso de Protección ROL 3537-2017 de Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco, interpuesto por la Sociedad Constructora Vialmix Ltda. contra Tesorería Regional de Temuco.

HUBO UN EMBARGO por 109 MILLONES.

SE RECONOCE EL CONVENIO DE PAGO y EL EMBARGO

6.- E-book completo e íntegro del expediente de proceso Ejecutivo Civil del 1° Juzgado Civil de Temuco ROL C-860-2017, caratulado “Banco Santander Chile con Inostroza”

Cuaderno de apremio.

7.- E-book completo e íntegro del expediente de proceso Ejecutivo Civil del 2° Juzgado Civil de Temuco ROL C-622-2017, caratulado “Banco de Chile con Inostroza”.

Cuaderno de apremio.



Documentos N° 6 y 7: E-books de causas civiles seguidas por **Banco Santander y Banco de Chile contra Jorge Inostroza Cerda**, roles C-860-2017 y C-622-2017, respectivamente. La defensa se centró en el **cuaderno de apremio y subasta de bienes inmuebles**, señalando que el imputado **perdió varias propiedades por remates judiciales**, lo cual pretende usar como evidencia de que **no obtuvo beneficios indebidos de las contrataciones investigadas**, sino que sufrió perjuicios económicos personales de envergadura.

DUODÉCIMO: Prueba de la defensa. Acusación 2.

1.- Se adhiere a la prueba documental del Ministerio Público, sobre todo a la N° 37, 38, 62, 63, 69, 70, 71, 72, 73 y 101.

2.- Se adhiere igualmente a los otros medios probatorios.

Documental adherida:

44, 45 y 46.

Documento 45.

Descripción de los trabajos y cantidad.

En cada una de las partidas.

Cada uno de los ítems están determinados en cantidad.

Documentos:

81, 83, 84 (Lonquimay)

En el mismo sentido, unidades y medidas de pago; metro cuadrado, precio unitario.

Carpeta de rodaduras.

Documento 62:

Segunda hoja, se aprueba la recepción única Vilcún.

Tercera hoja, Acta de recepción única. En el lugar de la obras, de conformidad al decreto supremo.

Documento 69.

07 de junio de 2016. Aprueba liquidación de contrato.

Última hoja, no hay pendientes.

Carlos Bahamondes.

Documento 70.

Documento 71. 27 de febrero de 2015 inicia JAIME SILVA POBLETE.

Documento 73.

Documento 101. Lonquimay.

Resolución exenta 30.06.2016 TIMBRE COSTADO IZQUIERDO.

Tramitado 28 de diciembre de 2016

Documento 104.

Cartas 93 -94.

108 NUEVO, no fue acompañado por el MP

136, 137 y 138. Certificados de ENSAYE.



Asimismo, ofrece prueba propia.

Testigos

1.- JAIME RICARDO SILVA POBLETE, CÉDULA de identidad N° 9.414.572-4, Constructor Civil, domiciliado en calle Bolomey N°1, Padre Las Casas. (día 6)

Bueno, los conozco de primera línea porque también fui imputado. Por fraude del fisco, me parece que es el cargo. Bueno, yo me acogí a la Defensoría Pública, quien me aconsejó dejar llevar el proceso, digamos, sin objeciones, de tal manera de evitar la prisión. Y bueno, lamenté posteriormente haberme acogido a la defensoría y no haber tomado un abogado, porque realmente tengo que reconocer que aquí el profesional no hizo nada al respecto.

Ni siquiera estudió el CAS. Lamenté mucho. Yo estoy con cargos, perdí mi trabajo en vialidad y me costó mucho rehacer, digamos, mi vida profesional.

Los hechos bueno, hubieron investigaciones de parte de me parece que era contraloría o fiscalía, no me acuerdo, dictaminaron que las obras bueno, de hecho habían unos pagos que se habían hecho sin haberse materializado algunas obras, pero que tiene su justificación en las políticas, o si bien digo políticas, que tenía el MOP en términos de cumplimiento de metas económicas, que eso involucraba que nosotros cada tres meses recibíamos un sueldo compensado, pero también tenía una justificación técnica. Hubo situaciones en las cuales sí se pagaron, pero fueron hechos bien particulares. Por ejemplo, casi al término de la obra, cuando don Jorge ya tenía comprado los tubos de hormigón que se solicitaron en una de las obras, la comunidad solicitó, bajo el apercibimiento de detener la construcción de las obras, el cambio de materialidad de esas tuberías, pasando de hormigón a HDP, que es un material plástico resistente, argumentando de que el hormigón se iba a romper por las heladas invernales. Esto hizo para efectos de yo tuve que recopilar firmas de los solicitantes. Para poder justificar una modificación de última hora. Quedan 20 días, 15 días, algo así, por los cuales don Jorge se suponía que terminaba y obviamente ya se habían pagado por el tema del cumplimiento de meta. Esta modificación se ingresó al departamento de construcción de contratos, perdón, y tardó. A ver, se pidió con un aumento de plazo no proporcional por el tema invernal y se pidió un plazo hasta noviembre, me acuerdo yo. La resolución no salió hasta 24, por ahí. No tengo muy buena memoria con la fecha, pero aproximadamente recuerdo que era diciembre. Y pasado la mitad de diciembre, a plazo vencido, estaba firmado y se esperaba la firma de don Jorge. Y obviamente yo le solicité que lo firmara porque me lo pidió el jefe de contrato. Frente a lo cual don Jorge me no, es imposible que firme esto porque me estoy castigando yo solo. Es decir, estoy firmando un documento a plazo vencido y me estoy condenando a pagar las multas por atraso correspondiente.

Lonquimay, caminos de alta montaña, o sea, con mucha inclinación, mucha pendiente, en tierra, luego con un material estabilizador. Para poder permitir el tránsito de rodados, vehículos. Y obviamente ahí había zonas en las cuales discurría el agua y se requerían obras de arte.

Inspector Fiscal. No me acuerdo lo que recuerden. No hay problema. Con un año cercano, un año un poquito más, por el tema invernal, seguramente se dio eso. A kilometraje, efectivamente. La extensión en cuanto a kilometraje ocho o 10 km, algo así. Dígame, usted dice que en estas obras mencionó dos cosas debía realizar caminos, ocupando sus palabras, y obras de arte. Caminos y obras de arte. Es decir, estos caminos son básicos, les llamamos hoy actualmente 201.º, antiguamente se llamaban PDI. Se cambiaron por el alcance de la sigla, digamos. Básicamente eso, mejorar las condiciones de una plataforma para el tránsito peatonal y vehicular. Y básicamente consiste en terraplenes, base estabilizada y obras de arte para facilitar el drenaje, impedir el daño a la plataforma.



Fiscalizar, o sea, comprobar que efectivamente se estaban haciendo. Visualmente, obviamente midiendo los anchos y espesores en terreno. Una vez a la semana, más o menos. Bueno, los avances son materia de pago. Había que hacer estados de pago, digamos mensuales. Eso básicamente. ¿Y del Lonquimay en particular, qué recuerda usted de las fiscalizaciones que usted realizaba y de los avances? Iba todo en marcha. De hecho, recuerdo que se hicieron trabajos que no estaban especificados en el contrato y que no fueron materia de aumento de obra. Había un camino que estaba considerado con nada, solamente pasar una máquina. Porque yo le pregunté al proyectista de la época y me dijo que no lo había considerado movimientos de tierra, es decir, compensación terraplenes base, porque había Araucarias y se lo habían solicitado los habitantes del sector. Milagrosamente, cuando el contrato comenzó, no había ninguna Araucanía, así que hubo camino despejado y don Jorge ofreció hacer ese camino con un gran movimiento de tierra adicional. Lo único que se cobró fue el terraplén, recuerdo.

¿Usted cuando iba a las obras a inspeccionar, a fiscalizar, con quién se relacionaba? Ya, con el residente. Es un profesional que las empresas deben tener porque se les exige el MOP. ¿Y con el señor Inostroza que usted ha nombrado, cuál era su relación con él? Bueno, generalmente veíamos para el estado de pago que se encargaba de hacerlo junto con su residente. ¿Quién intervenía en estas visaciones de estados de pago? Yo tenía que revisar el estado de pago. ¿Y el que autorizaba el pago, quién era? ¿El que autorizaba y quién es el que autorizaba? **Yo tenía que firmar el estado de pago.**

Me mostró el camión con tubos, ya estaban listos para instalarse. Se calculó más o menos el tiempo en el cual se podía materializar, que correspondía a lo que quedaba del contrato. Y ante la instancia de las autoridades de la época, me pidió hacer el estado pago. Obviamente todo esto es verbal. No existe ningún registro con el cual yo pueda demostrar que se me solicitó lo que acabo de declarar. ¿Normal? ¿Y por qué? **Por el cumplimiento de metas que les señalé. Es decir, el incumplimiento de metas en el MOP significa perder ese mes mejorado cada tres meses.**

Respecto de los hechos de esta acusación, de la que usted igual fue parte, nos ha hablado de la obra de Lonquimay, pero al comienzo dijo obras. ¿Qué otra obra? Hubo otra obra similar en Vilcún, con gente muy complicada, muy complicada. ¿Cuáles eran las obras que se tenían que hacer en Vilcún? Lo mismo, exactamente lo mismo. Caminos indígenas, llamémoslo rurales, no me consta que sean todos indígenas, se llamaban 201.º. Igual había gente que no era indígena viviendo. Alcantarillas, caminos. Me parece que en ese contrato hubo unos cercos que hacer también, pero es de esa índole, no, es más.

Lo que pasa siempre en este tipo de contrato hay muchas cosas que no considera el proyectista y que las mejora el contratista para el buen vivir o la buena convivencia con las comunidades beneficiadas. Y que en ese afán de costumbre conseguir cosas del estado, piden y piden y piden y exigen y en el pedir y ese petitorio pasa a ser una exigencia muchas veces parte de ello. También pasó lo mismo allá, porque se tuvo que mejorar una hondonada, un plano bajo, se mejoró con material de base, inclusive no era ni siquiera terraplén, que es hartito más caro el material de base, más una zanja de gran profundidad para evacuar aguas. Todo eso sin mediar un aumento de obra en el contrato. Felizmente, digo yo, se terminó bien ese contrato, de hecho, yo salí con la comisión. O sea, cuando un contrato termina, lo primero que tiene que hacer el inspector fiscal es solicitar una comisión de recepción de obra. Está constituido por profesionales del área de la construcción, generalmente ingenieros o constructores civiles, quienes actúan como los visores de lo que se construyó. ¿Se les entregan todos los antecedentes, cubicaciones en mano, si hay planos también, planillas de cubicaciones, cierto? Y con eso se parte a revisar. Y les va relatando la obra, más o menos cómo se construyó. La comisión tiene el deber de revisar las obras y constatar su correcta ejecución. Y eso fue lo que se hizo. La comisión en pleno firmó su conformidad y fue



recibida. De hecho, entiendo que le devolvieron la boleta de garantía, que son las que caucionan la correcta ejecución al contratista. Me parece que fue Raúl Pinto, el otro personaje no me acuerdo, yo tengo pésima memoria.

Que casi todo era similar, de esa extensión de 10 km, más o menos, ahora recuerdo que se hizo un camino adicional, ahora me estoy acordando, solicitado por el director de vialidad de esa época, estando con, no me acuerdo si con el Seremi no me acuerdo, pero había varias autoridades ahí, se me solicitó que hiciéramos un camino que no estaba considerado las obras y eso no recuerdo que hubiésemos hecho una modificación de obra en ese contrato también a título gratis. ¿Y en este contrato de Vilcún, cuál era su relación con el señor Jorge Inostroza? Idénticamente él mismo, él era el dueño de la empresa. Yo me entendía con el profesional de obra, yo era el inspector. Cuatro o 5 h más. Perfecto. Dos, tres años. Todo está más o menos entre el 2015 y el 2017, por ahí.

¿Dígame, ya que lo mencionó anteriormente, respecto al tema de los estados de pago, cada cuánto tiempo se realizaban esta fiscalización o visaciones para los estados de pago en estas obras? Como le dije eran mensuales. Mensuales, sí, porque eso obedece a las cajas también. Las cajas son es la programación que hace vialidad en función del programa económico que presenta el contratista. Se supone que cuando un contratista estudia una propuesta genera un programa que se traduce en avances financieros. Y esos son los que se debe tratar de mantener para efecto de cumplimiento de metas.

La comisión cuando haya revisa los antecedentes, mira lo que está construido. Son gente con experiencia, digamos, que ha llevado contratos similares o mayores, inclusive en complejidad y en cantidad. Y revisan que todo esté en orden. Perfecto. ¿Y cómo califica la comisión? Expertos. Son expertos, igual que yo.

Para mí, que se apruebe una obra, yo también he estado en comisiones, eso es lo que se revisa. Y que no falte nada de lo que está estipulado en el contrato de obra.

Y volviendo a Lonquimay, usted nos dijo que salió una resolución en diciembre respecto de que otorgaba un plazo, pero que ya venía con plazo vencido. No sé si creo no, miento. Se hizo una liquidación de contrato. Fue una comisión también a mirar lo que eventualmente pudiera faltar. Y bueno, efectivamente faltaba la obra de arte. ¿Y esa comisión que fue a Lonquimay a ver qué es lo que faltaba, recuerda quién la componía? Cristina. Ya no recuerdo el otro personaje. ¿Usted participó? ¿Usted participó? No. ¿Y cuáles dijo que fueron las conclusiones de la comisión? Si faltaban obras. ¿Y cuáles obras? Obras de arte. **En alguna parte me parece que mencionaron, faltaba un terraplén, pero no llevaban instrumentos para medir.**

¿Con qué instrumentos se realizan las mediciones para ver si cumplen con las especificaciones técnicas? Mire, esto en ingeniería, que es generalmente el departamento de ingeniería tiene un subdepartamento de topografía. El inspector solicita a ese departamento que cumpla con la revisión. Ahora bien, ese departamento no es muy grande al compararlo con las exigencias de las obras que están en ejecución más los proyectos que están en ejecución. Entonces, muchas veces topografía no alcanza a cubrir todas las necesidades del año, de la época.

Por lo tanto, ya queda en manos de quien está supervisando las obras que el inspector fiscal uno constata en terreno.

Es un material que está especificado, que tiene una granulometría, una dispersión de tamaño de tal manera que se logra al compactarlo, una capacidad de carga relevante. Perfecto. Estamos hablando piedras, arena, materiales finos. ¿Respecto de funcionarios del MOP, aparte de usted, que iba, por lo que dijo, una vez a la semana, y luego los funcionarios de la comisión que concurrieron al lugar y al final de los contratos, iba algún otro funcionario del MOOP? No, a ver, yo fui jefe del departamento de proyecto en alguna época. De repente me interesaba mirar algunos proyectos para conocerlos, qué sé yo. Iba a terreno, los miraba y me



iba. Pero como veedor nada más. Y por curiosidad, de repente ver cómo estaba el avance, qué sé yo. Lo mismo hacen los otros jefes de departamento, pero van por su cuenta y sin intervención mayor, digamos.

Bueno, yo fui sucesor de otro inspector en VILCÚN, me parece que, por rebote, por llamarlo así, tomé Lonquimay. Ese inspector se llama Osvaldo Mora. ¿Y por qué se cambió el inspector al inspector Mora por usted? La verdad que a mí me designaron. Yo supe, este no es oficial, yo lo supe por comentarios de que Osvaldo Mora había tenido problemas con don Jorge, no sé de qué índole, algo, algo, algo. Parece que hubo ahí una coerción o algo y lo sacaron de yo asumí.

¿Usted dice o mencionó que Don Jorge le mostró un camión con tubos, cierto? ¿Recuerda la fecha de eso? **Aproximadamente fue como a principios marzo, abril, por ahí. ¿De qué año? 2015, no recuerdo si fue 2015, 2016. En ese tiempo fue una manera de mostrar que la obra se iba a terminar. Por eso yo pagué, porque tenía la constancia que estaba el material ahí.** Pero sorpresivamente aparece la comunidad solicitando el cambio de materialidad de los tubos. Perfecto. ¿Y qué pasó con ese material que usted vio ahí? ¿Con esos tubos? Le pregunté a don Jorge y me dijo si se lo había llevado. No sé, no era mi materia. Lamenté mucho el tema de la pérdida. Igual es una pérdida. Uno como inspector no es un enemigo del contratista, es un colaborador.

Que llegue a buen término. Sí, obviamente uno tiene que fijarse en la calidad de las obras, si se está haciendo mal, obviamente tiene que, en ese sentido, colaborar para que la obra se haga bien, se haga correcta. Pero uno no puede ser, no es un enemigo, digamos, del contratista.

Jorge Inostroza nos conocimos la ruta cinco. ¿Por qué motivo? Porque él era laboratorista en esa época. Yo era el residente de la asesoría donde trabajábamos. ¿En qué año habrá sido? La ruta cinco se hizo entre el 98, 97 y el 2003. Ahí estuvimos nosotros trabajando.

¿Y de esa época de que lo conoció hasta esta época de los contratos de Lonquimay Vilcún, cuál era su relación con él? Después de que terminamos la obra, si no teníamos cada cual, yo me fui a otra empresa, porque en otra no sé, no sé qué fue su vida en ese tiempo.

A LA FISCALÍA, ¿Primero fue eso donde se le dispuso su destitución, no es cierto? Eso fue posterior, me parece. Mire, lo que pasa que esto es todo un desarrollo. Primero una investigación sumaria, en la cual se me asignaron cargos que yo justifique en cada uno de los casos. Esa defensa que hice Jo se me pidió y la hice por escrito, fue 100 % rechazada. No fue considerada ni por parte de contraloría ni por parte del proceso judicial en el que estrelló. Nadie tomó en cuenta eso. ¿Por qué razón? Vuelvo a repetirlo, lamentablemente tomé a la defensoría Penal pública. Me refiero a todo eso.

Ah, sí, bueno, efectivamente, si se me hizo un sumario, se me hizo sumario administrativo. Yo apelé a esos sumarios. Nunca fui destituido por ese sumario. Yo fui destituido cuando salió la sentencia acá en el tribunal respecto de los mismos hechos.

El sumario y luego la sentencia del tribunal. La sentencia del tribunal fue la que detonó el despido, no fue otro. No fue el sumario. Por la sentencia que tenía yo en el tribunal era no poder desempeñar cargo público por tres años.

Yo especifique que las obras estaban a punto de terminarse, estaban con materiales comprados y todo. Sí, efectivamente se pagaron. Pero fue a instancia del cumplimiento. Me lo pidieron. Sí, eso lo dijo. Que no había instrucciones escritas, sino que se le había solicitado de manera verbal. ¿Esa es una meta institucional o personal? Institucional. Para entenderlo. ¿Entonces, si no se cumplía esa meta, usted se veía afectado económicamente? Por supuesto. Entonces incidía también personalmente. ¿Por otra parte, usted indicó en relación con los estados de pago, que para cada uno de estos procesos de estado de pago se veía con el señor Jorge Inostroza, no es cierto? Sí. Ya. Verse con él implicaba que él tenía que remitir,



entregarle materialmente toda la documentación de respaldo de cada uno de los estados de pago. ¿Y, en definitiva, esa documentación debía consistir en aquella que acreditaba la recta ejecución de cada una de las obras, no es cierto? Sí. ¿Y a usted le constaba que esas obras no se estaban ejecutando? **A ver, vuelvo a repetir, yo pagué esas obras que no estaban documentadas. Estaban respaldadas por la constatación física en terreno de los materiales necesarios para desarrollar lo que usted veía.** ¿Eran físicamente solo los materiales en terreno, no es cierto? Pero no generalice. Estoy hablando puntualmente de la obras de arte de Lonquimay. No es general. Es decir, yo constataba la correcta ejecución. Se hizo un puente. ¿Cómo se realiza un puente? El puente está puesto ahí. Antes no estaba. Estaba puesto, lo pagaba.

Entonces, vamos al caso en particular que usted puntualiza, las obras de arte del Lonquimay. ¿Usted es amigo de don Carlos Milque? Colega, fuimos. No soy amigo de él. Amigo de otra relación.

Respecto de la omisión de multas, me parece que fue por un letrado. **Parte del contenido de ese cargo estaba dado porque no aplicó la multa a pesar de constarle la ausencia de laboratorista clase C desde junio 2015 hasta octubre 2015 en la obra de VILCÚN.** ¿Partiendo de esa base, cómo usted pudo aprobar estados de pago en relación con la construcción de caminos si no tenía un laboratorista clase C? Ese contrato, el tema de mecánica de suelo está supervisado por el Laboratorio Regional de Vialidad. Ellos certifican la calidad de los materiales y las compactaciones. ¿Ese documento es parte del estado de pago? **En definitiva, sí. Yo reconozco que hubo un error mío, una falta al reglamento, pero que tiene su respaldo en lo que le acabo de comentar. Eso yo no lo definiría como una como un fraude o el fisco, por ejemplo.**

Siempre está el laboratorio y la dirección de Vialidad para revisar lo que el contratista entrega. Pero según las bases, ese contrato debía tener un laboratorista clase C propio. ¿Y eso implicaba que usted debió aplicar una multa de 610 unidades tributarias mensuales, no es cierto? Correcto. ¿Y no aplicó la suma? No me acuerdo, pero sí, sí es efectivo. ¿Y dentro de la glosa del estado de pago, una de las situaciones que usted visó es que se dio cumplimiento en cada uno de esos estados de pago a la existencia de cumplimiento de bases administrativas y técnicas, no es cierto?

No sé si él conocía o desconocía el tema. Yo puedo abogar por mí, no por él.

QUERELLANTE DEL CDE: Sí, es un sueldo mejorado. Cada dirección regional genera una cartera de proyecto y por ende genera una inversión anual. Esta caja se pide al nivel central con una cierta programación que debe ser respetada, porque se supone que yo creo que todos conocemos que las inversiones fiscales tienen que ocurrir, tienen que respetarse. De otro modo, hay una merma en la siguiente solicitud. O sea, impide el crecimiento de una ciudad, por llamarlo así. Entonces, de ahí que sea tan importante el cumplimiento de meta a nivel de vialidad y de otras instituciones. ¿Entonces, si entiendo bien acá contrato aprobado, pago de sueldo, cierto? Gasto cumplido. Se mantiene el tema del sueldo. Gasto cumplido, gasto anual. En este caso son los estados de pago.

Usaba huincha, por ejemplo. De topografía me refiero. No uso, no. ¿En relación con contrato de Vilcún, la comisión de recepción de obra, usted recuerda cuándo fue esta comisión? ¿Cuándo fue a las obras? ¿A la obra, si es que se acuerda, usted estaba presente cuando fue a la obra? Estaba presente. ¿Pero usted recuerda a dónde fueron? Recorrimos todos los caminos. ¿Son varios? Eran varios. Tampoco me acuerdo la cantidad, pero como siete, ocho. ¿Y en la mecánica en que la comisión recibía la información, era usted quien informaba, cierto? Ellos llevan yo le entregaba un contrato. Consta en general de los caminos indígenas, consta de especificaciones técnicas, consta de cuadros de ubicaciones que van indicando la ubicación de cada una de las obras. En el caso de los terraplenes, el largo y el ancho. En el



caso de la obra de arte, la ubicación por kilómetro, digamos. Y ese kilometraje está en terreno porque lo tiene que hacer el contratista, es obligación. Pero mi pregunta es otra. ¿La comisión se formó una opinión en base a la que usted le iba indicando en terreno, cierto? No, ellos revisan y van paremos acá, veamos si está la obra de arte. Paremos acá, veamos el puentecito que hiciste.

¿Y en cuanto a los materiales utilizados para el puentecito, cómo constataban eso la comisión? Hay un plano. ¿Pero en cuanto al material, era usted el que le señalaba? Madera, se podía medir fácilmente la escuadrilla. Perfecto. Visiblemente notorio, digamos. ¿Cuál era entonces su rol ahí en la constatación? Yo los llevaba, pues, yo era el dueño de casa. Los llevaba, digamos, como quien muestra su habitación a una visita. El que sabe dónde están las cosas es el dueño de casa. ¿Pero respecto de la calidad de las obras, usted no decía nada? No, pues había constancia en los estados de pago.

Prueba documental

1.- Sentencia dictada en Causa RIT 113-2021 del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, donde se dio por acreditado (hecho 9) que mi representado en el año 2016, a través de su empresa constructora Sociedad de Construcciones, Proyectos y Servicios e Ingeniería CSP Ltda., le fue requerido por el condenado, don Cristián Hermógenes Ríos López, abogado y ex fiscal jefe del Ministerio de Obras Públicas de La Araucanía, el pago de una suma de dinero para aprobar la ampliación de plazo del contrato de obra pública que se encontraba desarrollando en esos momentos, y que no fue aceptado por mi representado.

FOJAS 287.

AGOSTO DE 2016.

DÉCIMO TERCERO: Síntesis de las teorías del caso de cada interviniente.

RESPECTO DE LA ACUSACIÓN N°1 por DELITOS TRIBUTARIOS: POR LA FISCALÍA:

El imputado incurrió en **dos modalidades del delito tributario del artículo 97 N° 4 del Código Tributario:**

- 1. Subdeclaración del débito fiscal (IVA).**
- 2. Aumento indebido del crédito fiscal.**

Argumentos clave:

- Los delitos tienen un carácter **eminente documental** y se consuman con la **presentación maliciosa** de declaraciones incompletas o falsas.
- La finalidad fue doble: pagar menos impuesto del debido y/o generar un crédito fiscal a favor del contribuyente.
- El imputado **no solo era representante legal**, sino también **administrador y mandatario de hecho**, participando activamente en las operaciones tributarias.



- Se rendirá prueba testimonial y documental para establecer su **participación directa y dolosa** en la comisión de los ilícitos.

Al final del juicio, concluyeron que se logró acreditar la **existencia de los delitos tributarios** y la **participación punible del imputado**, tanto por el aumento indebido de crédito fiscal como por la subdeclaración del débito fiscal, con un perjuicio fiscal significativo.

En cuanto al **Aumento de crédito fiscal (art. 97 N° 4 inciso 2°)**:

Inostroza presentó declaraciones mensuales (Formulario 29) con **créditos fiscales inflados** entre 2015 y 2016.

El perjuicio fiscal fue de **\$37.228.912**, lo que excluye la posibilidad de error o negligencia.

La responsabilidad recae en el **contribuyente**, no solo en el contador, conforme a los artículos 99 y 100 del Código Tributario.

En cuanto a la **Subdeclaración del débito fiscal (art. 97 N° 4 inciso 1°)**:

Inostroza **omitó ventas reales** y declaró menor IVA.

Se constató un perjuicio de **más de \$96 millones**, con diferencias relevantes mes a mes.

La reiteración y magnitud refutan la hipótesis de error o desorden contable.

Ambos delitos son de **mera actividad**: la sola presentación maliciosa basta para su consumación, sin requerir perjuicio fiscal efectivo (aunque en este caso se produjo).

Las declaraciones tributarias fueron **firmadas y tramitadas por el imputado** como representante legal, administrador y mandatario de Vialmix Ltda.

POR LA QUERELLANTE, Servicio de Impuestos Internos (SII)

Se busca acreditar la **comisión de dos delitos tributarios** y la **participación directa del imputado** Jorge Inostroza.

Argumentos clave:

- El artículo 97 N°4 incisos primero y segundo sanciona conductas **dolosas** mediante **declaraciones maliciosas falsas** que inducen a menor pago de impuestos o permiten aumentar créditos ficticios.
- Ambos delitos son **de mera actividad o de peligro**, no exigen un perjuicio fiscal efectivo.
- La empresa **Vialmix Ltda.** subdeclaró ingresos al MOP y **aumentó indebidamente el crédito fiscal** en el Formulario 29, sin emitir facturas falsas.
- Se demostrará que el imputado, como **representante legal**, fue el **autor de los actos materiales** que constituyen delito.



- La **prueba documental, pericial y testimonial** (incluyendo registros contables y formularios) permitirá demostrar la existencia del delito y la intervención dolosa del acusado.
- Si bien hubo pagos posteriores, estos no extinguen el delito, aunque podrían ser considerados solo como atenuantes.

Al final del juicio se concluyó que se acreditó tanto la **materialidad de los delitos** como el **perjuicio fiscal**, configurando plenamente las figuras del artículo 97 N° 4 incisos primero y segundo.

Tanto la **Subdeclaración del débito fiscal** por **\$96.116.576** como el **Aumento indebido del crédito fiscal** por **\$37.228.912** (pequeña diferencia entre pericia y fiscalizadora).

El acusado **controlaba totalmente la empresa**, lo que fue reconocido por él y por su contador.

No hay facturas falsas, pero sí **maniobras maliciosas documentadas** en los libros de compra y venta.

Se descartó que Inostroza pueda alegar ignorancia de la ley o insuficiente capacidad técnica: es un **empresario con experiencia y beneficiario económico directo** del fraude.

La **deuda actual** de Vialmix sigue vigente: los convenios de pago fueron **parciales** y no extinguen responsabilidad penal, aunque podrían tener valor atenuante.

POR LA DEFENSA de Jorge Inostroza
Presenta una tesis absolutoria, en donde el imputado **no actuó con dolo**, y las **actuaciones posteriores** dan cuenta de su voluntad de subsanar cualquier diferencia tributaria.

Argumentos clave:

1. **Sobre la tipicidad y el perjuicio fiscal:**

A diferencia de lo que señalan fiscalía y SII, **estos delitos no son de mera actividad**, ya que requieren un **perjuicio fiscal determinado**, que debe estar **claramente cuantificado**.

El tipo penal exige **dolo directo**, es decir, intención real de defraudar al Fisco, lo que no ocurrió.

2. **Actuación posterior del imputado:**

Realizó un **convenio de pago millonario** con Tesorería y **pagos adicionales vía embargos**, que cubren las diferencias tributarias.

Estas acciones evidencian que **no existía intención dolosa**, sino una actitud de **colaboración y reparación**.

3. **Sobre el concurso aparente de leyes penales:**

Existe **concurso aparente** entre los incisos primero y segundo del artículo 97 N° 4.



Conforme a jurisprudencia de la **Corte Suprema**, solo corresponde **aplicar el inciso segundo**, dado que el imputado es contribuyente afecto al IVA, y **no procede aplicar ambos tipos penales simultáneamente** (principio de especialidad y non bis in ídem)

Al final del juicio, concluyó No se ha acreditado el **dolo ni el perjuicio fiscal exacto**, y se ha vulnerado el principio **non bis in ídem** al imputar al acusado **ambas figuras penales** en concurso aparente.

Los delitos tributarios **no son de mera actividad**, ya que exigen dolo directo y **perjuicio fiscal concreto**.

La prueba presentada fue **incongruente**:

Pericia: habla de \$145 millones; Testigo Moscoso: menciona \$175 millones; Acusación formal: cerca de \$133 millones.

No hay certeza sobre el **monto exacto defraudado**.

Inostroza **no actuó con dolo**: Celebró **convenios de pago y entregó documentación clave** al SII. Esto demuestra voluntad de **regularizar** y no defraudar.

Concurso aparente entre incisos primero y segundo: La **Corte Suprema** (rol 28.754-2014, sentencia 8 julio 2015) ha resuelto que solo **corresponde aplicar el inciso segundo**, por tratarse de un **contribuyente IVA** (tipo penal especial). Invoca jurisprudencia reiterada: Corte Suprema 4492-2009, Juzgado Puente Alto 38729-2010.

No hay reiteración: El artículo 112 del Código Tributario exige **dos ejercicios comerciales completos**. Tener declaraciones de años distintos **no implica reiteración automática**.

Solicita: **absolución**. En subsidio, **reconocimiento de atenuantes**: Art. 11 N° 6: colaboración eficaz; Art. 11 N° 7: reparación con celo; Art. 11 N° 9: colaboración al esclarecimiento de hechos complejos.

RESPECTO DE LA ACUSACIÓN N°2 por FRAUDE AL FISCO: POR LA FISCALÍA:

Tesis central:

Jorge Inostroza, como **extraneus (particular)**, participó en un **fraude al fisco cometido en unidad de acción** con el funcionario público **Jaime Silva Poblete**, ya condenado por estos hechos.

Argumentos clave:

- Existió **concierto delictivo entre ambos** para presentar **estados de pago por obras no ejecutadas** entre 2014 y 2015, en el contexto de contratos de conservación de caminos rurales adjudicados por el MOP.



- El delito consistió en la **transferencia de fondos públicos a la empresa CSP Ltda.** (representada por Inostroza), pese a que las obras no fueron realizadas o lo fueron de forma incompleta.
- Se configura una **unidad de acción y comunicabilidad del hecho** entre el funcionario público y el particular, que **permite imputar a ambos** como coautores del fraude.
- Se presentará **prueba documental, fotográfica y testifical** para demostrar el rol activo de Inostroza como representante legal en la ejecución del fraude, similar a su rol en Vialmix.
- Se alega un **modus operandi coincidente**: uso de sociedades para cometer delitos contra el erario público.

Al final del juicio, señaló que Jorge Inostroza participó como **coautor** en un fraude al fisco junto con el inspector fiscal **Jaime Silva Poblete** (ya condenado), mediante **pagos por obras no ejecutadas o incompletas** en contratos con el MOP.

El delito se configura ha configurado por los **Estados de pago fraudulentos**, respaldados por **facturas emitidas sin que las obras correspondan a la realidad física**.

Dos fuentes probatorias claves:

Informe 44/2017 de Contraloría: señala montos concretos pagados por obras no ejecutadas (ej.: \$14.303.474 en Vilcún, \$16.736.010 en Lonquimay).

Declaración de Julio Soto Bruna (Contraloría), quien inspeccionó terreno y especificó porcentajes de ejecución inferiores a los declarados.

Sumario administrativo contra Silva confirmó las mismas irregularidades.

PDI (Cofré Canío) constató ausencia total de obras en algunos puntos y graves deficiencias en otros.

Inostroza **participó activamente** en la formulación de ofertas, entrega de antecedentes para los pagos, y reuniones con el inspector fiscal.

Se aplicó la **teoría de la unidad de acción** entre intraneus (funcionario) y extraneus (contratista), cumpliéndose los requisitos jurisprudenciales: Unidad de plan, Convergencia de voluntades, Conocimiento del carácter de funcionario público del coautor. Solicitando, en definitiva, la **condena por fraude al fisco**, mismo delito ya aplicado a Silva.

POR EL QUERELLANTE, Consejo de Defensa del Estado (Querellante)

Tesis central:



El delito de fraude al fisco se configura por la **percepción de fondos públicos sin ejecución de obras** o con ejecución defectuosa, con **participación directa** de Jorge Inostroza.

Argumentos clave:

- Se refiere a los contratos **PDI 13-2014** (Vilcún) y **N°3-2015** (Lonquimay), adjudicados a CSP Ltda.
- El fraude se produce mediante la **recepción de pagos por obras no ejecutadas o deficientes**.
- Es **inverosímil** que Inostroza, como representante legal, **ignorara la falta de ejecución o el carácter defectuoso** de las obras.
- El dolo común y la convergencia de voluntades entre el funcionario público (Silva) y el particular (Inostroza) permite atribuirle **autoría en el delito**.
- La prueba (estados de pago, testimonios, antecedentes técnicos) demostrará que el acusado **percibió recursos públicos sin justificación real**.
- Se menciona la **teoría del delito especial impropio**, admitiendo que puede haber debate jurídico sobre la imputabilidad del particular, pero defiende su aplicabilidad con base en los hechos y en la **interdependencia funcional**.

Al final del juicio, se concluyó por dicho interviniente que el acusado **se benefició económicamente** de una ejecución deficiente o inexistente de las obras públicas, actuando de **común acuerdo con el funcionario público** Silva. Silva buscaba bonificación por ejecución de cartera presupuestaria. Inostroza **no contaba con liquidez** para iniciar obras y recurrió a **pagos en verde** (anticipados sin ejecución). Se eludieron los **mecanismos legales de anticipo**, que requieren garantías, lo que originó el uso fraudulento de estados de pago. Las **especificaciones técnicas** no se cumplieron: Pilares de puente cubiertos en madera, Cables de acero insuficientes, Deficiencias de terraplenes, Carpetas de rodado desiguales.

La **comisión que recepcionó la obra en Vilcún** se basó únicamente en la información falsa entregada por Silva. Testimonios y pericias (Julio Soto, Navarrete Añasco, PDI) **confirman la deficiente ejecución o inejecución** de múltiples partidas.

El delito puede imputarse al **particular (extraneus)**, dada la **convergencia de intereses y dolo común**. Se apoya en doctrina (Mañalich) sobre delitos especiales impropios. Solicitando la condena como **autor de fraude al fisco**.

POR LA DEFENSA de Jorge Inostroza

Tesis central:



No existió fraude al fisco. Las **obras se ejecutaron total o parcialmente**, y el acusado **no tenía la calidad ni funciones de funcionario público**, por lo que **no puede ser penalmente responsable** del delito especial impropio imputado.

Argumentos clave:

- **Contrato de Vilcún:** Las obras **fueron completamente ejecutadas y recepcionadas** por una comisión del MOP distinta de Jaime Silva. Las **boletas de garantía fueron liberadas**, lo que confirma su correcta ejecución.

- **Contrato de Lonquimay:** Aunque no se completó, **sí hubo avances reales**, y los pagos corresponden **a estados de avance verificados**.

- La obra no se terminó por una **prórroga mal gestionada por el MOP**, aprobada extemporáneamente (diciembre de 2016), lo que impedía su aceptación sin multas.

- No hubo concierto doloso ni conocimiento de irregularidad: su conducta se enmarca en **relaciones contractuales normales** con el Estado.

- Inostroza es un **extraneus**, y conforme a **jurisprudencia de la Corte Suprema**, no puede imputársele un **delito especial impropio** (fraude al fisco) por falta de **comunicabilidad del elemento especial (ser funcionario público)**.

- El artículo 239 del Código Penal en relación con el 260 **no puede aplicarse a su caso**, y la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia reciente **refutan su punibilidad** en calidad de particular.

En las clausuras señaló que no existió fraude al fisco, ya que las obras fueron ejecutadas total o parcialmente, y no puede imputarse responsabilidad penal al contratista por un delito especial impropio exclusivo del funcionario público. No hubo concierto delictivo con Jaime Silva: No hay prueba directa ni indirecta que lo acredite. El uso del concepto "concierto" no puede presumirse sin hechos concretos.

Contrato de Vilcún: Las obras fueron recepcionadas por comisión independiente, con nota 6,75. Algunos elementos (tubos, carpetas) sí fueron instalados. No existe peritaje técnico que determine qué porcentaje exacto no se ejecutó.

Contrato de Lonquimay: Comisión de liquidación del MOP acreditó avances: 70 %, 45,7 %, 35,6 %. La acusación afirma inexecución total, lo que contradice los informes oficiales y pericias de vialidad. Se acompañaron ensayos de laboratorio que muestran cumplimiento parcial. Los tubos no se instalaron por retraso del MOP en aprobar prórroga, que llegó con plazo vencido. El contrato fue liquidado sin respetar el plazo legal de 30 días para protocolizar prórrogas.



El artículo 239 CP exige calidad de funcionario público. Inostroza no lo es, conforme al artículo 260 CP. La jurisprudencia reciente de la Corte Suprema (rol 59856-2022; 122925-2022) establece que no se puede comunicar la calidad de funcionario público al extraneus, salvo que se impute otra figura (como estafa), lo cual no ocurrió. Solicita absolució n total, al no cumplirse:

El tipo penal subjetivo (dolo),

La ejecuci3 n fáctica (obras fueron realizadas en gran parte),

Ni el presupuesto jurídico (extraneus no punible bajo art. 239 CP).

EN LAS RÉPLICAS, se abordó la temática de recalificaci3 n jurídica a la que se llamó a debatir por parte del tribunal, en los siguientes términos:

1) La FISCALÍA, citó a Ignacio Ananías Zaror sobre los elementos objetivos del tipo: Presentaci3 n de una declaraci3 n; Declaraci3 n falsa o incompleta; Inducci3 n a liquidar un impuesto menor al debido.

El dolo directo est á presente a trav és de elementos indiciarios:

Altos montos de subdeclaraci3 n y aumento de crédito fiscal.

Representaci3 n legal del imputado (art. 99 CT).

Intervenci3 n activa en las declaraciones.

Fraude al fisco vs. art. 470 N° 8 CP (obtenci3 n fraudulenta de prestaciones fiscales):

Abre posibilidad de **recalificaci3 n** del delito especial impropio a uno común.

Justifica imputaci3 n del art. 470 N° 8 con base en:

Convergencia de voluntades con el Inspector Fiscal.

Existencia de **estados de pago aprobados con documentos falsos**.

Prueba concreta de **perjuicio fiscal** (\$14 a \$16 millones seg ún Contraloría).

Posibilidad de subsumir los hechos en "**imputaciones indebidas**".

2. SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII)

Clarificaci3 n terminol3 gica:

Los delitos imputados son de **evasi3 n**, no fraude (97 N° 4 inc. 1° y 2° CT).

El **fraude tributario** est á en el inciso 3° y es delito de resultado.

Montos del perjuicio fiscal:

Perito Carolina Díaz: \$133.345.488.

Ex fiscalizadora Alveal: \$133.220.669.

Diferencia (\$100 mil) explicada por nota de crédito.

Sobre el dolo:

Se demuestra mediante **indicios**: uso de sociedad de pantalla, asesoramiento contable, reiteraci3 n de conductas.

Se descarta error de derecho (art. 110 CT): no es iletrado ni de escasos recursos.

El acusado **controlaba la empresa y se beneficiaba directamente**.

Sobre pago parcial de la deuda:



El pago total reconocido es \$62.495.971.

Este monto **no cubre la totalidad del perjuicio**, y parte corresponde a otras deudas tributarias.

3. CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO (CDE)

Estándar de prueba: la “duda razonable” no es certeza absoluta. La defensa alegó que no hay prueba del “concierto” entre el ITO y el imputado por no existir certeza absoluta.

El CDE rechaza esta postura, señalando que el estándar aplicable en el proceso penal chileno es el de **“más allá de toda duda razonable”**, no certeza matemática. Según **Carnevali y Castillo**, en *“El estándar de convicción de la duda razonable en el proceso penal chileno”*, *Revista Uses Praxis*, n. 17, n. 2, 2011, pp. 77-118. En esa obra se explica que el estándar tiene origen anglosajón y exige una **convicción firme**, sin requerir la exclusión de toda posible duda.

Corroboración del dolo y el concierto. Rechaza la idea de que no hay elementos de prueba corroborativa. Señala que **la relación funcional entre el inspector técnico (ya condenado) y el contratista imputado**, quienes debían cumplir obligaciones paralelas en la ejecución de contratos, permite inferir dolo y concierto por omisiones coordinadas. Esta omisión recíproca —no entregar informes mensuales, no ejecutar controles técnicos— constituye **un indicio que refuerza la tesis acusatoria**.

Recepción de obras no exonera responsabilidad penal. Refuta la alegación defensiva de que la recepción de las obras eximiría de responsabilidad. Argumentando que **la recepción de obras no es causal de exención penal**. Además, la comisión receptora se basó en información **proporcionada por el propio inspector técnico**, viciando el proceso. La ausencia de evidencia técnica se debe **al incumplimiento deliberado de los coimputados**, quienes no realizaron controles esenciales.

Recalificación al artículo 470 N°8 CP es jurídicamente posible. En subsidio, solicita al tribunal que acepte la recalificación del delito de fraude al fisco (art. 239 CP) al tipo de **obtención fraudulenta de prestaciones estatales del art. 470 N°8 CP**. Cita: **Laura Mayer Lux**, *“Obtención fraudulenta de prestaciones estatales”*, *Revista de Derecho de la Universidad de Valparaíso*, N°32, 2009, pp. 283–325. **El perjuicio es un elemento del tipo, pero no así su monto**, que solo incide en la graduación de la pena. El verbo rector “obtener” implica **alcanzar un beneficio**, aunque el acto administrativo que lo otorga (como el estado de pago) **no dependa directamente del agente**, por lo que no puede alegar que escapaba de su dominio.

4. DEFENSA DE JORGE INOSTROZA CERDA

Delitos tributarios:

Niega reiteración: sólo existiría un ejercicio comercial.



Alega **concurso aparente de leyes**: solo procede aplicar inciso 2° (tipo especial).

Niega dolo: destaca intención de pago, aportes al SII y asesoría contable.

Solicita atenuantes:

- Art. 11 N° 6 (irreprochable conducta anterior).
- Art. 11 N° 7 (reparación con celo).
- Art. 11 N° 9 (colaboración eficaz).

Recalificación del delito de fraude al fisco a art. 470 N° 8 CP:

Se opone: no está contemplado en la acusación.

Alega **vulneración al derecho a defensa técnica y contradictorio**.

Cita jurisprudencia sobre anulación de sentencias por recalificación sorpresiva.

Subsidiariamente (ante eventual condena):

Solicita aplicar las atenuantes ya mencionadas.

Solicita **media prescripción**:

Delitos cometidos entre 2015 y 2016.

Formalización en enero de 2021.

Se habría excedido el plazo de 3 años para simples delitos.

Cita jurisprudencia reciente: Corte Suprema (roles 7921-2024 y 56209-2024).

ESTE TRIBUNAL, tal como se informó en el veredicto de rigor, estimó que se habían cumplido las promesas probatorias en orden a condenar al acusado como autor del delito contenido en el inciso primero del N°4 del artículo 97 del Código Tributario, en carácter de reiterado como también de la figura especial del N°8 del artículo 470 del Código Penal, las razones de esta decisión y valoración de cada una de las alegaciones, serán expuestas en los considerandos venideros, conforme a los antecedentes probatorios incorporados legalmente al juicio oral, ya sea por la vía testimonial, documental, pericial o mediante otros medios de prueba admitidos, y conforme al principio de la libre valoración en conciencia establecido en el artículo 297 del Código Procesal Penal.

Para efectos metodológicos, se analizará en primer término la prueba rendida respecto de los delitos tributarios y en segundo lugar la imputación por fraude al fiscal, finalizando

DÉCIMO CUARTO: Valoración probatoria.

Para abordar el presente caso debe ponerse en la palestra el esquema básico que impone el razonamiento probatorio de la presente sentencia, que requiere de la valoración de la prueba, individual y de conjunto; la valoración individual de la prueba tiene por objeto determinar el grado de fiabilidad que tenga cada una de las pruebas aportadas al proceso. En cambio, la valoración de conjunto tiene por objeto establecer el grado de confirmación que las pruebas incorporadas al proceso, en su conjunto, aportan a la hipótesis fáctica presentada, cuestión que se irá desarrollando a lo largo de la presente sentencia.



Esta metodología es plenamente aplicable en este caso, para abordar la efectividad o no de las infracciones tributarias denunciadas, para lo cual debe tenerse a la vista la prueba documental, tan relevante en la tramitación de los impuestos, la testimonial civil y de policías como lo documental; en el mismo sentido, es importante también, para efectos de analizar la concurrencia de los elementos típicos del delito de fraude al fisco o las figuras comunes, según el caso.

La valoración o apreciación de la prueba constituye, indudablemente, una operación fundamental en todo proceso, y, por tanto, también en el proceso penal. **Devis Echandía**, la califica de momento culminante y decisivo de la actividad probatoria, consistente en aquella operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción que pueda deducirse de su contenido.¹ Se trata de una actividad intelectual que corresponde a realizar exclusivamente al órgano jurisdiccional. Estamos dentro del ámbito de la depuración y se traduce en un análisis crítico que realiza el tribunal, mediante el empleo de las máximas de la experiencia, de las afirmaciones obtenidas de la práctica de los diferentes medios de prueba, con el objeto de obtener el juzgador sus propias afirmaciones instrumentales, para compararlas luego, con las afirmaciones iniciales realizadas por las partes.

Si estamos en el **ámbito de la libre valoración de la prueba**, la operación consistente en juzgar el apoyo que un conjunto de elementos de juicio aporta a una hipótesis sobre los hechos está sujeta a los criterios generales de la lógica y de la racionalidad.² Este es el punto de partida de la denominada concepción racional de la prueba, que tiene en **Bentham** a uno de sus principales precursores. La premisa de la que parte es simple y clara: la finalidad de la prueba en el proceso judicial es la averiguación de la verdad sobre lo ocurrido. Y una vez asumido este objetivo, son las reglas generales de la epistemología las que nos permitirán determinar, a partir de los elementos de juicio disponibles, qué grado de apoyo empírico o corroboración tienen las distintas hipótesis sobre los hechos.

Sin negar la existencia de las normas de derecho probatorio, **Ferrer**, afirma que cuanto más rico y fiable sea el conjunto de elementos de juicio que tomemos como referencia para decidir sobre los hechos, mayor será la probabilidad de que la conclusión que resulte fundada en esos elementos sea verdadera. Por eso, debemos preocuparnos por allegar al proceso el conjunto de

¹ DEVIS, Hernando, “Contenido, Naturaleza y técnica de valoración de la prueba judicial”, 1966, pág. 10.

² En este sentido, entre otros muchos, cf. Rescher y Joynt, “Evidence in History and in the Law”, en *The Journal of Philosophy*, p. 565; Damaška, *The Faces of Justice and State Authority: A Comparative Approach to the Legal Process*, p. 55; id., *Evidence Law Adrift*, p. 21; Twining, *Rethinking Evidence. Exploratory Essays*, p. 194; y Taruffo, “Modelli di prova e di procedimento probatorio”, en *Rivista di diritto processuale*, p. 429.



elementos de juicio más rico y fiable posible.³ Cuestión que no siempre ocurre, en atención ya sea por las deficiencias probatorias de la investigación penal, propia de un sistema de indagación más bien rígido, con policías que muchas veces no cuentan con la formación o herramientas necesarias, frente a la rápida evolución de la criminalidad, como ocurre por ejemplo, en el ámbito económico o con las especiales características de los delitos funcionarios.

En tal labor, se debe tener presente que el juez **únicamente podrá formar convicción basándose en la prueba aportada al proceso y practicada en el juicio oral**. No basta entonces, con el mero convencimiento subjetivo del juez, sino que el mismo debe apoyarse en la prueba practicada, de tal forma que del resultado de esta pueda obtenerse convicción acerca de la culpabilidad del acusado.

Por otro lado, en cuanto a la configuración de los elementos del tipo penal, es relevante hacer mención que debe partirse de la base que no es solo la prueba directa la que constituye la fuente primordial de convicción sino que también aquella denominada como *indiciaria*, mismos que son suficientes para el razonamiento judicial, que concluye en el juicio de atribución que reclaman los acusadores y que deben de ser suficientes y para ello relacionarse unos a otros, de forma tal de otorgar la coherencia necesaria en relación a los hechos punible, que permiten reconstruir como este habría sido y con qué se efectuó, de manera tal que al unirse vayan despejando las dudas sobre las actividades desplegadas por sus agentes y la ejecución de cada una de las acciones realizadas por cada uno de ellos. Así, se puede entender que los indicios se constituyen por conjeturas y señales más o menos vehementes y decisivas, aceptadas por el juez como conclusión de orden lógico y por derivación o concatenación de los hechos y que son peculiares del procedimiento penal, donde el responsable procura borrar todas las pruebas delictivas, actuar bajo impunidad o desfigurarlas de modo tal, que la convicción plena o la evidencialidad de los hechos resulte prácticamente inlograble.

Según sostiene el profesor Claus Roxin, para que lo anterior acontezca, es preciso que “Entre los hechos que necesitan ser probados se pueden diferenciar a aquellos hechos directamente importantes, a los indicios y a los hechos que ayudan a la prueba, (esto es que) entre los hechos directamente importantes se cuentan todas las circunstancias que fundamentan por sí misma la punibilidad (...) o la excluyen (...). Los indicios son hechos que permiten extraer una conclusión de un hecho directamente importante; así, por ejemplo, el hecho de que el sospechoso del asesinato inmediatamente antes del homicidio

³ FERRER, Jordi, “Manual de Razonamiento Probatorio”, Capítulo “La Decisión Probatoria” Edición 2022, Ciudad de México, pagina 401.



de X lo amenazó de muerte o después del hecho quitó manchas de sangre de su pantalón (...) Hechos que ayudan a la prueba son hechos que permiten extraer una conclusión de la calidad de un medio de prueba, por ejemplo, la veracidad o memoria de un testigo. Así no por ser un tipo de prueba indirecta, los indicios deben desestimarse como elementos para adquirir convicción, los cuales son entendidos según el profesor Michel Taruffo como “cualquier cosa, circunstancia o comportamiento que el juez considera significativo, en la medida en que él puede derivarse conclusiones relativas al hecho a probar”.

Conforme a estos parámetros se iniciará el análisis de la prueba rendida por los intervinientes.

I. ARGUMENTOS RESPECTO DE LA ACUSACIÓN POR DELITOS TRIBUTARIOS.

DÉCIMO QUINTO: Tipo penal invocado análisis legal y doctrinal.

En este capítulo, tanto la Fiscalía como el querellante, coincidieron en la imputación de los delitos contenidos en los incisos primero y segundo del N°4 del artículo 97 del Código Tributario.

Delito contenido en el Inciso 1° del N°4 del artículo 97 del Código Tributario.

*“Las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas **que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda** o la omisión maliciosa en los libros de contabilidad de los asientos relativos a las mercaderías adquiridas, enajenadas o permutadas o a las demás operaciones gravadas, la adulteración de balances o inventarios o la presentación de éstos dolosamente falseados, el uso de boletas, notas de débito, notas de crédito o facturas ya utilizadas en operaciones anteriores, o el empleo de otros procedimientos dolosos **encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto**, con multa del cien por ciento al trescientos por ciento del valor del tributo defraudado y con presidio menor en su grado máximo”.*

Al respecto, los requisitos copulativos del delito son:

- 1.- Que se haya presentado una declaración. En consecuencia, no se configura el delito si la declaración se confecciona y no se presenta.
 - 2.- Que la declaración sea falsa o incompleta.
- Falsa: Que contenga datos carentes de realidad o de veracidad. Esta falsedad puede ser material o ideológica.



-Incompleta: Que no contenga la totalidad de los datos o antecedentes tributarios del contribuyente, sino que sólo una parte de ellos.

3.- Que la declaración presentada pueda inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda.

4.- Que las falsedades u omisiones sean maliciosas, esto es, que el contribuyente debe haber incurrido en ellas con el propósito definido de privar al Fisco de percibir los impuestos que le corresponden.

Delito contenido en el Inciso 2° del N°4 del artículo 97 del Código Tributario.

Los contribuyentes afectos al Impuesto a las Ventas y Servicios u otros impuestos sujetos a retención o recargo, que realicen maliciosamente cualquiera maniobra tendiente a aumentar el verdadero monto de los créditos o imputaciones que tengan derecho a hacer valer, en relación con las cantidades que deban pagar, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y con multa del cien por ciento al trescientos por ciento de lo defraudado.

Los requisitos copulativos de este delito son:

1.-El sujeto activo debe ser un contribuyente afecto al impuesto a las ventas y servicios u otros impuestos sujetos a retención o recargo.

Como se observa, el delito requiere de un SUJETO ACTIVO que sea:

a.- Contribuyente de impuestos a las ventas y servicios; o b.- Contribuyente de otros impuestos sujetos a retención o recargo,

2.- Debe realizar maliciosamente las maniobras que se sancionan.

La diferencia está en que, en este caso, la malicia debe estar encaminada a AUMENTAR el verdadero monto de los créditos o imputaciones que estos contribuyentes tienen derecho a hacer valer, en relación con las cantidades que deben pagar.

3.- Las Maniobras deben ser tendientes a aumentar el verdadero monto de los créditos o imputaciones que tengan derecho a hacer valer, en relación con las cantidades que deban pagar.

Fundamentalmente, busca evitar la alteración del **Crédito Fiscal en el IVA**, dado que por dicha vía los contribuyentes del referido tributo pueden llegar a pagar menos impuestos que los correspondientes a la verdadera relación **Débito Fiscal versus Crédito Fiscal** que constituye la base para la determinación del IVA.

Respecto del bien jurídico protegido, se ha dicho que se trataría de la **Hacienda pública como bien jurídico directo** (posición tradicional), esta es la posición predominante en la jurisprudencia chilena y gran parte de la doctrina nacional, estimándose que engloba la integridad del sistema de recaudación de tributos y la disponibilidad de recursos públicos para el funcionamiento del



Estado. En tal sentido, **Jean Pierre Matus** y **Sergio Politoff**: Sostienen que el bien jurídico protegido es el interés económico del Estado, particularmente su facultad de captar ingresos conforme a la ley.

Algunos autores amplían el concepto de bien jurídico, destacando su carácter **funcional e institucional**: Lo protegido no es solo el dinero del Estado, sino la función institucional de recaudación fiscal en un sistema democrático. Esta perspectiva considera:

- La **confianza pública** en el sistema tributario.
- La **efectividad del principio de legalidad tributaria**.
- El **cumplimiento voluntario del deber tributario** como base del sistema.

Autores como **Matías van Wessel**: Defiende una visión institucional del bien jurídico, señalando que la criminalización se justifica **no solo por la afectación patrimonial**, sino también por el riesgo que representa para la **credibilidad del sistema tributario**; **Claus Roxin** (Derecho comparado): En delitos fiscales alemanes, señala que se protege el **orden fiscal**, como manifestación del principio de legalidad tributaria.

Finalmente, una tercera línea doctrinaria apunta a que el bien jurídico es de carácter más normativo:

La equidad tributaria y la justicia distributiva en el financiamiento del Estado. Esto implica que: El delito tributario rompe el **pacto fiscal** entre contribuyentes y Estado. Atenta contra la **solidaridad social**, ya que la evasión de unos **aumenta la carga tributaria de otros**. Sostenida por autores como **Marcos Contreras Riquelme**: En su tesis doctoral indica que “el bien jurídico no es solo la Hacienda, sino también la **igualdad ante la ley tributaria**, la confianza en el sistema y la equidad fiscal; **Carlos Gómez-Jara Díez** (España): “La defraudación fiscal afecta el valor constitucional de la solidaridad y socava la legitimidad del Estado social.”

Conforme a lo dicho, es posible estimar que el bien jurídico protegido con la regulación penal tributaria es compuesto, reconociendo en todo caso, como base o mínimo bien de protección, la **hacienda pública** que es la contracara del patrimonio público, en cuanto a que es el conjunto de **ingresos, egresos y operaciones financieras** que realiza el Estado para cumplir sus funciones. Comprende: La recaudación de impuestos, la administración del presupuesto, la gestión de deuda pública y los gastos del aparato estatal, tiene una **función dinámica y operativa** y a su turno el **Patrimonio Público**, es el conjunto de **bienes, derechos y obligaciones** que pertenecen al Estado y sus organismos, es una noción **más estática o estructural**, que alude a los bienes que el Estado posee y administra.



DÉCIMO SEXTO: Análisis de la prueba de cargo. Testigos.

En primer término, se recibió el testimonio del CONTADOR, **OSCAR CRISTIAN ANDRADE CID**.

En cuanto al contexto fáctico relevante al caso, este testigo, señaló que prestó servicios por algunos meses a la empresa **VIALMIX**, luego de que **don Jorge Inostroza** la adquiriera.

Asegura haber llegado en calidad de “**apoyo administrativo y contable**”, cuando la contabilidad ya estaba parcialmente organizada.

Andrade ejecutaba funciones como: Liquidaciones de sueldos, Cálculo de impuestos, Confección del formulario 29 (declaración mensual de IVA), Elaboración del libro de compras y ventas, **con información entregada por personal administrativo de la empresa**.

El contador **reconoce que se produjeron inconsistencias** en las declaraciones, que derivaron en **giros por parte del SII**. Señala que **don Jorge Inostroza firmó rectificaciones** por esas inconsistencias.

Aclara que la diferencia se debió a posibles errores, como **falta de documentos (facturas, notas de crédito)** y que **el crédito fiscal no coincidía con el libro de compras**.

Reconoce que la información era proporcionada por administrativos de la empresa, bajo eventual supervisión del acusado.

Entregándose, en consecuencia, elementos que dan cuenta de la efectividad de que se presentaron **declaraciones incompletas o incorrecta** que **pudo inducir a una autoliquidación errónea**.

Este testigo, aunque fue renuente en algún momento, indicó que **Jorge Inostroza tenía control de la empresa** y que **firmó las rectificaciones tributarias**. El testigo **evade responsabilidad dolosa propia**, señalando que “solo trabajaba con la información entregada”. Esto deja **indicios de conocimiento** por parte del acusado respecto de las inconsistencias de las declaraciones objetadas.

El testimonio revela que **las diferencias declarativas fueron atribuibles a errores o faltas en la documentación entregada**, lo cual **afectó el cálculo del IVA**, lo que generó en su momento el giro de impuestos de parte del Servicio, lo que refleja un perjuicio fiscal, que motiva dicho giro.

Hay un **nexo causal entre las declaraciones erróneas y el perjuicio fiscal**, lo cual **fortalece la configuración típica del inciso 1°** si se prueba el dolo, o al menos del **inciso 2°**, si se prueba la aptitud para inducir error.

A su turno, compareció, **MARIA ESTER ALVEAL GUERRERO**, fiscalizadora del Servicio de impuestos internos, quien dio cuenta de las operaciones realizadas respecto de la empresa constructora **VIALMIX**.



Durante el proceso de fiscalización de la empresa **Constructora Vialmix Limitada**, correspondiente a los ejercicios tributarios de los años 2015 y 2016, afirmó la testigo que se verificaron dos tipos reiterados de irregularidades tributarias: **la subdeclaración dolosa de débitos fiscales** y el **aumento indebido del crédito fiscal**, todo ello relacionado con la determinación y pago del impuesto al valor agregado (IVA).

Que, en cuanto al primero de los hallazgos, la testigo señaló que en diversos períodos tributarios —febrero, marzo, junio y diciembre de 2015, así como marzo y octubre de 2016—, se constató que las ventas consignadas en los **formularios F29** presentados al Servicio eran **notoriamente inferiores** a las registradas en los **libros de ventas timbrados**, los cuales fueron proporcionados por la misma empresa durante la fiscalización. Esta situación generó un **perjuicio fiscal efectivo** estimado en la suma de **\$96.116.576**, situación fáctica que abona a la configuración del **tipo penal previsto en el inciso primero del artículo 97 N°4 del Código Tributario**, esto es, la evasión maliciosa mediante declaración incompleta, con resultado lesivo para el interés fiscal.

Que, por otra parte, la testigo detalló que, en los períodos tributarios correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 2015, y enero, marzo y septiembre de 2016, se constató que la empresa **declaró créditos fiscales por montos superiores a los registrados en los libros de compras**, utilizando como fundamento facturas que no se encontraban debidamente respaldadas en su contabilidad formal. En algunas ocasiones, se declararon entre **25 a 30 facturas**, cuando el libro de compras consignaba solo entre **6 a 10 documentos**, sin que la fiscalizadora encontrara respaldo documental adicional que justificara dicha diferencia. Esta conducta ocasionó un **perjuicio fiscal por aumento indebido del crédito** ascendente a **\$37.140.093**.

Que la fiscalizadora indicó, además, que el **representante legal de la empresa, don Jorge Inostroza Cerda**, fue **debidamente notificado en diciembre de 2016** para presentar la documentación tributaria, y que **entregó los antecedentes con retraso y de manera parcial** en marzo de 2017, solicitando prórrogas intermedias. Asimismo, el acusado **suscribió las declaraciones rectificatorias correspondientes a los períodos auditados**, lo que se interpreta como **reconocimiento de los errores** detectados, confirmando así el **elemento subjetivo exigido por la norma penal tributaria**, esto es, el **dolo directo o malicia tributaria**.

En relación con los hechos investigados, este testimonio, prestado por una funcionaria contador auditor y ex fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos con más de tres décadas de experiencia, abona a la tesis de los acusadores en orden a que la empresa Constructora Vialmix Ltda., representada legalmente por don Jorge Inostroza Cerda, presentó durante los períodos tributarios correspondientes a los años comerciales 2015 y 2016, declaraciones mensuales del impuesto al valor agregado (IVA) que contienen **inexactitudes**



sustanciales y reiteradas, consistentes, por una parte, en la **subdeclaración de los débitos fiscales** y, por otra, en el **aumento indebido de los créditos fiscales**, configurándose con ello **conductas típicas previstas en los incisos primero y segundo del N°4 del artículo 97 del Código Tributario**; Declarando la empresa montos de ventas inferiores a los efectivamente registrados en los libros de ventas timbrados por el propio Servicio, situación que **redujo fraudulentamente el débito fiscal** correspondiente, lo que implicó **una disminución efectiva en el impuesto a pagar**, generando un **perjuicio fiscal directo**, verificándose una **declaración maliciosamente incompleta**, con perjuicio fiscal efectivo.

Asimismo, en otros períodos ya mencionados, la empresa declaró créditos fiscales superiores a los respaldados en los libros de compras, utilizando facturas inexistentes en los registros formales. La fiscalizadora fue categórica al señalar que **no se encontraron documentos adicionales que respaldaran tales créditos**, y que estos fueron **simplemente insertos en los formularios 29**, pese a no constar en los libros oficiales, conductas que corroboran la versión fiscal en orden a que se trata de **declaraciones maliciosamente falsas o incompletas aptas para inducir a la autoliquidación de un impuesto inferior al que correspondía**.

Que, desde el punto de vista del elemento subjetivo, el dolo o malicia exigido por la ley se encuentra aportó antecedentes relativos, no solo por la calidad del acusado como **representante legal de la empresa**, sino también por el hecho de haber sido **formalmente notificado por el SII** para presentar documentación contable completa, la que **entregó parcialmente y con retraso**, y por haber **suscrito las declaraciones rectificatorias** en el mes de marzo de 2017, reconociendo con ello las irregularidades detectadas en sus declaraciones mensuales de IVA. Estos elementos permiten inferir racionalmente que el acusado **actuó con conocimiento y voluntad de presentar declaraciones inexactas** con el propósito de disminuir el tributo a pagar.

A su turno se presentó al testigo policial, **RODRIGO MOSCOSO POLGATIZ**, quien relató su labor investigativa incluyó la recepción y análisis del **informe técnico “B” de fecha 16 de noviembre de 2018**, elaborado por la fiscalizadora del SII **María Ester Alveal Guerrero**, analizado en los párrafos precedentes.

Innovando, agregó que, en el curso de la investigación, se tomó declaración a la **hermana del querellado, doña Susana Inostroza Cerda**, y a su cónyuge, **don Daniel Martínez**, quienes manifestaron haber sido incorporados como socios de la empresa **a petición del acusado**, por cuanto éste **no podía figurar como socio** ante el Ministerio de Obras Públicas, pero sí como **representante legal**. Ambos señalaron no haber participado en la administración ni gestión de la empresa y haber actuado solo con el objeto de “ayudar” al querellado, lo que



refuerza la idea de que éste **mantuvo el control efectivo de la sociedad** y fue el **único responsable de la operativa tributaria de la misma**.

Que, a su vez, el funcionario policial señaló que el **contador de la empresa, don Óscar Andrade**, se presentó en la brigada, pero **se acogió a su derecho a guardar silencio** y no declaró, invocando su derecho a no autoincriminarse conforme al artículo 305 del Código Procesal Penal.

También manifestó que la documentación contable de Vialmix Ltda. fue remitida por instrucción del Ministerio Público al **Laboratorio de Criminalística de la PDI**, aunque el testigo no tuvo acceso ni conocimiento del contenido final de dicho informe.

Que, en consecuencia, el tribunal estima que el testimonio del funcionario Rodrigo Moscoso **refuerza y corrobora** los hallazgos establecidos en el informe técnico del Servicio de Impuestos Internos y permite afirmar la existencia de una **conducta sistemática y reiterada del acusado** consistente en presentar **declaraciones mensuales de IVA falsas e incompletas**, ya sea por la **subdeclaración del débito fiscal**, o por el **aumento doloso del crédito fiscal**, generando con ello una **menor base imponible** y, por tanto, **un perjuicio efectivo al Fisco**, cuya cuantía ha sido determinada.

Que conforme a las reglas de la sana crítica, y particularmente a los principios de **congruencia lógica, experiencia común y razonabilidad**, el tribunal ha valorado la prueba testimonial rendida, advirtiendo que los **testimonios prestados por el contador Óscar Cristian Andrade Cid, la fiscalizadora María Ester Alveal Guerrero y el funcionario policial Rodrigo Moscoso Polgatiz**, convergen de modo consistente, corroborando entre sí y con la documentación incorporada al proceso (que se analizará en considerandos siguientes), los **hechos constitutivos de los delitos previstos en los incisos primero y segundo del N°4 del artículo 97 del Código Tributario**.

En consecuencia, los tres testimonios analizados, valorados conforme a criterios de **coherencia externa, verosimilitud, concordancia y ausencia de contradicción relevante**, permiten establecer, que **don Jorge Inostroza Cerda**, en su calidad de **representante legal y administrador efectivo** de la empresa Constructora Vialmix Ltda., **presentó en múltiples períodos tributarios declaraciones mensuales de IVA falsas e incompletas**, ya sea por **subdeclaración del débito fiscal** o por **sobredeclaración del crédito fiscal**, generando con ello **una menor base imponible**, lo que **produjo un perjuicio efectivo al Fisco** y se encuentra **típicamente subsumido en los incisos primero y segundo del artículo 97 N°4 del Código Tributario**, existiendo además **prueba suficiente del elemento subjetivo del tipo penal**, esto es, **la malicia o dolo tributario**.

Luego de este análisis, se abordará la demás prueba rendida en este capítulo, como es la pericial y documental.



DÉCIMO SÉPTIMO: Análisis de la prueba de cargo. Prueba pericial.

En este punto, se presentó a la contador auditor, **CAROLINA DÍAZ MEDINA**, que evacuó el informe pericial contable N° 18/2021 de fecha 01 de octubre de 2021.

Se valoró este informe, cuyo objeto fue el **análisis de los antecedentes contables y tributarios de la empresa Constructora Vialmix Ltda.**, con el fin de verificar o descartar la existencia de inconsistencias en las declaraciones mensuales de IVA presentadas por la empresa ante el Servicio de Impuestos Internos, conforme al artículo 97 N°4 del Código Tributario.

Que, según se estableció, el peritaje tuvo como base documental los **libros de compras y ventas timbrados por el SII, los formularios mensuales F29, las facturas emitidas y recibidas, y las declaraciones rectificatorias** presentadas por el representante legal de la empresa. El análisis pericial se desarrolló mediante una **metodología técnico-comparativa**, destinada a **contrastar la contabilidad formal de la empresa con las declaraciones tributarias** presentadas ante la autoridad fiscal, utilizando criterios objetivos de correspondencia entre documentos, consistencia temporal y respaldo tributario. Que, en cuanto a las operaciones realizadas, la perito procedió al **cotejo directo entre las ventas registradas en los libros de la empresa y las cifras declaradas como débito fiscal en los formularios F29**, detectando una **subdeclaración sistemática en diversos períodos tributarios de los años 2015 y 2016**. A su vez, se efectuó la **comparación del número y monto de las facturas de compra registradas en los libros de compras y aquellas informadas en los formularios F29 como crédito fiscal**, advirtiéndose la existencia de **créditos fiscales no respaldados por documentos tributarios válidos**, lo que fue calificado como **aumento indebido del crédito fiscal**.

Que, en sus conclusiones, el perito señaló que las inconsistencias detectadas **afectaron directamente la base imponible del impuesto al valor agregado (IVA) y provocaron un perjuicio fiscal efectivo**, en tanto las diferencias detectadas entre la contabilidad formal y las declaraciones presentadas por la empresa coincidían con las irregularidades ya advertidas en el informe técnico del Servicio de Impuestos Internos, suscrito por la fiscalizadora María Ester Alveal Guerrero. En consecuencia, el peritaje **corroboró la existencia de subdeclaraciones del débito fiscal y sobre-declaraciones del crédito fiscal** en los períodos auditados, validando con ello la tesis del ente persecutor.

Que, valorada conforme a criterios de la sana crítica, la prueba pericial contable resulta **técnicamente fundada, internamente coherente y externamente concordante con el resto del material probatorio**, en particular con los testimonios rendidos por la fiscalizadora del SII y por el propio contador de la empresa, de modo que el tribunal le otorga **plena fuerza probatoria**, estimando que **los hechos periciados corroboran que el representante legal de la**



empresa, don Jorge Inostroza Cerda, incurrió en conductas constitutivas de los delitos tributarios tipificados en los incisos primero y segundo del artículo 97 N°4 del Código Tributario, por cuanto presentó declaraciones maliciosamente falsas e incompletas, que generaron perjuicio fiscal efectivo y/o fueron aptas para inducir a error al Fisco en la determinación del tributo correspondiente.

DÉCIMO OCTAVO: Análisis de la prueba de cargo. Prueba Documental.

En este apartado se presentó el Informe de recopilación de antecedentes N° 17 B, de fecha 16 de noviembre de 2018, emitido por la Fiscalizadora María Ester Alveal Guerrero, de la dirección Regional Temuco del Servicio de Impuestos Internos.

Según consta en el mismo, se contrastaron las cifras declaradas en formularios F29 con los montos registrados en los libros contables timbrados por el propio SII; se verificó la existencia y correspondencia de **facturas** (emitidas o recibidas) en los libros respecto de aquellas consideradas en los créditos o débitos fiscales. Se comprobó si existían respaldos documentales válidos para los montos declarados como crédito fiscal. Evaluar las **respuestas del Ministerio de Obras Públicas** sobre facturas emitidas por Vialmix y supuestamente recepcionadas y aplicar **reajustes** conforme al artículo 53 del Código Tributario para cuantificar el perjuicio fiscal actualizado a noviembre de 2018.

El informe realizó un **análisis detallado por cada mes** auditado, identificando:

a) Subdeclaración de débitos fiscales (IVA ventas):

En los periodos: febrero, marzo, junio, diciembre 2015 y marzo, octubre 2016.
Ejemplos:

- **Febrero 2015:** Se declaró \$23.196.038 de débito, pero el libro consignaba \$44.014.955 → diferencia: **\$20.818.917**.
- **Junio 2015:** Diferencia no declarada: **\$28.896.679**.
- **Diciembre 2015:** Se omitió completamente el débito de **\$18.329.439** pese a haberse emitido facturas al MOP.

b) Aumento indebido del crédito fiscal (IVA compras):

En los periodos: mayo-agosto 2015 y enero, marzo, septiembre 2016.
Ejemplos:

- **Mayo 2015:** Se declaró crédito fiscal por \$26.913.687, pero el libro respaldaba solo \$14.719.201 → diferencia no respaldada: **\$12.194.486**.
- **Julio 2015:** Se declaró \$7.375.429, respaldados solo \$8.893 → diferencia: **\$7.366.536**.
- **Marzo 2016:** Declaración de \$10.473.805, respaldo contable de \$2.827.361 → diferencia: **\$7.646.444** (sin considerar una nota de crédito restada).



En cuanto a las conclusiones del informe:

Perjuicio Fiscal Total actualizado:

- Por subdeclaración de débitos: **\$105.091.785**
- Por aumento indebido de créditos: **\$40.414.711**
- **Total: \$145.506.496**

El representante legal **don Jorge Inostroza Cerda** fue notificado, entregó parte de la documentación con retraso, y **presentó rectificaciones el 28 y 29 de marzo de 2017**, reconociendo los hechos.

La empresa **no presentó los libros contables base** (diario, mayor, inventario), por lo que no fue posible calcular el impacto exacto en el **Impuesto a la Renta**. El **modo de operar** de la empresa consistió en reducir artificialmente el IVA a pagar mediante la combinación de **menor débito fiscal declarado y mayor crédito fiscal sin respaldo legal**, infringiendo los artículos 20 y 23 del D.L. 825 y configurando **una disminución dolosa de la carga tributaria**.

Cabe señalar, conforme a las alegaciones de la defensa en este punto que los montos variaron debido a que **el perjuicio fiscal fue actualizado**, conforme al artículo 53 del Código Tributario, que establece que las deudas tributarias se **reajustan conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC)**, además de aplicarse **intereses y multas**. Por tanto, una vez aplicado el reajuste legal, el **perjuicio fiscal total actualizado al 16 de noviembre de 2018** asciende a **\$145.506.496**; lo que representa un **aumento de \$9.468.128** respecto del monto original, debido a reajuste por **variación del IPC** desde las fechas en que se devengó cada diferencia hasta noviembre de 2018 y **aplicación de intereses** y posiblemente **recargos legales** conforme al artículo 53 del Código Tributario.

Por lo anterior, no hay errores en los montos consignados, sino que la actualización de estos en conformidad a la normativa tributaria.

Que, dentro del cúmulo probatorio incorporado al juicio, reviste especial relevancia la carpeta documental individualizada como “NUE 2169146, correspondiente al cuaderno de recopilación de antecedentes de la contribuyente Constructora Vialmix Limitada”, que contiene antecedentes contables y tributarios correspondientes a la empresa **Constructora Vialmix Limitada** relativos principalmente al **ejercicio comercial del año 2015** y parte del año 2016, los cuales han sido analizados por este tribunal en virtud de las reglas de la **sana crítica**.

Que dicha documentación se compone de diversos tipos de antecedentes que permiten clasificarla funcional y probatoriamente del siguiente modo:

1. En primer lugar, se incluyen **libros de ventas mensuales timbrados por el Servicio de Impuestos Internos**, los cuales consignan de manera detallada las **facturas emitidas**, incluyendo su número correlativo, fecha de emisión, identificación del cliente —frecuentemente el Ministerio de Obras Públicas—,



montos afectos y el IVA correspondiente. Estos registros reflejan las operaciones de ventas efectivamente realizadas por la empresa en los períodos auditados.

2. En segundo lugar, se contiene una serie de **formularios F29**, correspondientes a las **declaraciones mensuales del impuesto al valor agregado (IVA)** presentadas por la empresa ante el SII. Dichos formularios muestran los datos autoliquidados por el contribuyente en relación con el débito y crédito fiscal, base imponible, y total del impuesto declarado y/o pagado.

3. En tercer término, se encuentran los **libros de compras mensuales**, también timbrados, en los que se registra la adquisición de bienes y servicios por parte de la empresa, individualizándose proveedor, RUT, tipo de documento y monto de IVA crédito fiscal supuestamente generado.

4. A estos documentos se suman **copias de facturas físicas y electrónicas**, emitidas por la empresa, y en algunos casos, **acuses de recibo de servicios prestados**, los cuales permiten verificar que ciertas operaciones tuvieron respaldo documental y recepción efectiva conforme a la Ley N° 19.983.

Que, del examen conjunto de esta prueba documental, contrastando los **libros contables** con las **declaraciones tributarias**, se constataron **inconsistencias sistemáticas**, en los siguientes términos:

Subdeclaración del débito fiscal: En diversos meses (febrero, marzo, junio y diciembre de 2015, entre otros), se consignaron ventas en los libros por montos **superiores** a los declarados en los formularios F29, generando **una menor base imponible** y, por tanto, una **menor carga tributaria declarada** ante el SII.

Sobredeclaración del crédito fiscal: En varios períodos, se declararon **más facturas de compra** y por montos **superiores** a los que constan efectivamente en los libros de compras. En algunos casos, el formulario F29 consignaba **25 a 30 documentos**, mientras que el libro respaldaba sólo **6 a 10**, sin que existiera respaldo documental adicional, lo que generó un **crédito fiscal indebido**.

Que tales diferencias, de acuerdo a lo que se ha venido razonando en las consideraciones precedentes, **no se explican por errores menores o de buena fe**, sino que presentan un patrón reiterado y sistemático, lo que unido a la circunstancia de que el propio representante legal de la empresa, don **Jorge Inostroza Cerda**, **suscribió declaraciones rectificatorias en marzo de 2017**, permite sostener, con el grado de convicción que exige el juicio penal, que hubo **conocimiento y voluntad de declarar información falsa o incompleta**, sea para disminuir la base imponible, sea para incrementar indebidamente el crédito tributario, **afectando directamente el interés fiscal**.

Que, en mérito de lo expuesto, esta documentación contable —al ser contrastada con los testimonios rendidos y el informe pericial elaborado al respecto— permite **tener por configurados los elementos típicos objetivos y subjetivos** de los delitos previstos en los **incisos primero y segundo del artículo 97 N°4 del Código Tributario**, desde que se ha probado:



La presentación de declaraciones falsas o incompletas;
La existencia de un perjuicio efectivo al Fisco o, al menos, la aptitud para inducir a una autoliquidación inferior a la debida;
Y la concurrencia de dolo directo, dada la calidad del acusado como representante legal, su rol en la operativa tributaria y su posterior reconocimiento implícito de las irregularidades a través de las rectificaciones.

DÉCIMO NOVENO: Análisis de la prueba de la defensa.

La DEFENSA, respecto de este primer capítulo acusatorio presentó:

1.- Consulta de movimientos y pagos de deudas fiscales de la sociedad CONSTRUCTORA VIALMIX LIMITADA desde la página de Tesorería General de La República, que van desde el 14 de abril de 2014 a 12 de octubre de 2017.

Constan en estos documentos diversos periodos tributarios en que la empresa Constructora Vialmix Limitada, representada legalmente por el acusado Jorge Inostroza Cerda, fue objeto de giros por parte del Servicio de Impuestos Internos debido a diferencias detectadas en sus declaraciones tributarias, específicamente respecto de impuestos al valor agregado (IVA) e impuesto a la renta.

Que, dichos certificados fueron emitidos entre los años 2015 y 2023 y contienen información relativa a giros de impuestos determinados administrativamente por el SII tras procesos de fiscalización que permitieron detectar diferencias entre los montos efectivamente declarados y los determinados sobre la base de la contabilidad de la empresa, respaldada por libros de ventas y compras.

Que los documentos dan cuenta de más de 20 cargos por montos variables, desde cifras menores —como \$209.700— hasta montos significativos que superan los \$30.000.000, como es el caso del cargo registrado con fecha 03/05/2017, por la suma de \$47.055.972, identificado como "DIF.IMP.RTA.FRM 22". En particular, varios de estos cargos refieren al formulario 29 —declaración mensual de IVA— en los que se consignan conceptos como "DIF.IMPTO. FORM 29", "IVA POSTERG. PRIM.", y "MULTAS ART. 97 2-11", lo que denota que las liquidaciones están fundadas en infracciones al artículo 97 del Código Tributario.

Que, adicionalmente, en al menos un documento consta un pago parcial realizado por la empresa, con fecha 16 de marzo de 2018, por la suma de \$1.554.402, imputado a una de las diferencias detectadas en el formulario 29. En dicho pago se señala expresamente la existencia de un reajuste por corrección monetaria (\$73.057), intereses y multas (\$1.562.362), lo que permite concluir que los montos originalmente girados por concepto de tributos se incrementaron por aplicación de los mecanismos legales de actualización, conforme a los artículos 53 y siguientes del Código Tributario, los cuales



imponen recargos e intereses por mora a contar del vencimiento del plazo legal para el pago del tributo.

Que, en definitiva, el examen integral de estos certificados demuestra, en términos objetivos y verificables, la existencia de una deuda tributaria consolidada, derivada de la presentación de declaraciones incompletas o erróneas, las cuales fueron corregidas por el SII mediante liquidaciones administrativas que derivaron en giros a cargo del contribuyente. Todo lo cual refuerza la tesis acusatoria en cuanto a la existencia de subdeclaraciones del débito fiscal y aumentos indebidos del crédito fiscal, generando un perjuicio al interés fiscal, corroborado además por la existencia de procesos administrativos de fiscalización previos, formalizados mediante resoluciones de giro e incluso pagos parciales en algunos casos.

En consecuencia, el tribunal valorará esta prueba documental conforme a las reglas de la sana crítica, considerando su origen oficial, su contenido detallado y su concordancia con el resto de los medios probatorios, en especial con el informe de la fiscalizadora María Ester Alveal Guerrero, en orden a establecer la realidad del perjuicio fiscal y la configuración típica de los hechos en los términos previstos en el artículo 97 N° 4 incisos 1° y 2° del Código Tributario.

2.- Certificados de movimiento y pago de deudas fiscales de la sociedad CONSTRUCTORA VIALMIX LIMITADA desde la página de Tesorería General de La República, que van desde el 14 de abril de 2014 a 12 de octubre de 2017.

Que el contenido documental exhibido permite a esta judicatura constatar que existen múltiples registros con saldos fiscales positivos —por ejemplo, registros del 20 de octubre de 2017 por \$29.582.288 o del 20 de abril de 2016 por \$28.885.197—, lo cual resulta coincidente con los montos que fueron materia de observación en el informe de recopilación de antecedentes elaborado por el Servicio de Impuestos Internos y citado por los testigos periciales durante la audiencia de juicio oral.

Que, sin perjuicio de no constituir por sí solo un elemento excluyente de responsabilidad penal, dicho certificado electrónico permite corroborar la existencia objetiva de deudas tributarias generadas por la contribuyente, en relación con diversos períodos del año comercial 2015 y 2016, en concordancia con los antecedentes técnicos y contables que dieron origen a la querella del Servicio de Impuestos Internos.

Que, en consecuencia, el documento acompañado por la defensa bajo la rúbrica “1.B” no desacredita las conclusiones del órgano fiscalizador, sino que más bien las complementa en lo relativo a la trazabilidad del perjuicio fiscal, al demostrar la existencia efectiva de saldos impagos y obligaciones tributarias pendientes, cuya materialización constituye una manifestación fáctica del perjuicio fiscal que subyace a la imputación de los delitos tributarios previstos en el artículo 97 N° 4 del Código Tributario.



3.- Detalle de convenio de Pago, historia de convenio de pago y detalle de cuotas de convenio de pago, suscrito por VIALMIX LIMITADA con Tesorería General de La Republica con fecha 19.08.2016.

Que, dicho documento se compone de tres secciones claramente identificables: (i) el detalle del convenio suscrito, (ii) el historial de etapas de este y (iii) el cuadro general de cuotas pactadas. Del análisis de su contenido, se desprende que el monto adeudado ascendía a la suma de \$42.565.675, pactándose su pago en **24 cuotas mensuales**, el PIE de **\$12.228.318**, con aplicación de condonación parcial de intereses y multas conforme al régimen de regularización tributaria vigente a la fecha.

Que, conforme se acredita en el historial, el contribuyente efectuó el pago de únicamente **dos cuotas** dentro del plazo convenido, quedando el resto de las cuotas impagas. Como consecuencia de ello, y en conformidad con las reglas administrativas aplicables, el convenio fue **declarado caduco** por la Tesorería el día **4 de febrero de 2017**, al verificarse el incumplimiento por mora en dos o más cuotas consecutivas.

Que, si bien la suscripción de dicho convenio podría ser valorada por la defensa como un **indicador de voluntad de cumplimiento tributario posterior** a los hechos investigados, el tribunal estima, conforme a criterios de sana crítica, que su valor atenuante es **limitado**. Ello, por cuanto:

El convenio **no extingue la obligación tributaria ni el perjuicio fiscal existente**, al haber quedado sin efecto por incumplimiento;

No modifica la existencia de los **hechos base ya verificados por el SII y por la prueba pericial**, relativos a la presentación de declaraciones falsas o incompletas;

Y su suscripción **no fue espontánea**, sino que tuvo lugar luego de iniciada la fiscalización y posterior a la constatación de las diferencias tributarias por parte del órgano fiscalizador.

Que, en definitiva, el convenio de pago acompañado por la defensa **confirma la existencia de una deuda tributaria reconocida por la propia empresa**, aunque incumplida, y no constituye prueba suficiente para desvirtuar los elementos subjetivos del tipo penal tributario imputado. Por el contrario, al evidenciar un **reconocimiento parcial tardío de los hechos**, y un **incumplimiento reiterado de las obligaciones pactadas**, dicho documento **refuerza la conclusión de que la conducta del acusado no estuvo guiada por un ánimo de corrección espontánea**, sino por una estrategia de contención administrativa ante la ejecución fiscal inminente.

Que, en consecuencia, el tribunal **asigna valor probatorio limitado** al referido documento, en cuanto **no desvirtúa la existencia del perjuicio fiscal**, ni la configuración de las conductas típicas previstas en los incisos primero y segundo del artículo 97 N°4 del Código Tributario, especialmente cuando se contrasta con el conjunto de la prueba rendida en juicio.



Lo anterior, sin perjuicio del valor que se le asignará a la hora de resolver la procedencia de la atenuante alegada por la defensa del numeral séptimo del artículo 11 del Código Penal.

4.- Detalle de convenio de Pago, historia de convenio de pago y detalle de cuotas de convenio de pago, suscrito por VIALMIX LIMITADA con Tesorería General de La Republica con fecha 01.06.2017.

Que, según consta en dicho documento, el convenio tuvo por objeto **regularizar una deuda tributaria ascendente a más de 280 millones de pesos**, fraccionada en **18 cuotas mensuales**, siendo su activación inmediata tras la aceptación de la propuesta. Se establece como modalidad de pago una **cuota inicial** de \$47.347.240 y cuotas fijas posteriores de \$15.000.000.

Que, del historial del convenio incorporado al expediente, se constata que la empresa solo efectuó **el pago de la primera cuota**, vencida el 30 de junio de 2017, dejando **impagas las 17 cuotas restantes**, lo que derivó en la **caducidad del convenio el día 7 de octubre de 2017**, por acumulación de **dos cuotas consecutivas impagas**, conforme al proceso centralizado de la Tesorería. El documento también incluye el **detalle completo de las deudas tributarias incorporadas al convenio**, muchas de las cuales corresponden a los mismos períodos ya auditados por el Servicio de Impuestos Internos, y que dieron origen a la querella tributaria.

Llegándose a la misma conclusión por parte de este tribunal y ya expresada respecto del anterior convenio ya analizado.

Finalmente, se acompañaron:

5.- E-book completo e íntegro del expediente de Recurso de Protección ROL 3537-2017 de Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco, interpuesto por la Sociedad Constructora Vialmix Ltda. contra Tesorería Regional de Temuco.

HUBO UN EMBARGO por 109 MILLONES.

SE RECONOCE EL CONVENIO DE PAGO y EL EMBARGO

6.- E-book completo e íntegro del expediente de proceso Ejecutivo Civil del 1° Juzgado Civil de Temuco ROL C-860-2017, caratulado “Banco Santander Chile con Inostroza”

Cuaderno de apremio.

7.- E-book completo e íntegro del expediente de proceso Ejecutivo Civil del 2° Juzgado Civil de Temuco ROL C-622-2017, caratulado “Banco de Chile con Inostroza”.

Cuaderno de apremio.

Que, en cuanto a la prueba documental presentada por la defensa, consistente principalmente en certificados de deuda fiscal, convenios de pago suscritos con



la Tesorería General de la República, historial de cuotas, registros de movimientos tributarios y antecedentes de pagos parciales, este Tribunal ha procedido a su examen conforme a las reglas de la sana crítica, considerando su origen, contenido, contexto de incorporación y finalidad probatoria invocada por la parte imputada.

Que si bien los referidos documentos permiten verificar la existencia de diversos convenios de pago celebrados por la empresa Constructora Vialmix Limitada, así como ciertos registros de pagos parciales e incluso solicitudes de condonación administrativa de intereses o multas, lo cierto es que **en todos los casos dichos convenios resultaron caducados por incumplimiento**, ya sea por inobservancia del número de cuotas pactadas o por pagos incompletos, no extinguiéndose con ello las obligaciones tributarias que motivaron su origen.

Que, por su parte, los certificados de deuda fiscal y los registros extraídos desde el sitio web de la Tesorería General de la República, si bien reflejan el estado contable de las obligaciones tributarias del contribuyente, en ningún caso controvierten ni desmienten las **irregularidades tributarias estructurales** que fueron establecidas mediante prueba documental y testimonial rendida por el órgano acusador, en especial el informe de recopilación de antecedentes del SII, el peritaje contable del laboratorio de la PDI y el testimonio de la fiscalizadora tributaria.

Que, en efecto, dichas pruebas de cargo acreditaron de manera clara, precisa y coherente la existencia de **declaraciones mensuales del IVA que contenían subdeclaraciones dolosas del débito fiscal y aumentos indebidos del crédito fiscal**, las cuales provocaron un perjuicio fiscal efectivo, conforme al artículo 97 N°4 incisos primero y segundo del Código Tributario. La prueba de la defensa, en cambio, **no controvierte estos hechos**, sino que da cuenta de actuaciones posteriores, de carácter administrativo o parcial, que **no desvirtúan el dolo ni la configuración típica** de los delitos imputados.

Que, por lo tanto, este Tribunal concluye que la prueba documental de la defensa **no ha tenido la aptitud para exculpar al acusado Jorge Inostroza Cerda**, ni para **introducir una duda razonable** respecto de la efectiva ocurrencia de los hechos descritos en la acusación, ni sobre su participación en los mismos en calidad de autor.

VIGÉSIMO: Hechos acreditados y calificación jurídica.

Conforme al mérito de las pruebas rendidas y ya analizadas en las consideraciones precedentes, es posible afirmar que se han acreditado los siguientes hechos, conforme al marco fáctico entregado por las acusaciones presentadas por la Fiscalía y Servicio de Impuestos Internos:

“En Temuco, durante los periodos tributarios mensuales de febrero, marzo, junio, y diciembre de 2015; marzo y octubre de 2016, el imputado JORGE ANDRÉS INOSTROZA CERDA representando legalmente a la Sociedad Constructora VIALMIX Limitada RUT 76.240.113-4, presentó formularios N°



29, sobre declaración mensual y pago simultáneo de impuestos, de la Sociedad Constructora VIALMIX limitada maliciosamente falsos, al no incluir el impuesto débito fiscal IVA de las ventas efectuadas en dichos periodos, y que fueron registradas en los libros de venta, generando un perjuicio fiscal ascendiente a **\$96.116.576.-**

Específicamente, el querellado realizó ventas en los periodos indicados en el párrafo anterior, las que fueron registradas en el Libro de Compra y Venta de la Sociedad Constructora VIALMIX Limitada, por un monto total de \$184.837.138.- no obstante, en los formularios N° 29, sobre declaración mensual y pago simultaneo de impuestos, declaró **\$88.720.562.-**

De esta forma, **no declaró ni pagó el IVA Débito Fiscal correspondiente a dichas ventas, cuyo monto asciende a \$96.116.576.-**

Asimismo, durante 6 periodos comerciales mensuales correspondientes a junio, julio, agosto de 2015: enero, marzo y septiembre de 2016, el imputado JORGE ANDRÉS INOSTROZA CERDA declaró en los respectivos formularios N° 29, sobre declaración mensual y pago simultaneo de impuestos de la Sociedad Constructora VIALMIX Limitada, **créditos fiscales IVA superiores a los registrados en los Libros de Compra y Venta, aumentando de esta forma los Créditos Fiscales IVA que tenía derecho a hacer valer en relación a las cantidades que debía enterar en arcas fiscales, generando un perjuicio fiscal ascendiente a \$37.228.912.-**

A raíz de las maniobras dolosas ya descritas, el imputado JORGE ANDRÉS INOSTROZA CERDA, causó un perjuicio fiscal ascendiente a \$133.345.488.-, correspondiendo esto a **sub-declaración de débito fiscal a \$96.116.576.- y por sobre declaración de crédito fiscal a la suma de \$37.228.912”**

Que, conforme al mérito de la prueba rendida durante el juicio oral, en especial los antecedentes documentales incorporados por el Ministerio Público y el Servicio de Impuestos Internos, los informes técnicos emitidos por la fiscalizadora tributaria doña María Ester Alveal Guerrero, el peritaje contable del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, así como los testimonios rendidos por diversos intervinientes y peritos, esta judicatura tiene por establecidos los hechos antes descritos, los que han sido suficientemente acreditados conforme a las reglas de la sana crítica y permiten tener por configurados los elementos típicos de los delitos imputados.

Que ambas conductas —la **subdeclaración maliciosa del débito fiscal** y el **aumento indebido del crédito fiscal**— se encuentran expresamente sancionadas en el **artículo 97 N°4 del Código Tributario**. En particular, el **inciso primero** castiga al que **maliciosamente omite tributos que debe pagar, mediante la presentación de declaraciones incompletas o falsas, causando perjuicio fiscal**, mientras que el **inciso segundo** tipifica la conducta de quien **contribuye a una determinación errónea de impuestos mediante**



declaraciones falsas, aunque sin perjuicio fiscal efectivo, siempre que puedan inducir a error a la administración tributaria.

Que, en el caso de autos, las declaraciones presentadas por el imputado han generado un **perjuicio fiscal efectivo y determinado**, cuya existencia fue reconocida incluso mediante rectificaciones tributarias posteriores y confirmada por los organismos técnicos intervinientes. Además, ha quedado demostrada la **intervención dolosa** del acusado, en atención a su calidad de representante legal de la empresa, a la suscripción personal de las declaraciones, a su notificación formal por parte del SII respecto de las inconsistencias detectadas, y a su posterior suscripción de convenios de pago y rectificaciones voluntarias.

Que, en consecuencia, y conforme a lo anteriormente razonado, esta judicatura tiene por **configurados todos los elementos típicos, objetivos y subjetivos**, exigidos por la norma penal tributaria aplicable, para estimar acreditada la comisión de **los delitos tributarios previstos en los incisos primero y segundo del artículo 97 N°4 del Código Tributario**, en calidad de **autor directo** por parte del acusado **JORGE ANDRÉS INOSTROZA CERDA**, según lo dispuesto en el artículo 15 N°1 del Código Penal.

Que, sin perjuicio de haber quedado acreditados en autos, más allá de toda duda razonable, los hechos que configuran tanto la **subdeclaración maliciosa del débito fiscal** como el **aumento indebido del crédito fiscal** por parte del acusado **JORGE ANDRÉS INOSTROZA CERDA**, en su calidad de representante legal de la empresa **Constructora Vialmix Limitada**, y sin desconocer que ambas conductas se encuentran, en abstracto, descritas como infracciones penales en los **incisos primero y segundo del N°4 del artículo 97 del Código Tributario**, este tribunal estima que **la configuración típica aplicable al caso concreto debe ser una sola**, en atención a principios que informan el derecho penal moderno y el sistema de garantías propio del proceso penal acusatorio.

Que, en efecto, compartiendo parcialmente la argumentación planteada por la defensa en este punto, y conforme al principio de legalidad penal en su dimensión **pro-persona o pro-reo**, este tribunal considera que entre ambas disposiciones penales —si bien formalmente autónomas— **existe una relación de progresión sistemática y axiológica** entre los tipos penales del inciso primero y del inciso segundo del N°4 del artículo 97. Que esta interpretación encuentra respaldo en el **principio de subsidiariedad penal**, que implica que, tratándose de normas que tutelan el mismo bien jurídico y cuya aplicación concurrente conduciría a una doble valoración del mismo hecho o propósito delictivo, debe privilegiarse **la figura típica que exprese el grado más avanzado o grave de infracción**, descartando con ello la posibilidad de punir separadamente hechos que se insertan dentro de **una única secuencia delictiva**



unitaria, aun cuando se manifiesten mediante diversos mecanismos comisivos (omisión de débito o incremento de crédito).

En jurisprudencia, esta situación ha sido objeto de debate también, citando al efecto lo resuelto en causa ROL 28754-2014 del 08 de julio de 2015, en la que revisándose la decisión del tribunal aquo, se decidió que “ En el caso de autos, los jueces del fondo desecharon la pretensión del querellante en el sentido de encuadrar los hechos tanto en la figura del inciso 1° como del inciso 2° del artículo 97 N° 4 del Código Tributario, teniendo para ello en consideración el principio de especialidad y por abarcar la hipótesis del inciso 2° un comportamiento antijurídico específico, cuyo sujeto activo es el propio contribuyente, por lo que sólo cabe entender aplicable esta última disposición, a lo cual se sumó el hecho que la doble punición contraría el principio fundamental *non bis in idem*. De esta manera, al proceder en la forma que lo hicieron no han violentado la ley, sino, por el contrario, han dado correcta aplicación a los dos principios descritos, de especialidad y de *non bis in idem*, que impiden sancionar dos veces un mismo hecho específico, por lo que no es posible admitir el reproche que se formula teniendo en consideración que, acertadamente, se ha concluido que el fin último del contribuyente fue la disminución de la carga tributaria tanto por concepto de Impuesto a las Ventas y Servicios como del Impuesto a la Renta en el período revisado, lo que determina la corrección de la solución jurídica dada por los jueces del fondo (considerando 4° de la sentencia de la Corte Suprema).”

En dicho caso, si bien se llega a un resultado similar al que en el presente caso se propone, utilizaron la vía o formula de “*lex specialis derogat legi generali*”, es decir se entendió que existía un concurso aparente de leyes penales por especialidad, en el que la ley especial repite o contiene los elementos o requisitos de la ley general, pero le agrega otros que la tornan particular. Cuestión que observable en un fino análisis solo en cuanto a las particularidades de cada delito en juzgamiento, que tienen algunas diferencias en los verbos rectores respectivos. De lo cual aparece, como forma de resolución adecuada al problema el uso de la subsidiaridad, todos estos tipos pueden operar de forma autónoma, pero en el caso que un mismo sujeto los realice, la solución más plausible parece ser entenderlos en relación de subsidiariedad progresiva en el cual el inc. 3° desplaza al inc. 2°, y este a su vez desplaza al inc. 1°.

En doctrina, se ha señalado que los tres primeros incisos del artículo 97 N°4, constituyen enunciados legales ordenados según la gravedad del efecto económico asociado a las infracciones de los deberes de omitir o de hacer en ellos formulados de menor a mayor; se ha estimado que podríamos estar frente a un concurso aparente que se resuelve por consunción⁴.

Que, por consiguiente, y sin perjuicio de reconocer la existencia material de ambas formas de afectación tributaria en los hechos acreditados, este tribunal

⁴ ANANIAS ZAROR, IGNACIO, “Derecho Penal Económico Chileno”,



estima que **la conducta en su conjunto se subsume adecuadamente en el tipo penal contenido en el inciso segundo del artículo 97 N°4 del Código Tributario**, tipo que **absorbe normativamente** la conducta prevista en el inciso primero por representar un **grado más intenso de afectación del mismo bien jurídico** y permitir una respuesta penal suficiente y proporcional.

Que esta decisión, además de ajustarse a los principios de **proporcionalidad, legalidad, especialidad y prohibición del doble castigo (non bis in idem)**, evita una fragmentación artificiosa del ilícito y permite **preservar el principio de culpabilidad**, al reconocer que las conductas desplegadas por el acusado obedecen a un **único plan de acción delictivo** tendiente a reducir ilegítimamente la carga tributaria de la empresa que administraba, mediante diversos mecanismos tributarios, pero con un mismo dolo unitario.

En consecuencia, el tribunal resolverá la presente causa conforme a esta calificación jurídica única, sin aplicar la figura prevista en el inciso primero del N°4 del artículo 97 como tipo adicional.

VIGÉSIMO PRIMERO: Configuración de la reiteración del delito.

Que la defensa ha sostenido que no concurriría la circunstancia de **reiteración de delitos**, argumentando que el **artículo 112 del Código Tributario** exige, para tales efectos, la existencia de **infracciones cometidas en dos ejercicios comerciales completos**, y que la sola distribución de las declaraciones cuestionadas en distintos años calendario **no sería suficiente** para configurar dicha figura.

Que tal interpretación no puede ser compartida por este Tribunal, desde que el concepto de “reiteración” en sede penal tributaria no depende exclusivamente de la definición contenida en el artículo 112 del Código Tributario; debiendo evaluarse la concurrencia de múltiples hechos típicos conforme a las reglas del Código Penal y el Código Procesal Penal, particularmente respecto del principio de unidad de acción o pluralidad delictiva.

Que en el caso concreto ha quedado acreditado que el acusado **presentó declaraciones tributarias falsas o incompletas en diversos periodos tributarios mensuales**, distribuidos en los años tributarios 2015 y 2016, esto es, en más de un ejercicio comercial anual, correspondientes a distintos meses y con operaciones autónomas, las que generaron perjuicios diferenciados y fueron ejecutadas mediante actos contables y declaraciones independientes, lo que permite afirmar que nos encontramos ante **una pluralidad de hechos punibles autónomos**, ejecutados en forma **reiterada y no meramente continuada**, pues no derivan de una única resolución criminal, sino de una **decisión renovada y voluntaria de eludir el cumplimiento tributario en cada periodo mensual respectivo**.



Que, por tanto, la reiteración de delitos en este caso **no se funda en la mera separación temporal entre ejercicios comerciales**, sino en la **comprobación de múltiples actos típicos, dolosos y consumados**, que satisfacen los presupuestos establecidos por la jurisprudencia y doctrina penal general sobre la **pluralidad de delitos homogéneos**, por lo que se **rechaza la alegación de la defensa** en este punto, y se declara **concurrente la reiteración de delitos tributarios** imputados al acusado.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Rechazo de las demás alegaciones de la defensa.

Que, sin perjuicio de haberse hecho cargo el tribunal de varios de los temas debatidos por la defensa a lo largo de este primer apartado acusatorio, debiendo estarse a lo dicho desde el considerando décimo tercero, se reafirma lo siguiente:

Respecto a la alegación de que su representado **no actuó con dolo**:

Conforme a los principios generales del derecho penal, el dolo, en cuanto elemento subjetivo del tipo, consistente en el conocimiento y voluntad de realizar el hecho descrito en la ley penal, no requiere una prueba directa para su acreditación, sino que, dada su naturaleza interna o psíquica, puede y debe ser inferido por el juzgador a través de signos externos, objetivos y verificables, conforme a las reglas de la sana crítica.

Que esta posibilidad de acreditación mediante prueba indiciaria cobra especial relevancia en materia de delitos tributarios, en que la conducta típica se manifiesta generalmente a través de actos contables o declaraciones administrativas, y en los que la intención dolosa del agente no suele expresarse de modo abierto o explícito, sino que debe ser deducida de la totalidad de las circunstancias del caso, tales como la magnitud de las cifras involucradas, la reiteración de las inconsistencias, la experiencia del imputado, su rol dentro de la empresa y el patrón sistemático de incumplimiento de las obligaciones fiscales.

Que, en el caso concreto, este tribunal ha constatado que el acusado, en su calidad de representante legal de la empresa Constructora Vialmix Limitada, presentó declaraciones tributarias con omisiones sustanciales en los débitos fiscales y aumentos injustificados de créditos fiscales, en múltiples períodos consecutivos, afectando con ello el correcto cálculo del impuesto al valor agregado (IVA), lo que generó un perjuicio fiscal cuantificado en más de 130 millones de pesos.

Que la entidad de las operaciones omitidas, la reiteración de la conducta en diversos períodos tributarios, la ausencia de respaldo documental en los libros oficiales, el hecho de que las diferencias fueron advertidas por el Servicio de Impuestos Internos y posteriormente rectificadas por el propio acusado, y la naturaleza sistemática de las inconsistencias detectadas, no pueden ser



razonablemente atribuidas a simples errores de cálculo, negligencia contable ni desconocimiento técnico, menos aun tratándose de un contribuyente representado por un profesional con experiencia en la materia y que contaba con asesoría contable.

Que, en consecuencia, este tribunal estima que existen suficientes indicios objetivos, plurales, graves y concordantes que permiten concluir, conforme a un estándar de convicción más allá de toda duda razonable, que el acusado actuó con dolo directo, con conocimiento y voluntad de presentar declaraciones tributarias falsas o incompletas, disminuyendo con ello maliciosamente la carga impositiva que correspondía a su representada, configurando así el elemento subjetivo exigido por el tipo penal previsto en el inciso segundo del artículo 97 N°4 del Código Tributario.

Sobre la tipicidad y el perjuicio fiscal:

Que la defensa ha sostenido como alegación principal que, a diferencia de lo sostenido por los acusadores, los delitos contemplados en el artículo 97 N°4 del Código Tributario **no serían de mera actividad**, pues requerirían para su configuración no solo la presentación de una declaración falsa o incompleta, sino también la **verificación de un perjuicio fiscal determinado y cuantificable**, siendo este un elemento estructural del tipo penal.

Que, en relación con dicha alegación, corresponde precisar —conforme a una interpretación sistemática de la norma— que **el artículo 97 N°4 contiene dos tipos penales autónomos**: el primero, ubicado en su inciso 1°, sanciona al que “**maliciosamente omite tributos que debe pagar mediante declaraciones incompletas o falsas, causando perjuicio fiscal**”, mientras que el segundo, contenido en el inciso 2°, sanciona **la misma conducta de presentar declaraciones incompletas o falsas, pero sin que se produzca un perjuicio efectivo**, bastando que la conducta **tenga aptitud para inducir a una determinación errónea del tributo o autoliquidación inferior**.

Que, por tanto, se trata de **tipos penales distintos**, siendo correcto concluir —como lo hace la defensa— que el inciso primero exige **la existencia de un perjuicio fiscal concreto**, mientras que **el segundo no lo requiere como elemento típico**, bastando en este último caso con la **potencialidad lesiva de la conducta**, la cual se configura incluso si el error inducido no llega a materializarse en detrimento patrimonial efectivo.

Que, sin embargo, y más allá de esta distinción conceptual que el tribunal acoge como jurídicamente válida, lo cierto es que **en el presente caso sí ha quedado plenamente acreditado un perjuicio fiscal efectivo y determinado**, tanto respecto de la subdeclaración del débito fiscal como del aumento indebido del crédito fiscal, ascendiendo dicho perjuicio a la suma total de **\$133.345.488**, distribuidos en **\$96.116.576 por concepto de débito fiscal no declarado** y **\$37.228.912 por crédito fiscal sobre declarado**, cifras obtenidas a partir de la revisión contable efectuada por la fiscalizadora del SII, ratificadas por el



peritaje contable del Laboratorio de Criminalística de la PDI y reconocidas implícitamente por el propio acusado mediante la suscripción de declaraciones rectificatorias.

Que, en consecuencia, aun cuando se resolviera subsumir la conducta en el tipo penal del inciso primero —conforme al análisis de subsidiariedad y progresión típico-valorativa realizado en otros fundamentos—, lo cierto es que **la existencia del perjuicio fiscal efectivo ha sido debidamente acreditada en juicio**, satisfaciéndose con ello también los requerimientos más exigentes del tipo penal, lo que **refuerza la gravedad del hecho** y valida la calificación penal efectuada por este tribunal.

Una cosa muy diferente es el aumento dinámico de la cifra asentada, pues debe tenerse en consideración el efecto de la reajustabilidad, intereses y multas, que innegablemente alterarían el monto específico, por lo que se trabajará, como se ha declarado ya, con el monto inicial resultante de la fiscalización realizada, pues a pesar de los abonos posteriores, la cifra actual supera con creces el perjuicio señalado inclusive los mínimos pagos realizados.

Actuación posterior del imputado.

Que la **actuación posterior del acusado Jorge Andrés Inostroza Cerda**, consistente en la presentación de **declaraciones rectificatorias** y en la suscripción de **convenios de pago con la Tesorería General de la República**, **no tiene el efecto de excluir el dolo exigido por el tipo penal**, por cuanto dichas conductas fueron realizadas **una vez iniciadas las fiscalizaciones y con pleno conocimiento de las inconsistencias detectadas por el SII**, y no constituyen manifestaciones espontáneas de corrección tributaria. Por el contrario, tales actuaciones, lejos de desvirtuar el elemento subjetivo del delito, **refuerzan la conclusión de que el imputado era plenamente consciente de las irregularidades previamente cometidas**, evidenciando así su voluntad de eludir el cumplimiento íntegro de sus obligaciones tributarias.

II. ARGUMENTOS RESPECTO DE LA ACUSACIÓN POR FRAUDE AL FISCO.

VIGÉSIMO TERCERO: Tipo penal invocado análisis legal y doctrinal.

El delito de fraude al fisco se encuentra regulado en el artículo 239 del Código Penal, que establece que *“El empleado público que en las operaciones en que interviniere por razón de su cargo, defraudare o consintiere que se defraude al Estado, a las municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o de beneficencia, sea originándoles pérdida o privándoles de un*



lucro legítimo, incurrirá en la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo.”

Se sanciona una especial forma de fraude por engaño, en que el autor es un empleado público y la víctima, el Fisco, representado por las instituciones que la ley señala, parecer que corresponde con el de nuestra doctrina y jurisprudencia dominantes (*Künsemüller*, “Estafa”, 65, citando, además, las SSCS 16.4.2015 y 8.10.2015). Puesto que en este caso el empleado público utiliza un ardid para obtener la disposición de fondos a su favor o de un tercero, no puede cometer este delito el empleado que dispone o se encuentra “a cargo” de los fondos en cuestión, sino otro que los obtiene de éste, quien sólo podría responder por las figuras de los arts. 233 a 235, salvo en el caso del fraude “indirecto”. Luego, se trata de un delito que “constituye una estafa que se produce dentro de la administración” (*Rodríguez C. y Ossandón*, Función pública, 416). Esta será generalmente triangular: un empleado engaña a un empleado para que disponga por la administración (la víctima), cuyo patrimonio es el afectado (*Salas D.*, Defraudación, 31). Por ello exige para su consumación el engaño y también el perjuicio propio de la estafa, aunque tal engaño no necesariamente debe constituir una acabada *mise en scène* (SCS 18.4.1966, RDJ 63, 84; SCS).⁵

No obstante, a pesar de la literalidad del texto y la necesidad de distinguirla de los casos de apropiación o sustracción de los arts. 233 a 235, para darle una interpretación que guarde una debida correspondencia y armonía, existe hoy en día una importante “confusión” en la doctrina acerca del alcance que haya de dársele a la figura que afecta también a la jurisprudencia (*Mathei y Rojas*, 139). En efecto, algunos aceptan extender la voz defraudación a la producción de perjuicio por incumplimiento de los deberes funcionarios o con abuso de confianza (*Etcheberry DP IV*, 247 y *Urrejola*, “Incumplimiento”, 3, por una parte; *Guzmán D.*, Estudios, 407, por la otra). Y también se afirma que se trataría de un delito de administración desleal (*Hernández B.*, “Administración desleal”, 236 y *Mañalich*, “Malversación”, 200), concepción muy apartada a la histórica de la figura y que obliga a estimar que los administradores de fondos públicos no cometerían peculado, sino esta figura, bastante privilegiada a su respecto.

En cuanto al perjuicio originado al fisco, éste puede consistir en pérdidas directas o en la privación de un lucro legítimo o cesante (SCS 9.11.1960, RDJ 57, 239). Y se entiende que un pago improcedente (“sobresueldos”, “sobrepagos”, etc.) puede calificarse como “pérdida” o “privación de lucro legítimo”, en la medida que se realice mediante una “triangulación”, una licitación “arreglada” u otros mecanismos engañosos similares (SCS 28.6.2016, Rol 25378-14). Alguna jurisprudencia exige también el enriquecimiento

⁵ Politoff, Sergio; Matus, Jean Pierre y Ramírez, María Cecilia. Lecciones de Derecho Penal Chileno. Parte Especial. Segunda ed. actualizada. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, p. 308-309.



efectivo del defraudador (SCS 7.11.1951, RDJ 48, 266), lo que no parece necesario para la consumación del delito.⁶

En todo caso, parece esta figura exigir **dolo directo** y **no se admite su comisión en forma culpable**, pues el descuido, por más dañino que sea al interés público, no es una forma de defraudar que se encuentre legalmente sancionada, ni aún parece ser conceptualmente posible. Respecto de la consumación, por la característica de fraude que tiene este delito parece posible la tentativa y aún la frustración.

Tratándose de un **delito especial propio**, el tercero partícipe en este hecho, colaborando con el funcionario o aprovechándose de su consentimiento, debiera ser responsable tanto a título de estafa común del art. 473, de la calificada del 468, o de la especial de art. 470 N.º 8, según el medio engañoso empleado o la clase de provecho que se obtenga (remuneraciones, subvenciones, etc.), respectivamente. Ello sin perjuicio de alguna jurisprudencia minoritaria al respecto.

Estos elementos típicos se tendrán a la vista al momento del análisis probatorio para expresión si es posible o no afirmar su configuración.

VIGÉSIMO CUARTO: Análisis de prueba testimonial. Funcionarios fiscalizadores.

En primer término, se presentaron los relatos de **ALEJANDRO NAVARRETE AÑASCO**.

Que este testimonio ha resultado de especial relevancia la declaración prestada por este abogado y ex fiscal instructor de la Contraloría Regional de La Araucanía, quien en el marco del sumario administrativo derivado del **Informe Final N°44 de 2017**, sustanciado a propósito de irregularidades en contratos de conservación de caminos de acceso a comunidades indígenas ejecutados por la Dirección de Vialidad, tuvo a su cargo la formulación y resolución de cargos administrativos en contra del funcionario **Jaime Silva Poblete**, inspector fiscal de las obras investigadas.

Que el testigo refirió que, tras un análisis exhaustivo del informe técnico y de los antecedentes recabados durante la tramitación del sumario, formuló **nueve cargos administrativos** en contra del referido funcionario, los que fueron **mantenidos en su totalidad** luego de desestimar los descargos presentados, los que calificó como **vagos y carentes de respaldo técnico**, especialmente en lo que respecta a la justificación de pagos por partidas de obra **no ejecutadas o ejecutadas parcialmente**.

⁶ Politoff, Sergio; Matus, Jean Pierre y Ramírez, María Cecilia. Lecciones de Derecho Penal Chileno. Parte Especial. Segunda ed. actualizada. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, p. 309.



Que, en particular, a requerimiento del Consejo de Defensa del Estado, el testigo confirmó que en sus descargos **el funcionario inculcado reconoció haber autorizado pagos “en verde”**, es decir, sin ejecución material de las obras, bajo el pretexto del cumplimiento de supuestas “metas institucionales”, sin que existiera respaldo documental ni técnico que justificara dichos desembolsos, lo que fue considerado por el testigo como un proceder incompatible con los deberes del cargo y expresivo, al menos, de **una negligencia supina en el ejercicio de la función pública**, al permitir el egreso de recursos fiscales sin verificación efectiva de cumplimiento contractual.

Que el testigo explicó que estas **irregularidades administrativas fueron observadas por la Contraloría mediante fiscalización en terreno** durante el año 2017, dando origen al informe final y posteriormente al sumario, el cual culminó con la emisión de una **vista fiscal que propuso la sanción de destitución** del inspector fiscal, la que —según indicó— fue efectivamente aplicada por la autoridad correspondiente.

1. Respecto del contrato correspondiente a Vilcún, el testigo refirió:

Irregularidad principal: ni siquiera existía un libro de obras. Esta omisión fue calificada como grave, ya que el libro de obras constituye el instrumento técnico de control donde deben consignarse los avances, instrucciones y observaciones en la ejecución del contrato. La **ausencia del libro de obras** evidencia, a juicio del testigo, **una falla absoluta en el deber de supervisión y fiscalización técnica** que recaía sobre el inspector fiscal, en este caso, el funcionario Jaime Silva Poblete.

2. Contrato correspondiente a Lonquimay:

Irregularidades detectadas: En este contrato se **pagaron partidas que no fueron ejecutadas**, o bien que **fueron ejecutadas parcialmente**, sin que ello se reflejara en el control ni se observara en los procedimientos formales.

El testigo indicó que en algunos casos **no hubo control alguno del inspector fiscal respecto de la ejecución de las partidas**, y que **no se verificó la existencia de comunicación efectiva con la Dirección Regional ni mecanismos de autocontrol**, como era su deber funcional.

Destacó que **el propio inculcado reconoció en sus descargos haber autorizado “pagos en verde”**, es decir, pagos por trabajos no ejecutados, bajo el pretexto del cumplimiento de “metas institucionales”, sin proporcionar explicación técnica alguna ni respaldo documental.

Que el testimonio rendido por el señor Navarrete, por su coherencia interna, concordancia con la documentación administrativa acompañada al juicio, y su condición de **fiscal instructor imparcial** con conocimiento directo de los hechos, permite tener por suficientemente acreditado que **el funcionario público en cuestión consintió y autorizó pagos injustificados con cargo a fondos públicos**, en favor de un contratista, sin que existiera ejecución efectiva de las obras.



A su turno se presentó al testigo: **JULIO CÉSAR SOTO BRUNA**, quien intervino en calidad de supervisor en la elaboración del Informe N° 44 del año 2017 de la Contraloría Regional de La Araucanía, el cual tuvo su origen en denuncias de comunidades indígenas beneficiarias de contratos para la conservación de caminos rurales en las comunas de Vilcún y Lonquimay, ejecutados por la empresa CSP Limitada en el marco del Programa de Desarrollo Indígena (PDI) de los años 2014 y 2015.

Que, de acuerdo con el testigo, se practicó una investigación técnica que incluyó el análisis documental de los contratos, estados de pago, libros de obras, informes mensuales y antecedentes técnicos exigibles conforme al reglamento de obras públicas (Decreto 75 de 2004), así como visitas a terreno realizadas a fines del año 2016, junto a su supervisor, en las cuales se levantó evidencia fotográfica georreferenciada y se constataron diversas anomalías. En particular, se verificó que en ambos contratos (Vilcún y Lonquimay) se habían pagado partidas por conceptos de obras tales como terraplenes, carpetas granulares, fosos, contra fosos, tuberías de polietileno, delineadores verticales y otras estructuras complementarias, que no fueron ejecutadas total o parcialmente en los caminos fiscalizados.

Que las observaciones técnicas realizadas se clasificaron en tres acápite en el referido informe: (i) control interno, referido a falencias estructurales como la falta de registros en el libro de obras, ausencia de informes mensuales y ausencia de levantamiento topográfico de línea base; (ii) examen de la materia investigada, donde se cuestionó el incumplimiento de especificaciones técnicas, pagos por obras inexistentes y modificaciones contractuales sin fundamentación; y (iii) examen de cuentas, en que se detallaron los montos pagados por obras no ejecutadas, estableciéndose un perjuicio fiscal estimado en \$14.303.474 en el contrato de Vilcún y \$16.736.010 en el de Lonquimay, sin considerar el IVA, montos que fueron debidamente calculados por Contraloría con base en antecedentes contractuales y constataciones de terreno, conforme a las tablas incluidas en el anexo del informe.

Que la gravedad de las anomalías constatadas por el testigo se manifiesta especialmente en el caso del contrato de Lonquimay, en que directamente no se encontró ejecución de las obras comprometidas (0% de avance en partidas esenciales), situación corroborada con evidencia fotográfica y certificación del estado de caminos sin terraplenes ni carpetas de rodadura. En cuanto al contrato de Vilcún, si bien algunas obras fueron ejecutadas, se detectó una significativa diferencia en los espesores pagados versus los ejecutados, lo que motivó la intervención del laboratorio de vialidad, cuyos informes también fueron incorporados como anexo probatorio.

Que el testimonio del perito técnico permite afirmar que los pagos realizados por el servicio mandante no se correspondieron con la efectiva ejecución de las obras pactadas, configurándose una afectación directa al patrimonio fiscal, derivada de la acreditada falta de ejecución de partidas y del incumplimiento de



deberes de control por parte del inspector fiscal. Estos antecedentes, corroborados por prueba documental y fotográfica, resultan suficientes para tener por concurrentes los elementos objetivos del tipo penal de fraude al fisco, en tanto se causó un perjuicio patrimonial al erario público mediante la presentación de antecedentes contractuales y estados de pago que ocultaban el real estado de ejecución de las obras.

Que, según lo relatado por el testigo y conforme a los documentos y **anexos incorporados en juicio**, se constataron al menos las siguientes **seis irregularidades relevantes**, acreditadas mediante inspecciones presenciales a fines del año 2016, evidencia fotográfica georreferenciada y revisión documental:

1. **Partidas pagadas no ejecutadas (Lonquimay):** Se constató la ausencia total de **carpetas granulares, terraplenes y fosos** en distintos caminos del contrato correspondiente a la comuna de **Lonquimay**, pese a que fueron íntegramente **pagadas por el Estado**. Esto se documenta gráficamente en las **fotografías N°1, 2, 3, 19, 21, 22 y 23 del Anexo N°1**, donde se observa el terreno natural sin obras. La **partida “carpeta granular”**, por ejemplo, fue pagada al 100% en el **camino N°1**, pero no existía en terreno.

2. **Ausencia de estructuras especificadas (Vilcún):** En el contrato de **Vilcún**, se verificó la **falta de delineadores verticales y señales laterales** que habían sido contratadas y pagadas. Esto fue acreditado en la **fotografía N°7 (camino N°4)**, mostrando la inexistencia de dichas estructuras, respaldadas en el **cuadro del Anexo N°4**, que calcula un perjuicio fiscal asociado a estas omisiones.

3. **Instalación incompleta de tuberías (Vilcún):** En varios caminos del contrato de Vilcún se pagaron **tuberías de polietileno de alta densidad (HDPE)** de distintos diámetros, pero sólo fueron parcialmente instaladas o directamente no se encontraron. La **fotografía N°8 (camino N°3)** muestra 35 metros instalados de los 49 contratados; la **fotografía N°10 (camino N°1)** acredita que no se instaló ningún metro de los 28 pagados. Estas diferencias están calculadas en el **Anexo N°4**, que estima los montos exactos no ejecutados.

4. **Espesores insuficientes de capas estructurales (Vilcún):** A través del **certificado N°318 del Laboratorio de Vialidad**, se acreditó que los espesores de terraplenes y carpetas granulares eran notoriamente inferiores a los contratados. Por ejemplo, en el **camino N°1**, se contrató un espesor total de 20 cm de carpeta, pero solo se verificaron **9 cm**, conforme al **Cuadro N°3, pág. 17 del informe principal**, generando diferencias promedio de entre **8 y 23 cm** por tramo.

5. **Material abandonado y no instalado (Lonquimay):** En **fotografías N°2, 3 y 4**, se exhibe la existencia de **material granular y tubos HDPE abandonados al costado de caminos**, sin haber sido incorporados a las obras. Estas fotografías, georreferenciadas en los anexos, demuestran visualmente que



las obras fueron **pagadas**, pero **no ejecutadas ni incorporadas estructuralmente**, constituyendo un claro perjuicio fiscal.

6. **Modificación injustificada del inspector fiscal:** Se identificó que, sin constancia de causa o necesidad técnica, se modificó el **inspector fiscal designado** en ambos contratos, sin sustento documentado. Esta observación, contenida en el **acápito “examen de la materia investigada”** del informe, constituye una omisión grave, pues dicho funcionario era el **responsable directo del control de ejecución y aplicación de multas**, muchas de las cuales tampoco fueron exigidas, generando otro aspecto del perjuicio fiscal.

Que todos estos antecedentes, respaldados por los **anexos técnicos del Informe N°44/2017**

Que, finalmente, cabe dejar constancia que el testigo fue claro en señalar que la responsabilidad del control de la correcta ejecución y medición de las obras recaía en el **inspector fiscal, quien no exigió los informes ni documentos técnicos correspondientes, y tampoco aplicó las multas legales derivadas de esos incumplimientos, permitiendo de esta forma que se realizaran pagos íntegros por obras inexistentes o deficientemente ejecutadas, lo cual constituye una actuación funcional dolosa o al menos gravemente negligente**, típica del ilícito penal en análisis.

Este tribunal asigna **pleno valor probatorio** a las declaraciones prestadas por los testigos antes individualizados, en atención a su **idoneidad profesional**, la **claridad, precisión y coherencia** de sus exposiciones, así como por la **congruencia de sus dichos con la abundante prueba documental acompañada en juicio**, especialmente el **Informe Final N°44 de 2017** y sus respectivos **anexos técnicos y fotográficos**.

Soto Bruna, constructor civil y entonces fiscalizador de la Unidad de Control Externo de la Contraloría Regional de La Araucanía, relató con detalle técnico y metodológico las labores realizadas en terreno en los contratos correspondientes a los caminos indígenas de **Vilcún y Lonquimay**, entregando antecedentes precisos sobre **partidas pagadas y no ejecutadas, incumplimientos contractuales, y ausencias de documentación fundamental** para el control de ejecución, tales como **libros de obra, informes mensuales y levantamientos topográficos**, aportando elementos claves sobre el detrimento económico al patrimonio público, los cuales se encuentran directa y gráficamente respaldados en los **anexos N°1, 2, 3 y 4 del informe citado**.

Asimismo, el testimonio de don **Alejandro Navarrete Añazco**, instructor del sumario administrativo derivado del mismo informe, reviste particular relevancia en cuanto da cuenta de la **responsabilidad administrativa atribuida al entonces inspector fiscal Jaime Silva Poblete**, a quien formuló **nueve cargos**, todos los cuales fueron mantenidos en la **vista fiscal**. Su relato permite establecer que tales conductas no solo implicaron negligencia funcional, sino que tuvieron como consecuencia directa la **propuesta de**



destitución del funcionario por parte de la Contraloría, sanción que, según su conocimiento, fue finalmente aplicada.

Ambos testimonios se entregaron de manera precisa, sin contradicciones relevantes, y fueron prestados por personas **sin interés directo en el resultado del juicio**, revestidas de **competencia técnica** en sus respectivos ámbitos. La **consistencia interna de sus declaraciones**, su **corroboración recíproca**, y la **concordancia con la prueba documental oficial**, permiten al tribunal otorgarles un **alto valor probatorio**.

VIGÉSIMO QUINTO: Análisis de prueba testimonial. Funcionarios Policiales.

Que, luego de los funcionarios fiscalizadores, se presentó prueba policial, comenzando con la declaración de la testigo **Cinthia Vargas Vidal**, funcionaria de la Policía de Investigaciones de Chile, quien se desempeñó como oficial investigadora de la Brigada Anticorrupción Metropolitana en el marco de una investigación instruida por la Fiscalía de Alta Complejidad de Temuco, relativa a eventuales delitos cometidos en la ejecución de dos contratos de conservación de caminos indígenas en las comunas de **Vilcún** y **Lonquimay**, adjudicados a la empresa **CSP Limitada** bajo los códigos **SAFI 219920** y **SAFI 233248**, respectivamente.

Que la testigo dio cuenta con **precisión, conocimiento técnico y claridad expositiva** de una serie de diligencias investigativas efectuadas durante el año 2019, entre las cuales se incluyó el **análisis de antecedentes documentales, contractuales y técnicos** provenientes tanto de la **Dirección de Vialidad** como de la **Contraloría General de la República**, específicamente del **Informe Final N°44 de 2017**, y de la revisión detallada de los **estados de pago** correspondientes a los contratos cuestionados.

Que conforme al análisis realizado por la testigo, se constataron **tres tipos de irregularidades relevantes**: (1) la existencia de **partidas pagadas y no ejecutadas**, (2) la ejecución de **obras con especificaciones técnicas distintas o de menor calidad**, particularmente en lo referido a la **carpeta granular de rodadura** y la **ausencia de tubos corrugados de polietileno**, y (3) la **inaplicación injustificada de multas** por parte del **inspector fiscal Jaime Silva Poblete**, funcionario que suscribió la mayor parte de los estados de pago, sustituyendo a **Óscar Mora Arriagada**, quien fue removido tras la detección de vínculos extracontractuales con el empresario **Jorge Andrés Inostroza Cerda**, consistente en la **venta indirecta de un camión** a través de un familiar. Que la testigo, en su relato, identificó con respaldo documental, los pagos efectuados en cada estado de pago y los correlativos incumplimientos verificados, destacando que, por ejemplo, en el **Estado de Pago N°3** del contrato **SAFI 219920**, se pagaron más de **73 millones de pesos por carpeta granular**, sin que se verificara su ejecución conforme a lo contratado.



Asimismo, se pagaron partidas de tubos corrugados —ítem 5619 letras a, b y d— por sumas superiores a los **6 millones de pesos**, sin que dichas obras fueran encontradas ni ejecutadas, lo que se confirmó por **fotografías contenidas en la carpeta investigativa**.

Que también se indicó que en el contrato correspondiente a **Lonquimay (SAFI 233248)**, se evidenció la inexistencia de obras vinculadas a **terraplenes, fosos y carpetas granulares**, generando un **perjuicio fiscal aproximado de \$161.000.000**, igualmente en favor de la empresa **CSP Ltda.**, controlada por el mismo imputado.

Se identificó por la testigo:

Pago de partidas no ejecutadas: Se constató documentalmente que múltiples ítems, tales como **tubos corrugados de polietileno de alta densidad** (ítem 5619 letras a, b y d), fueron pagados íntegramente sin haberse instalado en los caminos fiscalizados. Esta omisión fue corroborada mediante fotografías obrantes en la carpeta investigativa y respaldadas por los anexos técnicos del Informe N°44 de Contraloría. Por ejemplo, en el **Estado de Pago N°1** del contrato de Vilcún, se detectaron pagos por más de \$9.800.000 por tales tubos, los que no fueron encontrados en terreno.

Ejecución de obras con especificaciones técnicas inferiores a las contratadas: La Policía identificó, mediante revisión de **certificados laboratoristas** y declaraciones técnicas, que las **carpetas granulares** en varios caminos fueron construidas con espesores menores a los especificados en las bases de licitación. En el **Estado de Pago N°3**, por ejemplo, se pagaron más de **\$73.000.000 por carpeta granular**, pese a que los análisis físicos demostraron menor espesor del proyectado, según se verificó en los certificados contenidos en el anexo correspondiente del Informe N°44.

Inaplicación de multas al contratista: Se constató que la Dirección de Vialidad, y específicamente el inspector fiscal **Jaime Silva Poblete**, no aplicó las multas que correspondían por incumplimientos contractuales tales como la **no entrega de informes mensuales, ausencia de libro de obras o falta de levantamiento topográfico**, lo cual fue consignado expresamente por la Contraloría y ratificado por la PDI en base al análisis del expediente administrativo.

Pagos reiterados en estados de avance con escasa ejecución física: Se verificó que, a pesar de que el **avance financiero declarado** en los estados de pago superaba el 90 %, el **avance físico efectivo** de las obras era sustancialmente inferior, conforme lo constatado por la falta de ejecución material de las partidas contratadas. Tal situación fue especialmente evidente en los estados de pago **N°2 y N°3 del contrato 219920**, firmados por el inspector Silva Poblete.

Falta de documentación técnica esencial: Se detectó la **ausencia de documentos clave**, tales como la **boleta de cumplimiento del contrato** del contrato SAFI 233248 (Lonquimay), y **libros de obra**, cuya inexistencia fue



justificada por la Dirección de Vialidad aludiendo al extravío de antecedentes, lo que constituye un grave déficit de control administrativo.

Vínculo entre funcionarios públicos y contratista: Se identificó una situación de eventual **conflicto de interés**, al establecerse que el primer inspector fiscal del contrato 219920, **Óscar Mora Arriagada**, habría participado indirectamente en una **transacción comercial con el imputado**, lo que motivó su sustitución por resolución administrativa.

Que si bien la testigo no participó directamente de las diligencias de terreno, contextualizó debidamente su labor como analista documental e investigadora posterior a los hechos, entregando antecedentes que resultan **congruentes con los hallazgos de Contraloría**, en particular los contenidos en los anexos del **Informe N°44**, corroborando los pagos efectuados en base a documentación **contractual, técnica y contable**, confirmando así la existencia de **partidas inexistentes en terreno y pagos sin justificación técnica ni ejecución material**, lo que constituye **daño efectivo al patrimonio fiscal**.

Que, por todo lo expuesto, el tribunal considera que su testimonio, rendido con claridad, con sustento técnico, y **conforme a la prueba documental (que se analizará en detalle en considerandos posteriores)**, **corrobora** de manera relevante los elementos típicos del **delito de fraude al Fisco**, en particular: **el engaño contractual por presentación de antecedentes falsos o inexactos, el perjuicio fiscal efectivamente causado, y la participación activa de funcionarios públicos en el proceso de pago**, conforme a lo exigido por el artículo **239** del Código Penal o alternativamente al **artículo 470 N° 8**, por disposición fraudulenta de fondos públicos mediante documentación espuria.

En la misma línea, se presentó a **JORGE COFRÉ CANIO**, integrante de la Brigada de Delitos Económicos de Temuco, da cuenta de una inspección ocular minuciosa practicada en los años 2017 y 2018 en los caminos construidos bajo los contratos **PDI N°3/2015** (Lonquimay) y **PDI N°13/2014** (Vilcún), ambos adjudicados a la empresa **CSP Limitada**, con el objetivo de verificar in situ la ejecución material de las obras licitadas, en cumplimiento de una orden verbal y posterior instrucción formal de la Fiscalía Local de Temuco, a cargo del fiscal Roberto Garrido Bedwell.

Que el análisis efectuado por el testigo, en compañía del fiscal y personal del Laboratorio de Criminalística de la PDI, se basó en las **especificaciones técnicas contenidas en las bases de licitación**, las cuales fueron descargadas desde la plataforma de Mercado Público, y contrastadas con la realidad física de los caminos mediante **fijaciones fotográficas y mediciones directas**, constatándose una serie de **graves incumplimientos contractuales** en ambas obras. Entre los principales hallazgos verificados y documentados por la brigada policial, se identifican los siguientes:



1. **Ausencia total de obras de arte especificadas:** En el **camino N°1 de Lonquimay**, de 3 km de extensión, se constató la **inexistencia de las 12 obras de arte** proyectadas, además de una obra adicional de refuerzo de mampostería en una alcantarilla existente. La **Fotografía N°90** da cuenta de un **cauce de agua sin canalización**, donde debía estar instalada una alcantarilla de hormigón tipo TBHP, la cual no fue ejecutada. Este patrón se repite en múltiples puntos, como se evidencia en las **fotografías 99, 101, 114, 128 y 130**, todas ellas mostrando la **ausencia de infraestructura hidráulica**, con presencia visible de flujos de agua que debieron ser canalizados.
2. **Deficiencias en el ancho de coronación de los caminos:** En todos los caminos inspeccionados de ambos contratos, se detectaron **ancho de rodadura inferiores a los estipulados**. Por ejemplo, en el camino N°1 de Lonquimay, el ancho de coronación debía ser de 3,5 metros, sin embargo, en las **fotografías 88, 92, 93, 94, 97, 98, 110, 112, 117 y 118**, se constata que el ancho real medido variaba entre **2,26 y 3,17 metros**, muy por debajo del mínimo contractual.
3. **Obras incompletas o inexistentes en caminos adicionales:** En el **camino N°2 de Lonquimay**, con 5,6 km de extensión y 14 obras de arte proyectadas, se comprobó la **ausencia sistemática de las alcantarillas** (fotografías 11, 12, 21, 28, 38, 49 y 59). En cuanto a la carpeta granular, el informe y la **fotografía N°64** reflejan que en los últimos 300 metros del camino **no existe ningún tipo de aplicación de material**, lo que también se aprecia en la **fotografía 65**.
4. **Ejecución parcial o nula en caminos menores:** En el **camino N°3**, de solo 300 metros, se verificó que solo los primeros 180 metros fueron trabajados, con ausencia total de ejecución en el tramo restante. Lo anterior se aprecia en las **fotografías 82 y 84**. El ancho de coronación fue también insuficiente, con registros de **2,7 m** frente a los **3 m exigidos**.
5. **Ausencia de obras hidráulicas en el camino N°4 de Lonquimay**, el cual tenía una extensión de 3,3 km y seis obras de arte transversales proyectadas, ninguna de las cuales fue ejecutada, como lo demuestran las **fotografías 139, 143, 148, 149, 154, 155 y 156**, donde se evidencia el mal estado del camino, presencia de barro y **falta de mantención** a solo un año de la supuesta entrega.
6. **Ejecución deficiente en los caminos de Vilcún:** En el contrato **PDI 13/2014**, correspondiente a la comuna de Vilcún, el testigo constató un patrón similar. Si bien algunas **obras transversales fueron instaladas**, la mayoría se encontraban **cubiertas por vegetación y tierra**, lo que impide su correcto funcionamiento (ver **fotografías 19, 41, 58, 73 y 78**). Además, se evidenció el incumplimiento específico en el **kilómetro 2,85**, donde debía haberse reemplazado un **tubo metálico antiguo por uno corrugado**, lo cual no se efectuó (ver **fotografía 41**).
7. **Deficiencias reiteradas en el ancho de coronación en caminos de Vilcún:** También en estos caminos, las mediciones arrojaron anchos inferiores



a los proyectados: por ejemplo, en el camino N°2, debía ser de 4 m, pero las **fotografías 73, 76, 77, 81 y 83** muestran mediciones de hasta **2,8 m**, confirmando el incumplimiento.

8. **Empadronamiento de testigos clave:** El testigo policial entrevistó a **Felicinda Nahuelcura** (Lonquimay) y **Helen Vallejos** (Vilcún), quienes ratificaron el escaso tiempo efectivo de ejecución de las obras —**no más de 22 días**— y la baja cantidad de material aplicado, estimado por Nahuelcura en **no más de 20 camiones**. Dichos testimonios fueron recogidos en el contexto de la inspección y fueron coherentes con las observaciones físicas del terreno.

Que las constataciones documentadas en el **informe policial preliminar** elaborado por el testigo Cofré, y las **fotografías acompañadas** al proceso, permiten sostener que gran parte de las obras pactadas **no fueron ejecutadas, fueron realizadas deficientemente, o presentan un deterioro impropio del tiempo transcurrido desde su supuesta entrega**, evidenciando la existencia de un fraude consistente en la **simulación o incumplimiento de prestaciones**, con pago por obras no realizadas o ejecutadas en contravención de los términos contractuales.

Que, en consecuencia, el testimonio del funcionario Jorge Cofré Canio reviste **alto valor probatorio**, tanto por su metodología de inspección objetiva basada en coordenadas georreferenciadas y especificaciones técnicas, como por la incorporación de **fijaciones fotográficas** respaldadas por personal del **Laboratorio de Criminalística de la PDI**, lo cual otorga **credibilidad técnica** a las observaciones, especialmente respecto de la **ausencia o deficiencia estructural de obras públicas**, suplantadas mediante aparentes avances ficticios.

Que los testimonios prestados por los funcionarios policiales **Cinthia Vargas Vidal**, de la Brigada Anticorrupción Metropolitana, y **Jorge Cofré Canio**, de la Brigada de Delitos Económicos de Temuco, resultan **coherentes, verosímiles y técnicamente sustentados**, aportando una visión complementaria y convergente sobre los hechos investigados, particularmente en lo que respecta a los contratos PDI N°13/2014 y PDI N°3/2015, celebrados para la ejecución de obras de mejoramiento de caminos en las comunas de **Vilcún y Lonquimay**, respectivamente.

Ambos testimonios, en forma consistente, dan cuenta de la existencia de **graves irregularidades en la ejecución material de las obras contratadas**, acreditando con evidencia técnica, documental y fotográfica que: (i) **se pagaron obras que no fueron ejecutadas**; (ii) **otras fueron ejecutadas con especificaciones técnicas distintas e inferiores a las pactadas**, como el **espesor de la carpeta granular** o el **ancho de coronación de los caminos**; y (iii) **se omitió la aplicación de multas contractuales**, lo que fue verificado tanto mediante la inspección en terreno como mediante el análisis de los **estados de pago y anexos** documentales.



Que la concordancia sustancial entre ambos funcionarios se proyecta, además, en la identificación de las mismas partidas observadas como irregulares (por ejemplo, los tubos corrugados no instalados en el contrato de Vilcún y las obras de arte inexistentes en los caminos de Lonquimay), así como en la constatación de que las partidas de mayor valor correspondían precisamente a las obras faltantes o deficientes, cuestión corroborada con documentos oficiales (informes de Contraloría, certificados técnicos, anexos y fotografías) y con referencias cruzadas entre ambos peritos.

En mérito de lo anterior, este Tribunal asigna pleno valor probatorio a las declaraciones de los referidos testigos, en tanto funcionarios públicos que actuaron conforme a sus competencias legales, en base a criterios técnicos y con respeto al principio de objetividad, constituyéndose sus testimonios en elementos de convicción idóneos y concordantes para tener por acreditadas las irregularidades sustanciales en la ejecución y supervisión de los contratos señalados.

VIGÉSIMO SEXTO: Análisis de prueba testimonial. Otros testigos de contexto.

Además de los testigos fiscalizados y policiales, se contó con otros testimonios de cargo que se pasarán a analizar probatoriamente a continuación:

Que el testimonio rendido por doña **Hellen Patricia Vallejos Lobos**, vicepresidenta de la comunidad indígena José Manuel Millaleo, reviste **un alto valor probatorio** en lo que respecta a la ejecución material del contrato PDI N°13/2014, correspondiente a caminos en la comuna de **Vilcún**, en cuanto da cuenta, desde la experiencia directa de una de las comunidades beneficiarias, de múltiples **irregularidades** en la ejecución del contrato y en el cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa **CSP Limitada**, representada por **Jorge Inostroza Cerda**.

Doña Vallejos aporta antecedentes **internamente coherentes, precisos y persistentes en el tiempo**, referidos a: (i) la **infracción de los plazos contractuales**; (ii) la **falta de ejecución de obras comprometidas**, como **muros de boca, cunetas, y alcantarillas**; (iii) la ejecución **deficiente o incompleta de obras**, como el **punto principal** de la comunidad, respecto del cual incluso señaló la intervención directa del inspector fiscal **Jaime Silva Poblete**, quien habría reconocido que no cumplía con las especificaciones técnicas; (iv) el **uso de material de menor espesor al requerido**, que provocó deterioro prematuro de los caminos, y (v) la ausencia de multas o sanciones contractuales, a pesar del evidente incumplimiento, lo cual también fue reclamado por la comunidad a través de reuniones e informes dirigidos a Contraloría y autoridades regionales. Asimismo, su testimonio resulta corroborado en lo sustancial por los informes técnicos, declaraciones policiales y otros testigos presenciales, como comuneros y funcionarios públicos.



Por su parte, la declaración de don **Luis Emilio Roa Espinoza**, quien ejerciera funciones como **Seremi de Obras Públicas** de la Región de La Araucanía durante el período de ejecución de los proyectos investigados, si bien posee un **carácter más general y administrativo**, contribuye de manera relevante a contextualizar el **marco normativo y procedimental** de este tipo de licitaciones, en particular aquellas comprendidas en el **Programa de Desarrollo Indígena (PDI)**. Su declaración confirma: (i) que la **iniciativa de los caminos surge desde las comunidades a través del municipio**; (ii) que la ejecución recae enteramente en la Dirección de Vialidad, incluyendo el nombramiento de inspectores y fiscalización; y (iii) que recibió **reclamos de la comunidad de Lonquimay**, especialmente referidos a **la falta de materiales y el incumplimiento del ancho de los caminos**, confirmando haber canalizado dichos antecedentes a través del director de Vialidad.

Que ambos testimonios, en su conjunto, aportan **elementos convergentes y complementarios** respecto del **incumplimiento sustancial de las obligaciones contractuales** asumidas por la empresa adjudicataria, tanto en términos de plazos como de ejecución material conforme a las especificaciones técnicas pactadas, lo que refuerza la hipótesis acusatoria en torno a la existencia de **pagos por obras no ejecutadas o deficientemente ejecutadas**. Así también, permiten establecer la **presión ejercida por los beneficiarios para lograr la ejecución efectiva de los caminos**, así como la **insuficiencia del control estatal**, tanto en la supervisión directa como en la aplicación de mecanismos de sanción contractual.

Por estas razones, este Tribunal **asigna eficacia probatoria a ambos testimonios**, en cuanto se ajustan a los estándares de percepción directa, coherencia interna, persistencia, y corroboración externa, y por tanto **contribuyen sustancialmente a tener por acreditadas las irregularidades denunciadas** en el proceso de ejecución de los contratos PDI investigados.

A su turno, se presentó a **RODRIGO ENRIQUE GARRIDO CÁCERES**, Constructor Civil, que el testimonio por este ex encargado de caminos de la Municipalidad de Vilcún hasta mayo de 2015, presenta un **valor probatorio** dentro del conjunto de antecedentes testimoniales, en cuanto da cuenta de **observaciones directas y percepciones técnicas relevantes** sobre la ejecución del proyecto de mejoramiento de caminos adjudicado a la empresa **CSP Limitada** en el marco del Programa de Desarrollo Indígena (PDI), particularmente en las comunidades **Ángel Epueque, Ancamil y Millaleo**.

El testigo, en su calidad de **enlace técnico entre la municipalidad y las comunidades beneficiarias**, indicó haber constatado en terreno, y en compañía de dirigentes comunales como Yázar Nahuel, la **existencia de un notorio retraso en el avance físico de las obras**, en clara contradicción con los plazos contractuales establecidos, situación que generó preocupación constante por parte de las comunidades. Dicho retraso fue reiteradamente comunicado al **inspector fiscal Osvaldo Mora**, a quien dirigía sus requerimientos de



información entre **octubre de 2014 y enero de 2015**, sin haber tomado conocimiento de la participación de otros inspectores durante ese período.

Asimismo, su declaración adquiere particular importancia en cuanto describe de manera concreta **discrepancias técnicas en la ejecución de los caminos**, tales como la **sustitución de base chancada por material rodado**, situación que observó visualmente en el terreno y que contradice las **especificaciones técnicas contractuales**. Aunque su evaluación no incluyó elementos de laboratorio o control estructurado, su experiencia profesional y función institucional otorgan credibilidad a su apreciación técnica sobre la **inadecuación del material utilizado**.

Adicionalmente, el testigo entrega información relevante sobre **intentos posteriores de reparación** o mitigación por parte de la Dirección Provincial de Vialidad, específicamente mediante la **acumulación de material** en terrenos municipales del sector La Gallareta, destinado a caminos de comunidades como Millaleo y Ancamil, aunque no pudo confirmar si dicha intervención llegó a ejecutarse. También identificó como actor operativo a **Nelson Medina Torres**, funcionario del programa 201.0 de Vialidad, a quien se habría encargado dicha tarea según le fuera comunicado por su sucesor en el cargo, Claudio Gutiérrez. Por todo lo anterior, el Tribunal estima que el testimonio del señor Garrido **corroborra en lo técnico** las deficiencias ya denunciadas por las comunidades y evidenciadas en otras probanzas, particularmente en cuanto a: (i) **falta de avance físico de obra en los plazos comprometidos**; (ii) **uso de materiales no concordantes con los exigidos por el contrato**; y (iii) **percepción generalizada de incumplimiento por parte de los beneficiarios del proyecto**. Todo ello refuerza la existencia de **una ejecución deficitaria de los contratos**, sin fiscalización efectiva ni medidas correctivas oportunas, tal como ya ha sido sostenido en otros testimonios y peritajes.

En consecuencia, este Tribunal asigna valor a su declaración en cuanto **testigo técnico presencial**, por su conocimiento directo de los caminos inspeccionados, su calidad de funcionario municipal con funciones vinculadas a la obra, y por la **coherencia y verosimilitud de sus observaciones**, las cuales se integran al conjunto de medios probatorios que permiten tener por acreditadas diversas **irregularidades contractuales y administrativas** en la ejecución de los contratos PDI investigados.

Que los testimonios rendidos por **Hellen Patricia Vallejos Lobos, Luis Emilio Roa Espinoza y Rodrigo Enrique Garrido Cáceres** resultan **concordantes y complementarios** en aspectos sustantivos relativos a la **deficiente ejecución de los contratos de mejoramiento de caminos rurales** adjudicados a la empresa CSP Limitada en el marco del Programa de Desarrollo Indígena.

En su conjunto, los tres testimonios aportan una **visión coherente y convergente** sobre la **existencia de graves incumplimientos contractuales y administrativos**, cuya constatación se origina tanto en observaciones comunitarias, como en percepciones técnicas y actos administrativos, y que



permiten sustentar la tesis de que **las obras ejecutadas distaron significativamente de los estándares exigidos**, comprometiendo recursos públicos y vulnerando los derechos de las comunidades beneficiarias.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Análisis individual de la prueba documental.

En este apartado se analizarán en detalle los documentos acompañados por los acusadores, de manera individual y luego en su conjunto, conforme al patrón metodológico adelantado desde el considerando décimo cuarto:

163.- Vista fiscal en sumario administrativo instruido en la Dirección Regional de Vialidad de La Araucanía de Informe de investigación especial N° 44/2017 de la Contraloría Regional de La Araucanía.

Que conforme al mérito del documento acompañado consistente en la vista fiscal evacuada por la Contraloría Regional de La Araucanía en el marco del procedimiento sumarial instruido mediante Resolución Exenta N° PD00117, de 7 de marzo de 2018, y teniendo a la vista el Informe de Investigación Especial N° 44 de 2017, se ha podido establecer que los contratos PDI N°13/2014 y PDI N°3/2015, celebrados entre el Ministerio de Obras Públicas y la empresa CSP Ltda., presentan serias irregularidades técnicas y administrativas durante su ejecución, constatándose, entre otros hechos, el pago de partidas de obras no ejecutadas o ejecutadas deficientemente, la inexistencia de controles topográficos, la falta de informes de avance y de uso del libro de obras, y la omisión de la aplicación de las multas contractualmente procedentes.

Que tales antecedentes permiten tener por acreditado que el funcionario Jaime Silva Poblete, en su calidad de inspector fiscal designado para ambas obras, incumplió los deberes que le imponían las bases administrativas especiales y generales del contrato, así como lo dispuesto en los artículos 61 letras b), c) y g) de la Ley N°18.834, artículos 62 N°8 de la Ley N°18.575, y artículos 110 y 144 del Reglamento de Contratos de Obras Públicas (Decreto N°75 de 2004), configurándose un actuar negligente y contrario al principio de probidad administrativa.

Que, además, **consta en la vista fiscal que el avance financiero aprobado en los estados de pago no se correspondía con el real avance físico de las obras**, lo que se tradujo en un **detrimento patrimonial para el Fisco**, dado que se cursaron pagos por montos significativos respecto de partidas no ejecutadas o ejecutadas con especificaciones técnicas inferiores a las exigidas. Todo lo anterior fue acreditado por medios documentales, registros fotográficos y antecedentes recogidos por la propia fiscalización administrativa, no habiéndose aportado en sede sumarial elementos que permitieran desvirtuar tales hallazgos.



Que, en consecuencia, este tribunal valorará dicho documento como prueba documental de cargo que corrobora y se encuentra en plena armonía con las demás probanzas rendidas, relativas al deficiente cumplimiento de los contratos PDI en las comunas de Vilcún y Lonquimay, y la responsabilidad que cabe al mencionado funcionario en su calidad de inspector fiscal.

Luego el documento 1, **Informe investigación especial N° 44/2017, de fecha 05 de junio de 2017, de la Contraloría Regional de la Araucanía y anexos.**, se advierte que este contiene antecedentes técnicos, administrativos y contables referidos a contratos de conservación de caminos adjudicados a la empresa Sociedad de Construcción, Proyectos y Servicios de Ingeniería CSP Ltda., financiados por el Ministerio de Obras Públicas. El informe contiene diversos cuadros de estados de pago, especificaciones de partidas ejecutadas, observaciones técnicas, y se encuentra complementado con **anexos gráficos y registros fotográficos**, los cuales resultan especialmente relevantes.

En particular, los **anexos fotográficos** permiten constatar visualmente la **ausencia total o parcial de ejecución de partidas** que habían sido aprobadas y pagadas en su integridad por la inspección fiscal, tales como instalación de alcantarillas, capas de rodadura, y obras de arte vial, entre otras. Las imágenes contrastan directamente con las partidas contenidas en los **cuadros de cubicaciones y estados de pago**, evidenciando la inexistencia o deficiente ejecución de diversas obras cuya ejecución había sido certificada como completa.

Estas observaciones, debidamente documentadas en los **anexos**, demuestran una **disociación entre el avance físico y el financiero de las obras**, lo que constituye un hallazgo crítico del informe. Esta discordancia, unida a la falta de control técnico y documental, permite sostener fundadamente que se configuró un perjuicio al erario fiscal, elemento nuclear para la configuración del tipo penal de fraude al fisco, conforme lo dispuesto en el artículo 239 del Código Penal, toda vez que los pagos realizados no se corresponden con obras materialmente verificables y los funcionarios encargados de su fiscalización omitieron deberes de control esenciales.

Que, para la adecuada resolución del presente caso, resulta pertinente tener por incorporados y valorados los antecedentes documentales contenidos en los instrumentos identificados como **documentos 47, 52, 53, 54 y 164**, los cuales dan cuenta de los aspectos técnicos, administrativos, comunitarios y disciplinarios relacionados con los contratos PDI N° 13/2014 (Vilcún) y PDI N° 3/2015 (Lonquimay), ejecutados por la empresa CSP Ltda. y fiscalizados por don Jaime Silva Poblete, funcionario de la Dirección Regional de Vialidad de La Araucanía.

Que, en efecto, el **DOC 47**, correspondiente a un informe técnico de la Dirección de Vialidad, da cuenta de inspecciones visuales y mediciones de



espesores efectuadas en caminos ejecutados bajo el PDI N° 13/2014, constatándose **incumplimientos en los espesores mínimos requeridos, presencia de material rodado en lugar de material chancado**, y diferencias respecto de las especificaciones técnicas contempladas en las bases contractuales, lo cual pone de manifiesto deficiencias objetivas en la ejecución de las obras.

Que, a su vez, el **DOC 52**, acta de recepción provisional de las obras del contrato PDI N° 3/2015 en Lonquimay, **acredita que dicha recepción fue efectuada en forma anticipada, con observaciones pendientes y sin haberse subsanado diversas deficiencias detectadas previamente**, lo que resulta relevante al momento de analizar la responsabilidad del Inspector Fiscal al haber autorizado el pago de estados sin respaldo técnico suficiente y sin control topográfico debidamente documentado.

Que, el **DOC 53**, correspondiente a la Resolución Exenta N° PD00506 dictada por la Contraloría Regional de La Araucanía, contiene la **decisión disciplinaria que destituye al Inspector Fiscal Jaime Silva Poblete**, tras concluirse fundadamente su responsabilidad administrativa en **nueve cargos**, los que incluyen, entre otras faltas, la aprobación de pagos por obras no ejecutadas, omisiones de fiscalización, ausencia de control de espesores, inexistencia del libro de obras y no imposición de multas reglamentarias por incumplimientos contractuales, vulnerándose con ello los principios de probidad administrativa y legalidad.

Que, por su parte, el **DOC 54**, consistente en una minuta de la Mesa Territorial Lleupeco del año 2016, recoge las observaciones y reclamos de las comunidades indígenas beneficiarias de los caminos en la comuna de Vilcún, quienes relatan **el abandono de obras, la baja calidad de los trabajos realizados y la falta de respuesta institucional**, aspectos que corroboran el deterioro temprano de las obras, su ineficiencia funcional y la afectación concreta al derecho a la conectividad de dichas comunidades, especialmente la Comunidad José Manuel Millaleo.

Que, finalmente, el **DOC 164**, correspondiente a la **Vista Fiscal del Sumario Administrativo** seguido contra el Inspector Fiscal, sistematiza la prueba administrativa reunida por la Contraloría General de la República y resume los cargos formulados, los descargos presentados por el inculcado y la fundamentación que sustenta su responsabilidad. El documento destaca, con respaldo en informes técnicos, fotografías, estados de pago y declaraciones, que el funcionario **incurrió en graves omisiones y faltas a sus deberes funcionales**, facilitando pagos por partidas inexistentes, no exigiendo controles técnicos básicos ni documentales, y omitiendo el ejercicio de las potestades sancionatorias previstas en las bases de licitación.

Que, todos estos documentos, valorados conforme a las reglas de la sana crítica, permiten tener por suficientemente acreditadas las irregularidades técnicas, administrativas y contractuales detectadas tanto en la ejecución como en la



recepción de las obras referidas, así como la **responsabilidad directa del funcionario público encargado de su fiscalización**, cuyo accionar omisivo y permisivo generó un perjuicio patrimonial al Estado y una afectación al interés público comprometido en la conservación de caminos de acceso a comunidades indígenas.

A su turno, del análisis conjunto del *Informe Final de Investigación Especial N° 44 de 2017* de la Contraloría Regional de La Araucanía y sus anexos documentales y fotográficos, consta la existencia de múltiples irregularidades en la ejecución de los contratos denominados “Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas”, correspondientes a las comunas de Vilcún (PDI N°13/2014) y Lonquimay (PDI N°3/2015), ambos adjudicados a la empresa Sociedad de Construcción Proyectos Servicios de Ingeniería CSP Limitada y ejecutados bajo la responsabilidad de la Dirección Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.

Que, específicamente, según el documento identificado como *Informe Final de Investigación Especial N° 44 de 2017*, se estableció lo siguiente: (i) se aprobaron estados de pago por partidas no ejecutadas o ejecutadas solo parcialmente, ascendiendo los pagos objetados a \$14.303.474 en el contrato de Vilcún y \$16.736.010 en el de Lonquimay; (ii) se constató el incumplimiento de espesores mínimos en la ejecución de terraplenes y carpeta granular, por lo que igualmente se cursaron pagos completos por montos de \$69.449.795 y \$82.907.052, sin respaldo topográfico ni ensayos válidos de laboratorio; (iii) se evidenció el abandono de materiales en obra, la inexistencia o falta de registros esenciales en libros de obra y la omisión de aplicación de multas por incumplimientos contractuales, como el no funcionamiento del laboratorio de autocontrol o la falta de instalación oportuna de letreros de obra, ascendiendo estas últimas a un total de 631 UTM no cobradas.

Que los documentos contenidos en *ANEXOS* consisten principalmente en registros fotográficos y cuadros analíticos que respaldan los hallazgos del informe principal. Las imágenes del Anexo N° 1 muestran, entre otros aspectos, el abandono de material granular y tubos de polietileno, la inexistencia de elementos de seguridad vial (delineadores, señales verticales), la omisión de obras de saneamiento (canales, fosos, contrafosos), y la ejecución deficiente de terraplenes y carpetas granulares, en diversos tramos de los caminos fiscalizados en ambas comunas.

Que el Anexo N° 2 contiene cuadros financieros detallados sobre partidas contratadas y pagadas, junto a aquellas que no fueron ejecutadas conforme a lo estipulado. En particular, los cuadros N°2 y N°3 evidencian partidas total o parcialmente no ejecutadas, pese a haber sido pagadas al 100%, lo que configura un perjuicio económico directo para el Fisco. Por su parte, el Anexo N°3 (certificado de ensayo N°318) demuestra técnicamente el incumplimiento de espesores exigidos en las especificaciones técnicas contractuales.



Que, conforme lo anterior, se encuentra suficientemente acreditado un conjunto de infracciones a la probidad administrativa, al principio de juridicidad, y a la normativa aplicable en materia de ejecución y control de obras públicas (Ley N°18.575, DFL N°1263 de 1975, D.S. MOP N°75 de 2004, y Bases Administrativas Generales de la DGOP), todo lo cual sustenta la responsabilidad administrativa del inspector fiscal a cargo y pone en evidencia la falta de controles efectivos por parte de la Dirección Regional de Vialidad de La Araucanía.

Que las observaciones señaladas en el informe y sus anexos fueron calificadas como *altamente complejas* por la Contraloría General de la República, requiriendo de la Dirección de Vialidad la instrucción de sumario administrativo, exigencia de reintegro de fondos indebidamente pagados y el cobro de multas omitidas, bajo apercibimiento de formular el correspondiente reparo conforme a la Ley N°10.336.

Por lo anterior, este Tribunal valorará estos antecedentes conforme a las reglas de la sana crítica, en especial en cuanto al contexto fáctico que rodea los contratos mencionados y su ejecución, y en lo que se refiere a la configuración del tipo penal de fraude al fisco, la existencia de pagos sin contraprestación efectiva y la posible responsabilidad penal y administrativa de quienes intervinieron en calidad de inspectores fiscales o funcionarios con deberes de control.

Que según consta en el documento denominado *documento 15*, se trata del Estado de Pago N°1 del contrato identificado como PDI N°13/2014, correspondiente a las obras de conservación de caminos de acceso a comunidades indígenas de la comuna de Vilcún, adjudicado a la empresa Sociedad de Construcción, Proyectos, Servicios e Ingeniería CSP Ltda., por un monto inicial de \$218.488.712. Se verificó un avance físico y financiero del 16,7%, con un valor de pago por \$37.191.621, reajustado conforme al IPC base 104,32.

En el documento 20, correspondiente al Estado de Pago N°2 del mismo contrato, se aprobó el desembolso de \$128.197.879, acumulando un avance financiero superior al 75%. Se registró un reajuste por \$2.390.343, determinándose un pago líquido de \$120.923.259.

Que el documento 25 detalla el Estado de Pago N°3, correspondiente a un valor total de \$52.061.621, con un avance físico de 97,59%, e incluye un reajuste por \$1.150.589. Se observa que a esta fecha se había alcanzado un total acumulado de \$213.216.724 por concepto de obras ejecutadas.

Que el *documento 30* corresponde al Estado de Pago N°4, en que se aprueba el pago de \$52.152.830. El contrato presenta modificaciones que elevan su monto total a \$269.603.951. Se mantiene el mismo contratista y se ratifica que el avance financiero y físico ha continuado su curso conforme a lo declarado.

Que el *documento 37* informa sobre un pago adicional por concepto de devolución de retenciones, ascendente a \$13.077.303, acumulando con ello el



total de obras y reajustes realizados hasta esa fecha por la suma de \$269.603.951, conforme a las bases del contrato original.

En el documento *115* incorpora antecedentes del contrato PDI N°13/2014, señalando montos parciales y estados de pago que coinciden con las cifras expuestas anteriormente. Se refuerzan las fechas de inicio del contrato (24.10.2014) y los reajustes por IPC.

En el documento *119* incluye fichas técnicas de ejecución de partidas de obra, detallando ítems y cantidades ejecutadas, donde se observan discrepancias entre lo proyectado y lo efectivamente realizado, en relación con excavaciones, terraplenes, rodaduras y obras de drenaje.

En el documento *125* se complementa la secuencia de reajustes aplicados al contrato PDI N°13/2014, detallando los cálculos financieros para determinar el monto final con base en el índice IPC y resoluciones administrativas correspondientes.

A su turno, en el documento *129* contiene estados de pago y reajustes del contrato PDI N°3/2015, también adjudicado a CSP Ltda., en la comuna de Lonquimay. Se establece un reajuste acumulado de \$8.379.661 y un total retenido de \$107.593.210, evidenciando operaciones paralelas en el marco de los contratos fiscalizados por Contraloría.

Que del análisis de estos últimos documentos acompañados —entre ellos, se advierte la reiterada validación y pago de partidas de obras públicas en los proyectos PDI N° 13/2014 y PDI N° 3/2015, pese a constar documentalmente su ejecución parcial, defectuosa o derechamente inexistente. En particular, los documentos contienen informes técnicos, actas de inspección, certificados de laboratorio, cuadros de cubicaciones y respaldos fotográficos que corroboran, entre otros hallazgos, la no instalación de obras de arte, la insuficiencia del espesor de capas de rodadura, la falta de presentación de proyectos topográficos exigidos contractualmente y la ausencia de control técnico formal por parte del inspector fiscal, sin que ello haya impedido la aprobación y pago total de las partidas involucradas. Tales antecedentes permiten concluir, en esta etapa, que se materializó un desajuste objetivo entre la ejecución física y los pagos aprobados por parte del MOP, lo que compromete el deber de control del funcionario responsable y resulta indicativo de un perjuicio fiscal injustificado. Que del análisis conjunto de los documentos identificados como documento 4, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 21 22 y 26, se constata un patrón consistente en la documentación administrativa, financiera y técnica que respalda el cumplimiento formal de obras que, sin embargo, no se encuentran plenamente ejecutadas en terreno, según lo demostrado en otros medios probatorios de esta causa.

En particular:

Documento 4 y 7: Constitución de la Sociedad CSP Limitada: Conforme al instrumento público de fecha 10 de octubre de 2003 (*documento 7*), se constituyó la sociedad de responsabilidad limitada denominada



“CONSTRUCCIÓN, PROYECTOS, SERVICIOS E INGENIERÍA CSP LIMITADA”, por parte de Jorge Andrés Inostroza Cerda y Susana Ximena Inostroza Cerda, ambos con domicilio en Temuco. El objeto social de dicha entidad abarca ampliamente la ejecución de obras civiles, caminos, puentes, asesorías técnicas y consultorías en materias de ingeniería y construcción, tanto para entidades públicas como privadas, nacionales o extranjeras. Se estableció un capital social de diez millones de pesos, suscrito en partes iguales.

Modificaciones societarias: En el documento contenido en *documento 4*, de fecha 8 de mayo de 2012, consta la modificación del pacto social, mediante la cual Susana Inostroza Cerda se retira de la sociedad, transfiriendo el 35% de sus derechos a Jorge Inostroza Cerda y el restante 15% a Lorena Andrea Quezada Rodríguez, quien se incorpora como socia. De este modo, la sociedad queda conformada por Jorge Inostroza Cerda (con un 85% de participación) y Lorena Quezada Rodríguez (con el 15%). Asimismo, se estipula que la administración de la sociedad queda exclusivamente en manos de Jorge Inostroza Cerda, quien queda facultado con amplios poderes para actuar a nombre de la empresa.

Relevancia penal: Estos antecedentes permiten establecer que Jorge Inostroza Cerda detentaba la representación y administración de CSP Limitada en la época en que se celebraron y ejecutaron los contratos con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para la conservación de caminos en comunidades indígenas, lo que resulta especialmente relevante a efectos de atribuir responsabilidad penal en el contexto de la imputación de delitos contra la administración pública, particularmente por hechos relacionados con la percepción de pagos por obras no ejecutadas o deficientemente realizadas.

Capacidad de gestión y disposición contractual: Del análisis de las facultades establecidas en el pacto social original y sus modificaciones, se infiere que Jorge Inostroza Cerda tenía atribuciones plenas para celebrar contratos con entidades públicas, rendir cuentas, suscribir estados de pago, otorgar mandatos, y representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad, lo cual es determinante para establecer el control y responsabilidad directa en los actos de ejecución contractual que motivan la presente causa.

Por consiguiente, los documentos analizados permiten sostener la calidad de representante legal y administrador de hecho y derecho de Jorge Inostroza Cerda respecto de CSP Ltda., lo que permite conectar su conducta con las obligaciones emanadas de los contratos públicos en cuestión y, por ende, con los hechos que sustentan la acusación penal formulada.

Documento 8: se tiene por acreditado que mediante escritura pública de fecha 10 de octubre de 2003, otorgada ante el notario Carlos Ramdohr Janssen, se constituyó la sociedad de responsabilidad limitada denominada “*Sociedad de Construcción, Proyectos, Servicios de Ingeniería CSP Limitada*” (con nombre de fantasía “CSP Ingeniería Ltda.”), domiciliada en Temuco, e integrada por don Jorge Andrés Inostroza Cerda y doña Susana Ximena Inostroza Cerda, quienes aportaron un capital social conjunto de \$10.000.000.



Que la sociedad CSP Limitada fue constituida con un amplio objeto social, que abarca la ejecución de todo tipo de obras de ingeniería, construcción civil, caminos, puentes, túneles, represas, obras hidráulicas, arquitectura, evaluación y consultoría de proyectos, así como también actividades relacionadas con el arriendo de maquinaria, transporte y comercialización de insumos para la construcción.

Que en dicha escritura consta que la administración y representación de la sociedad recaería indistintamente en cualquiera de sus socios, quienes podrían actuar de forma conjunta o separada con plenas facultades.

Que este antecedente permite identificar jurídicamente al ente societario contratado para la ejecución de los proyectos PDI N° 13/2014 (Vilcún) y PDI N° 3/2015 (Lonquimay), adjudicaciones que son objeto del reproche penal en estos autos por pagos de partidas no ejecutadas.

Que, en consecuencia, este documento permite vincular directamente al representante legal Jorge Inostroza Cerda como el sujeto que asumía la representación legal de CSP Ltda. al momento de la ejecución de los contratos cuestionados, lo cual resulta relevante para establecer su calidad de imputado y su participación en los hechos materia de la acusación.

Documento 13: contiene el *Informe de Evaluación Económica* relativo al proceso de licitación pública identificado como PDI N° 13/2014, correspondiente a la “Conservación de caminos de acceso a comunidades indígenas” en la comuna de Vilcún, Región de La Araucanía, y que dicha licitación fue tramitada bajo el código SAFI N° 219.920; que en dicho documento consta la participación de cinco oferentes, entre los cuales la empresa Sociedad de Construcción Proyectos Servicios e Ingeniería CSP Ltda. resultó preseleccionada por haber presentado la oferta más conveniente al interés fiscal, ascendiendo a la suma de \$218.488.712; que la evaluación fue efectuada por la Comisión designada por Resolución S.R.M. 9° R N° 1021 del 23 de julio de 2014; y que el acta consigna que, pese a errores aritméticos menores en algunas propuestas, la oferta de CSP Ltda. cumplía con las bases de licitación y no contenía vicios invalidantes, recomendándose su adjudicación al Director Regional de Vialidad, lo cual configura uno de los antecedentes técnicos y administrativos claves para la contratación de la empresa luego cuestionada por pagos por partidas no ejecutadas o mal ejecutadas, según lo informado posteriormente en el Informe Especial de la Contraloría N° 44/2017, adquiriendo así este documento un valor sustancial en cuanto establece el punto de partida formal del proceso de adjudicación contractual investigado.

Documento 14: e incorpora el “Informe de Evaluación Técnica de la Licitación Pública PDI N° 13/2014”, correspondiente a la obra denominada “**Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, comuna de Vilcún, provincia de Cautín, región de La Araucanía**”, con un presupuesto



oficial de \$273.222.303, financiado con fondos sectoriales y un plazo de ejecución de 180 días corridos.

Que, de dicho informe se desprende que la propuesta técnica de la empresa **Sociedad de Construcción Proyectos Servicios de Ingeniería CSP Ltda.** fue una de las admitidas y validadas técnicamente por la comisión evaluadora, integrada entre otros por **Carlos Milque Bustos** y **Osvaldo Mora Arriagada**, en contraste con la propuesta de otra oferente que fue declarada fuera de bases por no cumplir con los requisitos exigidos en las bases administrativas.

Que, la evaluación técnica indica que la propuesta de CSP Ltda. cumplía formalmente con la documentación exigida (listado de maquinarias, programa de trabajo, antecedentes comerciales y laborales, etc.), sin observarse en esa etapa observaciones sustantivas sobre deficiencias técnicas u operativas, validando así su admisión al proceso de licitación y su posterior adjudicación.

Documentos 16, 17 y 21: corresponden a informes de cubicación, certificados de control de calidad y de cumplimiento de contrato, todos firmados por la Inspección Fiscal, en los que se omiten observaciones que den cuenta de deficiencias, irregularidades o incumplimientos sustanciales, pese a las evidencias contenidas en informes posteriores.

Documento 22: corresponde a una factura emitida por la empresa contratista CSP Ltda., con fecha dentro del periodo contractual, vinculada al pago por servicios cuyo correlato físico en terreno ha sido cuestionado en el sumario administrativo y el informe N°44/2017 de la Contraloría.

Documento 26: contiene una declaración del Inspector Fiscal que afirma el cumplimiento de especificaciones técnicas, cubicaciones verificadas y existencia de registros fotográficos, sin aludir a carencias como las luego identificadas por la auditoría externa, tales como la inexistencia de obras de arte o el no cumplimiento de espesores mínimos.

Todo lo anterior permite colegir que existe una correlación entre la emisión de documentos de pago y de certificación técnica de avance de obras, con el posterior hallazgo de inejecución parcial o total de dichas partidas, situación que reviste relevancia penal.

En otro punto, constan los documentos: **27, 33 y 38** corresponden a facturas emitidas por la empresa **Sociedad de Construcción, Proyectos, Servicios e Ingeniería CSP Limitada**, por concepto de ejecución de obras contratadas en el marco de la conservación de caminos rurales. Dichos documentos consignan montos, fechas de emisión, condiciones de venta y datos de remitente, acreditando la existencia de pagos efectuados por conceptos contractuales, sin embargo, no contienen evidencia directa sobre la efectiva ejecución física de las partidas pagadas, sino que reflejan operaciones administrativas de cobro.

DOC 31 es una **declaración del inspector fiscal** sobre el estado de pago de determinadas obras, en la cual se indica expresamente que se ha verificado la



ejecución de las obras objeto de pago, que las garantías están vigentes y que se cuenta con respaldo documental y fotográfico. No obstante, su valor probatorio debe ser contrastado con los informes de fiscalización y recepción técnica, dada la posibilidad de incongruencias entre la declaración administrativa y la ejecución material real.

DOC 44 contiene especificaciones técnicas del contrato, particularmente relativas a los métodos de trabajo, unidades de medida, materiales a emplear y condiciones para la recepción de obras como terraplenes, hormigón y ductos. Este documento es relevante para determinar si los materiales y métodos utilizados en terreno corresponden con los estándares contractuales, y sirve como parámetro de control para verificar incumplimientos técnicos en la ejecución, especialmente en contextos de pagos asociados a partidas no ejecutadas conforme a dichas especificaciones.

En su conjunto, los documentos revisados sustentan la hipótesis del Ministerio Público relativa a la existencia de pagos por conceptos no ejecutados o ejecutados parcialmente, en tanto las facturas (DOC 27, 33 y 38) dan cuenta de desembolsos concretos, el DOC 31 intenta justificar su procedencia con una validación administrativa que debe ser corroborada, y el DOC 44 fija los criterios técnicos que permiten determinar si las obras cumplían con los estándares de exigencia del contrato. En consecuencia, su valor en el juicio se conecta directamente con la configuración del tipo penal de fraude al fisco, particularmente en cuanto a la simulación de cumplimiento de obligaciones contractuales para justificar pagos públicos.

Siguiendo con el análisis de los documentos acompañados:

1. **Documento 46** contiene los cuadros de cantidades de obras proyectadas por tramos, detallando partidas específicas y su ubicación por kilómetro, que sirven de referencia para comparar con lo efectivamente ejecutado en terreno y evaluado posteriormente en informes técnicos y de fiscalización.
2. **Documento 56** refiere a un oficio del Servicio de Impuestos Internos, donde se remite información a la Fiscalía de Alta Complejidad sobre aspectos tributarios vinculados a la empresa CSP Ltda., información relevante para indagar la trazabilidad de pagos y su eventual simulación.
3. **Documento 61** recopila actos administrativos relevantes para la ejecución contractual, incluyendo modificaciones al contrato, programas de trabajo, compromisos de fondos, informes técnicos, y la carta de la empresa constructora en que renuncia a indemnizaciones, hechos que denotan conocimiento institucional del estado del contrato y del abandono de obligaciones por parte de la contratista.
4. **Documento 62** contiene la Resolución Exenta de aprobación del Acta de Recepción Única de la obra en Vilcún, indicando el cierre formal del contrato y permitiendo el levantamiento de las garantías. Su relevancia está en que este acto se produce pese a los antecedentes que dan cuenta de la no ejecución total



de las partidas, por lo que es indiciario de una eventual validación administrativa de obras no realizadas.

5. **Documento 69** incorpora antecedentes financieros del contrato, incluyendo los valores cancelados y los documentos de garantías. Se consigna la devolución de retenciones a la empresa contratista, sin reparos por parte de la inspección fiscal, lo que refuerza la hipótesis de un cumplimiento meramente formal del contrato, pese a omisiones materiales en su ejecución.

6. **Documento 73** refiere a resoluciones exentas que adjudican, modifican y cierran administrativamente el contrato. Se detalla la designación de la comisión respectiva, permitiendo correlacionar fechas y actos con los estados de pago cuestionados por la fiscalización.

7. **Documento 81:** corresponde a un conjunto de **especificaciones técnicas especiales** aplicables a diversas partidas de obra en contratos de conservación de caminos rurales, las que regulan detalladamente las características constructivas, materiales permitidos, procedimientos de trabajo, y criterios de medición y pago asociados a cada ítem. En particular, se identifican las siguientes partidas relevantes:

Excavación de corte en terreno de cualquier naturaleza: define que no requiere materiales específicos y que la medición será por volumen (m³), conforme a normas del MC-V5.

Conformación de plataforma: se enfoca en enraizar y acondicionar el terreno, exigiendo retiro manual de material sobredimensionado; la medición es en m² de terreno conformado.

Carpeta granular de rodadura: exige compactación al 95% de la D.M.C.S. o 80% DR, control topográfico cada 20 m y cumplimiento de espesores; se mide en m³ colocados y compactados.

Formación y compactación de terraplenes: se detallan densidades de compactación mínimas (95% D.M.C.S., 90% en bordes), regulándose por el MC-V7.

Alcantarillas de tubos de hormigón con base plana (0.80 y 1.00 m): incluyen normas para excavación, relleno estructural, compactación y medidas mínimas del sobreancho.

Revestimiento con mampostería de piedra: regula dimensiones mínimas de las piedras, preparación del mortero (1:2), condiciones de asentamiento, curado y acabado de juntas.

Construcción de fosos y contrafosos: no exige materiales, y establece la excavación conforme al terreno natural y las secciones del proyecto.

Este documento cobra especial relevancia para el juicio penal en que se imputan delitos relacionados con el pago de obras no ejecutadas, en tanto **establece los parámetros normativos objetivos** que permiten contrastar lo efectivamente realizado con lo contratado, especialmente en lo que respecta a espesor, densidad, tipo de material y volúmenes. La ausencia o desviación injustificada respecto de estas exigencias técnicas, podría dar cuenta del



incumplimiento contractual, validado eventualmente por el inspector fiscal, y por tanto ser constitutiva de fraude al fisco.

8. **Documento 83:** consta un “Resumen de Obras” correspondiente a un contrato de conservación de caminos rurales en la comuna de Lonquimay, Región de la Araucanía, donde se detallan las cantidades y partidas técnicas contratadas y supuestamente ejecutadas. Entre otras, se especifica la ejecución de excavaciones, conformación de plataforma, carpeta granular de rodadura, construcción de fosos, alcantarillas de hormigón y revestimientos de mampostería, todas medidas en unidades específicas como metros cúbicos o metros lineales. Este documento cumple una función esencial de contraste respecto de los estados de pago y la ejecución material en terreno, toda vez que permite verificar, en relación con la documentación técnica, si las partidas señaladas fueron efectivamente realizadas, tal como ha sido cuestionado en múltiples informes y testimonios del proceso.

9. **Documento 84:** contiene cuadros técnicos referidos a las cantidades de obras ejecutadas en distintos tramos de caminos rurales, detallando ítems como obras de arte transversales, terraplenes, conformación de plataformas, carpetas de rodadura, fosos y excavaciones en terreno de cualquier naturaleza (TCN) correspondientes a caminos numerados del 1 al 4. En particular, se establecen con precisión ubicaciones kilométricas, volúmenes, longitudes, dimensiones de terraplenes, anchos de coronamiento, alturas promedio, y observaciones estructurales. Estos datos, si bien dan cuenta de una programación técnica exhaustiva de las obras contratadas, carecen de elementos probatorios que acrediten que las cantidades ahí indicadas efectivamente fueron ejecutadas en su totalidad, especialmente en ausencia de respaldo fotográfico, registros de cubicaciones independientes o libros de obra debidamente foliados y rubricados. Su relevancia en el proceso radica en servir de referencia para contrastar, en sede probatoria, las cantidades contratadas versus las realmente ejecutadas, lo cual incide directamente en la configuración del tipo penal de fraude al fisco, toda vez que permitirían verificar si hubo pagos por partidas no ejecutadas o ejecutadas parcialmente.

10. **Documento 93,** declaración manuscrita de doña Felicinda Nahuelcura, fiscalizadora de la comunidad indígena que fue beneficiaria de las obras públicas materia del juicio, en la que se expresa el descontento y preocupación de la comunidad respecto al estado de los caminos, la escasa seguridad en el desplazamiento de las personas, y el incumplimiento de las condiciones técnicas originalmente contempladas en el proyecto ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas; manifestando además que las obras no se ejecutaron conforme al estándar comprometido, y que la comunidad debió autogestionar medidas de emergencia para mantener la conectividad. Tales antecedentes permiten valorar no solo la percepción comunitaria del incumplimiento, sino también los efectos concretos de la inejecución de obras en el bienestar de los beneficiarios,



reforzando los elementos subjetivos del tipo penal de fraude al fisco, en tanto se vulnera el interés estatal en la correcta aplicación de fondos públicos y en la satisfacción de necesidades prioritarias en zonas vulnerables.

11. **Documento 94:** documento suscrito por la consejera de la comunidad Nahuelcura Caniumir, doña Felicinda Nahuelcura Caniumir, fechado el 27 de julio de 2016, expone formalmente a la Dirección de Vialidad su malestar por el estado deficiente del camino que conecta su comunidad, pese a haberse ejecutado un proyecto financiado por el MOP con ese fin. En la comunicación, la declarante indica que los caminos comunitarios fueron intervenidos, pero no se encuentran operativos ni cumplen adecuadamente su función, afectando directamente su actividad económica vinculada al turismo. De este modo, se solicita expresamente que se adopten medidas para la reparación de las deficiencias detectadas, invocando el derecho de la comunidad a una infraestructura vial digna. Este documento resulta relevante, por cuanto constituye evidencia directa de la percepción comunitaria sobre el incumplimiento material del contrato de conservación de caminos, confirmando la inejecución parcial de obras que habrían sido pagadas al contratista, y contribuyendo así a la configuración de los elementos objetivos del tipo penal de fraude al fisco.

12. **El documento 101:** Convenio Ad-Referéndum N°1” de fecha 14 de junio de 2016, aprobado mediante Resolución Exenta N° 1335 de la Dirección Regional de Vialidad de La Araucanía, se constata la modificación del contrato correspondiente al proyecto “Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, comuna de Lonquimay”, adjudicado a la empresa Sociedad de Construcción, Proyectos, Servicios de Ingeniería CSP Limitada. Esta modificación implicó un aumento efectivo de obras por \$25.144.768, distribuidos en aumento de obras a precios de contrato por \$3.593.476, una disminución de obras por \$26.510.740 y obras extraordinarias por \$44.047.322. Asimismo, se aprobó una extensión del plazo original hasta el 3 de noviembre de 2016. Se establece en el convenio que las partidas eliminadas incluyen alcantarillas de tubos de hormigón de base plana y revestimientos de mampostería, y se introducen ítems extraordinarios como tuberías de polietileno y otros trabajos adicionales, sin que se acompañe en el mismo instrumento la justificación técnica del reemplazo, ni la certificación correspondiente de su ejecución previa al pago. Todo lo cual reviste relevancia para la acreditación del tipo penal, en cuanto a la existencia de pagos públicos por partidas no ejecutadas o sustituidas sin trazabilidad clara, constituyendo indicio de defraudación.

13. **Documento 103: Resolución Exenta N° 2707DV.IXR**, dictada por la Dirección Regional de Vialidad de La Araucanía, mediante la cual se **designa como Inspector Fiscal Titular** del contrato de conservación de caminos de acceso a comunidades indígenas en la comuna de Lonquimay al **Ingeniero Civil Jaime Silva Poblete**, en el marco del contrato SAFI N° 233.248 PDI N° 3/2015,



adjudicado a la empresa Sociedad de Construcción Proyectos y Servicios de Ingeniería CSP Ltda., conforme a la Resolución DVIXR N° 2327 de fecha 29 de octubre de 2015. Dicho acto administrativo es fundamental para **vincular formalmente al funcionario Silva Poblete con la responsabilidad de inspección técnica y fiscalización de la ejecución del contrato**, en los términos establecidos en el Decreto Supremo N° 75 del Ministerio de Obras Públicas y la normativa administrativa vigente. Este documento tiene relevancia penal, en tanto **acredita la calidad de sujeto activo de deber** del Inspector Fiscal respecto del cumplimiento de los controles que, de haberse omitido o falseado, permitirían configurar tipos penales asociados al fraude al fisco o falsedad en documentos públicos.

14. **Documento 104:** Que el documento signado como Resolución de Liquidación Final del Contrato PDI 3/2015 —relativo a la conservación de caminos de acceso a comunidades indígenas en la comuna de Lonquimay— da cuenta, en forma oficial y administrativa, de la ejecución contractual suscrita entre la Dirección Regional de Vialidad y la empresa Sociedad de Construcción, Proyectos, Servicios e Ingeniería CSP Ltda., y detalla que se aprobó la liquidación por un monto final de \$72.537.132, constatándose una disminución por pagos en exceso y por término anticipado del contrato, ascendiendo los montos pagados por estados de pago a \$167.593.210, pese a que el total de obras realmente ejecutadas ascendió a \$95.056.078, generándose una diferencia de \$72.537.132, que corresponde a obra pagada y no ejecutada; Que dicha diferencia fue reconocida oficialmente en el cálculo de cargos del contrato, lo que incluye reajustes pagados por obras no ejecutadas y otros ítems que fueron valorizados sin respaldo material, sin haberse acreditado su efectiva ejecución, lo cual sustenta documentalmente la existencia de pagos injustificados con fondos públicos, lo que adquiere especial relevancia penal al analizar la configuración del delito de fraude al fisco. Todo lo anterior se ve reflejado en la sección de cargos y sanciones administrativas impuestas, así como en el mandato de reintegros y abonos contra las garantías del contrato.

15. **Documento 105:** correspondiente a la Resolución Exenta N° 1335 de 2016 de la Dirección Regional de Vialidad, consta la decisión administrativa de **poner término anticipado al contrato PDI N°3/2015** —denominado “Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, Comuna de Lonquimay”— adjudicado a la empresa **Sociedad de Construcción, Proyectos, Servicios de Ingeniería CSP Ltda.**, con fundamento en el **artículo 151 letra d)** del Reglamento de Contratos de Obras Públicas, en atención a que **la empresa interrumpió unilateralmente los trabajos sin causa justificada ni fuerza mayor**, infringiendo con ello el artículo 139 del mismo cuerpo normativo. Se establece además que la recepción de las obras se realizará de forma **única**, se designa a los funcionarios encargados de dicha recepción, y se **mantienen las garantías y retenciones contractuales** para responder tanto por el eventual mayor costo de finalización como por el pago de **multas**. Tales



antecedentes permiten concluir que existió una **paralización irregular de las obras**, constatada por la autoridad administrativa y suficiente para **fundamentar la ruptura contractual**, reforzando con ello la hipótesis de un eventual perjuicio al erario público y la falta de ejecución material de las partidas pagadas.

16. **Documento 113:** corresponde a la **Resolución Exenta N° 2327 del año 2015**, emanada por la Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Obras Públicas de la Región de La Araucanía, por la cual **se aprueba la adjudicación del contrato** denominado "*Conservación caminos de acceso a comunidades indígenas en la comuna de Lonquimay*" a la empresa **Sociedad de Construcción, Proyectos y Servicios de Ingeniería CSP Ltda.**, por un monto total de **\$167.593.210**. Que dicha resolución da cuenta de la **aprobación de antecedentes técnicos y económicos**, de la participación de comisiones de evaluación, del acto de adjudicación conforme a las bases administrativas, y de la asignación presupuestaria bajo los códigos BIP y partidas correspondientes. Asimismo, se designa formalmente al **Inspector Fiscal** del contrato, recayendo tal responsabilidad en el funcionario **Alejandro Candia Aravena**, Ingeniero Civil de la Dirección de Vialidad de la región.

Que el documento establece además obligaciones contractuales específicas tales como la presentación de pólizas de seguro contra daños a terceros, la protocolización notarial de la resolución por parte del contratista, y la aplicación de la normativa contenida en el Reglamento para Contratos de Obras Públicas y bases administrativas aprobadas por Resolución N° 258 del año 2009, **sin que se adviertan reservas o modificaciones al proceso de adjudicación**.

Que este acto administrativo reviste especial importancia para la acreditación del tipo penal de fraude al fisco, en cuanto **constituye el acto base que habilita jurídicamente la ejecución de la obra y los correspondientes pagos fiscales**, sirviendo como **referente normativo para determinar el cumplimiento de las obligaciones contractuales**, en particular las vinculadas al control técnico de la ejecución de las obras, el rol del Inspector Fiscal, y los estándares de verificación exigibles conforme al marco regulatorio.

17. **Documento 114:** se extrae un formulario tipo "Check List" de revisión de estado de pago emitido por la Dirección de Vialidad, en el cual el Inspector Fiscal consigna, mediante marcación afirmativa, que se ha dado cumplimiento a múltiples exigencias técnicas y contractuales —como controles de laboratorio, controles topográficos y respaldo documental de los pagos— sin que se documenten observaciones relevantes o antecedentes verificables que sustenten tales afirmaciones. Este tipo de certificación genérica, sin respaldo específico visible en el propio documento, resulta insuficiente para acreditar la efectiva ejecución de las partidas, especialmente en un contexto en que otros antecedentes de la investigación (pericias, fotografías e informes técnicos) evidencian deficiencias materiales en las obras ejecutadas o su total inexistencia. Así, este documento no permite desvirtuar la hipótesis del tipo



penal relativo al fraude al fisco ni excluir la existencia de un perjuicio fiscal basado en pagos por obras no realizadas.

18. Del documento identificado **como “145”**, se constata el presupuesto propuesto para la ejecución del contrato PCT N° 3/2015, correspondiente al proyecto de conservación de caminos de acceso a comunidades indígenas en la comuna de Lonquimay. Este presupuesto desglosa una serie de partidas de obras —tales como terraplenes, carpetas granulares de rodadura, alcantarillas y mampostería de piedra— con sus respectivas cantidades y valores. Asimismo, se incluyen cuadros comparativos con volúmenes y longitudes por tipo de obra y por tramo (camino), permitiendo contrastar las cantidades proyectadas con las eventualmente ejecutadas. Este documento sirve como base técnica referencial para determinar los compromisos contractuales asumidos por la empresa CSP Ltda., tanto en términos físicos como financieros.

19. Por su parte, en el **documento “151”** consta la Resolución Exenta mediante la cual se designa la Comisión de Recepción Única para dicho contrato, indicando que la empresa ejecutora fue CSP Ltda., adjudicataria en virtud de la Resolución N° 2327 de fecha 29 de octubre de 2015. Se precisa que el inspector fiscal responsable de coordinar y entregar la obra es el Sr. Jaime Silva Poblete. Esta designación se enmarca dentro del procedimiento reglado por el Decreto Supremo N° 75 de 2004, el cual establece las obligaciones y responsabilidades funcionales del inspector fiscal en la supervisión y recepción de las obras contratadas.

En conjunto, ambos documentos permiten verificar que (i) existía un presupuesto detallado y una programación de partidas específicas a ejecutar y (ii) que la entrega de la obra fue formalmente encomendada a un funcionario específico dentro de un procedimiento administrativo legalmente regulado, lo cual es relevante para valorar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la veracidad de los estados de pago aprobados y la eventual configuración del tipo penal imputado en relación con pagos por obras no ejecutadas.

El documento 116 dice relación la factura N° 00184 emitida por la empresa *Sociedad de Construcción, Proyectos, Servicios e Ingeniería CSP Limitada*, con fecha de emisión dentro de la vigencia hasta el 30 de junio de 2016, se acredita una operación comercial formaliza la emisión de un cobro por servicios relacionados con asesoría técnica en obras civiles y contratista en obras menores y su emisión resulta coherente con las actividades del proveedor vinculado a los contratos PDI investigados, contribuyendo a la constatación del circuito documental de respaldo a pagos realizados por obras de infraestructura en las comunas de Vilcún y Lonquimay.

El 120, es otra *declaración del Inspector Fiscal* con ocasión de la tramitación de un Estado de Pago correspondiente a un contrato de obras públicas (E.P.



Nº7), en el que se consignan múltiples validaciones que dan cuenta del cumplimiento formal de las especificaciones técnicas, existencia de garantías vigentes, cumplimiento de normas de subcontratación, uso del libro de obras, controles topográficos y de laboratorio, respaldo documental y registro fotográfico.

El documento 122 correspondiente a la **Factura Nº 00186** emitida por la empresa **Sociedad de Construcción, Proyectos y Servicios de Ingeniería CSP Limitada**, con giro en asesoría técnica en obras civiles y contratista de obras menores.

El documento 126 y 130 contienen una *Declaración del Inspector Fiscal* en la que se certifica que las cantidades de obra pagadas cumplen con las especificaciones técnicas del contrato, se encuentran respaldadas con cuadros de cubicaciones y monografías, no superan lo contratado y están debidamente regularizadas conforme al artículo 154 del Reglamento de Contratos de Obras Públicas (RCOP). Asimismo, se indica que se han efectuado los controles topográficos pertinentes, que las garantías están vigentes (art. 97 RCOP), que se ha dado cumplimiento a las bases administrativas, y que, en caso de incumplimientos, se cursaron las multas respectivas. Además, se deja constancia del cumplimiento de las obligaciones laborales en materia de subcontratación. Este documento, suscrito por el Inspector Fiscal, pretende acreditar la regularidad formal del estado de pago y el cumplimiento de los estándares técnicos y administrativos exigidos contractualmente, lo que contrasta con otros antecedentes probatorios que evidencian la inexistencia de parte de las obras pagadas, lo cual será ponderado críticamente al momento de valorar la existencia de fraude al Fisco.

El documento 128 corresponde a la **factura Nº00192** emitida por **Sociedad de Construcción, Proyectos, Servicios e Ingeniería CSP Limitada**, con RUT 76.031.950-3, cuyo giro es “Asesoría Técnica en Obras Civiles” y “Contratista en Obras Menores”.

El documento 144 corresponde al *Minuta de Modificación de Obras Nº1*” relativo al contrato “PDI Nº3/2015, Conservación Caminos de Acceso a Comunidades Indígenas, comuna de Lonquimay”, se desprende una propuesta de modificación al contrato original suscrito con la empresa Sociedad de Construcción, Proyectos, Servicios de Ingeniería CSP Ltda., mediante la cual se autorizan aumentos y disminuciones de partidas de obra por un monto que representa un incremento total del 15% del valor original del contrato. Entre las partidas aumentadas se incluyen ítems críticos como formación y compactación de terraplenes, carpeta granular de rodadura y reemplazo de alcantarillas de hormigón por alcantarillas de polietileno estructurado, siendo esta última una solicitud expresa de la comunidad beneficiaria ante fallas derivadas de las



condiciones climáticas extremas del sector. Asimismo, se establece un aumento de plazo de 185 días para la ejecución de las obras. La modificación fue visada por el Inspector Fiscal Jaime Silva Poblete, cuya intervención resulta relevante a efectos de determinar el cumplimiento de sus deberes funcionales, dado que varias de las partidas modificadas coinciden con aquellas cuestionadas en informes de fiscalización respecto a su ejecución efectiva y correlación con pagos cursados, incidiendo directamente en la acreditación de las irregularidades investigadas.

Se incorporó como prueba nueva:

La sentencia definitiva dictada el 17 de octubre de 2023 por el Juzgado de Garantía de Temuco, en causa seguida contra *Jaime Ricardo Silva Poblete*, concluyó con su **condena por el delito de fraude al Fisco en carácter de reiterado**, conforme a los artículos 239 y 260 del Código Penal.

Síntesis estructural del fallo:

1. Hechos acreditados (Hecho N°1 – Vilcún y Hecho N°2 – Lonquimay):

El acusado, actuando como Inspector Fiscal en dos contratos de conservación de caminos de acceso a comunidades indígenas adjudicados a la empresa CSP Ltda., **visó estados de pago por obras no ejecutadas** o ejecutadas parcialmente, generando un perjuicio fiscal relevante.

En **Vilcún**, se aprobó el pago de ítems no ejecutados por \$14.303.474, además de pagos íntegros por terraplenes y carpetas granulares con espesores deficientes (por más de \$152 millones), y la omisión de cobro de multas por ausencia del laboratorista vial (610 UTM).

En **Lonquimay**, se visaron partidas por más de \$95 millones que no se ejecutaron, incluyendo terraplenes, fosos, carpetas granulares y medidas ambientales.

Se acreditó que **Jaime Silva Poblete**, en su calidad de funcionario público, participó como **autor directo** en los hechos, al incumplir sus deberes de fiscalización y autorizar pagos indebidos.

Su intervención facilitó que el contratista defraudara al Fisco, mediante concertación previa y aprobación de avances financieros sin sustento en avances físicos reales.

VIGÉSIMO OCTAVO: Conclusiones y análisis unificado de la prueba documental.

Que del análisis integral de los diversos documentos examinados en esta causa —entre ellos informes de Contraloría, estados de pago, facturas, especificaciones técnicas, actas administrativas, declaraciones de funcionarios y comunitarios, y la sentencia penal condenatoria dictada en contra del Inspector Fiscal Jaime Silva Poblete— se concluye que concurren antecedentes suficientes y convergentes para tener por acreditada la existencia de un patrón reiterado de incumplimientos contractuales, aprobaciones indebidas de pagos y



omisiones graves en el control técnico de obras públicas, lo cual se tradujo en un perjuicio económico efectivo para el Fisco de Chile.

Que en particular, el Informe Final de Investigación Especial N° 44 de 2017 y su Vista Fiscal conexa revelan que en los contratos PDI N°13/2014 (Vilcún) y PDI N°3/2015 (Lonquimay), celebrados entre el Ministerio de Obras Públicas y la empresa CSP Ltda., se cursaron pagos íntegros por partidas que no fueron ejecutadas o lo fueron solo parcialmente, y que en otros casos se aprobaron obras con especificaciones técnicas inferiores a las pactadas, tales como menor espesor en terraplenes y carpetas de rodado, sustitución no autorizada de materiales (como alcantarillas de hormigón por plástico), ausencia de obras de arte y abandono de materiales en terreno.

Que la existencia de facturas emitidas, estados de pago tramitados y declaraciones del Inspector Fiscal (documentos 15, 20, 25, 30, 37, 115, 119, 125, 129, entre otros), que validan formalmente el cumplimiento de las obligaciones contractuales, resultan desvirtuadas por los antecedentes técnicos, fotográficos y testimoniales reunidos en el proceso, los cuales evidencian una ausencia de correlato entre el avance financiero certificado y la ejecución material de las obras en terreno.

Que la prueba documental y pericial, incluyendo fotografías, ensayos de laboratorio, cuadros comparativos de cantidades y presupuestos (documentos 83, 84, 145, entre otros), permite establecer la materialidad del perjuicio fiscal, cuantificado en decenas de millones de pesos en cada contrato, sin que conste respaldo suficiente que justifique tales pagos, lo que configura el elemento objetivo del delito de fraude al Fisco.

Qué, asimismo, los antecedentes de adjudicación, liquidación, modificación de contratos y términos anticipados (documentos 101, 104, 105, 113, 144), así como las declaraciones comunitarias (documentos 93 y 94), refuerzan la constatación del incumplimiento material de las obras, su impacto en la conectividad de comunidades indígenas beneficiarias y la afectación al interés público comprometido.

Que el Inspector Fiscal Jaime Silva Poblete, en su calidad de funcionario público designado por resolución formal (documentos 103, 113, 151), visó estados de pago, omitió la exigencia de controles técnicos, no aplicó sanciones contractuales y validó avances sin respaldo técnico ni físico, lo que lo vincula directamente con la materialización del perjuicio fiscal y configura su participación como autor del delito reiterado de fraude al Fisco, conforme al artículo 239 del Código Penal, en armonía con la sentencia penal dictada el 17 de octubre de 2023 por el Juzgado de Garantía de Temuco.

Que, en consecuencia, los antecedentes expuestos permiten tener por configurados los elementos típicos del delito de fraude al Fisco, esto es, (i) la existencia de una administración pública perjudicada, (ii) un perjuicio patrimonial cuantificable al erario, (iii) la intervención dolosa del funcionario fiscalizador que facilitó o permitió dicho perjuicio mediante actos omisivos y



comisivos contrarios a derecho, y (iv) el favorecimiento injustificado del contratista mediante pagos indebidos.

VIGÉSIMO NOVENO: Indicios de actuación conjunta entre el acusado con el funcionario público.

Sumado a todo lo dicho en los dos considerandos previos, es posible identificar una serie de indicios que permiten entender que existía una correlación entre el acusado y el funcionario público JAIME SILVA POBLETE como inspector fiscal; algunos de ellos ya han sido identificados, pero para efectos de claridad es posible clasificarlos de la manera siguiente:

Primero: La reiteración sistemática de pagos por partidas no ejecutadas o deficientemente realizadas, constatadas en el *Informe de Investigación Especial N°44/2017 de la Contraloría Regional de La Araucanía*, respaldado por fotografías, cuadros técnicos y ensayos de laboratorio, revela no una simple negligencia, sino un patrón coordinado en que el Inspector Fiscal visaba avances financieros sin respaldo físico, favoreciendo directamente a la empresa representada por Jorge Inostroza Cerda.

Segundo: Las declaraciones administrativas emitidas por el propio Jaime Silva (documentos 120, 126 y 130), en las que afirma el cumplimiento íntegro de especificaciones técnicas, controles topográficos y de laboratorio, uso del libro de obras y aplicación de multas, resultan claramente desvirtuadas por los hallazgos del órgano contralor, lo cual evidencia una voluntad consciente de falsear la realidad contractual, permitiendo a la empresa cobrar por obras inexistentes.

Tercero: La factura N° 00192 (doc. 128), junto a otras emitidas en fechas coincidentes con estados de pago cuestionados (doc. 116, 122), acreditan el cobro de montos por partidas que, según la prueba pericial y testimonial, no fueron ejecutadas en terreno, configurándose así un beneficio económico directo para la empresa, validado por el funcionario público mediante visaciones formales carentes de sustento técnico.

Cuarto: La modificación contractual autorizada mediante el documento 144, visada por Jaime Silva, permitió introducir partidas extraordinarias, eliminar partidas que habían sido previamente cuestionadas por su ejecución deficiente y aumentar plazos y montos sin trazabilidad documental suficiente, todo lo cual benefició unilateralmente al contratista y consolidó el perjuicio fiscal, en una maniobra que excede el margen de error técnico y revela coordinación dolosa.

Quinto: La falta de aplicación de multas contractuales por hechos graves y reiterados, tales como la ausencia del laboratorista vial por 122 días, el no retiro de material sobrante, y la instalación tardía de señalética obligatoria (documentos 164, 104 y), no solo revela omisión del deber sancionatorio, sino un acto funcional orientado a evitar el perjuicio pecuniario del contratista, quien de otro modo habría debido reintegrar fondos o perder garantías.



En conjunto, estos elementos un configuran un cuadro indiciario robusto que permite inferir razonablemente que ambos sujetos actuaron concertadamente, con conocimiento de la ilicitud de su proceder, en la ejecución de maniobras orientadas a defraudar al Fisco mediante la simulación de cumplimiento contractual en proyectos de infraestructura financiados con fondos públicos.

TRIGÉSIMO: Prueba de la defensa. Testimonial.

En primer término, se presentó al testigo exfuncionario público Jaime Ricardo Silva Poblete, quien ejerció funciones como Inspector Fiscal del Ministerio de Obras Públicas en los contratos objeto del presente proceso, específicamente en las obras de conservación de caminos indígenas en las comunas de Vilcún y Lonquimay; cabe señalar que a pesar de ser prueba de la defensa, es posible establecer, con su testimonio, analizado de manera objetiva, diversos antecedentes relevantes para la configuración del delito de fraude al fisco previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, así como la vinculación funcional y material del referido funcionario con el coimputado Jorge Inostroza Cerda, contratista de las mencionadas obras, todo lo cual permite al Tribunal formar convicción respecto de la existencia del hecho punible y de la participación criminal atribuida.

Que, en primer término, el propio Silva Poblete reconoció que durante su ejercicio como Inspector Fiscal **visó estados de pago correspondientes a obras que no se encontraban completamente ejecutadas**, y que, en el caso de la obra de Lonquimay, particularmente, **permitió la tramitación de pagos amparados únicamente en la existencia de materiales acopiados en el terreno —tubos de polietileno de alta densidad—**, sin que tales materiales hubiesen sido efectivamente instalados. El testigo manifestó que esta autorización fue adoptada en atención a exigencias institucionales de **cumplimiento de metas presupuestarias, las cuales influían directamente en el cálculo de remuneraciones variables para los funcionarios del servicio**, circunstancia que revela una motivación ajena al cumplimiento de la legalidad y que, además, tuvo como efecto un perjuicio fiscal cierto, desde que se pagó por trabajos que no fueron ejecutados.

Que el testigo **admitió haber recepcionado estados de pago sin la documentación de respaldo exigida por la normativa sectorial, lo que representa una infracción grave a sus deberes funcionarios**. Dicha omisión no fue ocasional o producto de error, sino deliberada, como él mismo lo sostuvo al declarar que **visó los pagos confiando solo en la presencia física de materiales en obra y en promesas del contratista respecto de su instalación futura**. A mayor abundamiento, el testigo admitió **haber omitido la aplicación de multas contractuales, en particular por la ausencia del laboratorista clase C durante varios meses en la obra de Vilcún**, a pesar de que tal



incumplimiento era evidente, obligatorio de sancionar conforme a las bases administrativas del contrato y conocido por él al momento de visación de los pagos respectivos.

Que, respecto de su relación con el imputado Jorge Inostroza Cerda, Silva Poblete reconoció **haberlo conocido previamente**, habiendo trabajado con él en otra obra vial desde finales de la década de los noventa, y que durante la ejecución de los contratos actuales mantenía comunicación directa con él, incluso mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos. Además, señaló que Inostroza **se presentaba personalmente para gestionar y coordinar los estados de pago**, circunstancia **que acredita una interacción directa y sostenida entre ambos, incompatible con la imparcialidad e independencia que debe guardar el funcionario fiscalizador frente al contratista**. Este vínculo se vuelve particularmente relevante si se considera que Silva, ante la existencia de obras no ejecutadas, igualmente visó sus pagos, amparado únicamente en la palabra o disposición del contratista.

Que asimismo se tuvo por acreditado que, en ambas obras, tanto en Vilcún como en Lonquimay, se ejecutaron trabajos no contemplados contractualmente, sin que se gestionaran formalmente los correspondientes aumentos de obra, según reconoció el propio Silva Poblete. Dicha conducta no solo vulnera las reglas de ejecución presupuestaria en el ámbito de la contratación administrativa, sino que también demuestra una flexibilidad injustificada en favor del contratista, que redundaría en perjuicio del interés fiscal y en el incumplimiento deliberado de los deberes de control que pesaban sobre el funcionario.

Que, por consiguiente, del tenor completo de la declaración de Jaime Silva Poblete, valorada conforme a las reglas de la sana crítica y en concordancia con el resto de la prueba rendida en juicio, se extraen indicios claros y concluyentes de su participación en los hechos investigados, en calidad de funcionario público que, con abuso de su cargo, facilitó el pago de prestaciones no ejecutadas o deficientemente ejecutadas, beneficiando con ello de manera directa al contratista Jorge Inostroza Cerda, con quien mantenía una relación funcional estrecha y quien, a su vez, reconoció haber recibido pagos aun cuando las obras no se encontraban completamente materializadas. Todo lo cual permite tener por configurado el delito de fraude al fisco y establecer una **colaboración entre ambos acusados, con conocimiento y voluntad respecto del carácter defraudatorio de las actuaciones desarrolladas**.

TRIGÉSIMO PRIMERO: Prueba de la defensa. Documental.

Que, en lo relativo a la prueba documental rendida durante el juicio oral, la defensa del acusado Jorge Inostroza Cerda se hizo parte de la documental incorporada por el Ministerio Público, relevando de ella diversos documentos cuya finalidad era demostrar, por una parte, el marco técnico y normativo aplicable a las obras contratadas, y por otra, la recepción formal y aprobación



de estas por parte de la autoridad competente. A continuación, se pasa a sintetizar e individualizar los documentos destacados, conforme al orden y énfasis señalado por la defensa:

1. **Documentos N° 44, 45 y 46:** Correspondientes a las **Especificaciones Técnicas Especiales del Proyecto PDI N° 13/2014**, “Conservación de caminos de acceso a comunidades indígenas, comuna de Vilcún”, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía. La defensa destacó que estos documentos contienen la **determinación de unidades de medida y pago por cada ítem de trabajo**: por ejemplo, ductos removidos (metros), excavación de estructuras (metros cúbicos), formación y compactación de terraplenes (metros cúbicos), carpeta granular de rodadura (metros cúbicos), entre otros. Estas especificaciones permiten identificar **objetivamente los elementos cuantificables de la ejecución contractual**.
2. **Documentos N° 81, 82 y 83:** De igual tenor que los anteriores, pero correspondientes al **Proyecto PDI N° 3/2015**, comuna de Lonquimay, Provincia de Malleco. La defensa resaltó que también contienen **partidas específicas, unidades de medida y precios unitarios**, constituyendo el estándar técnico para controlar y pagar los avances de obra.
3. **Documento N° 62:** Resolución exenta N° 978 de la Dirección de Vialidad, que **aprueba el acta de recepción única y autoriza la devolución de retenciones** del contrato PDI N° 13/2014 (Vilcún). La defensa destacó que se verificó en terreno el cumplimiento de las bases y especificaciones técnicas, firmando el acta el inspector fiscal Jaime Silva Poblete, junto a representantes de Vialidad.
4. **Documento N° 69:** Resolución exenta N° 1149 del 7 de junio de 2016, que **aprueba la liquidación del contrato de Vilcún**. Se enfatizó que se certificó la **correcta ejecución de las obras, sin saldos ni deudas pendientes**, con firma de todos los funcionarios involucrados, incluyendo el SEREMI del MOP.
5. **Documentos N° 70 y 71:** Minutas de liquidación del contrato (fechadas el 31 de octubre y el 28 de noviembre de 2016), que reflejan el **historial de modificaciones contractuales**, los **montos ejecutados**, y la **designación de los inspectores fiscales** (Osvaldo Mora y posteriormente Jaime Silva Poblete).
6. **Documento N° 73:** Resolución exenta N° 829, de fecha 22 de abril de 2016, que **designa la comisión de recepción única del contrato de Vilcún**, con participación del inspector fiscal y funcionarios regionales de Vialidad.
7. **Documento N° 101:** Resolución exenta N° 1335 del 30 de junio de 2016 (Lonquimay), que **autoriza un aumento y disminución de obras, obras extraordinarias y aumento de plazo**. La defensa destacó que esta resolución —tramitada en diciembre de 2016— contiene modificaciones que **justifican técnicamente la sustitución de materiales** (por ejemplo, reemplazo de tuberías de hormigón por HDPE), indicando **equivalencia en las cantidades y**



coherencia entre disminuciones y aumentos. Además, se estableció una nueva fecha de término legal: 3 de noviembre de 2016.

8. **Documento N° 104:** Resolución exenta N° 1882, del 14 de septiembre de 2017, que **aprueba la liquidación final anticipada del contrato de Lonquimay**, dejando constancia del término efectivo de las obras al 17 de enero de 2017.

9. **Documentos N° 93 y 94:** Cartas de la señora Felicinda Nahuelcura (representante de la comunidad indígena Nahuelcura Cañumir), fechadas el 17 de junio y 21 de octubre de 2016, en las que **solicita ajustes puntuales**, como instalación de alcantarillas tipo HDPE y mejora de 200 metros de carpeta granular. La defensa remarcó que **estos reclamos no cuestionan la totalidad de la obra, sino aspectos específicos y menores.**

10. **Documento N° 108:** Listado de causas civiles contra Jorge Inostroza Cerda. La defensa indicó que, desde 2015 en adelante, existen más de **30 procesos civiles**, principalmente por deudas bancarias y comerciales, lo que según su planteamiento refleja **una situación económica comprometida**, pero no necesariamente fraudulenta.

11. **Documentos N° 136, 137 y 138:** Certificados de ensayo (ensayos de calidad de materiales) de fechas julio de 2016. Aunque no fueron detalladamente analizados en esta instancia, la defensa los incorporó como **elementos técnicos de respaldo de la ejecución efectiva** de obras.

12. **Documentos N° 136, 137 y 138:** Certificados de ensayo técnico N° 197, 206 y 207, todos fechados en julio de 2016 y emitidos por el laboratorio de la Dirección de Vialidad de la Región de La Araucanía, referidos al **contrato PDI N° 3/2015** (Lonquimay). La defensa destacó que estos ensayos corresponden al **análisis granulométrico y físico de materiales utilizados** (carpeta granular de rodadura y terraplenes), realizados en distintos sectores del proyecto. Se indicó que los resultados se comparan con los rangos establecidos en las especificaciones técnicas, concluyéndose en varios ítems que **los materiales cumplieran con los estándares exigidos**, en aspectos como plasticidad, proporción de partículas chancadas y distribución granulométrica. Uno de los ensayos (N° 206) reemplaza al anterior (N° 197), indicando su actualización. A juicio de la defensa, estos documentos **corroboran la ejecución técnica conforme a proyecto** de al menos parte de las obras.

13. **Sentencia causa RIT 113-2021 del TOP de Temuco:** Se incorporó como documento judicial relevante en que se **reconoce judicialmente la declaración del acusado como veraz y creíble**, específicamente en lo que se refiere al hecho acreditado de que un funcionario del MOP (Ríos López) solicitó al imputado el pago de una suma de dinero a cambio de viabilizar el aumento de plazo de una obra pública en curso, situación que fue rechazada por el acusado. La defensa destacó el **valor probatorio de esta sentencia**, en cuanto da cuenta del **rechazo del soborno** y refuerza la postura del imputado como



víctima de extorsión, lo que —según plantea— se relaciona con el conflicto contractual objeto de la presente causa.

14. **Documento N° 5:** Recurso de protección interpuesto por la empresa del imputado contra Tesorería General de la República ante la Corte de Apelaciones de Temuco el año 2017. En dicho recurso, se reclamó la **ilegalidad de una retención de \$109.334.675** efectuada por Tesorería respecto de un estado de pago de obra, a pesar de encontrarse vigente un convenio de pago. La defensa subrayó que **Tesorería reconoció expresamente en su informe la existencia del convenio y del embargo**, lo cual demuestra —a su juicio— que los problemas financieros no se vinculan a una voluntad defraudatoria, sino a circunstancias adversas e incluso contradictorias de la propia administración.

Analizada la prueba documental acompañada por la defensa este tribunal estima que **ninguno de los antecedentes incorporados por dicha parte es suficiente para alterar las conclusiones a las que se ha arribado en cuanto a la configuración de las imputaciones de los acusadores ni** la participación culpable del acusado. En efecto, si bien ciertos documentos permiten constatar la existencia de informes técnicos de ensaye sobre muestras de materiales (documentos N° 136 a 138), los cuales dan cuenta de análisis granulométricos que indicarían el cumplimiento de especificaciones técnicas en determinados ítems, dicha circunstancia **no permite en modo alguno descartar la existencia de partidas completas que fueron pagadas sin ejecución material efectiva, ni tampoco enerva la existencia de pagos que se realizaron fuera del marco contractual vigente o sin visación válida de modificaciones de obra.**

Que, en esa misma línea, los certificados de laboratorio invocados por la defensa —si bien pueden tener valor en relación con sectores acotados del contrato— **no abarcan la totalidad de las partidas que fueron cuestionadas por la acusación, ni son demostrativos de la ejecución íntegra de las obras conforme a las cubicaciones y estados de pago que dieron origen a los desembolsos fiscales.** Por el contrario, la propia documental de la defensa —en especial la Resolución Exenta N° 1335 de 2016— revela que las obras inicialmente comprometidas en el contrato fueron **formalmente objeto de disminución posterior (en alcantarillas de hormigón)**, y que se sustituyeron por obras extraordinarias (tubos de HDPE) respecto de las cuales no se logró acreditar que hubiesen sido ejecutadas oportunamente ni que existiera un acto formal aprobado a tiempo que respaldara su pago, lo cual es indicativo del **incumplimiento de la normativa de contratación pública**, y por ende, permite tener por configurado el perjuicio fiscal.

Que tampoco puede tener efecto exculpatório la sentencia dictada en la causa RIT 113-2021 del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, en tanto, si bien da cuenta de una extorsión sufrida por el acusado por parte de un funcionario



público del MOP, **ello no excluye la responsabilidad del imputado en los hechos objeto del presente juicio**, máxime cuando se ha demostrado que **el propio acusado suscribió y presentó estados de pago que no se correspondían con obras ejecutadas**, y que las resoluciones que debían autorizar aumentos o modificaciones fueron firmadas con posterioridad a la ejecución y pago de tales partidas, situación que fue admitida por los intervinientes y documentada en autos.

Que, en consecuencia, este tribunal concluye que **la prueba acompañada por la defensa, si bien aporta ciertos elementos relevantes a la comprensión del contexto contractual y económico en que se desarrollaron los hechos, no logra enervar el juicio de certeza alcanzado respecto de la existencia del delito de fraude al fisco o del delito común aplicable en la especie, de su configuración típica, antijurídica y culpable, ni de la participación dolosa del acusado en los hechos materia de acusación**, manteniéndose subsistentes los fundamentos que sustentan la condena, incluso si se reconociera —como ha sostenido la defensa— que algunas partidas fueron ejecutadas conforme a especificaciones técnicas, pues ello no elimina el reproche penal respecto de aquellas otras que no lo fueron, ni tampoco la infracción estructural al deber de custodia de los recursos públicos que caracteriza al tipo penal invocado.

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Hechos acreditados y calificación jurídica.

Conforme a la decisión comunicada con el veredicto, se ha determinado que se han acreditado los hechos de la acusación con las adecuaciones que se expresarán a continuación:

HECHO N° 1

“La Dirección Regional de Vialidad IX Región, ubicada en Manuel Bulnes N° 897, ciudad de Temuco, mediante resolución exenta D.V. IX. R N° 2178 de fecha 15 de octubre de 2014, adjudicó el contrato SAFI 219.920 denominado PDI 13/2014 “CONSERVACIÓN CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS, COMUNA DE VILCÚN, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”, a la empresa SOCIEDAD DE CONSTRUCCION DE PROYECTOS, SERVICIOS E INGENIERIA CSP LIMITADA RUT 76.031.950-3, representada legalmente por el imputado JORGE ANDRÉS INOSTROZA CERDA. Para ejecutar dichas obras, que, según las bases y especificaciones técnicas, tenía por objetivo intervenir 06 caminos de una longitud total de 10.4 kilómetros, favoreciendo a 3 comunidades indígenas de la comuna de Vilcún, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía. Las obras a realizar consistían



básicamente en la ejecución de una carpeta granular de rodadura, la construcción de la plataforma, mejoramiento de la subrasante, formación y compactación de terraplenes, la limpieza y construcción de obras de arte transversales que se encontraran embancadas o deterioradas, la reconstrucción de fosos en tierra, la limpieza y el despeje de la faja. Todo ello por un monto inicial o presupuesto original de 218.488.712 pesos incluido IVA, con la modalidad de pago a serie de precios unitarios mensuales con sus respectivos reajustes; con un plazo de ejecución de 180 días, teniendo como fecha de inicio el 24 de octubre de 2014. Durante el desarrollo de la obra la Dirección Regional de Vialidad aprobó la modificación del contrato por resolución exenta N° 2516 de 28 de noviembre de 2015, que regulariza aumento de obras, disminuciones de obra obras extraordinarias y aumento de plazo, conviniéndose un aumento de obra a precio de contrato de 21.069.311 de pesos, un aumento de obra a precio convenido por 44.001.261 de pesos, disminución de obras por 23.476.174 de pesos, aumento de obras extraordinarias por 1.462.957 de pesos, resultando un aumento efectivo de 43.057.355 de pesos IVA incluido, quedando en definitiva como nuevo presupuesto general o monto final en la suma de 261.546.067 de pesos equivalente a 5.841 UTM (44.776 UTM a noviembre de 2015), además se aprobó una ampliación de plazo de 189 días de acuerdo al nuevo programa de trabajo teniendo un plazo total de 369 días.

Para la fiel y correcta ejecución de dicho contrato se designó mediante Resolución exenta N° 378, de fecha 27 de febrero de 2015, como inspector fiscal al imputado JAIME SILVA POBLETE, Ingeniero Civil; quien, en su calidad de funcionario público, debía velar en terreno por la cantidad y calidad de las obras ejecutadas en concordancia con las bases del contrato. Era el funcionario responsable de certificar el avance de los trabajos ejecutados y exigir los informes que garantizaran que se cumplían las especificaciones técnicas del proyecto, calidad de materiales y el cumplimiento de las leyes laborales y previsionales de los trabajadores contratados y subcontratados por la ejecutante, visando con su autorización estos pagos parciales con dinero público al contratista. Como contraparte, los adjudicatarios debían ejecutar las obras, acreditando la calidad de los caminos y puentes mediante la instalación de un laboratorio de autocontrol de faenas, que debía entregar al Inspector Fiscal informes quincenales sobre la calidad de los materiales utilizados, que, según las bases, eran condición necesaria para autorizar los estados de pago por los avances de los trabajos ejecutados.

Los hechos anteriores no fueron discutidos por la defensa, al menos directamente, porque no estaba en debate la existencia de este contrato y sus términos.

Que el imputado JORGE ANDRÉS INOSTROZA CERDA, previamente concertado con el imputado JAIME SILVA POBLETE, acordaron que éste, incumpliendo los deberes de probidad y profesionalismo propios del cargo de



inspector fiscal que desempeñaba, consintiera para que cobraran al Fisco de Chile, visando estados de pago a pesar de que el avance físico de las obras fue menor a los trabajos contratados, generando pérdidas al erario público al autorizar el pago de obras no ejecutadas; en la forma que a continuación se detalla:

1. El Inspector Fiscal JAIME SILVA POBLETE, aprobó un avance financiero superior al efectivamente ejecutado, a la empresa constructora SOCIEDAD DE CONSTRUCCION DE PROYECTOS, SERVICIOS E INGENIERIA CSP LIMITADA, por un monto correspondiente a \$ 14.303.474, que obedece a las siguientes obras:

CAMINO N° 1 -Tubos corrugados polietileno alta densidad Drn 0,75 metros, por el monto de \$1.319.714 (camino N°1); -Tubos corrugados polietileno alta densidad D=1,0 metros, por el monto de \$3.922.016 (camino N°1); - Construcción de canales, fosos y contrafosos sin revestir, por el monto de \$1.363.440 (camino N°1), CAMINO N° 3 -Tubos corrugados polietileno alta densidad D=0,6 metros, por el monto de \$1.270.612 (camino N°3) -Tubos corrugados polietileno alta densidad Drn 0,75 metros, por el monto de \$839.818 (camino N°3), CAMINO N° 4 -Delineadores verticales, por el monto de \$405.424 -Señales verticales laterales en caminos secundarios, por el monto de \$262.474 -Reconstrucción de fosos y contrafosos, por el monto de \$1.147.600 CAMINO N° 5 -Tubos corrugados polietileno alta densidad Drn 0,75 metros, por el monto de \$599.870 (camino N°5) CAMINO N° 6 -Tubos corrugados polietileno alta densidad Drn 0,75 metros, por el monto de \$1.799.610 (camino N°6) -Construcción de canales, fosos y contrafosos sin revestir, por el monto de \$143.520 (camino N°6). Y, por último, en caminos no indicados, barreras metálicas doble onda, por el monto de \$1.229.376 (no indica camino).

2. El Inspector Fiscal JAIME SILVA POBLETE, permitió el incumplimiento por parte de la empresa constructora SOCIEDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS, SERVICIOS E INGENIERÍA CSP LIMITADA, de los espesores contratados en algunos de los tramos de los caminos N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6, transgresión que vulnera el ítem 5.205-1, formación y compactación de terraplenes, que establecía los espesores mínimos de terraplenes para cada tramo de dichas vías. Asimismo, tampoco se dio cumplimiento a los espesores de la partida 5.303-1, carpeta granular de rodadura T Max 2, que estipulaba que todos los caminos que formaban parte del proyecto debían cumplir con una altura promedio de 0,20 m. en la carpeta granular en todos sus tramos.

De este modo, los desembolsos efectuados para la partida 5.205-1 de terraplenes, corresponde a \$ 69.449.795; y para la partida 5.303-1 carpeta y granular corresponde a \$ 82.907.052. Dichos montos fueron autorizados y visados por el imputado JAIME SILVA POBLETE, en los estados de pago N° 1, 2, 3 y 4; no ajustándose en consecuencia, a lo efectivamente ejecutado.



3. El Inspector Fiscal JAIME SILVA POBLETE, permitió la ausencia del laboratorista vial ciase "C", desde el 22 de junio de 2015 hasta el término de las obras el 22 de octubre del mismo año, sin que cursara las multas por la falta del personal mínimo en el proyecto, incumplimiento que debió ser sancionado con una multa de 5 UTM por cada día, según disponen las bases administrativas del contrato, correspondiendo una sanción de 610 UTM equivalentes a 27.177.330 de pesos al valor de UTM a octubre de 2015 (44.553 UTM a octubre de 2015), por los 122 días de ausencia del profesional.

Desde el punto de vista financiero, el fraude al Fisco se establece, ya que la obra quedó finalizada y con término legal con fecha 22 de octubre de 2015 y aprobada mediante acta de recepción única y autoriza devolución de retenciones Resolución DVR Ex N° 978 de fecha 17 de mayo de 2016 y posteriormente ratificada mediante la liquidación del contrato y devolución de garantías Resolución DVR Ex N° 1149 de fecha 07 de junio de 2016 de la cual el imputado JAIME SILVA POBLETE formó parte de la comisión encargada de verificar el cumplimiento efectivo y total de las obras. De esa manera la empresa constructora SOCIEDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS, SERVICIOS E INGENIERÍA CSP LIMITADA representada por el imputado JORGE INOSTROZA CERDA, recibió por parte del Fisco de Chile, a través de la autorización visación del imputado JAIME SILVA POBLETE la suma de \$269.603.951 por el 100 por ciento de avance de obras, todo mediante los siguientes estados de pago:

(se eliminó el primer estado de pago por no ser SILVA POBLETE el inspector fiscal a la fecha de tal trámite)

2. Estado de pago N° 2 de fecha 09-03-2015, por un valor líquido de \$120.923.259, por un avance físico del 74,29 por ciento de la obra. El valor del estado de pago correspondía a \$128.197.879, a lo que descontó \$7.274.620 por el ítem de retenciones.

3. Estado de pago N° 3 de fecha 01-04-2015, por un valor líquido de \$52.061.621, por un avance físico del 97,59 por ciento de la obra, sin aplicación de descuentos.

4. Estado de pago N° 4 de fecha 21-12-2015, por un valor líquido de \$49.999.963, por un avance físico del 100 por ciento de la obra. El valor del estado de pago correspondió a \$52.152.867, a lo que se descontó \$2.152.867 por el ítem de retenciones.

5. Estado de pago N° 5 (devolución de retenciones) de fecha 18-05-2016, por un valor líquido de \$13.077.303, por un avance físico del 100 por ciento de la obra, no se aplicaron descuentos.

En definitiva, el perjuicio fiscal por obras pagadas y no ejecutadas, no cobro de multas respectivas, asciende a la suma de \$193.837.651, equivalentes a 4.350,72 UTM al mes de Octubre de 2015.



HECHO N° 2

“La Dirección Regional de Vialidad IX Región, ubicada en Manuel Bulnes N° 897, Temuco, adjudicó mediante resolución exenta D.V. IX. R N° 2327 de fecha 29 de octubre de 2015, adjudicó el contrato SAFI 233.248 denominado PDI 3/2015 “CONSERVACIÓN CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS, COMUNA DE LONQUIMAY, PROVINCIA DE MALLECO, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”, a la empresa SOCIEDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS, SERVICIOS E INGENIERÍA CSP LIMITADA RUT 76.031.950-3, representada legalmente por el imputado JORGE ANDRÉS INOSTROZA CERDA, por un monto de \$167.593.210, para ejecutar dichas obras, que según las bases y especificaciones técnicas, tenía por objetivo intervenir un total de 4 caminos de una longitud total de 12.2 kilómetros, favoreciendo a 2 comunidades indígenas de la comuna de Lonquimay, Provincia de Malleco, Región de la Araucanía. Las obras a ejecutar, consistían básicamente en la ejecución de una carpeta granular de rodadura con material chancado, la confección de plataformas, conformación y compactación de terraplenes, además de la construcción de obra de arte nuevas y la reposición de algunas existentes en mal estado o de capacidad hidráulica insuficiente, utilizando mayoritariamente tubos de base plana, excavaciones en TCN, construcción de fosos en terreno de cualquier naturaleza y conformación de cunetas Todo ello por un monto inicial de 167.593.210 pesos incluido IVA, con un plazo de ejecución de 180 días, teniendo como fecha de inicio el 05 de noviembre de 2015. Durante el desarrollo de la obra la Dirección Regional de Vialidad aprobó la modificación del contrato por resolución DVR Exenta N° 1335 de fecha 30 de junio de 2016, que autoriza aumento de obras, obras extraordinarias y aumentos de plazos, conviniéndose un aumento de obra a precio de contrato de 3.593.476 de pesos; una disminución de obras por 26.510.740 de pesos; un aumento por obras extraordinarias por 44.047.322 de pesos, resultando un aumento efectivo de obras por 25.144.768 de pesos IVA incluido, quedando en definitiva como nuevo presupuesto general o monto final en la suma de 192.737.978 de pesos equivalente a 4.181 UTM (46.091 noviembre 2016). Además, se aprobó una ampliación de plazo de 185 días de acuerdo con el nuevo programa de trabajo, teniendo un plazo total de 365 días.

Para la fiel y correcta ejecución de dicho contrato se designó mediante, Resol (Exenta) DV.IXR.N° 2707. de fecha 11 de diciembre de 2015, como inspector fiscal al imputado JAIME SILVA POBLETE, Ingeniero Civil; quien, en su calidad de funcionario público, debía velar en terreno por la cantidad y calidad de las obras ejecutadas en concordancia con las bases del contrato. Era el funcionario responsable de certificar el avance de los trabajos ejecutados y exigir los informes que garantizaran que se cumplían las especificaciones técnicas del proyecto, calidad de materiales y el cumplimiento de las leyes laborales y previsionales de los trabajadores contratados y subcontratados por



la ejecutante, visando con su autorización estos pagos parciales con dinero público al contratista. Como contraparte, los adjudicatarios debían ejecutar las obras, acreditando la calidad de los caminos y puentes mediante la instalación de un laboratorio de autocontrol de faenas, que debía entregar al Inspector Fiscal informes quincenales sobre la calidad de los materiales utilizados, que, según las bases, eran condición necesaria para autorizar los estados de pago por los avances de los trabajos ejecutados.

Los hechos anteriores no fueron discutidos por la defensa, al menos directamente, porque no estaba en debate la existencia de este contrato y sus términos.

Que el imputado JORGE ANDRÉS INOSTROZA CERDA, previamente concertado con el imputado JAIME SILVA POBLETE, acordaron que éste, incumpliendo los deberes de probidad y profesionalismo propios del cargo de inspector fiscal que desempeñaba, consintiera para que cobraran al Fisco de Chile, visando estados de pago a pesar de que el avance físico de las obras fue menor a los trabajos contratados, generando pérdidas al erario público al autorizar el pago de obras no ejecutadas; en la forma que a continuación se detalla:

1. El Inspector Fiscal JAIME SILVA POBLETE, visó y autorizó en los correspondientes estados de pago, la partida 7.703.13c.1 alcantarillas de tubos de hormigón de base plana D=0,8m, por un monto de 13.167.000 de pesos (4.389.000 E1+ 8.778.000 E2 = 13.167.000); por la partida; 7.303.13c.2 alcantarillas tubos de hormigón de base plana D=1,0m, por un monto de 10.410.730 de pesos (E2) y por la partida 7.303.15a, correspondiente revestimiento mampostería de piedra por un monto de 2.933.010 de pesos (E3 2.065.500 + E4 867.510 = 2.933.010); las que fueron aprobadas y pagadas en un 100%, a pesar de no haber sido materializadas por la empresa contratista SOCIEDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS, SERVICIOS E INGENIERÍA CSP LIMITADA. Sobre lo expuesto, las partidas enunciadas formaron parte de las disminuciones de obras contempladas en la modificación de contrato N° 1, de 30 de junio de 2016, aprobada a través de la resolución N° 1.335, de 30 de junio de 2016, de la Dirección Regional de Vialidad de La Araucanía, lo que denota la aprobación y pago por parte de la inspección fiscal de la ejecución de faenas que en definitiva no se ejecutaron.

2. El Laboratorio de Autocontrol de la obra entregó el certificado N° 2/2016 - anexo al informe quincenal N° 1, que registró resultados de la partida 7.302.5d, correspondiente a terraplenes, indicando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, tanto en humedad como en densidad, de los 36 puntos de control efectuados al camino N° 1 del proyecto, no obstante que dicha faena no fue ejecutada en conformidad a tales especificaciones. Así el Inspector Fiscal JAIME SILVA POBLETE, pagó a la empresa SOCIEDAD DE



CONSTRUCCION DE PROYECTOS, SERVICIOS E INGENIERIA CSP LIMITADA, la suma de 14.829.127 de pesos (E2).

3. El Inspector Fiscal JAIME SILVA POBLETE, visó y autorizó en los correspondientes estados de pago, la partida 5.303.1 denominada confección, colocación y compactación de carpetas granulares de rodadura las que fueron aprobadas y pagadas a pesar de no haber sido materializadas por la empresa contratista SOCIEDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS, SERVICIOS E INGENIERÍA CSP LIMITADA, por un monto de 30.637.029 de pesos (E2 12.730.963 + E3 15.459.800 + E4 2.446.266)

4. El Inspector Fiscal JAIME SILVA POBLETE, visó y autorizó en los correspondientes estados de pago, la partida 5.613.1 denominada Construcción de fosos y contrafosos sin revestir, las que fueron aprobadas y pagadas a pesar de no haber sido materializadas por la empresa contratista SOCIEDAD DE CONSTRUCCION DE PROYECTOS, SERVICIOS E INGENIERIA CSP LIMITADA, por un monto de 1.781.800 de pesos (E3).

5. El Inspector Fiscal JAIME SILVA POBLETE, visó y autorizó en los correspondientes estados de pago, las partidas 7.311.1 Instalación de faenas y campamentos en obras de mantenimiento (E3 1.006.236 + E4 670.824); 7.311.2 Apertura, uso y abandono de botaderos en obras de mantenimiento (E4 1.030.593); 7.311.3 Apertura, explotación y abandono de empréstitos en obras de mantenimiento (E4 1.712.065); y 7.311.4 Plantas de producción de material en obras de mantenimiento (E4 1.566.853) Todas parte del ítem Elaboración y aplicación de plan de medidas ambientales de las especificaciones ambientales del contrato, las que fueron aprobadas y pagadas a pesar de no haber sido materializadas por la empresa contratista SOCIEDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS, SERVICIOS E INGENIERIA CSP LIMITADA, por un monto de 5.986.571 de pesos.

6. El Inspector Fiscal JAIME SILVA POBLETE, visó y autorizó en los correspondientes estados de pago, la partida 5.209.4 denominada Efectuar labores de enraizamiento de la plataforma del camino, las que fueron aprobadas y pagadas a pesar de no haber sido materializadas por la empresa contratista por un monto de 34.580 pesos.

El Inspector Fiscal JAIME SILVA POBLETE, visó y autorizó en los correspondientes estados de pago, la partida "Excavación corte en TCN" (5.201.3 del anexo complementario de las bases generales del contrato), obra no lo ejecutada y pagada en un 100% por un monto de 8.447.285 de pesos a pesar de no haber sido materializadas por la empresa contratista SOCIEDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS, SERVICIOS E INGENIERÍA CSP LIMITADA.

Desde el punto de vista financiero, según lo anteriormente expuesto, el fraude al Fisco se establece, toda vez que fue puesto en término administrativo y de forma anticipada de acuerdo con la resolución exenta N° 103, de 17 de enero



de 2017, de la Dirección Regional de Vialidad, ya que la empresa interrumpió el curso de los trabajos sin causa justificada ni por fuerza mayor; y además procedió a paralizar de forma unilateral las obras que se encontraba ejecutando. Sin embargo, el imputado JAIME SILVA POBLETE consintiendo en que particulares defraudaran al Fisco, había autorizado el pago por avance de obras por la suma de \$167.593.210 a SOCIEDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS, SERVICIOS E INGENIERÍA CSP LIMITADA representada por el imputado JORGE INOSTROZA CERDA, conforme al siguiente desglose:

1. Estado de pago N° 1 de fecha 18-12-2015, por un valor líquido de \$15.821.042, por un avance físico del 10,39 por ciento de la obra. El valor del estado de pago correspondía a \$17.561.722, a lo que se le descontó \$1.740.680 por el ítem de retenciones.

2. Estado de pago N° 2 de fecha 20-01-2016, por un valor líquido de \$96.779.385, por un avance físico del 71,55 por ciento de la obra. El valor del estado de pago correspondía a \$103.418.366, a lo que se le descontó \$6.638.981 por el ítem de retenciones.

3. Estado de pago N° 3 de fecha 03-02-2016, por un valor líquido de \$38.109.104, por un avance físico del 94,09 por ciento de la obra, no se aplicaron descuentos.

4. Estado de pago N° 4 de fecha 15-04-2016, por un valor líquido de \$10.291.860, por un avance físico del 100 por ciento, no se aplicaron descuentos.

Por ello se designó mediante Resolución Exenta DV.IXR N° 256 de fecha 13 de febrero de 2017 comisión de recepción única la que determinó mediante Resolución Exenta DV.IX-R N° 1882 de fecha que las obras pagadas y no ejecutadas corresponden a un monto total de \$95.056.078, IVA incluido, vulnerando el imputado JAIME SILVA POBLETE abiertamente lo establecido en el artículo 154 del Reglamento para contratos del Ministerio de Obras públicas que prescribe que en esta modalidad de contrato los estados de pago se formularán por las cantidades de obras efectivamente ejecutadas y a los precios del presupuesto convenido.

El perjuicio fiscal por obras pagadas y no ejecutadas, reajustadas, descontadas las retenciones, saldos y las boletas de garantía, asciende a la suma de \$51.930.718, equivalentes a 1123,33 UTM al mes de enero de 2017”.

Que, a la luz de la prueba rendida en juicio, tanto de carácter documental como testimonial, este tribunal ha logrado conformar un juicio de certeza en cuanto a la existencia del delito de fraude al fisco previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, configurándose en la especie los elementos típicos exigidos por la doctrina penal y la jurisprudencia nacional; al respecto, debe recordarse que conforme a las situaciones ocurridas durante el juicio, se llamó a los intervinientes a discutir la recalificación de los hechos por una figura



común de defraudación o en su caso, aquella del N°8 del artículo 470 del Código Penal, en razón de que el encartado no era funcionario público.

Sobre la calidad de funcionario público: Sobre la materia encontramos pronunciamientos de la Excma. Corte Suprema, respecto de la imputabilidad y no comunicabilidad de la calidad de funcionario público respecto del extraneus, por ejemplo el dado en ROL N° 59856-2022, del tres de mayo de dos mil veintitrés, que anuló la sentencia recurrida y en su lugar dictó sentencia de reemplazo, estimando que “el artículo 239 del Código Penal, describe y sanciona el delito de fraude al Fisco, el que la doctrina califica como un delito impropio, y que requiere para intervenir como autor de esta clase de ilícitos de la calidad de funcionario público, atributo que, como se señaló en el motivo que precede, no tenían los acusados Todo lo anterior conduce a concluir que no reúnen las exigencias legales para incurrir en esta clase de ilícitos”, “Que si bien, la doctrina mayoritaria, al tratarse de un delito impropio, sostiene que el particular puede ser sancionado por el delito común.

Este reciente fallo es especialmente claro en cuanto a lo discutido en el presente juicio, ya que deja asentado que para proceder a la recalificación respecto del extraneus, igualmente debe llamarse a debatir tal situación, lo que en ese juicio no se hizo a diferencia del que aquí se resuelve: *“Que si bien, la doctrina mayoritaria, al tratarse de un delito impropio, sostiene que el particular puede ser sancionado por el delito común (defraudaciones en este caso), en la especie ello no es posible, por no haberse llamado a debatir durante el juicio o luego de la deliberación del tribunal, conforme a lo establecido en el artículo 341 del Código Penal sobre esta posibilidad, en especial la concurrencia de las exigencias del tipo penal”*.

Metodológicamente, debe hacerse un doble análisis tanto del delito especial propio como del común aplicable al extraneus.

En efecto, conforme a la interpretación reiterada por nuestros tribunales superiores de justicia, el fraude al fisco exige: **(i) la existencia de una maniobra engañosa o artificio apto para inducir a error a la Administración; (ii) la producción de un perjuicio económico al erario fiscal; y (iii) el dolo directo o eventual del autor en cuanto a su participación en la conducta y al daño causado al patrimonio estatal** (Corte Suprema, Rol N° 29.656-2016; Rol N° 48.507-2021).

Que, en el presente caso, se ha acreditado mediante declaraciones de inspectores fiscales, funcionarios de Contraloría, peritos policiales y testigos civiles, así como por la extensa prueba documental allegada, que el acusado con SILVA PORBLETE presentaron estados de pago ante la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas que incluyeron partidas que no habían sido ejecutadas o cuya ejecución no estaba autorizada formal ni contractualmente, lo que permitió la percepción de pagos por obras



inexistentes, incompletas o ejecutadas con posterioridad a la fecha de corte del respectivo estado de pago. La actividad engañosa, en este contexto, **no se limitó a una omisión o irregularidad administrativa**, sino que implicó **una alteración relevante de la realidad fáctica, destinada a provocar un acto de disposición patrimonial en perjuicio del fisco**, fundado en antecedentes falsos o incompletos.

Que el perjuicio patrimonial ha quedado debidamente acreditado, no solo por los montos pagados sobre la base de estados que no reflejaban fielmente el avance de las obras, sino también por la constatación en terreno, mediante informes técnicos y pericias, de la inexistencia o ejecución parcial de obras que fueron facturadas íntegramente. A su vez, **las resoluciones que intentaron justificar, a posteriori, dichas modificaciones contractuales no logran convalidar ni retrotraer la legalidad del acto de pago ya consumado**, conforme lo ha sostenido de manera reiterada la Contraloría General de la República (Informe Final N° 44/2017) y la jurisprudencia administrativa y judicial (vgr., Corte Suprema, Rol N° 52.203-2020).

Que, desde el punto de vista subjetivo, el dolo del acusado se infiere tanto de su experiencia en el rubro de la construcción de obras públicas, como de **su activa intervención en la elaboración, presentación y cobro de estados de pago con información objetivamente inexacta, siendo plenamente consciente de que las obras no se ajustaban al avance contractual ni contaban con el respaldo normativo para su pago**. Asimismo, su reiterada participación en contratos similares, la frecuencia de sus visitas a terreno, y su conocimiento del procedimiento administrativo, impiden sostener que haya obrado por mero error o negligencia.

Que, en suma, el análisis dogmático del tipo penal del artículo 239 del Código Penal permite concluir que **en el presente caso concurre la totalidad de sus elementos típicos, tanto objetivos como subjetivos**, siendo la conducta del acusado subsumible en la figura de fraude al fisco, en su modalidad de obtención indebida de recursos públicos mediante engaño y aprovechamiento de vicios administrativos, en perjuicio directo del patrimonio estatal. Lo anterior con arreglo al principio de legalidad penal, al respeto por el debido proceso, y conforme a los criterios interpretativos vigentes en la jurisprudencia nacional y la doctrina especializada (Vid. Guzmán Dalbora, *Derecho Penal Chileno*, Tomo II, p. 375; Toledo Silva, *Delitos Funcionarios*, p. 278).

Siguiendo el desarrollo del razonamiento judicial respecto de la recalificación jurídica que se estimó procedente en la especie, cabe señalar que, conforme se ha establecido durante el desarrollo del juicio, el acusado **no revestía la calidad de funcionario público**, sino que se desempeñaba como contratista adjudicatario de contratos de conservación de caminos financiados con fondos públicos, por lo que su participación en los hechos objeto de esta causa debe ser analizada desde la perspectiva del **extraneus** respecto del delito de fraude al fisco previsto en el artículo 239 del Código Penal, tipo penal que exige como



sujeto activo a un funcionario público. No obstante, ello **no impide su condena**, toda vez que su actuar delictivo se encuentra plenamente subsumido en la figura penal común del **artículo 470 N° 8 del Código Penal**, referida al delito de estafa o defraudación cometido mediante el uso de engaño o artificios que inducen a error a un tercero, en este caso al Estado.

Que la doctrina penal nacional ha sostenido de manera uniforme que en los casos en que el sujeto activo de un delito funcional no reúne la condición de funcionario público, y no se verifica una hipótesis de comunicabilidad conforme al artículo 15 del mismo cuerpo legal, **procede aplicar al extraneus la figura penal común que recoge su conducta conforme a sus elementos típicos propios** (Vid. Jean Pierre Matus, *Derecho Penal Parte General*, Tomo I, p. 314; Bustos Ramírez / Hormazábal Malarée, *Lecciones de Derecho Penal Chileno*, Parte General, p. 179). En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema al resolver que, **cuando un particular participa en una defraudación al Estado sin revestir la calidad de funcionario, debe responder conforme a la figura común de estafa si concurren los elementos típicos** (CS, Rol N° 14.136-2019; CS, Rol N° 2.814-2013).

En este contexto, la jurisprudencia ha establecido que el particular que, sin ser funcionario público, participa en la obtención fraudulenta de prestaciones del Estado, debe ser sancionado conforme al artículo 470 N° 8 del Código Penal. Esta disposición penaliza a quienes, fraudulentamente, obtienen del Fisco, de las Municipalidades, de las Cajas de Previsión y de las instituciones centralizadas o descentralizadas del Estado, prestaciones improcedentes, tales como subsidios, pensiones u otros beneficios similares. Así lo ha resuelto la Corte de Apelaciones de Santiago, al confirmar la condena de un particular por este delito, al no reunir la calidad de funcionario público exigida para el tipo penal de fraude al fisco. En consecuencia, tratándose el acusado de un extraneus, procede su condena por el delito común aplicable en la especie, esto es, la figura del artículo 470 N° 8 del Código Penal, conforme se ha razonado dogmáticamente y se ha resuelto jurisprudencialmente sobre esta situación cuando no hay comunicabilidad.

Que en la especie, se ha probado que el acusado, **mediante la utilización de estados de pago falsos o materialmente inexactos, logró inducir a error a funcionarios públicos del Ministerio de Obras Públicas, quienes aprobaron el pago de sumas millonarias por obras inexistentes o no ejecutadas conforme a contrato**, configurándose así todos los elementos típicos de la figura del artículo 470 N° 8: (i) la utilización de un engaño (la presentación de antecedentes fraudulentos); (ii) el error inducido en funcionarios públicos que autorizaron los pagos; (iii) el perjuicio patrimonial directo para el Fisco; y (iv) el dolo del acusado, evidenciado por su participación activa en el diseño y ejecución de la maniobra defraudatoria.

Que, en consecuencia, **aun cuando el acusado no tenga la calidad de funcionario público y no sea procedente aplicar el artículo 239 del Código**



Penal, este Tribunal considera que **corresponde su condena por el delito de estafa del artículo 470 N° 8**, como delito común aplicable al extraneus que defrauda al Estado mediante la utilización de artificios engañosos, conforme al razonamiento dogmático, al principio de legalidad y a la jurisprudencia consolidada sobre la materia.

TRIGÉSIMO TERCERO: Reiteración del delito en cuestión.

Este Tribunal ha podido dar por establecido que, a partir de la prueba rendida, la configuración en más de una oportunidad del delito por el cual se ha condenado, verificándose que la conducta típica se ejecutó de manera plural e independiente, tanto en relación con la obra correspondiente al proyecto de conservación de caminos indígenas en la comuna de Vilcún como en el proyecto ejecutado en la comuna de Lonquimay, ambos adjudicados a la misma empresa —Constructora CCP Ltda.— y bajo la representación del acusado don Jorge Inostroza Cerda.

Que, como lo ha reconocido expresamente la doctrina penal nacional, el concepto de reiteración debe entenderse como la comisión de varios hechos punibles de la misma especie que, sin constituir un delito continuado ni un concurso real (material), mantienen entre sí una unidad fáctica razonable en cuanto a su *modus operandi*, propósito económico y temporalidad, sin confundirse en un solo hecho jurídico penal, lo que permite su punición acumulada conforme a lo dispuesto en los artículos 351 del Código Procesal Penal. En este sentido, el profesor Jean Pierre Matus Acuña ha sostenido que “la reiteración debe entenderse como una figura de acumulación de hechos punibles homogéneos cometidos por el mismo agente, siempre que no exista entre ellos unidad típica o continuidad delictiva”, situación que se configura en el presente caso al acreditarse la ejecución separada de actos defraudatorios en dos contratos distintos, ejecutados en espacios temporales distintos, con solicitudes de pagos también diferenciadas.

Que la jurisprudencia también ha reconocido esta posibilidad, declarando, por ejemplo, que “[...] la reiteración se configura cuando concurren varios actos delictivos de igual o similar naturaleza cometidos por el mismo agente, siempre que existan elementos objetivos y subjetivos que permitan diferenciarlos como hechos independientes, aunque ligados por una estrategia delictiva común” (Corte Suprema, Rol N° 24.248-2020). En el caso de autos, la prueba documental consistente en los certificados de recepción, liquidaciones contractuales, resoluciones administrativas y cartas de fiscalización, unida a los testimonios de los inspectores fiscales y profesionales del MOP, permitió concluir que en cada uno de los contratos se presentó documentación destinada a justificar pagos por partidas no ejecutadas o ejecutadas de manera parcial, lo cual generó un perjuicio patrimonial al erario público.



Que, por tanto, verificado que el acusado incurrió en más de una conducta autónoma subsumible en el tipo penal del artículo 470 N° 8 del Código Penal, en distintos contratos y con afectación patrimonial efectiva al Fisco en cada uno de ellos, resulta procedente declarar que el delito en cuestión se cometió de forma **reiterada**, con las consecuencias penológicas que ello conlleva, particularmente la aplicación del artículo 351 del Código Procesal Penal, que faculta al tribunal a imponer la pena conforme al límite superior del marco punitivo previsto para el delito base, atendido el mayor desvalor del injusto.

TRIGÉSIMO CUARTO: Rechazo de las demás alegaciones de la defensa.

Sin perjuicio de que, como se ha venido expresando en los considerandos precedentes, se han ido contestando las alegaciones de los intervinientes, que en su momento fueron sintetizadas en el considerando décimo tercero, en este apartado se dará respuesta a las cuestiones debatidas por la defensa que no hayan sido expresamente resueltas ya:

Respecto de las alegaciones relativas a la configuración del tipo penal, deberá estarse a lo razonado en todo el apartado relativo a esta acusación N°2 para no repetir el razonamiento ya explicitado al respecto.

Lo mismo con la afirmación de que no hubo concierto doloso ni conocimiento de irregularidad: su conducta se enmarca en **relaciones contractuales normales** con el Estado, teniendo presente, en especial el considerando vigésimo noveno; por lo demás, no solo documentalmente aparecieron indicios de la correlación existente entre el acusado como contratista con el inspector fiscal SILVA POBLETE, sino que del testimonio del mismo funcionario, trascendió que reconoció haberlo conocido previamente, habiendo trabajado con él en otra obra vial desde finales de la década de los noventa, y que durante la ejecución de los contratos actuales mantenía comunicación directa con él, incluso mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos. Estos elementos revelan una **interdependencia operativa entre ambos acusados**, en la que el funcionario, actuando en su calidad de Inspector Fiscal, ejercía una función habilitante clave para que el acusado Inostroza obtuviera pagos por parte del Fisco, sin que estos tuvieran una correspondencia plena con el avance físico o técnico de las obras, o sin contar con respaldo documental suficiente. A ello se suman referencias del propio Silva a que Inostroza accedía a cambios no regularizados en el contrato por requerimientos comunitarios o del propio MOP, los que tampoco eran formalizados por aumento de obra o modificación contractual válida, sino asumidos informalmente entre ambos.

Así, estos antecedentes permiten concluir, al menos indiciariamente, la existencia de **una coordinación y mutua comprensión de roles entre ambos partícipes**, lo que da cuenta de una cooperación funcional en la ejecución de



los actos defraudatorios, siendo la intervención de Silva Poblete determinante para facilitar el acceso del acusado extraneus a pagos fiscales indebidos.

Sobre la alegación de que Inostroza es un **extraneus**, y conforme a **jurisprudencia de la Corte Suprema**, no puede imputársele un **delito especial impropio** (fraude al fisco) por falta de **comunicabilidad del elemento especial (ser funcionario público)**, debe estarse a lo expresado en el considerando anterior para no incurrir en repeticiones innecesarias frente a eximios litigantes.

Por lo demás, debe tenerse en consideración frente a las alegaciones de la defensa, respecto de la improcedencia del llamado hecho y de la recalificación realizada, lo que a juicio de dicho interviniente vulneraría su derecho a la defensa técnica, cabe señalar, en primer término, que dicha posibilidad se encuentra expresamente contemplada en el ordenamiento procesal penal vigente. En efecto, el artículo 341 del Código Procesal Penal permite al tribunal, en su sentencia, calificar jurídicamente los hechos distintos a como lo hizo la acusación, siempre que estos hechos hayan sido objeto de debate en el juicio oral y no se introduzcan hechos nuevos, ajenos a la acusación formal.

En el presente caso, consta que desde la audiencia de apertura se delimitaron como materia de controversia los hechos relacionados con pagos indebidos, estados de pago irregulares, incumplimientos contractuales no justificados y participación funcional del acusado Jorge Inostroza Cerda en la obtención de pagos del Fisco sin ejecución efectiva de las partidas. Tales elementos fueron desarrollados ampliamente durante el juicio por los intervinientes, tanto a través de la prueba documental como testimonial, incluyendo informes técnicos, declaraciones de funcionarios públicos y del propio coimputado Jaime Silva Poblete. En este sentido, la calificación de los hechos como constitutivos del delito previsto en el artículo 470 N°8 del Código Penal no introduce elemento fáctico nuevo alguno, sino que se limita a dar una correcta subsunción normativa a hechos que fueron objeto de debate procesal desde la etapa de apertura.

Por tanto, no se advierte vulneración al principio de congruencia ni al derecho de defensa, por cuanto el castigo penal se funda en hechos debidamente probados en juicio, conocidos por la defensa y controvertidos por ella, sin que se hayan alterado los elementos fácticos esenciales de la imputación. A diferencia de lo ocurrido en los fallos citados por la defensa —donde efectivamente se introdujeron hechos diversos o con calificación autónoma no discutida en juicio—, en este caso se ha mantenido la identidad fáctica y lo que ha variado es únicamente la determinación jurídica final, en función del mérito de la prueba rendida.

En cuanto a la compatibilidad de los tipos penales en debate, tanto el delito de fraude al fisco como el previsto en el artículo 470 N° 8 tienen por bien jurídico protegido el correcto y legítimo funcionamiento de la administración financiera del Estado, específicamente la protección del erario fiscal frente a actos de



engaño o aprovechamiento indebido que causen un perjuicio económico a sus arcas. Desde el punto de vista dogmático, ambas figuras comparten elementos estructurales esenciales: (i) una acción engañosa o abusiva; (ii) dirigida a obtener indebidamente recursos fiscales; (iii) con perjuicio patrimonial para el Fisco; y (iv) ejecutada con dolo directo, esto es, con conocimiento y voluntad de causar dicho perjuicio.

En el caso del artículo 470 N° 8, la norma se configura plenamente cuando un particular –como en la especie el acusado extraneus–, sin el consentimiento del Estado y mediante maniobras fraudulentas o concertaciones dolosas con funcionarios, obtiene pagos de contratos administrativos simulados, sobrevalorados o no ejecutados conforme a los términos pactados, generando un menoscabo efectivo al patrimonio fiscal. Así, el reproche penal que deriva de dicha conducta es compatible con los fundamentos ético-jurídicos del Derecho penal económico, al castigar la quiebra de la buena fe que debe presidir las relaciones entre el particular y el aparato estatal, máxime cuando de fondos públicos se trata.

De este modo, se constata que los elementos típicos del delito de fraude al fisco convergen funcional y teleológicamente con la figura del artículo 470 N° 8 del Código Penal, que opera como tipo penal común supletorio para el extraneus que colabora o participa en la defraudación de recursos estatales, permitiendo con ello subsumir su conducta en un marco punitivo adecuado, sin necesidad de forzar la aplicación del artículo 239, reservado exclusivamente para el funcionario público infractor.

III. ARGUMENTOS COMUNES A AMBAS ACUSACIONES.

TRIGÉSIMO QUINTO: Circunstancias modificatorias de responsabilidad inherentes al delito.

Que del mérito de las alegaciones presentadas en estrados y de las mismas probanzas rendidas, se concluye que, en la especie, no concurren circunstancias modificatorias de responsabilidad penal inherentes a los delitos por los cuales se está juzgando en el presente juicio.

TRIGÉSIMO SEXTO: Audiencia de determinación de penas.

Para efectos de determinar la pena aplicable en la especie se escucharon las alegaciones de todos los intervinientes:

1. Ministerio Público

Por delito tributario (art. 97 N°4 inciso 2° del Código Tributario):



Pena de **6 años de presidio mayor en su grado mínimo**.

Multa del 100% del monto evadido, equivalente a **\$133.345.488**.

Accesorias del art. 28 CP y **costas**.

Por delito de fraude al fisco (recalificado como art. 470 N°8 del CP):

Pena de **6 años de presidio mayor en su grado mínimo**.

Multa de 21 UTM, accesorias legales y **costas**.

Argumentos:

Solo concurre una **atenuante**: art. 11 N°6 CP (irreprochable conducta anterior, objetiva).

No procede el art. 11 N°9 (colaboración sustancial), ni el art. 11 N°7 (reparación con celo).

Desestima la **media prescripción**:

Los delitos tienen pena de **crimen en concreto** por la **reiteración**, por lo que el plazo de prescripción sería de 10 años.

No hay antecedentes sobre **salida del país** del imputado.

En delitos tributarios, también influye el art. 112 del Código Tributario.

2. Servicio de Impuestos Internos (SII)

Peticiones:

Mismas que el Ministerio Público en cuanto a **pena corporal y multa tributaria**.

Se **adhiera plenamente** a los argumentos del Ministerio Público.

La **querella del SII (abril de 2019)** interrumpe la prescripción.

No hay colaboración sustancial ni reparación con celo (no se aportó contabilidad completa ni se identificaron pagos específicos vinculados a los delitos imputados).

La empresa mantenía **una deuda fiscal superior a \$1.000 millones**.

3. Consejo de Defensa del Estado (CDE)

Peticiones:

Misma pena solicitada por la Fiscalía: **6 años por cada delito**.

Reconoce solo la atenuante del art. 11 N°6.

Desestima el art. 11 N°7 (reparación con celo) y el art. 11 N°9 (colaboración sustancial).

Apoya la improcedencia de la media prescripción por falta de antecedentes suficientes (ej. salidas del país).



Cita a la **doctrina de Laura Mayer Lux** sobre el bien jurídico protegido en el art. 470 N°8 CP, destacando la afectación al orden económico estatal y a la asignación equitativa de subvenciones públicas.

4. Defensa del acusado Jorge Inostroza Cerda

Peticiones:

Por delito tributario.

Solicita **rebaja de pena en dos grados**, aplicando art. 66 inciso 3° CP por concurrir **al menos dos atenuantes**:

Art. 11 N°6 (irreprochable conducta anterior),

Art. 11 N°7 (reparación con celo),

Art. 11 N°9 (colaboración sustancial).

Solicita pena de **541 días de presidio menor en su grado medio**; en subsidio, **3 años y un día**.

Multa de solo un 5% del perjuicio fiscal y pago en cuotas.

Propone aplicar **libertad vigilada intensiva** en ambos casos.

Por delito de fraude al fisco (art. 470 N°8 CP):

Solicita **reconocimiento de colaboración sustancial**.

Pide pena de **3 años y un día**, con aplicación de **libertad vigilada intensiva**.

Multa reducida a **3 UTM**, pagadera en cuotas.

Subsidiariamente, solicita **media prescripción**, con rebaja de dos grados y aplicación de pena de **541 días**.

Presenta **informes sociales y psicológicos** que justifican pena sustitutiva.

Cita **jurisprudencia de la Corte Suprema (Rol 17.678-2022)** que permite aplicar **dos penas sustitutivas** de libertad vigilada intensiva cuando los hechos son anteriores a la reforma de julio de 2016.

Afirma que los pagos realizados por su representado deben considerarse como **reparación del daño**.

Insiste en que sus **declaraciones ayudaron al esclarecimiento de los hechos**, configurando colaboración sustancial.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Resolución de las peticiones de las partes.

Cuestiones generales:

Respecto de la atenuante del artículo 11 N°6:



En mérito del extracto de filiación del acusado y no contando con otro tipo de información que permitan poner de tela de juicio su irreprochable conducta anterior, se acogerá esta atenuante respecto de ambos delitos.

Respecto de la atenuante del artículo 11 N°9:

Cabe mencionar que se trata de una circunstancia que debe determinarse caso a caso y haciendo una valoración sobre el real aporte probatorio realizado por el acusado, es decir, no basta ni se configura automáticamente cuando el imputado presta declaración, ni tampoco cuando hace alusión a los hechos investigados, se requiere de una aportación sustancial a la develación de los hechos, el estándar entonces, va más allá de la simple disposición a cooperar, pues el reconocimiento de la aludida minorante conlleva la obtención de un beneficio procesal relevante de modo tal que para que sea reconocida en favor de un imputado, deben concurrir los requisitos de su procedencia y tal como lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema de Justicia aquella procede únicamente en el evento que la colaboración del inculcado “haya sido decisiva para la clarificación del suceso, de manera tal que la cooperación a que alude la norma consista en una disposición total, completa y permanente de contribución al esclarecimiento de los hechos, en todas las etapas del proceso, de suerte que los datos aportados, en todos sus aspectos, tanto respecto de los partícipes, los medios y forma de comisión del ilícito y las circunstancias mismas que lo rodearon, sean perfectamente concordantes con los demás antecedentes reunidos en el juicio”.

En el ámbito local, la I. Corte de Apelaciones de Temuco, en diversos fallos se ha referido a la configuración de la citada atenuante, señalando que: “la redacción actual de esta minorante requiere la existencia de un aporte a la investigación por parte del imputado, que contribuya de manera determinante o decisiva al esclarecimiento del delito lo que supone constatar la veracidad de la información, sin que sea posible reconocerla en casos de declaraciones puramente distractoras o irrelevantes. En efecto la sustancialidad de la colaboración requiere que ella modo considerable, sino decisivo, aporte a la aclaración del delito que se investiga. Así por lo demás lo dejó claro la Comisión de Legislación y Justicia del Senado, lo que se manifiesta también en haber considerado como modelo el Código Penal austriaco del año 1.974, que concibe como atenuante, también con un alto estándar de procedencia: “cuando el autor mediante su declaración ha contribuido esencialmente al descubrimiento de la verdad”. Además, esa colaboración debe ser oportuna, en términos de referir antecedentes nuevos o desconocidos para la investigación”.



Dicho razonamiento ha sido ratificado en los autos ROL 1045-2020, en los que se reconoce que la sola aceptación de un procedimiento abreviado, o la declaración prestada en juicio, luego de ya constar acusación en su contra y sin que en la misma se reconozca con claridad los hechos imputados, no es posible dar por configurada dicha atenuante.

En la especie, la versión dada por el acusado, tuvo el carácter de exculpatoria en ambos delitos, obligando a los acusadores a rendir toda la prueba necesaria para la configuración de los tipos penales, teniendo la defensa una indeclinable postura absolutoria por lo demás, todo lo que llevó al tribunal a fundar su decisión netamente en la prueba de cargo, estimando que los antecedentes dados por la defensa y el acusado no fueron relevantes, al menos de la manera exigida por la ley para resolver el caso. En definitiva, no entregó elementos probatorios que no hayan sido conseguidos con el mérito de las diligencias investigativas, de manera que su aporte fue irrelevante si se estima que existió, por lo que no se configura ni la colaboración ni la sustancialidad de esta, ello conforme a la apreciación de este tribunal, en los términos compartidos en la Excma. Corte Suprema, en autos ROL N°18326-2022.

En el mismo sentido, constan los fallos de la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco, del presente año, ROL 7-2022, del 10 de febrero de 2022; ROL 24-2022, de fecha 16 de febrero de 2022; 97-2022 de fecha 11 de marzo de 2022. Finalmente, en fallo reciente de esta misma Corte de Apelaciones, del 29 de abril de 2025, en los autos ROL N°242-2025.

Por estas razones se rechazará la antedicha atenuante respecto de ambos delitos.

Respecto de la media prescripción: según consta en los audios, si bien esta alegación se realizó en un principio (clausuras) por la defensa, respecto de ambos delitos, solo la sostuvo en sede de determinación de pena respecto del delito de defraudación fiscal; en todo caso, debe tenerse en cuenta que el artículo 103 del Código Penal establece que si el responsable se presentare o fuere habido antes de completar el tiempo de la prescripción de la acción penal o de la pena, pero habiendo ya transcurrido la mitad del que se exige, en sus respectivos casos, para tales prescripciones, deberá el tribunal considerar el hecho como revestido de dos o más circunstancias atenuantes muy calificadas y de ninguna agravante y aplicar las reglas de los arts. 65, 66, 67 y 68, sea en la imposición de la pena, sea para disminuir la ya impuesta.

Que, sin embargo, esta norma, de naturaleza excepcional y de interpretación restrictiva, requiere para su procedencia una verificación precisa del cómputo del plazo de prescripción conforme a los artículos 94 y 96 del Código Penal,



circunstancia que —como expresamente lo establece el propio artículo 103— debe estar acreditada de manera previa y suficiente por quien la alega. En el presente caso, el tribunal no cuenta con los antecedentes necesarios para efectuar dicha comprobación, en especial respecto a si el plazo de prescripción ha sido interrumpido por la comisión de nuevos delitos, conforme lo regula el artículo 96 del mismo cuerpo legal.

Que en doctrina se ha sostenido que “la procedencia de la media prescripción requiere que el tribunal pueda efectuar el cómputo sin ambigüedad alguna y con base en antecedentes debidamente incorporados al juicio oral, lo que recae sobre el interviniente que alega la institución” (Juan Pablo Mañalich, *Derecho penal. Parte general*, LegalPublishing, 2012, p. 549). En igual sentido, Gálvez Meza indica que “cuando no constan antecedentes claros sobre interrupciones del plazo, el tribunal no puede presumir su inexistencia sin vulnerar el principio de legalidad en la determinación de la pena” (*Comentarios al Código Penal Chileno*, Tirant lo Blanch, 2021, T. II, p. 917).

Que, en cuanto a jurisprudencia, la Excelentísima Corte Suprema ha resuelto de forma reiterada que “la media prescripción debe estar fundada en antecedentes formales e idóneos, cuya falta impide aplicar el beneficio sin infringir los principios del debido proceso” (Corte Suprema, causa rol N° 11.368-2019, sentencia de 20 de mayo de 2020). Del mismo modo, se ha resuelto que “no puede el tribunal efectuar presunciones o computar plazos sin la debida prueba documental o formal sobre eventuales interrupciones o suspensiones del curso de la prescripción” (Corte Suprema, rol N° 27.775-2021, sentencia de 9 de junio de 2022).

Que, en el caso de autos, no consta información suficiente que permita al tribunal determinar, por ejemplo, si el acusado salió del país o incurrió en nuevos ilícitos que interrumpieran el curso de la prescripción. En consecuencia, la alegación no puede prosperar en tanto el análisis de dicha circunstancia es de cargo de la parte que la propone, y su configuración no puede ser resuelta por el tribunal sin afectar los principios que regulan la legalidad de la prueba en el proceso penal.

Por todo lo anterior, no se acoge la solicitud de aplicación del artículo 103 del Código Penal en relación con el delito previsto en el artículo 470 N° 8 del mismo cuerpo legal y en todo caso, también respecto del delito tributario, en el que consta, además, como acto interruptivo la presentación de la querella por parte del Servicio de Impuestos Internos.



Respecto del delito tributario:

Habiéndose acogida la atenuante del 11 N°6 y rechazado la del 11 N°9, corresponde abordar la alegación relativa a la concurrencia del 11 N°7:

En cuanto a la atenuante del N°7 del artículo 11: en cuanto a si ha procurado con celo reparar el mal causado o impedir sus posteriores perniciosas consecuencias, es posible afirmar que la ley supone aquí el despliegue por el agente de una actividad que se realiza después de que el delito se encuentra ya consumado o, si ha quedado en estado de tentativa o frustración, cuando ya es evidente que no se consumará y luego de haberse efectuado el último acto de ejecución. Si, por el contrario, el autor actúa evitando voluntariamente la consumación, estaremos frente a un caso de desistimiento, que dará lugar a la impunidad y no a una pura atenuación.

La conducta del autor debe ser celosa, es decir, tiene que importar un esfuerzo personal considerable enderezado al logro de los objetivos determinados por la norma examinada.

La jurisprudencia ha estimado que para su configuración se requiere que el celo exigido, en un sentido objetivo, atienda al concreto mal causado, las facultades del autor del delito, debiendo tenerse presente además que no se trata ni exige un arrepentimiento moral siendo admisible incluso la reparación aún cuando ella tenga como única motivación la construcción de esta atenuante, no siendo tampoco pertinente exigir que la reparación sea completa, sino el intento objetivo de alcanzarla pues, por una parte, ello no lo exige la ley y, por otra, supondría la imposibilidad de aplicar la atenuante en todos los delitos con resultados irreversibles.

En segundo lugar, y en complemento a lo anterior, lo que se necesita en realidad para que esta atenuante concurra, es que la conducta sea ejecutada voluntariamente por el sujeto, el cual habiendo podido abstenerse de realizarla, se ha decidido libremente por ella, e incluso las motivaciones resultan irrelevantes.

Que, conforme a la prueba documental incorporada, en especial los documentos identificados con los números 3 y 4, se acreditó que el imputado celebró dos convenios de pago respecto de deudas tributarias pendientes, uno con fecha 19 de agosto de 2016 por un monto superior a \$12.000.000 y otro con fecha 1 de junio de 2017 por un monto superior a \$47.000.000, cancelando en ambos casos las cuotas iniciales (o pie) comprometidas y parte de las cuotas posteriores, como consta en el detalle de cuotas aportado.



Que, si bien es cierto que dichos convenios no fueron íntegramente cumplidos y que, en definitiva, caducaron por mora en el pago de cuotas sucesivas, no puede desconocerse que el imputado realizó pagos efectivos, que superan los \$50.000.000, tendientes a resarcir el perjuicio económico al Fisco derivado de su actuar ilícito, lo que da cuenta de una voluntad concreta de aminorar el daño ocasionado, aun cuando no haya existido una reparación íntegra.

Que, en jurisprudencia reiterada, se ha señalado que “la atenuante del N° 7 del artículo 11 del Código Penal puede configurarse no solo por una reparación total, sino también por una reparación parcial, siempre que esta sea significativa y se haya ejecutado con diligencia y anterioridad al juicio” (Corte Suprema, Rol N° 27.282-2018, sentencia de 18 de diciembre de 2018; Corte de Apelaciones de Temuco, Rol N° 16-2019, sentencia de 12 de marzo de 2019).

Por estas razones se acogerá esta atenuante, concurrente únicamente en el delito tributario.

TRIGÉSIMO OCTAVO: Determinación de las penas en concreto.

Respecto del delito tributario:

La pena asignada al delito del inciso segundo del N°4 del artículo 97 del Código Tributario, con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y con multa del cien por ciento al trescientos por ciento de lo defraudado.

En la especie, se estimó que se trataba de un delito reiterado, lo que implica en la práctica que conforme al artículo 112 del Código Tributario y 351 del Código Procesal Penal, que los diversos delitos se estimaran como uno solo y se aumentara en este caso la pena en un grado desde el mínimo de esta, quedando el marco penal en el presidio mayor en su grado mínimo, esto es, de los 5 años y un día a los diez años de privación de libertad.

Luego, concurriendo en la especie, las atenuantes de los números 6 y 7 del artículo 11 del Código Penal, según se resolvió en el considerando precedente, se estima que ambas circunstancias permiten bajar ahora la pena en un grado, situándola en el presidio menor en su grado máximo, esto es, de tres años y un día a cinco años de privación de libertad, marco penal en el cual se fijará la pena en concreto, y dentro de él será en su minimum por estimar que con ello se contiene el reproche penal respectivo.

En cuanto a la pena de multa, teniendo en especial consideración el principio de proporcionalidad de las penas, la actual situación económica del acusado, según consta de los informes que fueron acompañados por su defensa, se accederá a la rebaja de la misma, solo en cuanto se fija un monto equivalente al 10% del perjuicio fiscal efectivamente causado, teniendo como base de



cálculo aquel perjuicio establecido en esta sentencia, en consideración a la primera suma que se concluyó en la fiscalización de rigor, esto es de, \$133.345.488.

Concurriendo en la especie, las accesorias del artículo 29 del Código Penal, esto es, la de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

Respecto del delito del artículo 470 N°8 del Código Penal:

Teniendo a la vista que resulta procedente la aplicación del castigo establecido en el artículo 467 del Código Penal, por expresa remisión de la primera norma, teniendo presente el perjuicio acreditado y que en todo caso, fija su cuantía en el numero primero de la citada disposición, el marco penal será de presidio menor en su grado máximo y multa de veintiuna a trescientas unidades tributarias mensuales, si el perjuicio excede de cuatrocientas unidades tributarias mensuales y no pasa de cuarenta mil.

Luego, en consideración a la reiteración acreditada, por efecto del artículo 351 del Código Procesal Penal, conforme a su inciso primero, al tratarse de infracciones de la misma especie, se aplicará la pena estimadas como un solo delito, aumentándola en uno o dos grados.

En consecuencia, se fijará la pena en el presidio mayor en su grado mínimo, esto es, desde los cinco años y un día a los diez años de privación de libertad.

Luego, concurriendo en la especie únicamente la atenuante del artículo 11 N°6 del Código Penal al haber sido rechazada las demás peticiones de la defensa, la pena en concreto a aplicar se fijará en el mínimo del citado marco penal. Con las accesorias del caso.

La multa se fijará en el mínimo penal procedente, por los mismos argumentos por los que se accedió a la rebaja en el apartado anterior.

TRIGÉSIMO NOVENO: Forma de cumplimiento de las penas a imponer.

Respecto del delito tributario:

Que en estos autos se solicitó por la defensa, la concesión de la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, según sea la cuantía de la pena a imponer, para lo cual acompañó un informe social que da cuenta de que una pena sustitutiva sería recomendable en el caso del condenado.

Al respecto, teniendo a la vista lo establecido en los artículos 15 y 15 bis de la Ley 18.216, consta que el condenado, cumple con los requisitos relativos



a la cuantía de la pena a imponer que no supera los cinco años, el delito por el delito tributario por el que se le condenó, permite la concesión de la libertad vigilada en su modalidad intensiva.

Por otro lado, cumple, además, con las exigencias del artículo 15, en cuanto a que no ha sido condenado anteriormente por crimen o simple delito.

Razones por las cuales se le concederá la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva, por el mismo tiempo de la condena a imponer y fijándose a su respecto las condiciones señaladas en el artículo 17 de la Ley en estudio:

- a) Residencia en un lugar determinado, el que podrá ser propuesto por el condenado, debiendo, en todo caso, corresponder a una ciudad en que preste funciones un delegado de libertad vigilada o de libertad vigilada intensiva. La residencia podrá ser cambiada en casos especiales calificados por el tribunal y previo informe del delegado respectivo;
- b) Sujeción a la vigilancia y orientación permanentes de un delegado por el período fijado, debiendo el condenado cumplir todas las normas de conducta y las instrucciones que aquél imparta respecto a educación, trabajo, morada, cuidado del núcleo familiar, empleo del tiempo libre y cualquiera otra que sea pertinente para una eficaz intervención individualizada, y
- c) Ejercicio de una profesión, oficio, empleo, arte, industria o comercio, bajo las modalidades que se determinen en el plan de intervención individual, si el condenado careciere de medios conocidos y honestos de subsistencia y no poseyere la calidad de estudiante.

Respecto del delito del art. 470 N°8:

Atendida la extensión de la pena a imponer, no procede ninguna forma de cumplimiento alternativo de la pena diversa a la privación de libertad efectiva.

CUADRAGÉSIMO: Costas.

Que, teniendo a la vista el artículo 24 del Código Penal y 47 del Código Procesal Penal, estimando que el acusado ha tenido motivo plausible para litigar y no ha sido totalmente vencido, conforme al mérito de la recalificación realizada en la especie, que justifica su litigio, se le eximirá del pago de las costas.



PARTE RESOLUTIVA:

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 1, 15, 239, 467, y 470 del Código Penal; artículos 37, 47, 48, 295, 296, 297, 325, 340, 341, 342, 344, 346, 348, y 468 del Código Procesal Penal, **SE DECLARA:**

I.- Que, **SE CONDENA** a acusado **JORGE ANDRÉS INOSTROZA CERDA**, a la pena de **TRES AÑOS y UN DÍA** de presidio menor en su grado máximo, **MULTA equivalente al 10% del perjuicio fiscal** y a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, por su responsabilidad como autor del delito tributario del inciso segundo del numeral cuarto del artículo 97 del Código Tributario, **en carácter de reiterado**, cometido en la forma y tiempo señalado en lo considerativo de este fallo.

II.- Que, **SE CONDENA** a acusado **JORGE ANDRÉS INOSTROZA CERDA**, a la pena de **CINCO AÑOS y UN DÍA** de presidio mayor en su grado mínimo, multa de **VEINTIUNA (21) UNIDADES TRIBUTARIAS MENSUALES** y a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, por su responsabilidad como autor del delito de defraudación fiscal del artículo 470 N°8 del Código Penal, **en carácter de reiterado**, cometido en la forma y tiempo señalado en lo considerativo de este fallo.

III.- Respecto de la condena por el delito tributario, cumpliéndose en la especie con los requisitos legales establecidos en los artículos 15 y 15 bis de la Ley 18.216, se sustituye el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta por la **de LIBERTAD VIGILADA INTENSIVA** por igual término que el de la pena privativa de libertad que se sustituye, debiendo presentarse al Centro de Reinserción Social de la comuna correspondiente a su domicilio; y debiendo, además, cumplir durante el período de control con el plan de intervención individual que se apruebe en su momento y con las condiciones legales de las letras b) y c) del artículo 17 y especialmente la condición del artículo 17 ter letra d), esto es, la obligación de cumplir con programas formativos, laborales, culturales u otros similares, por el término de la condena. El Centro respectivo deberá presentar dicho plan a este tribunal dentro del plazo de 45 días desde la ejecutoriedad de esta sentencia.

El sentenciado deberá presentarse al Centro de Reinserción Social de Gendarmería ya individualizado, dentro del plazo de cinco días, contados desde



que estuviere firme y ejecutoriada esta sentencia, bajo apercibimiento de despacharse orden de detención en su contra.

Si la pena sustitutiva impuesta fuese revocada o quebrantada, el condenado cumplirá íntegra y efectivamente la pena privativa de libertad impuesta o, en su caso, se la remplazará por una pena sustitutiva de mayor intensidad o se dispondrá la intensificación de las condiciones decretadas.

Para todos los efectos correspondientes, no hay abonos que reconocer según el mérito del auto de apertura, sin perjuicio de la facultad del Juzgado encargado de la ejecución del fallo quien con más y mejores antecedentes pueda reconocer otros abonos.

IV.- Respecto de la condena por la defraudación fiscal, la pena corporal impuesta, por no reunirse respecto del condenado ninguno de los requisitos que prevé la Ley N° 18.216 para la concesión de penas sustitutivas, en este capítulo, **deberá cumplirse real y efectivamente privado de libertad**, en el Centro Penitenciario que Gendarmería de Chile determine, sin abonos reconocidos y sin perjuicio de la facultad del tribunal encargado de la ejecución quien con más y mejores antecedentes pueda reconocer abonos no previstos en esta sentencia.

V.- Que, en caso de no pagarse las multas impuestas, deberá estarse a lo establecido en el artículo 49 del Código Penal.

VI.- Se exime del pago de las costas al condenado según lo explicitado en la consideración cuadragésima.

Téngase por notificados a los intervinientes de este fallo en la presente audiencia. Sin perjuicio, remítase formato digital de esta sentencia definitiva por la Unidad de Administración de Causas a los correos electrónicos que los intervinientes hayan registrado en el Tribunal.

Ejecutoriada que sea la presente sentencia dese cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 468 del Código Procesal Penal y artículo 113 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese, comuníquese, en su oportunidad, al Juzgado de Garantía respectivo, para su cumplimiento.

Sentencia redactada por el Juez **Leonel Torres Labbé**.

R.U.C. 19 10 01 52 91 – 9

R.I.T. 015-2024

Códigos 419 y 5001

Pronunciada por el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Temuco integrado por los jueces Sres. **Roberto Herrera Olivos; presidente, Leonel Torres Labbé y Wilfred Ziehlmann Zamorano.**





Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: RPKKXUPUCDQ